



**El marxismo-
leninismo
y nuestra época**

**AMERICA LATINA:
EL PROCESO
REVOLUCIONARIO
EN AUGE**

AMERICA LATINA:
EL PROCESO REVOLUCIONARIO EN AUGE

**El marxismo-leninismo
y nuestra época**

**AMERICA LATINA:
EL PROCESO
REVOLUCIONARIO
EN AUGE**

HELIO R. CHOUERI

**Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO
Praga, 1984**

SUMARIO

De la Editorial 7

AMERICA LATINA EN LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO

RODNEY ARISMENDI
La política de poder global de Reagan 10

ATHOS FAVA
Después de Malvinas nada es igual 31

RAUL CASTRO RUZ
En el XXX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada 44

RODRIGO ROJAS
La solidaridad concede fuerzas 60

AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE, UNA «ZONA EN CRISIS»

JAIME BARRIOS, OTTO SANCHEZ,
JERONIMO CARRERA
Nicaragua sandinista frente
a las amenazas de agresión 73

RANDOLFO BANEGAS, LUIS ORLANDO CORRALES
De la diplomacia de las cañoneras
a la agresión directa 83

Bajo la supervisión de Yu. Skliárov
Redactores-compiladores: V. Korotkov, S. Mámontov

RIGOBERTO PADILLA RUSCH Honduras: las fuerzas revolucionarias en pie de lucha	91
JAIME BARRIOS Empuje combativo, iniciativa política	101
CHEDDI JAGAN El foco de tensión del Caribe	115
 LOS COMUNISTAS EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA	
FELIPE RODRIGUEZ Resultado de la lucha popular	129
LUIS CORVALAN En bancarrota la política del imperialismo en Chile	138
GIOCONDO DIAS El proceso de cambio es irreversible	155
ROGELIO GONZALEZ Frente nacional contra la dictadura	171
NARCISO ISA CONDE Los lineamientos fundamentales	180
TREVOR MUNROE Cuando la oligarquía está en el poder...	198
RUBEN DARIO SOUZA BATISTA Dinámica del proceso revolucionario	209
ASUNCION CABALLERO MENDEZ Por un Perú renovado	225
RENE MAUGE Jornadas tempestuosas en un país «tranquilo»	230

De la Editorial

A principios de los años 80 se agudizó bruscamente la confrontación entre dos tendencias en la vida política de América Latina. Instalada en la Casa Blanca la Administración Reagan, que proclamó su «cruzada» anticomunista, Estados Unidos, la principal potencia imperialista, relanzó su política «del gran garrote», abiertamente agresiva y aventurera con respecto a sus vecinos del Sur. Ejemplos de esta escalada en la tensión continental son la burda presión que se ejerce sobre Cuba socialista, la guerra no declarada contra Nicaragua, la creciente injerencia en los asuntos internos de El Salvador y otros Estados de la región, así como la bandidesca intervención en Granada.

Al mismo tiempo, y pese a esta ofensiva frontal, crece y se vigoriza el movimiento antiimperialista de los pueblos latinoamericanos, cuyo empuje obliga a retroceder a los venales regímenes antipopulares, sostenidos por EE.UU. Los vientos de cambio han llegado a los países del Cono Sur, dominados durante largos años por regímenes militares. El proceso de democratización ha alcanzado al Brasil, el mayor país del subcontinente. Bajo el empuje de las masas populares cayeron las dictaduras militares en Bolivia y Argentina. Va en auge la lucha de los pueblos de Chile y Uruguay contra las tiranías fascistas.

A los partidos comunistas les corresponde un papel cada vez más importante en este proceso de transformaciones revolucionarias.

La presente recopilación tiene como tema el movimiento de liberación nacional de las fuerzas patrióticas del subcontinente; la situación existente en América Latina tomada

en su conjunto, así como en determinados países; la posición y la lucha de los comunistas.

El libro incluye artículos escritos por dirigentes y destacadas personalidades de 18 partidos comunistas latinoamericanos y publicados en *Revista Internacional* entre 1981 y 1984.

Todos los datos y evaluaciones hechas por los autores corresponden a la fecha en que los respectivos materiales fueron publicados en la revista. Algunos artículos fueron ligeramente reducidos y actualizados.

La recopilación está destinada a toda clase de lectores. La Editorial ruega que haya llegado la opinión que le merece este libro, escribiendo a la siguiente dirección:

Editorial Internacional
Paz y Socialismo

Thákurova 3,

Praga 6,
Checoslovaquia

AMERICA LATINA EN LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO

La política de poder global de Reagan

Rodney ARISMENDI
Primer Secretario del CC
del Partido Comunista del Uruguay

«¡Hombres, no celebréis todavía la derrota de lo que nos dominaba hasta hace poco! Aunque el mundo se alzó y detuvo al bastardo, la perra que lo parió está otra vez en celo.»

BERTOLT BRECHT.
La resistible ascensión de Arturo Ui.

La advertencia del gran poeta alemán irrumpe en la memoria apenas se ingresa al texto de *Una nueva política interamericana para los años 80*¹, material reservado escrito para el Consejo Interamericano de Seguridad de EE.UU. Todo hace creer que este documento marca una directriz vertebral en los planes del Gobierno Reagan. Es una especie de *Mein Kampf* que estructura y resume en lenguaje descarnado la doctrina política y militar imperialista hacia América Latina y el Caribe, sin esmaltar sus rasgos más brutales.

Es un texto basado en el principio del desempeño hegemónico de EE.UU. en el mundo, cuestionado por el «comunismo internacional», categoría política demonizada que abarca desde la URSS y los países socialistas a los nuevos Estados emergidos de la disgregación del sistema colonial, a todos los movimientos de liberación nacional y a las fuerzas políticas —partidos y gobiernos—, que realizan una política exterior independiente, de paz y soberanía.

En esta concepción ecuménica, América Latina y el Caribe, a través de «las relaciones interamericanas», deben ser «Escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la expansión del poder global de los EE.UU.». «...Histórica-

mente la política latinoamericana de EE.UU. no ha estado nunca separada de una distribución global del poder.» Es «base del pluspoder —dice— para balancear las actividades en Europa, Asia y Africa».

•

Se subraya aquí, otra vez, el clásico pensamiento imperialista yanqui respecto a América Latina. Este ha sido el fundamento geopolítico de más de un siglo de intervenciones al Sur del Río Grande, arrojadas con la llamada doctrina Monroe, la que siempre fue un gran fraude, sin base histórica ni jurídica, esgrimido nebulosamente por EE.UU. como hoja de parra para sus peores fechorías.

Si se desmixtifica esta idea central, queda apenas la afirmación tan conocida de que el hemisferio es coto privado de EE.UU., y línea de partida en ambos océanos hacia la captura del cetro mundial. En 1912, el ex-ministro de Guerra, Elihu Root, estaba seguro que «hacia 1950 la frontera de EE.UU. abarcaría el continente entero». Era una utopía imperialista; no tenía en cuenta las leyes del desarrollo capitalista, que conducen a la revolución socialista, ni el papel en ella de la eclosión de los pueblos coloniales y dependientes. Pero el sueño rapaz de Root, formulado de otra manera y debiendo atenerse a otras realidades, sigue guiando a los estrategas del Norte. En el período de la guerra fría, luego del pasaje de EE.UU. a principal dominador también de América del Sur, se levantaron variadas arquitecturas hemisféricas para el control total de América Latina y el Caribe, tanto en el plano político y militar, como en el económico. El llamado *plan Truman* de coordinación de las fuerzas armadas del hemisferio —que engendrara luego la Junta Interamericana de Defensa y otras formas supranacionales— y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de Río de Janeiro, completado por las reuniones de Bogotá, Caracas y otras, reflejaron en lo fundamental el avance imperialista hacia el control de América Latina y el Caribe. En particular, allí se resumía la función estratégica que EE.UU. asignaba a nuestros países en su concepción hegemónica mundial. El hemisferio aparecía así como inmenso macizo de polo a polo, base de partida en los dos océanos, santuario económico, político y militar de

EE.UU., y retaguardia del agresivo Tratado Atlántico. América Latina y el Caribe tenían el triste destino de ser cantera de materias primas, territorio económico general a disposición del imperio, y nuestros pueblos serían la potencial carne de cañón. Los ejércitos de América Latina debían cumplir labor de gendarmería contra sus pueblos y ser los centinelas de cada pozo de petróleo, de cada mina, de cada empresa dominada por los monopolios yanquis. De esta concepción se desprende naturalmente la llamada «doctrina de la guerra interna contra el comunismo internacional», aplicada hasta nuestros días en las formas más bestiales por las dictaduras fascistas y otras tiranías del Cono Sur. Todo ello pretextado por la histeria bélica y la batahola anticomunista y antisoviética.

*

Durante casi dos décadas, desde el final de la gran guerra antinazi, EE.UU., que arrastrara a otras potencias imperialistas, obligó a la humanidad a vivir «al borde del abismo» de la guerra nuclear —según la fórmula de Foster Dulles—, encendió guerras locales en distintos continentes, planeó la agresión atómica a la URSS, incluso con fechas para su inicio —como lo han revelado publicistas y ex gobernantes de EE.UU.—; impulsó golpes de Estado y asesinatos de presidentes, ministros y líderes políticos, instauró dictaduras de diverso tipo en todas las latitudes posibles, retoños del viejo fascismo o nacimiento de sus nuevas formas.

América Latina recuerda bien ese período. El panamericanismo y las estrofas cacofónicas del «himno de las Américas» encubrieron la tremenda explotación del continente por EE.UU., y decoraron el paisaje político con tiranías principalmente militares que, empapadas en sangre de los pueblos, salvaban Occidente del comunismo y votaban serviles en los cónclaves de la OEA, llamada con razón «ministerio de colonias» de Washington.

Sobre este fondo común, la estrategia de EE.UU. tuvo variaciones, pero ellas no afectaron la dirección y la metodología principales. Fueron las derrotas del imperio —entre éstas centralmente la histórica victoria del pueblo vietnamita— que ayudaron a gestar una nueva situación capaz de superar la guerra fría y alejar el espectro de la hecatombe

nuclear. Entre esas derrotas, la victoria de Cuba y el ascenso de la brega democrática, independentista y revolucionaria de América Latina tuvieron importancia para el continente y para el mundo. Todo el andamiaje del panamericanismo y del dominio yanqui empezó a crujir y entró en crisis irreversible. A pesar de la dureza de las pruebas, incluso de vaivenes y derrotas, de las contraofensivas del imperialismo y el fascismo como la que instauró en Uruguay, Chile y otros países dictaduras fascistas, una nueva hora nació en el continente como lo probaría más tarde, en punto culminante, la revolución en Nicaragua.

El cambio en la correlación mundial de fuerzas —económica, política, militar, histórica— entre la URSS y los países socialistas, y el imperialismo, la culminación del proceso de disgregación colonial por grandes victorias revolucionarias y la mudanza de la geografía política internacional, en favor de la paz, la democracia, la liberación nacional y el socialismo, crearon bases objetivas para el alumbramiento de la distensión. Esta coincide con los intereses incluso de supervivencia de la humanidad. Es evidente que no existe alternativa para la coexistencia pacífica y la distensión, salvo la catástrofe de una guerra con las actuales armas de destrucción masiva.

El impulso de la carrera de armamentos y el deterioro de la distensión, iniciados ya bajo Carter, colocan otra vez al mundo ante tremendos peligros, agrandados por los actos y discursos belicistas irresponsables del Presidente Reagan y sus acompañantes, que han alarmado incluso a sus socios de la coalición atlántica.

Sin ninguna concesión al fatalismo —ni en el mundo ni en América Latina el imperialismo puede hacer libremente lo que desee— es menester conciencia del terrible riesgo. Peligro para la paz mundial y concomitantemente para la independencia, el progreso, la democracia y el cambio social en América Latina. Las propuestas de la Unión Soviética, formuladas por Brézhnev desde la tribuna del XXVI Congreso del PCUS, constituyen una serena y positiva contribución a la búsqueda de caminos de paz y de distensión. La actual correlación mundial de fuerzas gravita en favor de esa búsqueda, no obstante la burda vociferación con que el ex cowboy de películas inauguró su periplo como

presidente de la primera potencia del imperialismo. En el XXVI Congreso del PCUS dijimos que la unidad en defensa de la paz era la más amplia y urgente tarea de la humanidad. Y que esa brega se conjuga con la histórica batalla por la democracia y la autodeterminación económica y política de los pueblos de América Latina.

•

El documento llamado de Santa Fe, seguido por las declaraciones de Reagan, Haig, la señora Kirkpatrick y otros, nos exhibe esa unidad dialéctica entre política belicista y explotación e intervención de EE.UU. contra nuestros pueblos.

En la parte introductoria —*Fundamentos para una nueva política exterior de perspectivas*— se sientan las premisas mundiales de la línea latinoamericana en términos de una filosofía política monstruosa. No en balde lo hemos parangonado con el *Mein Kampf*: «...La política exterior —dice— es el instrumento por el cual los pueblos aseguran su supervivencia en un mundo hostil. La guerra y no la paz es la norma que rige los asuntos internacionales». «...Contener a la URSS no es suficiente. La distensión está muerta.» «...Estados Unidos debe tomar la iniciativa o perecer. La tercera guerra mundial casi se está terminando.»

La invocación a una tercera guerra mundial ya comenzada, integra hace tiempo la trama política y el condimento de los cursos de contrainsurgencia o de otra índole, dados a los militares y policías latinoamericanos en las escuelas del Canal de Panamá, de EE.UU., e incluso sirve como justificación moral de las lecciones especializadas de torturas. En las celdas y los centros de tormentos de Uruguay, por ejemplo, el verdugo más mediocre lo repite a los presos políticos. No es fortuito que tanto Pinochet como los generales fascistas de Uruguay lo proclaman diciéndose vanguardias de la defensa de Occidente en la tercera guerra ya iniciada. A esa «doctrina» se remitió el cónclave de ejércitos americanos reunido en Bogotá luego de la victoria de la revolución en Nicaragua. Esta ha sido la única coartada ideológica de los regímenes fascistas del Sur y de las tiranías centroamericanas, eslabonada a la tesis de la «guerra interna», también de oriundez estadounidense. Desde

esta plataforma, el documento de Santa Fe aprecia la situación política y los empeños de América Latina y cada uno de sus pueblos por defender la identidad nacional, volver más reales la independencia y la soberanía y abrirse paso hacia el desarrollo y el progreso sociales: «América Latina y el Sur de Asia son escenarios de las refriegas de la tercera fase de la tercera guerra mundial»...

En consecuencia, es indispensable una política exterior integral y global, enmarcada por esta trágica disyuntiva: «Pax soviética o una contrapuesta proyección a nivel mundial del poder americano, es la alternativa. La hora de la decisión no puede ser postergada».

Pocas veces se encuentra por escrito, sin ropa alguna, el pensamiento central de los círculos más agresivos y aventureros del imperialismo de EE.UU. con vistas al dominio del planeta. La jerga destinada a la intoxicación y la guerra psicológica se mantiene sólo a los efectos de agitar las sábanas del fantasma de la amenaza soviética, de proclamar el imperio en peligro y de trazar la frontera de la seguridad de Estados Unidos en todas las latitudes. El objetivo central y único es la proyección mundial del poder americano (de Estados Unidos), al que deben someterse todos los países, cualquiera sea su interés nacional y su régimen político, atribulados por la presunta pax soviética. A contrariu sensu, todos los gobiernos, partidos y movimientos que no aceptan o se han liberado de la exhaustiva protección de Estados Unidos, son considerados enemigos y por lo tanto susceptibles de ser bloqueados, derribados por conspiración y desestabilización o por asesinato de sus líderes, y objetos de potenciales invasiones. Mucho más concretamente en América Latina y el Caribe, considerados *traspatio, mare nostrum* y núcleo interior para la proyección mundial de EE.UU. Un planteamiento de esta índole supone, evidentemente, transitar a menudo por el filo de la navaja de la hecatombe nuclear.

•

El documento de Santa Fe rezuma este belicismo recalciante, en tono de cruzada ideológica, cuando propone líneas de acción frente a Cuba, América Central y el Caribe. Parte de estos dos presupuestos: a) «el Caribe se está trans-

formando en un lago marxista-leninista»; y b) los países del Caribe son «el suave bajo vientre de EE.UU.»... «factores de la ecuación global de la seguridad continental»... «amenazados por la irrefrenable actividad de una Cuba apoyada por la Unión Soviética».

Este punto de partida lo lleva a individualizar a Cuba como principal enemigo a destruir, a colocar en la mira a Nicaragua por el carácter democrático y antiimperialista de su revolución, pero, simultáneamente, a actuar —como lo especifica el texto de Santa Fe— contra el Gobierno de Panamá, contra Manley en Jamaica, contra Guyana y Granada². Guyana —bajo el Gobierno de Burnham— es calificado de «un Estado marxista prosoviético». Sin olvidarse de la hostilidad contra las fuerzas democráticas de Costa Rica y Venezuela, y sin descartar maniobras contra México, a pesar de que propone toda una zorruna política especial a su respecto. Son gobiernos y partidos de muy variados matices. Todos son culpables ante el imperialismo, por tender a la independencia en su política exterior, por reivindicar el patrimonio nacional, por ser adversos a las tiranías paridas y tuteladas por EE.UU. Explícitamente no les perdonan el apoyo al pueblo de Nicaragua y la promoción de relaciones correctas y amistosas con Cuba. *Los únicos amigos seguros para EE.UU., por lo que se ve, son las tiranías de la zona.* Así lo dice sin remilgos el documento: debe dárseles ayuda ya que «se encuentran bajo el ataque de minorías armadas». La alusión es ostensible: se trata de intervenir en mayor grado en apoyo de las dictaduras genocidas de El Salvador y Guatemala, enfrentadas por la lucha democrática y revolucionaria de sus pueblos. La agresiva y escandalosa actitud del Gobierno Reagan frente a El Salvador, la intervención desembozada y las provocaciones subsiguientes en América Central y el Caribe, especialmente contra Cuba y Nicaragua, han ilustrado muy pronto acerca de la importancia del documento de Santa Fe en la estrategia del nuevo Gobierno de EE.UU.

El documento propone declarar norma imperativa o dictado esta versión libre de la llamada doctrina Monroe: «A ninguna potencia extranjera hostil le será permitido mantener bases o aliados militares y políticos en la región». Este principio apunta contra todo Gobierno que no se so-

meta integralmente a EE.UU., que podrá ser acusado por lo menos de alianza política con países socialistas o no alineados. O simplemente —remember Guatemala—, que haya osado aplicar leyes nacionales a monopolios estadounidenses. En el caso actual y cercano de Nicaragua, amiga política de Cuba y que ha tendido lazos amistosos con países socialistas y con todas las fuerzas avanzadas del mundo, Estados Unidos habría establecido, por sí y ante sí, el derecho de castigarla por todos los medios. Por lo demás, como tantas veces lo ha dicho Fidel Castro, ¿quién otorgó poderes a la corrupta oligarquía financiera del Norte, a su Pentágono y su tenebrosa CIA, para determinar y condicionar el régimen político y la opción ideológica de nuestros pueblos?

No menos monstruoso es el planteamiento respecto a Panamá. Propone lisa y llanamente dejar de lado los tratados canaleros firmados por Carter, e involucrar a las fuerzas armadas de América Latina en demostraciones en el mar Caribe. *Para ello se debería pasar el Canal al control de la JID*, y establecer una zona de seguridad, para poner sobre aviso «a los soviéticos y sus aliados comunistas en este hemisferio de que estamos preparados, decididos y capacitados para defender nuestros intereses vitales».

•

Este plan vesánico, digno de Hitler, culmina con la propuesta de guerra contra Cuba. «EE.UU. —dice— no puede seguir aceptando el status de Cuba como Estado vasallo de la URSS.»

El imperialismo del dólar, que conoce y practica sólo relaciones de dependencia y vasallaje, no concibe o finge no concebir que Cuba sea parte de la comunidad socialista, y sea, a la vez, libre y soberana como nunca. Esto le confiere el carácter de trinchera avanzada de una América Latina que se ha puesto en marcha, por cauces diversos, con movimientos políticos heterogéneos, de variadas profundidades y contenidos de clase, empero coincidentes en su anhelo de independencia económica, autodeterminación plena, democracia y progreso social. Cuba socialista, que abatió el mito de la fatalidad de la coyunda yanqui, fue y es al mismo tiempo síntoma de esta dinámica latino-

americana tendiente a la segunda independencia y estímulo precipitante en su desarrollo. La revolución cubana evidenció la crisis de la política de dominación de Estados Unidos sobre el continente, crisis que ha seguido profundizándose y que ya ni la fuerza ni la corrupción política podrán detener, porque ella refleja el avance ineludible hacia la liberación de nuestros pueblos. La oscilación constante de los gobiernos de EE.UU. en los últimos veinte años, entre la demagogia panamericanista con vistas a ampliar las bases de su hegemonía, y la práctica retornada y permanente del *big stick*, de las intervenciones, de la instauración de regímenes fascistas como en el Sur, o el pasaje actual de las oraciones sobre derechos humanos de Carter al desenfreno imperialista de Reagan, registra el fracaso para acomodarse frente a una América Latina que quiere ser libre y ha empezado a serlo.

Durante más de veinte años, EE.UU. bloqueó a Cuba, organizó invasiones y bandas armadas, planeó el sabotaje, intentó el asesinato de Fidel y otros dirigentes, sin embargo, Cuba sigue en pie y más firme que nunca. No obstante, pese a esta larga ristra de agresiones y crímenes, es la primera vez, desde la crisis del Caribe de 1962, que en un documento de asesores del Gobierno de EE.UU. se plantea *cínica y abiertamente la guerra contra Cuba*. El documento de Santa Fe lo hace. Propone «acciones punitivas» inmediatas como anticipo de mayores si Cuba presta solidaridad a otros pueblos de América Latina. Pero, en verdad el postulado de fondo es la exigencia de que los revolucionarios cubanos rompan sus relaciones internacionalistas con la URSS y renuncien a su colaboración con los gobiernos de África liberada. «En caso contrario y si la propaganda falla, debe lanzarse una guerra de liberación nacional contra Castro».

La respuesta —premonitoria, o con pleno conocimiento de la amenaza— la dio Fidel Castro en el II Congreso del Partido Comunista de Cuba. El trabajo socialista y la defensa se entrelazan inseparables, en las tareas de la gloriosa Isla. El pueblo entero combatirá hasta los últimos extremos ante un bloqueo o una invasión.

¡Cuba no está sola!, se ha repetido, con palabras y con actos, en los más de veinte años de su revolución. Junto

a Cuba se alinearán una vez más, como en su hora al lado de Vietnam, los pueblos del mundo. Tiene y tendrá la solidaridad de la Unión Soviética y los países socialistas, de pueblos y de gobiernos progresistas de todo el planeta y, en particular, de América Latina y el Caribe. Una agresión a Cuba tocaría límites extremos entre la guerra y la paz mundial. No sólo los revolucionarios y las fuerzas avanzadas, sino todo gobernante y dirigente político sensatos rechazarán esta aventura de imperialistas enloquecidos.

Por lo mismo, en EE.UU. ya se levantan voces de advertencia —parlamentarios, Iglesias, intelectuales, organizaciones populares— contra la manifiesta tentativa del Gobierno yanqui de intervenir militarmente en América Central y el Caribe, y de amenazar a Cuba con el bloqueo y la invasión. Esas voces evocan el espectro de un nuevo Vietnam, la derrota ignominiosa que traumatizara al estadounidense medio. Asoman incluso las primeras contradicciones en los elencos imperialistas.

Sin embargo, no debemos subestimar el peligro. Incurrir en una actitud desaprensiva, de ingenuo optimismo —o, el *cándido* de Voltaire—, sería desconocer la esencia del imperialismo, olvidar su historia del último siglo, aparte de algodónarse los oídos para no escuchar lo que a gritos anuncian los gobernantes de Washington reiterando a los pequeños monstruos fríos del Comité de Santa Fe.

El riesgo acecha a todo lo democrático y liberador de América Latina. Contra tal amenaza debe alistarse el mundo, pero, ante todo, deben erguirse nuestros pueblos en toda su estatura. El apoyo a Cuba y Nicaragua, la solidaridad con El Salvador y Guatemala, el sostén a la reivindicación patriótica de Panamá sobre el Canal, se enlazan estrechamente con el combate contra el fascismo y las tiranías de Uruguay, Chile y otros países, y por la democracia, la plena autodeterminación económica y política, y el socialismo, de todos nuestros pueblos.

*

Apenas traspuesto el umbral de la Casa Blanca, las palabras y los hechos de Reagan convalidaron el informe de Santa Fe en tanto referencia basilar de su política latinoamericana.

El motivo ocasional de escándalo fue la heroica lucha del pueblo de El Salvador. Con el pretexto de que la Junta genocida era víctima de agresión soviética a través de Cuba y Nicaragua, Reagan y sus acompañantes incrementaron todas las formas de la intervención en el pequeño país, afirmando estar dispuestos incluso a la invasión para detener la insurrección democrática. El general Haig amenaza a Cuba con el bloqueo y la agresión directa. El Gobierno de EE.UU. suspende créditos a Nicaragua, entre ellos el llamado «del pan» —forma de guerra alimentaria— y estimula abiertamente el recrudecer de provocaciones armadas en las fronteras; sugiere la posibilidad de una guerra centroamericana en la cual las tiranías vecinas serían armadas y conducidas por EE.UU. Sin recato alguno, se lleva en Miami el adiestramiento militar de ex guardias somocistas y mercenarios cubanos.

Combinando el chantaje intimidatorio y el belicismo sin máscara, Washington pasa a organizar una gigantesca maniobra militar en el Caribe. Toma por base el Canal de Panamá —en burla ostensible de los Tratados recientes— y monta una suerte de ensayo general de lo que podrían ser acciones de guerra contra Cuba y otros países de las Antillas y América Central. Entre otros acontecimientos de carácter provocativo, grandes portaviones —como el «Nimitz» provisto de dotación nuclear— se aproximan a Guantánamo, porción de tierra y mar usurpada a Cuba por el imperialismo.

El general Haig, en su primera rueda de prensa como Secretario de Estado, declara: «La lucha contra el terrorismo va a ocupar el lugar que hasta ahora han tenido los derechos humanos en el orden de prioridades de nuestra política internacional»³. Este portavoz imperialista no se refiere al terrorismo, tal como lo conocen, definen y condenan las fuerzas avanzadas, o como lo identifica cualquier diccionario de ciencias políticas. Recoge y reitera la denominación que Hitler y Goebbels daban a la Resistencia europea. Así, el Gobierno de EE.UU. equipara oficialmente el terrorismo con la lucha revolucionaria por la democracia, la liberación nacional y el socialismo.

Proyectada históricamente, esta equiparación supone calificar como terroristas a todos los libertadores de ambas

Américas, desde Bolívar a Jorge Washington. En términos actuales caen bajo esa inculpación gran parte de los gobiernos, que hoy se sientan en la Asamblea de las Naciones Unidas, surgidos del derrumbe de los imperios coloniales y de la gran revolución de nuestro tiempo. En lo inmediato, el Gobierno Reagan califica de este modo a los revolucionarios de El Salvador y Guatemala. Como se sabe, estos movimientos congregan luchadores de extracción o militancia comunista, demócratas cristianos, socialdemócratas afiliados a la Internacional Socialista, así como sacerdotes católicos, intelectuales independientes, personalidades universitarias y otros. Por extensión, si la heroica resistencia actual de los pueblos de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Haití y demás —subyugados, torturados y escarnecidos por dictaduras fascistas o de corte fascista—, subiera a planos más altos y debiera recurrir a las armas (a lo que tendrían legítimo derecho de acuerdo a resoluciones de la ONU), el Gobierno de EE.UU. marcaría con el estigma de terroristas a los patriotas insurrectos. Tal es la criminalidad potencial de la formulación estadounidense.

También William Dyess —vocero del Departamento de Estado— asombra a los corresponsales de la prensa mundial con nuevas explicaciones acerca de la lucha contra el terrorismo, en su calidad de doctrina identificatoria del nuevo Gobierno. Dyess otorga una definición: «Llamamos terrorismo —dice— el apoyo financiero, el entrenamiento y la venta o entrega de armas a grupos revolucionarios que combaten a regímenes legítimamente establecidos»⁴. (El subrayado es mío. —R. A.) Ejemplifica: lo de El Salvador es terrorismo.

La definición es inefable y el ejemplo centroamericano escogido cae pesadamente sobre la cabeza de EE.UU. Por si no alcanzara, días después Reagan nos ilustra acerca de cómo su Gobierno hace befa de sus propias definiciones. Anuncia su decisión de entregar grandes cantidades de armamento, en particular pesado, a los cabecillas feudales de Afganistán, que actúan notoriamente desde Pakistán, a partir de campos organizados por la CIA, y de ayudar a Savimbi, el ex aliado de la PIDE portuguesa, co-partícipe de matanzas de todo tipo en el territorio austral de República Popular de Angola, en correrías que parten

del territorio de Namibia, bajo el ala protectora de los racistas sudafricanos. Son dos muestras de la conducta del Gobierno de EE.UU. en materia de enunciados *doctrinarios*. Claro está, el señor Reagan puede excusarse diciendo que ni los feudales afganos, ni las bandas canibalescas de Savimbi son *revolucionarios*... en la acepción verdadera, científica y social del vocablo.

La misma dualidad se descubre respecto a la definición de los «gobiernos *legítimamente* establecidos».

La junta «militar-demócrata cristiana» de El Salvador nació de un golpe de Estado contra la dictadura de Romero, uno más en la serie de golpes y contragolpes que, con bendición de Washington, a través de cincuenta años han atormentado este pequeñísimo país. Pinochet surgió de un cuartelazo fascista —organizado y financiado por el Gobierno de EE.UU.— contra Allende, Presidente elegido por el pueblo de Chile. El folclórico tirano Somoza inició un régimen siniestro continuado por sus descendientes, a consecuencia de la invasión de Nicaragua por los *marines* estadounidenses. El golpe de Estado en Uruguay, inspirado por el Pentágono, se impuso sobre la destrucción de un régimen institucional democrático de larga tradición... Se puede seguir amontonando ejemplos.

¿Cómo funciona el concepto de *legitimidad* —invocado por el señor Dyess— en todos estos casos?

El Gobierno Reagan los considera sus amigos, con excepción de los vencidos Somoza, motivo de expresada nostalgia por el Comité de Santa Fe y de revertido encono contra sus vencedores del Frente Sandinista.

La respuesta es, pues, clara: la única norma objetiva de esa legitimidad es su coincidencia, o servicio, con los intereses imperialistas.

La definición es fraudulenta, de ocasión, amañada para criminalizar el derecho de los movimientos democráticos y populares a solicitar ayuda —ésta sí legítima— en su desigual contienda por la libertad, la independencia y el progreso social de sus patrias, frente a fascismo y tiranías instaladas y armadas hasta los dientes por el Gobierno de EE.UU. y otros imperialistas. Incluyo aquí el derecho legítimo de beligerantes a comprar armas en cualquier país que las venda.

Por otra parte, si nos atenemos a la verdadera acepción de la categoría política terrorismo, ella encaja justamente a la conducta, pasada y presente, de los imperialistas del Norte. Parte considerable de esa historia de «capa y puñal» la hemos sufrido los latinoamericanos.

Para no ir muy lejos, basta con evocar en breves párrafos las denuncias del Congreso de EE.UU. luego de lo de Watergate. Los informes de los investigadores, sobre todo el documento de la comisión presidida por el senador Frank Church (346 páginas. Noviembre de 1975), comprueban la injerencia política, militar, de inteligencia —habitualmente por medios terroristas— en numerosos países, incluyendo el asesinato de líderes políticos, previo visto bueno presidencial. Allí se registran trece años de actividad de la CIA en Cuba, Congo, Vietnam, República Dominicana, Chile, Guatemala, Perú, Laos, Irán, Indonesia y otros países. El relato de los atentados urdidos contra Fidel Castro, Raúl Castro y otros dirigentes de la revolución cubana superan la más aguda novela de misterio.

Nada más expresiva en cuanto a las andanzas en el Caribe, que la confesión de Lyndon B. Johnson, el ex Presidente, del 30 de julio de 1973: «Lo cierto es que en el Caribe habíamos montado una sociedad anónima dedicada al asesinato».

El Presidente Reagan, siguiendo las huellas marcadas por los estólidlos asesores de Santa Fe, hace hoy en ella inversiones millonarias.

•

En la misma declaración, W. Dyess extiende el planteamiento a la suerte de las relaciones con la Unión Soviética, o sea, al futuro de la coexistencia pacífica, la paz, la distensión, los acuerdos SALT, etc. Condiciona estas relaciones a que la URSS «cese» ...«su penetración en América Latina»⁵.

«El papel de la Unión Soviética —dice— en apoyo a grupos terroristas desde Namibia hasta El Salvador, va a ser elemento esencial para determinar el futuro.» «Vamos a observar muy atentamente el papel que desempeñan países representantes de los intereses de Moscú, como Cuba en el Caribe, y Libia en Africa»⁶.

Es un texto de antología. Burdo, groseramente mixtificador, imposible de aprehender siquiera con pinzas en un análisis político serio o en una mesa de negociación diplomática. Pero su torpeza es deliberada, busca encubrir con el alboroto y la vociferación irresponsable el pasaje del Gobierno de EE.UU. a acciones belicistas y de gendarmería en América Central y el Caribe, así como al intervencionismo desnudo en otros continentes. Sirve a la vez como tentativa de elusión frente a las proposiciones soviéticas, acogidas favorablemente en los más diversos círculos, en favor del diálogo constructivo en bien de la paz y la distensión.

Valen aquí dos puntualizaciones de carácter doctrinario: a) todo el mundo conoce la postura soviética de repudio al terrorismo enraizada en posiciones de principio del movimiento obrero internacional, en toda la obra de Marx, Engels y Lenin; b) el movimiento liberador de América Latina —la lucha por la segunda independencia de que hablara Martí— no es producto de una supuesta penetración soviética. Es la síntesis de alrededor de un siglo de brega democrática y antiimperialista, principalmente contra el imperio del dólar, que luego de la histórica victoria cubana y su avance hacia el socialismo adquirió carácter irreversible. Las raíces de este gran movimiento, que ha entrado en nuevas fases ascendentes, como lo testimonia entre otros rasgos la victoria de Nicaragua, están enclavadas en la realidad económica, social y política de nuestros países. Y ha tomado dimensión histórica en nuestra época, inaugurada por la Revolución de Octubre, y en particular con la nueva correlación mundial de fuerzas. La pretensión del Gobierno de EE.UU. de condicionar su diálogo con la Unión Soviética, o sea, las cuestiones de la paz mundial, a un compromiso de petrificación de las actuales relaciones económicas y sociales de América Latina y a un *statu quo* para los fascismos y tiranías al servicio del dólar, es un chantaje sin perspectiva, además de ser una utopía reaccionaria. Nadie, aunque quisiera, podría darle a EE.UU. garantías de un estatuto vitalicio para sus hijos predilectos, fascistas y tiranuelos del Sur y el Caribe, y su dominio imperialista sin sobresaltos en todo el hemisferio.

*

Los propósitos del Gobierno de EE.UU. están a la luz del día. Luchar contra el *terrorismo* en sustitución de *doctrina de los Derechos Humanos*, significa pasar a sostener activamente a las tiranías fascistas y otras dictaduras del Cono Sur y a hostilizar a los gobiernos progresistas que tratan de independizar de EE.UU. su política exterior.

Horas antes de esa conferencia de prensa, William Dyess anunció que «a partir de ahora, EE.UU. no va a exponer sus quejas o críticas a otros gobiernos, sino a través de canales diplomáticos privados»⁷. Las agencias noticiosas indicaron de inmediato que «este cambio de política mejoraría las relaciones de Washington con los regímenes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile»⁸.

Escaso tiempo después, la Casa Blanca regulariza sus relaciones con Pinochet, justamente en el aspecto relacionado con el terrorismo. Levanta las medidas adoptadas por Carter a raíz del asesinato en EE.UU. de Orlando Letelier y su secretaria, por agentes de la dictadura de Chile. Esta línea se extiende ya a Uruguay. El Gobierno de EE.UU. se ha dirigido a la dictadura por sendas cartas del Departamento de Estado y del Pentágono, asegurándole «buenas relaciones» e instándola a adquirir armamentos modernos, con vistas a las obligaciones comunes en el Atlántico Sur. Sobran otros ejemplos.

Una simple compulsa de textos comprueba que estas medidas fueron anunciadas, incluso con el mismo léxico, por el documento de Santa Fe. Parafraseándolo ostensiblemente, la señora Kirkpatrick —actual embajadora yanqui en la ONU, con rango de ministra— reitera la premisa: «Por comparación, estos regímenes autoritarios (se refiere a las dictaduras genocidas de América Latina y el Caribe) no son los peores, cualquiera sean sus defectos. En todo caso, son mejores que los regímenes marxistas».

Todos recuerdan el amparo a Somoza que realizara cierta personalidad de EE.UU.: «es un hijo de perra, pero es un hijo de perra bien nuestro».

Instaurar y sostener hijos de perra bien de Estados Unidos: he aquí la fórmula política del Gobierno Reagan para América Latina.

Para lograrlo plenamente, los consejeros aúlicos de Santa Fe llaman a revitalizar el Tratado de Río de Janeiro,

colocando un énfasis especial en la Junta Interamericana de Defensa. Privilegiar ese organismo significará un nuevo impulso al control multiforme que el Pentágono cumple hoy sobre las fuerzas armadas latinoamericanas, supone proyectar la función supranacional de la JID, relacionada siempre con todos los golpes militares que han martirizado a nuestros pueblos.

Los planes del actual Gobierno de EE.UU. ciernen una sombría y amenazadora nube en el cielo de nuestra América. Nos anuncian mayor explotación, fascismo y otras sangrientas dictaduras, más las tentativas de revertir por la intervención directa el movimiento liberador que, desde Cuba, ahora también Nicaragua, ha comenzado a cambiar el rostro del continente. El respaldo por todos los medios a la Junta de El Salvador y los desplantes armados en el Caribe ponen en carne viva esta realidad.

No se pueden descartar los elementos de chantaje, de guerra psicológica, de presión sobre los aliados europeos y de intimidación a los gobiernos y partidos nacional-reformistas latinoamericanos, la intención de imponer, bajo el estruendo de la fraseología irresponsable, determinados objetivos, tanto de política exterior y estrategia de dominación como de política interior. Y especialmente, aprovechar este clima con vistas a la carrera de armamentos, los gigantescos gastos en implementos nucleares, incluso para vencer al respecto resistencias de aliados europeos, del Tratado Atlántico. Pero más allá del redoblar de tambores, debemos tener conciencia de que la línea del actual Gobierno de EE.UU. expresa la esencia del pensamiento de los sectores más agresivos y más ultraizados del imperialismo yanqui. Esta es la medida del peligro real para la paz del mundo y para América Latina. Y es necesario responder en función de ese peligro.

Por lo mismo no debemos subestimar una sola línea del documento de Santa Fe. La conducta del Gobierno Reagan verifica que no estamos ante una opinión más, entre otras diferentes e igualmente válidas. Y menos ante una investigación politológica. Cabe pensar que resume los objetivos últimos y totales de su política latinoamericana.

La cuestión consiste en saber hasta dónde podrán llevar a cabo esta orientación en la actual correlación mundial de fuerzas y en América Latina de hoy.

Nadie puede saltar por encima de sus propias nalgas, reza un sabio decir campesino. Los hechos políticos de estos días han demostrado una vez más los amplísimos sectores que se oponen en el mundo al frenesí belicista y al aventurerismo. Entre esos hechos se inserta la respuesta a las provocaciones estadounidenses en torno a El Salvador.

En cuanto a América Latina, la brutalidad imperialista hará más amplias las fuerzas sociales y políticas que la enfrentan o que resisten a distintos niveles las imposiciones de Washington.

La contraofensiva del imperialismo y el fascismo, de 1973, planeada descocadamente por el Gobierno de EE.UU., Kissinger al frente, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay, y los posteriores cambios negativos en otros países de América del Sur, ennegreció el paisaje político, pero no logró revertir el proceso de ampliación de las fuerzas en contradicción con EE.UU.

Tal como previera a finales de 1973 nuestro Partido, era necesario y posible conjugar contra el fascismo, la unidad y convergencia nacional y democrática en nuestro país, con la unidad y convergencia de pueblos y gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe, opuestos por principio y potencialmente amenazados por la ola parda o negra instrumentada por Washington.

Por entonces se podía oír a veces esta pregunta: ¿es realista esa orientación, o expresa apenas un deseo piadoso? ¿No dicen ustedes que los niveles de desarrollo capitalista de estos países enlazan obligatoriamente la pugna histórica contra el imperialismo con una aguda lucha de clases?

Este rasgo característico del actual desarrollo de nuestras sociedades es y será un elemento obligatorio del proceso social y político en todas sus vicisitudes. Pero, sólo pensando en términos de un marxismo muy rudimentario, se puede creer que la lucha de clases y el potencial poderío del proletariado y las fuerzas revolucionarias, excluyen mecánicamente la posibilidad de insertar una amplia estrategia política de unidad y convergencia antifascista en la batalla histórica de nuestros pueblos por la revolución de-

mocrática y antiimperialista. Por lo demás, el carácter *avanzado* en América Latina de esta revolución, potencialmente propicia a transformarse en socialista, no borra linealmente etapas, fases intermedias y mucho menos las coyunturas políticas en que las alianzas de la clase obrera y el movimiento revolucionario están llamadas a ampliarse considerablemente. Esto que es valor adquirido en cuanto a la táctica antifascista, vale también en cuanto a la táctica a aplicar frente a la política imperialista en sus formas brutales.

Las preguntas de entonces han sido contestadas por la vida. La praxis verifica y sigue verificando la previsión política.

La activa solidaridad de pueblos y gobiernos democráticos con Chile, Uruguay y otros países tiranizados, fue una respuesta. Aunque la contestación más clamorosa surge del apoyo de los gobiernos de Venezuela (bajo Carlos Andrés Pérez), Jamaica (bajo Michael Manley), Panamá, Costa Rica, México y Cuba a la revolución democrática y antiimperialista de Nicaragua. En torno al Frente Sandinista se congregaron en muy extensa unidad personalidades patrióticas y democráticas, sacerdotes católicos, revolucionarios de inspiración marxista y leninista y representantes de la burguesía y pequeña burguesía. Hoy mismo, la revolución salvadoreña cuenta con la simpatía de muchas de esas fuerzas. Entre ellas, gobiernos y partidos nacional-reformistas, movimientos vinculados a la Internacional Socialista, o pertenecientes a la poderosa coordinación de partidos acordada en Oaxaca (COPPPAL), también exponentes de la Iglesia católica, fieles a la memoria de monseñor Romero. Y —desde luego— como ocurriera antes con Nicaragua, de partidos comunistas y obreros. Esto se corresponde con el amplio espectro político del Frente Democrático salvadoreño.

Este enfoque estratégico general, que abarca a nivel del continente grandes líneas para la lucha antifascista y para enfrentar las formas más brutales de la política imperialista, como la actual línea Reagan, está llamado a integrarse en la táctica concreta de cada país. Una línea nacional está sujeta a la correlación de fuerzas, a la peculiaridad de la lucha de clases, al desarrollo nacional y a la conformación de sus estructuras estatales y políticas, al análisis

concreto de la situación concreta en 1980.

Pero así como se interrelaciona con la dinámica del proceso mundial, se enlaza vivamente a las cuestiones de la pugna latinoamericana contra el imperialismo. En este momento, el empeño por derrotar la actual línea del Gobierno de EE.UU. y por limpiar el rostro del continente de fascismo y tiranías, es parcela inalienable del esfuerzo nacional y democrático de cada pueblo.

Frente al fascismo, como frente a la línea Reagan, pensamos que la unidad dialéctica de amplitud y profundidad es totalmente válida. Supone la unidad y convergencia de las fuerzas más amplias y, a la vez, en conexión estrecha, agrupar a aquellos sectores sociales y políticos correspondientes a las fuerzas motrices de la revolución democrática y antiimperialista.

La línea Reagan nos lleva a confirmar estas reflexiones ya reiteradas. El blanco privilegiado de sus disparos son Cuba, Nicaragua y Granada, y los movimientos revolucionarios, ante todo de El Salvador y Guatemala, pero su ataque se dirige contra todos los partidos, movimientos y gobiernos democráticos, que, incluso sin ser definidamente antiimperialistas, resisten el dictado de Washington y tienden hacia una mayor autodeterminación económica y política.

La violencia del impacto intimidatorio puede hacer vacilar a sectores de la burguesía nacional reformista o de la pequeña burguesía, aunque tendencialmente es de prever el ensanchamiento del campo de las fuerzas patrióticas y democráticas. Factor importante de esa ampliación será el vigor de la respuesta de masas de los pueblos y el acierto de una línea política no sectaria del movimiento revolucionario.

Saber congregar ese vasto campo —pese a su heterogeneidad y sus contradicciones— es condición de la paralización y derrota de la actual amenaza imperialista. Se trata de tener conciencia del peligro y responder en consecuencia.

¹ Este informe fue redactado por un grupo de asesores de Santa Fe, EE.UU., para el Consejo de Seguridad Interamericana de ese país. Escrito en 1980, antes de la elección de Reagan, es evidente, sin embargo, la coincidencia esencial de sus concepciones con

las ideas del nuevo presidente y sus principales colaboradores. El documento fue redactado por L. Francis Bouchez, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordon Summer, Lewis Tabs (editor); el prefacio fue escrito por Ronald F. Docksai, colaborador del Consejo de Seguridad Interamericana, EE.UU.

² Respecto a Granada, las recomendaciones del documento de Santa Fe fueron llevadas a la práctica en octubre de 1983, al invadir EE.UU. este país. —N. de la Red.

³ *El País*, Montevideo, 29 de enero de 1981.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

⁶ *Ibíd.*

⁷ *Ibíd.*

⁸ En aquel entonces, todos estos países tenían gobiernos militares reaccionarios. Más tarde, Argentina y Bolivia emprendieron la vía de democratización. —N. de la Red.

Después de Malvinas nada es igual

Athos FAVA

Secretario General del Partido Comunista de la Argentina

Los acontecimientos de Malvinas elevaron la resistencia de los pueblos de América Latina a los designios imperialistas; se desplegó un fuerte espíritu latinoamericanista inspirado en San Martín, Bolívar y Martí que une pueblos y gobiernos en solidaridad con la justa causa de la soberanía argentina.

Al calor de este auge del sentimiento patriótico antiimperialista, se debilitaron los mecanismos de subordinación de las relaciones políticas y militares de América Latina hacia los EE.UU.; se deterioraron seriamente la OEA, el TIAR¹, la doctrina Monroe, la Junta Interamericana de Defensa, etc. Se debilitó asimismo en ese período la presión yanqui sobre Cuba, Nicaragua y El Salvador.

En el Cono Sur² tuvo gran repercusión el triunfo democrático en Bolivia, cuya causa es la nuestra, así como la de Malvinas es la del pueblo boliviano y de América Latina. Dijo bien el nuevo Presidente de Bolivia Siles Zuazo: «Hay que malvinizar a Latinoamérica».

Después de Malvinas y del triunfo de las fuerzas progresistas en Bolivia, el proceso democratizador continúa cobrando nuevos auge, como lo prueban las elecciones de noviembre de 1982 en Brasil y en Uruguay, donde el pueblo expresó su repudio a los regímenes militares reaccionarios y su voluntad de cambios; Cuba socialista y Nicaragua heroica se yerguen ante los pueblos del continente como puntales de la solidaridad antiimperialista.

El propio Reagan admitió que las relaciones con América Latina empeoraron después de Malvinas. Pero las causas de ello no se limitan a esta crisis. Se encuentran en la

misma política de EE.UU.: es América Central y el Caribe y es también el Cono Sur donde fracasan los intentos de la Casa Blanca de apoyar los regímenes más reaccionarios.

Han madurado las condiciones para desplegar un amplio y poderoso movimiento antiimperialista de pueblos y gobiernos americanos. Así lo confirmaron en reciente intercambio de opiniones los Partidos Comunistas del Cono Sur del continente, con la participación de una delegación del Partido Comunista del Ecuador que tuvo lugar en Lima en noviembre de 1982.

Malvinas mostró la firme unidad de los Partidos Comunistas de América Latina y del Caribe y su coincidencia esencial en la caracterización de la situación internacional y latinoamericana, como ya lo había señalado la Conferencia de La Habana de junio de 1975.

La solidaridad antiimperialista se elevó a un nuevo nivel. En ella se destacó la actitud de los partidos comunistas y obreros de todo el mundo que pusieron de relieve, en los hechos, el internacionalismo que une los objetivos revolucionarios de la clase obrera en todas partes, que hoy se expresa en la actitud combativa en defensa de la paz.

De los intercambios de opiniones con los Partidos Comunistas de la Unión Soviética, Francia, los EE.UU., Gran Bretaña, Perú, Uruguay, Chile, Portugal, RDA, Checoslovaquia, Brasil y otros, surgieron acuerdos, declaraciones conjuntas y manifestaciones muy importantes que impulsaron la amplia solidaridad popular. Cabe destacar el significado especial de los pronunciamientos del Partido Comunista de Gran Bretaña, las juventudes comunistas de Inglaterra, así como la posición expresada por el Partido Comunista de los EE.UU.

En América Latina la expresión de solidaridad de los partidos y de las fuerzas antiimperialistas, fue sumamente activa.

La reunión de Lima señaló que la significación de Malvinas, «...por encima de sus anécdotas circunstanciales, consiste en haber provocado la explosión de un sentimiento antiimperialista sin precedentes en nuestra historia por su magnitud y simultaneidad». «Ha revelado —añade luego— un nuevo alineamiento de fuerzas que permite plantear, sobre otras bases organizativas e institucionales, las rela-

ciones interamericanas»³. Finalmente recogemos la solidaridad que expresa la resolución «...con la legítima demanda del pueblo argentino que reivindica sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y prepararse para dar un nuevo impulso a la propuesta de terminar con la ocupación colonial inglesa con motivo del 150 aniversario de esta inicua ocupación»⁴.

•

El conflicto anglo-argentino por las Malvinas se inscribe en la estrategia global del imperialismo, que tiene un lugar y un papel asignado a la Argentina y el Atlántico Sur. Es parte de la política de la guerra nuclear que alimentan los EE.UU. y la OTAN. Gran Bretaña fue el agresor inmediato, pero el principal responsable fueron los EE.UU.

Poco antes del conflicto en el Atlántico Sur, en marzo de 1982, señalábamos la orientación especialmente agresiva de los EE.UU. en América Central y el Caribe, alertando a la opinión pública que tanto el imperialismo inglés como el yanqui pretendían utilizar nuestra justa causa nacional en las Malvinas para convertir las islas en plaza de armas.

Su carácter de principal enemigo imperialista quedó más claro cuando puso en descubierto su doblez, al sacarse la máscara de mediador neutral o confiable con que actuó al comienzo de la contienda y al brindar apoyo diplomático y militar a los colonialistas ingleses, mientras adoptaba sanciones punitivas contra la Argentina. Se difundió entonces el llamado «Plan para el Océano Libre» («Free Ocean») ⁵, aprobado en 1980 por el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. Se trata de un plan estratégico por el cual Gran Bretaña no debía abandonar las islas del Atlántico Sur con el objeto de utilizarlas como base militar en la confluencia de los tres océanos: Índico, Atlántico y Pacífico. Junto con las islas Diego García y Ascensión y la zona conflictuada con Chile en el Canal de Beagle, la OTAN obtendría el control de las rutas marítimas para el paso de buques de guerra y el transporte petrolero, sobre todo en caso de dificultades en el Canal de Panamá o en el Canal de Suez; sería además una llave maestra con acceso directo a la Antártida. Se trata de asegurar el espacio geográfico para el acariciado plan de establecer un tratado militar agresivo

para el Atlántico Sur (OTAS) que incluya a la racista República de Sudafrica.

Este plan compagina los objetivos de guerra mundial y de aplastamiento de las luchas de liberación de los pueblos de América Latina y de Africa con los de explotación de los inmensos recursos naturales (petróleo, minerales y pesca) de los mares y plataformas submarinas. Abarca la extensa Patagonia despoblada por la dominación latifundista, oligárquico-imperialista.

Después del conflicto, este plan sigue vigente. El imperialismo reforzó su presencia militar en la región. Las Malvinas, de hecho, están convertidas en un gigantesco portaviones, en una base militar fortificada, ocupada por Gran Bretaña, al servicio de la OTAN, con submarinos y armas nucleares. La solución negociada del conflicto, dentro de las Naciones Unidas, es parte de la lucha por la paz mundial.

•

Por primera vez en lo que va de siglo, la Argentina vivió en su carne y en su sangre el drama de la guerra, con sus secuelas. El pueblo asimiló la experiencia de que ante la agresión imperialista, no hay neutrales ni se admite la indiferencia, y menos que se especule con la guerra. Esto no lo vieron (unos porque no quisieron y otros porque no pudieron) los militares argentinos que subestimaron la reacción británica y la alineación norteamericana, que no podía dejar de ser fiel a su propia creación, la OTAN, y privilegiar a su aliado principal en la alianza agresiva.

Poco antes del conflicto, la política exterior argentina se caracterizaba por el esfuerzo en los cenáculos del poder para suprimir o atemperar sus aspectos más positivos. Respondía a la presión del imperialismo que pretendía revertir a lo que llamaban sus «zonas grises», como son la presencia argentina en el Movimiento de los No Alineados, el rechazo al bloqueo cerealero contra la URSS, y el aumento constante de las relaciones comerciales y culturales con la comunidad socialista, incluida Cuba, y los principios establecidos en la llamada «Declaración de Paso de los Libres» entre Brasil y Argentina, mayo de 1981, donde se suscitaba el apoyo al pueblo palestino, la condena al régimen racista de Sudáfrica y se descartaba el estableci-

miento de alianzas agresivas en el Atlántico Sur. Era el momento en que se buscaba hacer de la Argentina una factoría y plaza de armas contra pueblos hermanos, y se denunciaba la presencia de «asesores» argentinos en el golpe de Estado de los narcofascistas⁶ en Bolivia, y en la guerra contra el pueblo de El Salvador y en la preparación de la agresión a Nicaragua.

Pero estalla el conflicto de las Malvinas, y las contradicciones históricas de la Argentina y América Latina con los EE.UU. son catapultadas a la superficie. Entre abril y junio de 1982, la política exterior argentina transita por los senderos más positivos y en las cancillerías de América Latina y los organismos internacionales, se privilegian las relaciones de los países latinoamericanos entre sí, se plantea la necesidad de prescindir del caduco panamericanismo, de participar activamente en el Movimiento de los No Alineados y se destacan las bondades de las relaciones con la URSS y los países socialistas, que se revelan como los «amigos confiables». A partir del cuestionamiento del «occidentalismo» se discutía el lugar de Argentina y América Latina en el mundo.

Después del cese de hostilidades, vinieron los esfuerzos «desmalvinizadores» de los imperialistas de los EE.UU. y sus agentes interiores, para hacer olvidar el papel de pérfido enemigo de los EE.UU. y restañar las heridas.

Pero, se cometería un error si se considerase que la Argentina volvió a fojas cero después de la derrota militar en Malvinas. El significado internacional del conflicto se prolonga en la crisis no resuelta del sistema interamericano, expresión de la crisis de las relaciones con los Estados Unidos y en la claridad con que se expresan las diferencias cualitativas de las relaciones internacionales para los países en desarrollo, entre el campo imperialista y la comunidad socialista. Se reveló la necesidad de una política exterior independiente, que sirva a la paz mundial, basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad latinoamericana y un no alineamiento activo, así como en las relaciones de respeto mutuo y beneficio recíproco con todos los países, especialmente con aquellos que no poseen fines imperialistas.

•

La guerra de las Malvinas cuestionó el régimen de la dependencia del imperialismo yanqui en toda América Latina, y ahora, los Estados Unidos tratan de acelerar una recomposición de sus deterioradas relaciones con lo que consideraban su «patio seguro», el «escudo de la seguridad del Nuevo Mundo y espada de la expansión del poder global de los Estados Unidos»⁷, como dice el propio «documento de Santa Fe». El periplo de Reagan por América Latina se inscribe en este propósito.

Pero la agravación de la crisis en los propios EE.UU. y su repercusión en los países dependientes de América Latina, agravará aún más las contradicciones existentes, mientras crecen la resistencia a su política y la conciencia antiimperialista.

Para recomponer sus relaciones con la Argentina y América Latina, los Estados Unidos no hesitaron en cambiar su voto en las Naciones Unidas y tratan de enmascarar con una supuesta ayuda económica y una política sedicentemente democratizadora sus planes destinados a perpetuar la dependencia. Los impulsan una pérdida relativa de su influencia económica, política y militar, ante un proceso en el que se desarrolla la tendencia a un papel más independiente de los países de América Latina, cuando se agudizan las contradicciones económicas, sociales y políticas y en sectores de las propias clases dominantes se muestra la disposición a reducir de algún modo el grado de sujeción a los Estados Unidos y extender sus propias posiciones para negociar con mayor autonomía. Pero el factor decisivo son las diversas formas de las luchas populares antiimperialistas. Malvinas mostró el mayor espacio existente para acciones que van desde la compensación por una situación desfavorable, hasta las que propician la ruptura con el imperialismo. Es un espectro muy amplio que enfrenta una complejidad muy grande.

La dependencia de nuestro país del imperialismo no se ha roto. El control que él ejerce sobre los países de América Latina puede medirse entre otros elementos por el incremento de la deuda externa y la exacción que implican los altos intereses; la desfavorable relación en los términos del intercambio; el déficit constante en la balanza comercial con los EE.UU. Al mismo tiempo trata de reforzar

la subordinación tecnológica y de suministros bélicos. Esta dependencia fue la base operacional en la que los EE.UU., Gran Bretaña y el MCE aplicaron las sanciones punitivas económicas, comerciales y financieras durante la guerra de las Malvinas en violación del Derecho Internacional. Su importancia como arma en la guerra económica que practica el imperialismo norteamericano, se ve más claro si se considera que, por ejemplo, la participación de la banca extranjera privada, encabezada por la de los Estados Unidos, en el total de préstamos que recibió el país aumentó entre 1979 y abril de 1982 del 20 % al 40 %, la mayor parte de los cuales fue al circuito de la especulación financiera, mientras la economía nacional, era devastada por el programa económico que se aplicaba provocando la liquidación de muchas industrias, grandes daños al aparato productivo y una mayor penetración del imperialismo.

El crecimiento y diversificación de la producción y exportación industriales en varias naciones de América Latina, aumenta su poder de negociación. Crecen en ellas importantes fuerzas económicas propias, lo que es una base objetiva para fortalecer las relaciones de los países de la región entre sí y con los No Alineados. Ello, así como la importancia del crecimiento del comercio con la URSS y otros Estados socialistas, se reveló con más fuerza a raíz del conflicto. Actualmente, más de un tercio de la producción exportable de la Argentina se orienta hacia la URSS y la comunidad socialista, lo que permite resistir con más posibilidades la presión yanqui y afirmar una política exterior de mayor independencia.

*

Malvinas dejó hondas huellas en la conciencia nacional. A seis años del golpe de Estado se marchaba a un nuevo momento caracterizado por dos elementos básicos: la crisis política en las alturas y la indignación popular en crecimiento que exigía la apertura democrática y la rectificación de la política económica⁸.

La inestabilidad en el nuevo turno militar, el estado de liberativo en las fuerzas armadas, el desacuerdo en el propio régimen militar y en los sectores del privilegio que lo

apoyan, se acentuaban, cuando la protesta y la resistencia alcanzaban un alto grado de expresión en la movilización obrera y popular del 30 de marzo, duramente reprimida, pocos días antes del desembarco argentino en las Malvinas.

La mayor parte de las causas que pudieron haber precipitado el 2 de abril la recuperación de la soberanía en las islas, eran reales. Pero detrás de esa compleja realidad —donde también se insertan los sanos sentimientos patrióticos— no puede descartarse la ansiedad por salvarse del naufragio y la derrota política. Pero, no siempre las consecuencias de las acciones humanas y sociales son las previstas. Ya Hegel hablaba de la astucia de la historia. Y un hecho surgido en esas condiciones se proyectó con luz propia, dentro y fuera del país, porque iba contra un enemigo principal, Gran Bretaña, aliado fundamental de los Estados Unidos.

Lo esencial del nuevo momento que se vislumbraba en vísperas del estallido del conflicto del Atlántico Sur era el nivel alcanzado por el proceso de acumulación de fuerzas en el campo democrático y popular. Después de Malvinas se incorporan otros elementos.

A la situación a que se arribaba por la indignación popular que crecía, se agregó el justo sentimiento patriótico, en una *nueva acumulación de fuerzas*. Ni el imperialismo, ni el Gobierno militar sospecharon que el pueblo argentino sería capaz de tomar en sus manos la defensa de la reivindicación de las Malvinas y vincular esa justa causa con la lucha por la democracia y la modificación de la política económica y por la soberanía nacional indivisible: territorial, económica, política, cultural, diplomática y militar, interna y externa. La consigna que resume este grado de madurez fue: «*Soberanía de las Malvinas, sí; pan, paz, trabajo y libertad, también*».

La reacción trata de hacer olvidar lo ocurrido, velar la necesidad de empalmar la lucha por la democracia y contra la dependencia y poner barreras al nacimiento de una nueva Argentina. Malvinas mostró como una lupa gigantesca los problemas que dimanan de la agresión imperialista, todos los enredos salieron a la luz y se pudo ver también que la división entre la guerra «convencional» y

nuclear, se presenta como un delgado tabique. Los «fabricantes de la muerte» convirtieron la zona en polígono de prueba de nuevas armas y el brazo de la OTAN se extendió hasta el Atlántico Sur. Para el pueblo argentino es más visible que el imperialismo, moviéndose en un sistema de pactos agresivos, no reconoce fronteras geográficas, así como que es posible el estallido de una guerra «no declarada» a partir de un foco de tensión y que aún la guerra convencional es cada vez más cruenta.

•

La agresión colonialista mostró el rostro de los auténticos amigos y enemigos. Decir que después de Malvinas nada es igual, no es una mera frase. El pueblo argentino jamás olvidará la solidaridad latinoamericana, el ejemplo de Cuba y Nicaragua, la decisión de pueblos y gobiernos que apoyaron la causa nacional como propia, en múltiples acciones, manifestaciones y ofrecimientos solidarios, especialmente de los miles de jóvenes que se postularon como voluntarios. Tampoco olvidará que los No Alineados, la Unión Soviética y la comunidad socialista nos apoyaron. En el país se hizo más nítida la línea separatoria entre liberación y dependencia, factoría y nación, entre quienes pretenden perpetuar la supeditación a las transnacionales y quienes propician cambios profundos en la política y en la economía. A ello tendió el sacrificio popular en todos los órdenes, no fue una respuesta emocional ni, menos aún, el apoyo a un régimen repudiado por el pueblo.

El pueblo percibió sagazmente la posibilidad de un rumbo nuevo, avanzando en el desarrollo de su conciencia antiimperialista y en la noción de su papel decisivo, el rol independiente que debe desempeñar la clase obrera. Puso en evidencia que la batalla contra el enemigo imperialista no se decide sólo en el terreno de las armas, sino también en la acción de las masas.

Apenas comenzado el conflicto, los comunistas señalamos que, si hubiéramos tenido en el país un Gobierno democrático, sustentado en la voluntad popular, hubiéramos logrado los objetivos, con métodos distintos, acudiendo a la movilización del pueblo, a los organismos internacio-

nales y a la solidaridad de los pueblos del mundo y de los gobiernos amigos.

La clase obrera constituyó la fuerza social decisiva, como soldados en el frente, productores en las fábricas y voluntarios que ofrecían lo único que tenían para dar: su trabajo y su sangre. Era quien más había sufrido la política seguida después de 1976: secuestros, crímenes, cárceles, torturas, despidos, destrucción de las organizaciones sindicales, liquidación de conquistas laborales, estado de sitio y prohibición de actividades sindicales y políticas. En esas condiciones y pese a las actitudes conciliadoras, cuando no divisionistas y aun francamente derrotistas de algunos dirigentes sindicales, constituyó comités populares, centros de defensa civil, se movilizó en todas partes. Mientras, la dirigencia sindical rechazaba la solidaridad de la Federación Sindical Mundial, representante de más de 210 millones de trabajadores, gestionaba infructuosamente el apoyo de la CIOSL (70 millones), cuya dirección defendió la posición de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. También en el movimiento obrero nada será igual. Se avanzó a nuevos niveles en la conciencia política y social de los trabajadores, especialmente de los influenciados por el peronismo, que acentúan su «giro a la izquierda», se promueven nuevos núcleos dirigentes, ligados a las masas, y se elevan los dispositivos de lucha por las reivindicaciones y por la democracia en un nuevo nivel de conciencia y movilización, que jalonan el camino recorrido en el corto lapso que separa las movilizaciones del 30 de marzo contra la política de la dictadura militar y las del 10 de abril (de 1982. —N. de la Red.), uniendo la reivindicación anticolonialista con elevado tono antiimperialista con las huelgas y demostraciones de noviembre y diciembre de 1982.

Apenas comienza el conflicto, se hizo evidente que no se podía seguir gobernando al margen de la opinión y la decisión del pueblo, menos aún contra sus intereses. Por eso propusimos dar un cauce organizado a la participación popular, constituyendo *comités de defensa de la soberanía y la democracia* para coordinar y respaldar la acción de las armas en el frente de batalla y enfrentar al enemigo imperialista en el orden interno. Había que convocar a todos los patriotas y demócratas, y establecer una salida

política de emergencia para enfrentar la agresión y encarar los graves problemas. Sin embargo, el Gobierno militar seguía enclaustrado en el autoritarismo, el pueblo y sus organizaciones no eran verazmente informados, ni consultados, ni participaban en las decisiones. Algunos dirigentes políticos, al mismo tiempo, en lugar de volcar los esfuerzos para la victoria se enfrascaban en el «silencio patriótico» o en reyertas internas, mientras abajo se desarrollaba la unidad de acción. Luego, la guerra hizo aún más imperioso sacar de un cierto empantanamiento a la Multipartidaria⁹, principal fuerza política de la civilidad. La grave situación creada imponía coordinar y movilizar las fuerzas políticas, romper el inmovilismo, coordinar con las corrientes militares dispuestas a no abdicar en la lucha contra el colonialismo y abrir cauce a la reconstrucción democrática.

El Partido Comunista se declaró dispuesto a cumplir sus responsabilidades. Nuestros militantes llevaron al pueblo la consigna: «Viva la Patria. Venceremos» que recogía un estado de ánimo de las masas, más avanzado que el de algunos sectores de la dirigencia sindical y política, y aun de jefes militares.

La clase obrera y el pueblo alumbraron importantes cambios políticos. Una de sus expresiones más notables ha sido el despliegue de una apertura hacia el restablecimiento de las instituciones constitucionales democráticas.

Se caracteriza por la iniciativa que asumen las fuerzas políticas, el mayor espacio que va ocupando el Partido Comunista, la actividad de la Multipartidaria y la movilización de masas en la calle, la huelga general del 6 de diciembre y la manifestación unitaria del 16 de diciembre de 1982. No es el fruto de la espontaneidad, ni de la derrota militar, sino el resultado de la acción popular y el esclarecimiento.

•

También en el campo militar nada es igual después de Malvinas. Las fuerzas armadas fueron puestas a prueba y salieron fracturadas. Se mostraron las dos caras: la del patriotismo y la valentía que se engendra en soldados, suboficiales y oficiales, y la del derrotismo y las vulnera-

bilidades que se engendran en un ejército preparado para la represión interior, inspirado en la «doctrina de la seguridad nacional» y del «frente interno».

Como recordaba el destacado dirigente de nuestro Partido Orestes Ghioldi en sus intervenciones, el dilema de las fuerzas armadas es ser guardia pretoriana o brazo armado del pueblo¹⁰.

La diferenciación en las fuerzas armadas se hizo más aguda con motivo de Malvinas y su expresión fue la tendencia nacionalista de sano sentido patriótico que se desplegó en todos los niveles, alcanzando en ciertos casos una definición antiimperialista. Lo demuestra el hecho que militares de todas las graduaciones devolvían diplomas y condecoraciones otorgados en los EE.UU., por considerarlos una afrenta.

Ha surgido un nacionalismo de nuevo signo, con una concepción más profunda de la soberanía. Ese sentimiento antiyanqui, anticolonialista, es la base de la posible transformación en una conciencia antiimperialista.

Ese sentimiento patriótico que en algunos lugares provoca verdadero «estado de asamblea» en las fuerzas armadas tiene mayor vigencia entre el personal militar subalterno, suboficiales y parte de la oficialidad, jóvenes que son los que más se han destacado en la lucha por las Malvinas. Son quienes advierten la necesidad de cambiar la doctrina militar pentagonista y la instrucción militar represiva, de contar con tecnología militar propia y no depender de los Estados Unidos y la OTAN.

La democratización de las fuerzas armadas se presenta como una necesidad para conquistar una democracia estable y verdadera.

En el debate suscitado, los comunistas sostenemos que es necesario empezar por precisar sus funciones en los límites de la Constitución Nacional, fortalecer su carácter de «ejército del pueblo» manteniendo el servicio militar obligatorio, sustituir la doctrina militar de sujeción a la estrategia imperialista yanqui por una concepción de la defensa nacional basada en la soberanía plena e indivisible, y por una capacitación, presupuesto y pertrechamiento al nivel de las necesidades y posibilidades reales del país, de una política independiente y de paz, que avenge cual-

quier espíritu proclive a la carrera armamentista en la región, y establecer su participación en un programa de desarrollo energético, industrial y agrario que asegure la independencia de la nación.

•

El Partido Comunista se dispone a la brega por los nuevos objetivos que el proceso socio-político plantea ante las masas. La clase obrera y el pueblo en meses avanzaron lo que hubieran recorrido en años, y los comunistas nos sentimos más rodeados de la comprensión y adhesión de amplias capas laboriosas y juveniles.

El país se encuentra en una situación nueva y el PC también. Se han abierto condiciones más favorables para cosechar los esfuerzos desplegados pacientemente en años duros y grises, para establecer los pilares de un Partido Comunista de masas pensando en su nuevo y aún más responsable rol en el futuro.

¹ Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 1947, en Río de Janeiro. —N. de la Red.

² Países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay. —N. de la Red.

³ *Comentarios*, enero de 1983, p. 31.

⁴ *Boletín exterior del PCU*, Nº 12 de 1982, p. 32.

⁵ *Anales. Política exterior argentina*, Nº 3 de 1982.

⁶ La camarilla militar entonces gobernante en Bolivia estaba comprometida en el comercio internacional de narcóticos. —N. de la Red.

⁷ *Estudios*, marzo de 1981, p. 22.

⁸ Véase más detalles sobre la posición del PCA en este período en los artículos de A. Fava: *La alternativa política que se abre paso en Argentina*, «*Revista Internacional*», Nº 5 de 1981; *Se acumulan las fuerzas para el cambio democrático*, «*Revista Internacional*», Nº 12 de 1981. —N. de la Red.

⁹ Alianza pluripartidaria surgida en 1981. La integran cinco partidos: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Intransigente y Partido Demócrata Cristiano. —N. de la Red.

¹⁰ Orestes Ghioldi. *Escritos y discursos*, t. 2, Buenos Aires, 1982, p. 99.

En el XXX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada

Consideraciones sobre el significado histórico del 26 de Julio de 1953

Raúl CASTRO RUZ

Segundo Secretario del CC del Partido Comunista de Cuba

El 26 de julio de 1983 se conmemora el XXX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, heroica gesta que representa un hito decisivo en el largo batallar de nuestro pueblo por su plena liberación llamada, necesariamente, por su proyección y significado, a constituirse en ejemplo para los países de América Latina que luchan por alcanzar, como expresó nuestro héroe nacional José Martí, su segunda y definitiva independencia.

Frente a los círculos gobernantes de Estados Unidos, que mantenían el dominio neocolonial de la Isla, y sin la participación de los tradicionales partidos burgueses nativos, y obviamente contra los deseos de la alianza de unos y otros, una pequeña y resuelta vanguardia revolucionaria se lanzó por sorpresa al asalto de la segunda fortaleza militar del país con el objetivo inmediato de, una vez ocupada, armar a las masas e iniciar la gran rebelión del pueblo cubano.

Se abrió así otra página en la historia de Cuba: la de la acción armada como forma principal de lucha frente a la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista y contra el yugo impuesto por Estados Unidos y sus monopolios explotadores a la nación cubana desde principios del presente siglo.

La acción de las armas se sustentaba en un programa de orientación progresista en el que se concretaban las más importantes aspiraciones de transformación socio-económica y política posibles en la coyuntura nacional de entonces.

Acción y programa respondían al previo análisis marxista-leninista de las condiciones objetivas y subjetivas pre-

valecientes. Estas condiciones maduraron extraordinariamente a partir del golpe de Estado proimperialista que tuvo lugar el 10 de marzo de 1952 con el fin de impedir que un partido mayoritario, de orientación reformista, llegase al poder a través de un proceso electoral, convocado en los marcos de la llamada «democracia representativa», que el propio régimen burgués dependiente de Estados Unidos no respetó.

Como ha señalado el compañero Fidel Castro, mientras el imperialismo y sus lacayos enfilaban el grueso de sus baterías contra el heroico y pequeño partido de los comunistas cubanos, una nueva vanguardia —formada esencialmente por trabajadores, cuya superior jefatura sustentaba también las ideas del marxismo-leninismo— iniciaba el ataque por un flanco que, a la postre, daría al traste con el sistema de explotación neocolonial.

A unos 140 kilómetros de las costas de la más poderosa potencia capitalista del planeta se iniciaba así un proceso destinado a cortar de raíz la secular dependencia de Washington, a lograr la plena soberanía nacional y a transformar radicalmente las estructuras socio-económicas del país.

Semejantes propósitos, trazados en el propio corazón de una región estimada como «patio trasero» del imperialismo norteamericano, área clásica de penetración e influencia de los monopolios yanquis y de la política exterior de la Casa Blanca, tendrían honda significación histórica para nuestro continente.

El revés táctico sufrido el 26 de julio de 1953, al no alcanzarse los objetivos militares previstos en la acción, no modificó los resultados históricos de aquel hecho, que se insertaron definitivamente en los anales de nuestro proceso revolucionario. Frente a los muros del Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, ciudad de larga tradición en nuestros precedentes combates independentistas, y en la acción que simultáneamente se libró contra el cuartel de la ciudad de Bayamo, se abrió una etapa de lucha armada que no se detendría hasta el total derrocamiento de la tiranía proimperialista en los albores de 1959.

De las filas juveniles del impetuoso movimiento popular revolucionario surgieron una dirección y una organización

política que postulaban la acción decidida contra el orden antidemocrático y entreguista establecido. El incipiente movimiento revolucionario levantaba el programa expresado en la autodefensa del compañero Fidel Castro en el juicio por los hechos del Moncada, «La Historia me absolverá», interpretación verdadera y consecuente del sentir de las masas y de las necesidades del país, que aglutinaría en torno a sí el más amplio frente de resistencia y combate populares.

La profunda convicción y la fe en las ideas que animaron el glorioso acontecimiento se impusieron y el Moncada se convirtió en antecedente y valiosa experiencia de dos hechos ulteriores decisivos: la expedición del «Granma» y la lucha guerrillera en las montañas, que sería la forma fundamental de la acción revolucionaria, y que contaría con el firme apoyo del movimiento clandestino que abarcaría todo el país.

Al enjuiciar el significado del 26 de Julio de 1953, el Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, expresó:

«Esto no constituye un mérito particular de los hombres que elaboraron una estrategia revolucionaria que a la larga resultó victoriosa. Ellos recibieron la valiosa experiencia de nuestras luchas en el terreno militar y político; pudieron inspirarse en las heroicas contiendas por nuestra independencia, rico caudal de tradiciones combativas y amor a la libertad en el alma del pueblo y nutrirse del pensamiento político que guió la revolución de 1895 y la doctrina revolucionaria que alienta la lucha social liberadora de los tiempos modernos, que hicieron posible concebir la acción sobre estos sólidos pilares: el pueblo, la experiencia histórica, las enseñanzas de Martí, los principios del marxismo-leninismo y una apreciación correcta de lo que en las condiciones peculiares de Cuba podía y debía hacerse en aquel momento».

Los asaltantes del Moncada no concibieron aquel acto como el único y definitivo para derrocar a una brutal y sádica tiranía, representante —tal vez en mayor grado que los también corruptos gobiernos anteriores de la República mediatizada— de la injerencia norteamericana en la vida y el destino del país, sino como el inicio de una amplia

y vigorosa actividad de masas que debía ser promovida por un hecho de alta y sentida connotación patriótica y alentada por el afán de dar continuidad a las luchas por la libertad de la Patria, aspiración frustrada desde principio de siglo por la intervención militar norteamericana.

El compañero Fidel Castro ha expresado que no comenzó ese día la contienda de nuestro pueblo por la liberación: «se reinició —afirmó— la marcha heroica emprendida en 1868 por Céspedes y proseguida más adelante por aquel excepcional hombre cuyo centenario se conmemoraba precisamente aquel año, el autor intelectual del Moncada: José Martí».

Las ideas de José Martí, de profunda incidencia en la formación política y moral de muchas generaciones de cubanos, fueron particularmente reivindicadas por los asaltantes, en cuyo quehacer revolucionario tuvo influencia cardinal el legado de quien fuera el más alto exponente del pensamiento revolucionario que guió a la independencia nacional.

La justa y necesaria fusión de las ideas revolucionarias, nacional-liberadoras, que forman parte esencial de la tradición patriótica cubana, con los anhelos de transformación social más avanzados con base en el marxismo-leninismo animaba a los organizadores de la acción del Moncada y constituye uno de los más importantes aportes históricos de la acción del 26 de Julio de 1953.

Una interpretación esclarecedora de las circunstancias políticas que enmarcaron el asalto al Cuartel Moncada y de la interrelación dialéctica de este hecho con las aspiraciones de una revolución social de carácter marxista, se ofrece en la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba cuando expresa: «...Fidel Castro, un joven revolucionario ...de nuestro país, llegó a la conclusión de que la única manera de combatir con éxito al régimen de Batista y a todo lo que él representaba, era vertebrar un movimiento independiente y ajeno a los politiqueros corrompidos y proimperialistas, y desencadenar la insurrección popular armada como la forma más alta de la lucha de masas».

«Es precisamente en su histórica defensa durante el juicio contra los asaltantes del Moncada conocida por 'La

Historia me absolverá' –factor determinante que convirtió en victoria estratégica el revés táctico del 26 de julio–, donde Fidel esboza, con criterio marxista, el programa popular y avanzado del movimiento que encabezaba. En ese programa se abordan, entre otros problemas, los acuciantes males que afectan a la república mediatizada; se hace una correcta apreciación de los factores de la lucha, se da un concepto de pueblo que ayuda a aglutinar a todas las clases y sectores interesados en la batalla contra la oligarquía nacional y el imperialismo; se exponen y fundamentan las principales e insoslayables medidas que el Gobierno revolucionario habría de acometer de inmediato al asumir el poder».

Al hacer un recuento de los hechos del Moncada –tanto del asalto en sí como del surgimiento de la plataforma política que significó «La Historia me absolverá»– resulta necesaria, sobre todo a la distancia de treinta años de aquellos acontecimientos, una breve reflexión sobre el marco nacional e internacional en que tuvieron lugar, favorables los primeros, desfavorables los segundos a las fuerzas revolucionarias.

La historia política de Cuba, en los años 50 muestra cómo la burguesía y el imperialismo cancelaron brutalmente las libertades y los derechos humanos que formalmente suelen proclamarse en las Constituciones burguesas. No es éste un rasgo específico de nuestro proceso histórico, sino una característica de los regímenes burgueses que se presenta con mayor o menor evidencia. Si en la época de las revoluciones burguesas se proclaman amplios programas que, independientemente de su carácter formal logran aglutinar a las masas en la lucha por convertirlos en realidad, en la época del imperialismo y de la crisis general del capitalismo se agudizan las contradicciones de los intereses económicos y sociales, de las oligarquías dominantes con la vieja palabrería liberal, que es abandonada, y con ella se aniquilan hasta las limitadas posibilidades de la democracia burguesa.

Cuba era uno de los países de América más sujeto a la dominación política y económica del imperialismo. Hasta bien entrado el tercer decenio de este siglo, en virtud de la Enmienda Platt, impuesta a nuestro país por Estados

Unidos en 1901, este país se arrogaba derechos jurídicos de intervención militar en Cuba, que consumaron en distintas ocasiones. Durante las cinco décadas de existencia de la República mediatizada los gobiernos burgueses ejercieron el poder de acuerdo con las orientaciones directas de la Embajada de Estados Unidos. Los norteamericanos iniciaron y propiciaron las más abominables prácticas de corrupción administrativa y de opresión de las clases populares. Su influencia se ejercía no sólo a través de los resortes de poder político y el amplio dominio de la economía, sino también en virtud al señorío absoluto sobre los medios de difusión y otras vías típicas de la administración neocolonial.

En nuestros campos predominaba el latifundio, en gran medida de propiedad norteamericana. «El 85 % de los pequeños agricultores cubanos –explicó Fidel en 'La Historia me absolverá'– está pagando renta y vive bajo perenne amenaza de desalojo de sus parcelas. Más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas, están en manos extranjeras. En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Fruit Company y la West Indian unen la costa norte con la costa sur. El latifundio azucarero devoraba gran parte de las tierras del país: en 1958 ocupaba 1.793.020 Ha de las cuales 1.173.015 eran propiedad de grandes monopolios norteamericanos».

Las inversiones norteamericanas controlaban en la década de los años 50 más del 30 % de la producción azucarera y un tercio de los servicios públicos. Según datos de fuentes oficiales norteamericanas, la pequeña Cuba llega a ocupar el segundo lugar en cuanto al monto de las inversiones norteamericanas en América Latina, superada sólo por Venezuela, siendo mayores incluso que en el Brasil, el más extenso país del continente. Sobre riquezas fundamentales del país como el níquel, el monopolio yanqui era absoluto.

¿Qué consecuencias trajo a Cuba esta situación de dependencia económica y política? En las valerosas páginas de «La Historia me absolverá», se analiza el resultado de la dominación neocolonial en Cuba, con elocuencia y veracidad irrefutables. De una población de unos 5,5 millones de habitantes, más de seiscientos mil eran desempleados. El

censo de 1953 arrojó que más de la cuarta parte de los cubanos eran analfabetos. De la población escolar de ese año, el 54,1 % carecía de escuelas. De la cifra de 600.000 desempleados, 10.000 eran maestros.

Según una encuesta realizada en 1958, el 31 % de la población rural padecía de paludismo y el 35 % de parasitismo intestinal; los índices de mortandad infantil se elevaban a más de 70 de cada mil nacidos vivos. A la incultura y a la miseria creciente hay que agregar la discriminación racial, la prostitución y la más denigrante crisis moral que puede concebirse.

En 1949, la Misión Truslow analizó la situación económica de Cuba y entre «las soluciones» recomendadas para «el desarrollo económico» sobresalía la liquidación de las conquistas obreras. Esta tarea se llevaba a cabo ya desde los últimos años de la década del 40 y significó el asesinato de dirigentes, el asalto a los sindicatos y la más brutal represión contra obreros, campesinos y demás trabajadores, empezando por los comunistas, que como el líder sindical Jesús Menéndez, cayeron entre los primeros frente a las sucesivas olas represivas.

Los gobiernos auténticos, llamados así según el nombre del partido del que procedían —corrompidos hasta el tuétano— no eran, sin embargo, garantía suficiente para el imperialismo norteamericano. En 1952 era obvio que el «autenticismo» sería derrotado por el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que si bien era un movimiento político heterogéneo, reformista y con no pocos conservadores en su seno, especialmente en su máxima dirección, incluía elementos revolucionarios y contaba con el apoyo de las masas populares, lo que constituía un peligro para el sistema neocolonial. El golpe de Estado de 1952, encabezado por Fulgencio Batista, estuvo destinado a eliminar este peligro y asentó durante siete años una tiranía sangrienta, que descargó el terror contra las masas populares y los movimientos democráticos y progresistas y elevó la corrupción administrativa a niveles aún superiores a los conocidos durante las más escandalosas administraciones anteriores.

Durante el gobierno de Batista se incrementó la dominación económica por parte del imperialismo. Las grandes transnacionales llevaban a cabo su política explotadora

holgadamente. Esto se lograba por medio de una brutal represión, del asesinato o las torturas de miles de cubanos, y el despojo absoluto de los derechos más elementales para las grandes masas de la población. El sometimiento a los dictámenes de la Casa Blanca y la Embajada Americana llegó a los niveles más abyectos. Los gobiernos yanquis beatificaban a Batista, mientras en Cuba se llevaba a cabo una sistemática política de feroz represión de las masas populares, crecía la miseria y la traición a los intereses nacionales era descarnada práctica diaria. El Partido Comunista y las organizaciones democráticas sufrían constante y violenta persecución. Los periódicos obreros y progresistas fueron clausurados. Se estableció el soborno y la censura militar como medios para corromper y silenciar la prensa. Los estudiantes, fuerza de significación política al igual que en la mayor parte de la América Latina, aprovechaban determinadas oportunidades para lanzarse a las calles y manifestar su repudio al régimen y chocar con la policía, pero sus gestos heroicos, reprimidos por la tiranía, no lograban quebrantar el aparato político, jurídico y militar en que ésta se asentaba.

El mayor de los partidos opositores de la época, el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), había quedado neutralizado por la dispersión de su dirigencia, tras la desaparición de su fundador, Eduardo Chibás, quien tuvo fuerte arraigo popular por sus campañas contra la corrupción pública y la deshonestidad administrativa.

El ala izquierda de ese partido, encabezada por Fidel Castro, fue seguida por la masa juvenil de éste, mientras los partidos burgueses tradicionales se sumaban al régimen pronorteamericano de Fulgencio Batista o iniciaban una suerte de juego a la guerra, a través del acopio de armas casi siempre condenadas a un almacenamiento sin destino.

Era necesario poner en marcha un movimiento de masas para derrocar la tiranía pero, con los obreros, campesinos y demás trabajadores maniatados por un estado policiaco al que asesoraba una misión militar norteamericana, nos interrogábamos sobre las vías realmente efectivas para llevarlo a cabo.

«¿Existían o no existían las condiciones objetivas para la

lucha revolucionaria? —analizaba Fidel en el discurso del 26 de Julio de 1973—. A nuestro juicio existían. ¿Existían o no existían las condiciones subjetivas? Sobre la base del profundo repudio general que provocó el golpe del 10 de marzo y el regreso de Batista al poder, el descontento social del régimen de explotación reinante, la pobreza y el desamparo de las masas desposeídas, se podían crear las condiciones subjetivas para llevar al pueblo a la revolución».

«La historia después nos ha dado la razón. ¿Pero qué nos hizo ver con claridad aquel camino por donde nuestra Patria ascendería a una fase superior de su vida política y nuestro pueblo, el último en sacudir el yugo colonial, sería ahora el primero en romper las cadenas imperialistas e iniciar el período de la segunda independencia en América Latina?»

«Ningún grupo de hombres habría podido por sí mismo encontrar solución teórica y práctica a este problema. La Revolución Cubana no es un fenómeno providencial, un milagro político y social divorciado de las realidades de la sociedad moderna y de las ideas que se debaten en el universo político. La Revolución Cubana es el resultado de la acción consciente y consecuente ajustada a las leyes de la historia de la sociedad humana. Los hombres no hacen ni pueden hacer la historia a su capricho. Tales parecerían los acontecimientos de Cuba si prescindimos de la interpretación científica. Pero el curso revolucionario de las sociedades humanas tampoco es independiente de la acción del hombre; se estanca, se atrasa o avanza en la medida en que las clases revolucionarias y sus dirigentes se ajustan a las leyes que rigen sus destinos. Marx, al descubrir las leyes científicas de ese desarrollo, elevó el factor consciente de los revolucionarios a un primer plano en los acontecimientos históricos».

Por los tiempos anteriores al asalto, Fidel Castro decía que hacía falta echar a andar un motor pequeño que ayudara a arrancar el motor grande de las masas.

Ese motor pequeño debió ser la acción del Moncada, concebida desde sus inicios como la chispa que pusiese en movimiento al pueblo e iniciara la guerra popular contra sus opresores, línea que continuaría tres años después

la expedición del «Granma» y la formación del primer núcleo guerrillero de la Sierra Maestra.

Sin embargo, si bien las condiciones internas favorecían los objetivos de los asaltantes del Moncada como demostraría el curso de la guerra revolucionaria, las circunstancias externas resultaban desfavorables. Eran los tiempos de la llamada «guerra fría» y de las feroces campañas anticomunistas preconizadas por el Gobierno de Estados Unidos; la época de la agresión imperialista contra Corea, del crecimiento del poderío del FBI, el surgimiento de la CIA.

Baste apuntar que, sólo entre 1952 y 1955, siete gobiernos latinoamericanos fueron derrocados como parte de la estrategia imperialista para consolidar sus posiciones ideológicas y económicas en América Latina. Precisamente, en esa línea, se produjo en Cuba el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. La orientación de la política norteamericana en aquella etapa se refleja, entre otros ejemplos, en el contenido y desarrollo de las reuniones y conferencias de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en los varios congresos anticomunistas que auspició Washington.

En diciembre de 1950, el Gobierno estadounidense pidió la convocatoria de la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, invocando el artículo 40 de la Carta de la OEA y alegando lo siguiente:

«La política de agresión del comunismo internacional, llevada a cabo por medio de sus satélites, ha traído consigo una situación que pone en peligro a todas las naciones libres...»

Cuatro años más tarde, la X Conferencia de la OEA, celebrada en Caracas, aprobó —en medio de una verdadera avalancha de acuerdos, resoluciones y promesas de abierto carácter demagógico— una declaración anticomunista que expresaba: «...el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que pondría en peligro la paz de América...»

Al referirse al marco internacional en el que se desarrollaron los hechos del Moncada, Fidel Castro ha dicho: «Yo pienso que si hubiéramos liquidado a Batista en 1953, el imperialismo nos habría aplastado; porque entre 1953 y 1959 se produjo en el mundo un cambio en la correlación de fuerzas muy importante».

El Primer Secretario de nuestro Partido también añadió al respecto: «...el Estado soviético era todavía relativamente débil en esa época. Y hay que ver que a nosotros nos ayudó decisivamente el Estado soviético, que en 1953 no lo habría podido hacer».

Estas circunstancias nacionales e internacionales, que no eran desconocidas para los organizadores del asalto al Cuartel Moncada —y que en determinada medida condicionaban también su acción y las posibilidades de dar a conocer en toda su extensión el alcance político del proceso iniciado el 26 de Julio de 1953— fueron juzgadas oportunamente por el Primer Congreso del PCC, al afirmar que en la lucha revolucionaria que finalmente llevó al triunfo popular del 1º de enero de 1959 «se hicieron y se proclamaron en cada etapa los objetivos que estaban a la orden del día y para los cuales el movimiento revolucionario y el pueblo habían adquirido la suficiente madurez».

A los cinco años, cinco meses y cinco días de la acción del Moncada se logró el derrocamiento de la tiranía tras un accidentado camino en el que fueron de capital utilidad las experiencias obtenidas de la primera acción revolucionaria. Aquella acción no significó el triunfo de la revolución en ese instante, pero señaló la vía y proporcionó el programa de liberación nacional que abriría las puertas del socialismo a nuestra Patria.

En esta importante experiencia, como ha expresado el compañero Fidel Castro, los objetivos de los revolucionarios y su estrategia fueron siempre los mismos aplicados el 26 de Julio de 1953.

Desde el punto de vista militar, el plan del asalto a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo consistía en ocupar las armas de ambas guarniciones y convocar a la huelga general de todo el pueblo. De no llegarse a paralizar el país, se iniciaría la guerra de guerrillas en las montañas. O sea, el plan tenía dos variantes. Una, tratar de

provocar el levantamiento de la provincia " y a su vez la más lejana de la capital, para el derrocamiento de Batista. El ataque a Bayamo en el centro de la provincia y el previsto dominio de los puentes sobre el río Cauto, el mayor del país, eran precisamente para impedir la llegada de refuerzos, o por lo menos obstaculizarla. Si esta variante fracasaba, la idea entonces era alzarnos en las montañas con las armas tomadas en los cuarteles.

Esto fue exactamente lo que hicimos tres años después. La estrategia del Moncada nos condujo entonces a la victoria, con la diferencia de que en la segunda ocasión comenzamos por las montañas.

El Moncada, además, forjó de hecho la nueva dirección revolucionaria que oponía la acción al quietismo y el reformismo imperantes hasta entonces en la vida política del país, y destacó en especial la figura del compañero Fidel Castro como el dirigente y organizador de la lucha armada y la acción política radical. Cuando los dirigentes revolucionarios salimos de prisión en 1955 ya existía una estrategia de lucha elaborada, como ha señalado el compañero Fidel Castro en sus análisis de la acción del Moncada.

Sabíamos que debíamos demostrar que no existía una solución pacífica del problema nacional con Batista en el poder, y se logró confirmar ante el pueblo la justicia de esta tesis, a la que se unió siempre el convencimiento martiano de no recurrir a la guerra sino como última opción, cuando otras posibilidades hubiesen sido agotadas.

Uno de los rasgos significativos de nuestro proceso revolucionario —más de una vez comentado en el exterior— es el referido a la participación que tuvieron en él las distintas clases sociales. Las filas de los asaltantes del Cuartel Moncada se nutrieron esencialmente de hombres procedentes de los sectores más humildes y explotados de la sociedad quienes, a su vez, con sacrificios enormes aportaron los fondos que necesitamos para adquirir las armas que fueron utilizadas en el ataque.

Cuando en «La Historia me absolverá» se definió en 1953 lo que para nosotros era el pueblo, allí se habló de los obreros, agrícolas e industriales, los campesinos, los profesionales, los pequeños comerciantes. Y en una parte de ese documento, nuestro programa, se decía:

«¡Ese es el pueblo, el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo coraje! A ese pueblo cuyos caminos de angustia están empedrados de engaños y falsas promesas, no le íbamos a decir: «Te vamos a dar, sino: ¡Aquí tienes, lucha con todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la felicidad!»

Unos años después, cuando el movimiento guerrillero se convirtió en el Ejército Rebelde, el grueso de nuestras filas estaba integrado por obreros del campo y la ciudad, y su máxima jefatura, muy especialmente el compañero Fidel Castro, continuó aplicando un consecuente análisis marxista-leninista del proceso.

Como es sabido, cuando el primero de enero de 1959 la Embajada norteamericana y la alta jerarquía militar trataron de escamotear el triunfo revolucionario, el compañero Fidel Castro, desde la provincia de Oriente, llamó a la huelga nacional, y la clase obrera cubana propinó el golpe definitivo al aparato gubernamental instaurado hasta ese momento.

Resultó así una verdad incuestionable que, si bien las clases más explotadas desempeñaron el papel fundamental de nuestro proceso insurreccional, su unidad social y política se forjó en la lucha común contra el enemigo fundamental.

Y ese factor unitario entre los revolucionarios, vital en la lucha por alcanzar el poder, sería preservado y defendido por el compañero Fidel Castro y nuestra dirección política como uno de los elementos decisivos en los que nos apoyaríamos para enfrentar la enorme tarea que teníamos por delante.

Naturalmente, los enemigos siempre trataron de sembrar la división, primero entre las fuerzas que se oponían a la tiranía y más tarde en el campo de los que defendían la revolución y propiciaban sus avances, principalmente apoyados en los prejuicios anticomunistas inyectados por la permanente propaganda imperialista.

Pero esos esfuerzos se estrellaron una y otra vez frente a la dirección política que inició y culminó la guerra contra la tiranía, rodeada por el más firme respaldo del pueblo y guiada por un claro e inmovible espíritu unitario y ajena a cualquier tipo de sectarismo.

Esta experiencia, sin dudas, constituye una de las más importantes del proceso revolucionario cubano: lograr, mantener y fortalecer la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo.

Nuestro pasado glorioso, en el que se incluye la cristalización de la nacionalidad en medio de la primera guerra independentista, abonó conceptual y prácticamente la acción del 26 de Julio de 1953.

Cuando Fidel Castro dijo ante sus jueces que el autor intelectual del Moncada era José Martí, expresó una gran verdad, pues siempre nuestra generación recibió una gran influencia de quien fue la figura más descollante y universal de nuestras luchas anticolonialistas e independentistas del siglo XIX.

Como muy bien ha resumido el compañero Fidel Castro, «José Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en la lucha por la liberación nacional. Marx, Engels y Lenin significaban el pensamiento revolucionario en la lucha por la revolución social. En nuestra Patria, liberación nacional y revolución social se unieron como las banderas de lucha de nuestra generación».

Siempre esa combinación de las dos influencias: la del movimiento progresista cubano que arrancó a mediados del siglo pasado y la del pensamiento marxista-leninista, estuvo presente en nosotros.

Treinta años después del ataque al Cuartel Moncada, estos rasgos esenciales de su significado histórico, el marco nacional e internacional en que tuvo lugar, la experiencia que aportó para la lucha de liberación nacional y la participación clasista en aquel hecho, así como la fusión de las tradiciones patrióticas cubanas y la teoría marxista-leninista, nos permiten apreciar en su real dimensión lo que representó la acción del 26 de Julio de 1953 en la trayectoria de la Revolución Cubana.

Tras el Moncada y la prisión vendría el «Granma», donde se demostró el aprovechamiento de las experiencias ya acumuladas por el núcleo dirigente de la Revolución. El Moncada se prolongó en esta acción y en la lucha de la Sierra Maestra y se materializó en el triunfo de enero de 1959 y en las primeras leyes de amplia base y respaldo popular, como las reformas agraria y urbana, la conversión de cuar-

teles en escuelas, la nacionalización de los monopolios norteamericanos que expoliaban los recursos de Cuba, y que permitió por vez primera en nuestra historia el dominio del pueblo cubano sobre su destino, tanto político como económico.

El Moncada, cumplido su programa con estas medidas iniciales, se proyectó también en la victoria de Playa Girón, en abril de 1961, y la proclamación del carácter socialista de nuestra Revolución, que desde aquel 26 de Julio de 1953 se avizorara como la única evolución consecuente posible de nuestro proceso revolucionario.

Por ello, al evocar aquel hecho con la perspectiva que nos proporcionan las tres décadas transcurridas desde que un decidido grupo de jóvenes intentasen el asalto de la segunda fortaleza de la nación, no podemos menos que compararlo a la heroica gesta que protagonizada por todo nuestro pueblo se desarrolla hoy por la construcción de una nueva sociedad, frente al más poderoso de los enemigos, con la convicción plena de la segura victoria final.

A treinta años del acontecimiento del Moncada, que muchos vieron como un imposible «asalto al cielo», y pocos meses antes de cumplirse el primer cuarto de siglo del triunfo de la revolución, ambas conmemoraciones invitan a los cubanos a las más profundas reflexiones sobre el ayer, el presente y, sobre todo, el futuro de nuestra lucha. Hace algo más de esas tres décadas que comencé como soldado en este combate, aprovechando entonces para los primeros entrenamientos la posibilidad que la autonomía universitaria brindaba a los locales de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Eran tiempos en que el movimiento revolucionario, muy heterogéneo, carecía de un Partido dirigente maduro como el de hoy, donde se fundieran todos los luchadores de diversas tendencias, en que reinaba una gran confusión ideológica, y en los que se necesitaba una mano que, como condujo Martí, llevara «el remo de proa bajo el temporal»¹. Ese papel de guía, forjador de la unidad revolucionaria y genial visión política a lo largo de los difíciles combates librados y vencidos por el pueblo de Cuba ha sido y es —ahora al frente del Partido Comunista de Cuba— el del compañero Fidel Castro Ruz.

¹ Frase del «Diario de Campaña» de José Martí, quien fue el timonel del pequeño bote en el cual desembarcó en Cuba en compañía del general Máximo Gómez y otros cuatro expedicionarios, para iniciar la guerra liberadora de 1895. —N. de la Red.

La solidaridad concede fuerzas

Rodrigo ROJAS

miembro suplente de la Comisión Política del CC
del Partido Comunista de Chile

En nuestros días, cuando el imperialismo norteamericano ha tomado el rumbo abierto hacia la confrontación con el mundo socialista, tratando de detener por la fuerza (sin excluir la posibilidad de desencadenar la guerra nuclear) el desarrollo del proceso revolucionario, adquieren mayor actualidad las tesis capitales marxistas sobre el enfoque clasista, internacionalista, de los problemas nacionales. No ha envejecido en lo más mínimo la concepción leninista de que «existe una clase y sólo una de internacionalismo verdadero, y es trabajar abnegadamente para desarrollar el movimiento revolucionario y la lucha revolucionaria en el propio país, y apoyar (con propaganda, solidaridad y ayuda material) esta lucha, esta y sólo esta línea, en todos los países sin excepción»¹.

En estos años, el pueblo chileno ha podido apreciar por experiencia propia el papel y el significado de la solidaridad internacional, tanto en los mil días memorables de Gobierno de la Unidad Popular, que encabezara Salvador Allende, como en los duros diez años de tiranía fascista. El compañero Luis Corvalán, Secretario General del PCCh, precisaba que nuestro pueblo «no ha estado solo en su difícil lucha. La humanidad progresista lo ha acompañado... Durante los peores días, cuando no tenía fuerzas suficientes para detener los crímenes fascistas, fue la solidaridad internacional la que salvó muchas vidas.»²

Corvalán agregaba a esto que se ha pretendido y se pretende presentar al Partido Comunista como «una fuerza antipatriótica, antidemocrática, foránea, dependiente, con una ideología exótica. Pero los porfiados hechos se encargan de establecer la verdad.

En nuestra época, el patriotismo se prueba o se desmiente ante todo según sea la actitud que se asuma ante el imperialismo...

El patriotismo está también en el combate por los derechos y el bienestar del pueblo, por el progreso del país en todos los órdenes, por la defensa de los valores nacionales, por el esfuerzo dirigido a desarrollar el arte y la cultura... El patriotismo verdadero y consecuente exige el apoyo recíproco entre todos los pueblos que luchan por los mismos objetivos y contra los mismos enemigos. Bernardo O'Higgins³ fue, al mismo tiempo que el Padre de la Patria, un luchador por la independencia de todos los países latinoamericanos. Nos guiamos por su ejemplo. Benjamín Vicuña Mackenna⁴ fue un adalid de la independencia de Cuba y varios chilenos, jóvenes militares, como el comandante Sotomayor, el capitán Marcoleta y el teniente Gabler, luchadores en las filas cubanas contra el coloniaje hispano. Somos fieles a estas gloriosas tradiciones.

Nos orientamos por la sabia y sencilla palabra de Luis Emilio Recabarren⁵: «Yo no quiero que nadie odie a mi patria y por eso amo la patria de todos»⁶.

Hay, pues, una relación muy estrecha entre el patriotismo acendrado y el internacionalismo consecuente, que en su tiempo expresó Salvador Allende del siguiente modo: «Este Chile que empieza a renovarse, este Chile en primavera y en fiesta, siente, como una de sus aspiraciones más honradas, el deseo de que cada hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano»⁷.

Con la formación del Gobierno de la Unidad Popular en Chile surgieron premisas para la creación de un Estado de los trabajadores, para la elevación del bienestar de la población. Se basaban en los esfuerzos laborales de los propios chilenos, se apoyaban en la posibilidad real de terminar con la dependencia económica y tecnológica del imperialismo, en la ayuda y el apoyo de las fuerzas progresistas. Por eso precisamente el imperialismo condenó a muerte al «experimento chileno». Quince días antes del golpe de Estado fascista, el 27 de agosto de 1973, el general Carlos Prats, más tarde víctima de los asesinos de Pinochet, escri-

bió en su diario: «Creo que hemos subvalorado la gravedad y los alcances de la conspiración manejada desde los Estados Unidos contra Chile. No le tomábamos todo el peso, aunque sabíamos de la reunión privada de Kissinger en Chicago dos semanas después que la Unidad Popular ganó la elección en Chile. Kissinger, sin ambages, dijo que si Allende era ratificado en el puesto de Presidente, en Chile se formaría un gobierno comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir ese ejemplo. Claramente señaló que los Estados Unidos no aceptarían esa posibilidad»⁸.

Como señalara Orlando Millas, uno de los dirigentes del PCCh, una revolución popular cuenta en nuestra época con poderosos aliados, así como con peligrosos y agresivos enemigos. El caso de Chile lo subraya dramáticamente. El comando de la conspiración fascista contra el Gobierno de la Unidad Popular lo ejercieron sin tapujos las empresas supranacionales afectadas por las nacionalizaciones, con la participación directa de la CIA y el Pentágono. La reacción interna fue galvanizada por el imperialismo norteamericano, que trazó el plan de «desestabilización» del Gobierno popular, demolición de la democracia e instauración del régimen fascista, que es la dictadura terrorista abierta de los círculos más agresivos.

Al mismo tiempo, los aliados fundamentales de la revolución popular fueron la Unión Soviética y otros países socialistas, el movimiento obrero, las fuerzas antiimperialistas de los Estados capitalistas desarrollados y el movimiento de liberación nacional.

Fieles a los principios del internacionalismo proletario, la URSS y otros países socialistas prestaron al pueblo chileno una ayuda decisiva para la realización de transformaciones en diferentes sectores, fundamentalmente en la economía. Esta ayuda fue tangiblemente sentida y apreciada por nuestro pueblo. Los chilenos vieron cómo la flota pesquera soviética les ayudaba a solucionar el problema de suministrar productos alimenticios a la población; y los ingenieros y técnicos soviéticos, a dominar los procesos tecnológicos en la industria del cobre. Gracias al concurso de la URSS, en Chile se comenzó la construcción en serie de casas económicas. Con la asesoría de especialistas búlgaros surgían agroindustrias en el seno de las tierras recupe-

radas por la Reforma Agraria. La industria gráfica al servicio del pueblo se ponía pantalones largos con el invaluable aporte técnico y de todo orden de la RDA. Cuba entregó su aporte fraternal y cálida solidaridad, contribuyendo al desarrollo de la economía, concediendo a Chile apoyo multilateral. Muchos chilenos, trabajando codo a codo con especialistas de países socialistas, recibían preparación profesional, elevaban su calificación. Además, el Gobierno de Salvador Allende estableció relaciones cordiales con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, desarrolló los vínculos con los participantes en el Pacto Andino⁹, concertó acuerdos altamente positivos con distintos Estados de Europa Occidental y estableció relaciones con países de Asia y Africa. En la situación internacional de aquellos años, cuando había crecido la influencia de las fuerzas de la paz y se abría paso la distensión, se crearon condiciones más favorables para una revolución popular.

•

El proceso revolucionario chileno habría sido impensable en un mundo en el que no fueran tan poderosas las fuerzas de la paz y de la distensión. Está claro que la revolución hubiera sido imposible si ella hiciera concesiones al antisovietismo y se aislara del torrente general del desarrollo progresista de la humanidad. Por otro lado, el movimiento de solidaridad internacional —sin precedentes por su envergadura— con el pueblo chileno, víctima del golpe de Estado fascista, habría sido inconcebible en una etapa de la vida de la humanidad en que fuera el imperialismo quien determinara su destino sin contrapeso.

Desde el primer día del putch pinochetista, en el mundo se levantó una gigantesca ola de protesta. Carlos Prats escribió el 22 de octubre de 1973: «Hay una oleada mundial de repulsa a la Junta y de simpatía hacia sus víctimas. En todo el mundo surgen movimientos de solidaridad con Chile, se celebran desfiles y manifestaciones»¹⁰.

La solidaridad internacional —destacaba Luis Corvalán— siempre fue una tradición entre los comunistas. Y no sólo entre los comunistas. Los hombres honrados de todo el mundo tienen un profundo respeto por el sentimiento de la solidaridad humana¹¹.

La opinión pública mundial conoce bien los bárbaros crímenes cometidos en estos diez años por Pinochet y su camarilla; por eso es tan amplio el apoyo internacional al pueblo chileno que abarcó a todos los continentes. Geográficamente es universal y casi universal en el sentido político y social.

La cuestión de la solidaridad no es de ningún modo una cuestión retórica. Es una labor concreta, una lucha incansable, un apoyo activo que ha de estar arropado con hechos. La Unión Soviética y otros Estados socialistas mostraron con hechos su actitud hacia la tragedia chilena, suspendieron sus relaciones diplomáticas con el régimen de Santiago. Guiándose por los principios de su política tradicional, hizo lo propio también el Gobierno de México. En el mismo mes de septiembre de 1973, en Helsinki, capital de Finlandia, inició sus labores la Conferencia Internacional de Solidaridad con la Lucha del Pueblo de Chile.

Pero no sólo gobiernos, partidos políticos y organizaciones sindicales levantaron su voz en apoyo del pueblo chileno. La tiranía de Pinochet fue condenada por las iglesias católica, ortodoxa y protestante, por el clero musulmán y judío. Los creyentes se unían en su acción concreta para denunciar los crímenes de la dictadura y apoyar activamente a la lucha de nuestro pueblo contra el fascismo. Por la libertad de los chilenos actúan conjuntamente numerosas organizaciones religiosas.

Este movimiento de solidaridad no está de ningún modo dirigido contra Chile, como trata de presentarlo Pinochet, sino que en favor de Chile; defiende y apoya los intereses nacionales del pueblo chileno.

•

Vivimos una época histórica marcada por el Gran Octubre, la época del ocaso de la sociedad capitalista y la transición al socialismo y el comunismo. Este proceso no es tan simple como nos parecía a muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, cuando sólo comenzábamos la lucha revolucionaria. La historia registra muchas más insurrecciones y revoluciones derrotadas que victorias populares, pero precisamente los éxitos alcanzados por las fuerzas progresistas determinan la dirección de desarrollo de la humanidad.

Los reaccionarios cantaron victoria muchas más veces, pero el desarrollo general marchaba por el camino trazado por los revolucionarios, por las acciones de las fuerzas progresistas. Tal es la dialéctica del proceso histórico.

Efectivamente, el sistema socialista mundial no tiene ni medio siglo, pero en este tiempo la agonía se apoderó del mundo colonial, se consolidó considerablemente el movimiento obrero internacional y el socialismo dio pasos gigantescos en el camino del desarrollo de la nueva sociedad sin explotados ni explotadores.

La derrota temporal y el golpe fascista que detuvo momentáneamente el avance de Chile hacia el socialismo, fueron la consecuencia de la contraofensiva general emprendida por los imperialistas en América Latina a comienzos de los años 70. Esta contraofensiva se inició para intentar detener los nuevos procesos que predominan hoy en nuestra vida: la lucha antiimperialista de los pueblos que bulle en todo el continente, el creciente movimiento de liberación nacional. Aunque éste puede sufrir derrotas temporales, en su conjunto marcha adelante y no serán los gorilas al servicio de los monopolios, ni los Pinochet de distinto pelaje, ni los agentes de la CIA quienes pueden detenerlo. Más tarde o más temprano, su lugar será el basural de la historia, mientras que la revolución seguirá su marcha, construyendo el futuro que pertenece a los pueblos, el futuro de la liberación nacional y social.

1983 fue un año crucial en la lucha del pueblo chileno. Las Jornadas Nacionales de Protesta, que siguen una a otra, son una prueba convincente de que el movimiento contra la dictadura ha entrado en una fase cualitativamente nueva. En el país se desarrollaron acciones que tienen un carácter abiertamente político. A la tiranía no se había opuesto nunca un frente social tan amplio como el actual. La oposición al régimen abarca hoy a casi todos los chilenos, incluida una parte considerable de los círculos de derecha. La lucha de nuestro pueblo contra el fascismo está encabezada por el proletariado, agrupado en el Comando Nacional de Trabajadores (CNT). Por las dimensiones de su representación, este órgano no tiene otro igual en la historia del movimiento obrero chileno. Prácticamente cohesionó a todos los obreros y empleados organizados. La

«plataforma de lucha», aprobada por el CNT, exige la restitución de la democracia, la realización de elecciones parlamentarias, la derogación del estado de emergencia y de la censura, el acceso de la oposición a los medios de comunicación de masas, la adopción de medidas urgentes para reducir el desempleo, el mejoramiento de la situación de los trabajadores, etc.

Pinochet volvió a lanzar contra el pueblo a la policía y al ejército. Perecieron decenas de patriotas, centenares fueron heridos y miles, detenidos. Pero ni el terror ni las persecuciones judiciales pueden detener al movimiento popular. Todos los chilenos exigen la dimisión de Pinochet y el retorno del país a las formas democráticas de gestión. No se necesitarían muchas palabras para demostrar lo importante que es para nuestro pueblo, en estas condiciones, la solidaridad internacional, la cual nos concede nuevas fuerzas y la seguridad en la futura victoria.

•

Hasta hace poco más de dos décadas, América Latina era una región ocupada y saqueada, en realidad, por Estados Unidos. Sus monopolios, que hacían inversiones muy modestas, extraían impunemente del continente enormes riquezas, y para acallar las protestas, ponían en juego el «gran garrote». Esta situación condujo a una exacerbación sin precedentes del sentimiento antiimperialista en el continente, que tomó formas orgánicas en el movimiento de liberación nacional hoy pujante en todos los países al sur del Río Bravo.

Cuba, al romper la cadena con la gloriosa revolución triunfante que ya tiene un cuarto de siglo, asestó el primer golpe mortal a la prepotencia del imperialismo yanqui y al sistema rapaz de explotación y expoliación de los países de nuestro continente.

Las contradicciones entre América Latina y el imperialismo yanqui se expresaron con mucha fuerza también durante la agresión británica —con apoyo norteamericano— contra la Argentina. La casi totalidad de los gobiernos y el conjunto de los pueblos del continente condenaron la guerra, destinada a perpetuar el status colonial de las Malvinas. Como resultado del conflicto, empeoraron considerablemente las

relaciones entre la Casa Blanca y los países situados al sur del Río Bravo. El respaldo norteamericano a su socio británico afectó por la base al TIAR¹², manifestó la crisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) e hizo crecer la conciencia antiimperialista en la región. Y a nadie puede extrañar el hecho de que el más entusiasta traidor a la causa latinoamericana en la crisis de las Malvinas resultara ser Pinochet. El dictador fascista de Chile actúa como un peón incondicional en el tablero de ajedrez de Washington.

Sin embargo, no son los Pinochet los que determinan ahora el desarrollo de los acontecimientos en América del Sur. El cuadro de la región ha variado significativamente en los últimos años gracias a la lucha de nuestros pueblos y a la creciente solidaridad internacional.

Pero parece que la vida no ha enseñado nada a los estrategias de Washington. Hoy, como señalara Luis Corvalán, «en América Latina, la política agresiva de la nueva Administración norteamericana se expresa a través del apoyo abierto a los regímenes despóticos y terroristas, como la sanguinaria Junta salvadoreña y la brutal tiranía de Pinochet. Se manifiesta también en el adiestramiento de mercenarios somocistas, en una desembozada intervención en Centroamérica»¹³.

En la región se incrementa la resistencia al curso del imperialismo norteamericano y se ahondan los procesos conducentes a que nuevos pueblos conquisten la independencia. Una diáfana muestra de ello son los acontecimientos en El Salvador, donde ni siquiera la intervención de los EE.UU. ha sido capaz de contener la lucha de los patriotas.

Los regímenes fascistas y autoritarios pierden terreno. Los cambios alcanzan a las mismas fronteras de Chile. En Bolivia, la lucha de su pueblo impuso la vuelta a la democracia. El Presidente Hernán Siles Zuazo ha anunciado la aplicación de un programa de gobierno a partir de los intereses de la gran mayoría de los bolivianos. En Argentina cobra fuerza el movimiento popular. Allí se han legalizado los partidos políticos, incluyendo el de los comunistas. Todo esto ejerce necesariamente una influencia positiva en Chile, conduce a que la lucha de nuestro pueblo se dé en

mejores condiciones y deja a Pinochet cada vez más aislado.

«Los pueblos latinoamericanos —señaló Luis Corvalán— son pueblos hermanos. Un ataque contra cualquiera de ellos sería un ataque contra todos. Y que no le quepa duda al imperialismo: ante un paso tal, donde ponga el pie y en todo el continente, encontrará resistencia y jamás se aceptará el vasallaje. Cuba y Nicaragua ya son territorios libres de América. Llegado el caso, no sólo serán defendidos por cubanos y nicaragüenses»¹⁴.

La solidaridad recíproca de los pueblos del continente es hoy más importante que nunca. Debemos desplegar esa solidaridad en formas concretas, militantes, coordinando al máximo las acciones con los compañeros de lucha para lograr los mejores resultados finales.

•

La solidaridad internacional con Chile no es un fenómeno casual. No es la mano que se tiende ante el grito desgarrador de la víctima herida. Es la aspiración de lo mejor de la humanidad a apoyar a un pueblo que, temporalmente derrotado, intentó transitar un camino que despertó simpatías y esperanzas en todo el mundo. Y es, al mismo tiempo, la respuesta condenatoria al fascismo. Las ideas inspiradoras de la solidaridad atravesaban y atraviesan los muros de las cárceles pinochetistas, infunden ánimo, coraje, firmeza y esperanza a las víctimas del fascismo.

«La voz nos vino una noche desde las estrellas —recuerda Rolando Carrasco, un prisionero de guerra liberado del campo de concentración de Chacabuco por la solidaridad internacional—. Una noche apareció un receptor en nuestra habitación, y tres personas girábamos el dial buscando el mundo. Y lo captamos entre ruidos de estática y conmoción de nervios... Escucha, Chile... Se dirigían a nosotros. Nos enteramos de la enorme envergadura que tenía el movimiento de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo. Los crímenes de la Junta horrorizaron a todo el mundo... Desde fuera de las alambradas, desde fuera de las fronteras, Moscú se dirigía a nosotros, hombres y mujeres detenidos por defender el honor, la justicia y la grandeza de nuestra patria... Eran las mismas voces, llegadas del corazón de

Rusia, que durante la II Guerra Mundial entregaban el aliento a los hombres de todo el mundo de que la URSS derrotaría al fascismo, aunque los tanques nazis cañoneaban los accesos de su capital. En nosotros crecía el convencimiento de que era necesario vivir y luchar para derrotar al fascismo, lo mismo que lo hicieron en su tiempo los soviéticos. Y edificar el nuevo Chile como los soviéticos restablecieron todo lo destruido e hicieron más bella su patria... Por las caras de mis compañeros corren lágrimas. No puedo decirles nada. Yo también lloro»¹⁵.

Y así ocurría también en muchas cárceles. Centenares de testimonios de prisioneros del fascismo así lo demuestran.

Los chilenos antifascistas conocemos por propia experiencia la fuerza gigantesca de la solidaridad internacional. Ella detuvo miles de veces las manos de los verdugos; ella abrió las puertas de las cárceles y de los campos de concentración a los patriotas; ella ha aislado a los «carniceros» de Santiago de la humanidad civilizada; ha contribuido a que se condenara a Pinochet y a su camarilla de asesinos en las Naciones Unidas. La solidaridad internacional continúa infundiendo aliento y fe en la victoria a los combatientes de la resistencia; ella permanece y siempre permanecerá como un factor importantísimo que trabaja en favor de nuestro pueblo y de su inevitable victoria.

¹ V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXIV, p. 492.

² Luis Corvalán. *Nuestro proyecto democrático. Partido Comunista de Chile*. «Boletín del Exterior», 1979, No 37, p. 38.

³ Héroe nacional de Chile, uno de los dirigentes en la Guerra de la Independencia de las colonias españolas en las Américas. —N. de la Red.

⁴ Historiador y político chileno del siglo XIX. —N. de la Red.

⁵ Fundador del Partido Comunista de Chile. —N. de la Red.

⁶ Luis Corvalán. Obra citada, pp. 37–38.

⁷ Salvador Allende. 1908–1973. *Prócer de la liberación nacional*. México, 1980, p. 128.

⁸ Carlos Prats. *Una vida por la legalidad*. México, 1976, pp. 86–87.

⁹ Agrupación económica subregional, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. —N. de la Red.

¹⁰ Carlos Prats. Obra citada, p. 99.

¹¹ *Visão*, 21 de febrero de 1974.

¹² Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947. —*N. de la Red*.

¹³ Luis Corvalán. *Tres períodos en nuestra línea revolucionaria*. Dresde, 1982, p. 275.

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ Rolando Carrasco. *Prigué*. Moscú, 1977, pp. 153—156.

Nicaragua sandinista frente a las amenazas de agresión

Jaime BARRIOS

miembro de la Comisión Política del CC
del Partido Comunista de El Salvador

Otto SANCHEZ

miembro de la Comisión Política del CC
del Partido Guatemalteco del Trabajo

Jerónimo CARRERA

miembro del CC del Partido Comunista de Venezuela

Sobre la Nicaragua sandinista se cierne el peligro de una intervención militar extranjera. En Washington ni siquiera tratan de ocultar su hostilidad hacia la renaciente república, incluso los propósitos de hacer derrocar a cualquier precio el joven poder popular. ¿A qué se debe esta abierta agresividad respecto a un pequeño país centroamericano? Para comprenderlo es necesario dirigirse primero a la reciente historia de Nicaragua.

•

Los jerarcas de la política exterior estadounidense no atinaban en sus esfuerzos por encontrar una fórmula salvadora que les permitiera controlar los efectos de la caída estrepitosa del régimen de Anastasio Somoza. Era éste el último representante de una dinastía de tiranos que por 45 años había administrado como hacienda propia el país ya convertido en una semicolonía de los imperialistas yanquis desde comienzos de siglo. Nada de extraordinario, en principio, puesto que episodios de esta naturaleza habían sido manejados en el pasado como asuntos rutinarios. Pero esta vez hubo algo que no cuadraba con los procedimientos usuales en ese tipo de situaciones, y fue la negativa de los sandinistas, similar a la de los revolucionarios cubanos en 1959, a aceptar la continuidad que se les proponía en cuanto a la existencia de las fuerzas armadas de la dictadura, o sea la criminal «guardia nacional» de la familia Somoza, y, en cambio, comenzaron a realizar un amplio programa de transformaciones socio-económicas en interés de la nación y se pusieron a crear un Estado popular. En

Washington cundió la alarma y se han apresurado a calificar la política del Gobierno sandinista de contradictoria con los «intereses vitales de los Estados Unidos».

De nada han valido los intentos de muchos políticos latinoamericanos y europeos, aliados de los Estados Unidos, que han tratado de hacerle ver a la Casa Blanca lo desproporcionado que resultan sus actitudes a los ojos del mundo. Los círculos imperialistas de los Estados Unidos han decretado el derrocamiento del poder revolucionario en Nicaragua.

El ex agente de la CIA Phillip Agee ha escrito que el departamento de espionaje de los Estados Unidos se propone recurrir en Nicaragua a los programas de desestabilización probados anteriormente en Chile, Portugal, Jamaica, etc.¹. La Administración norteamericana asignó para las operaciones antinicaragüenses, tan sólo por los canales de la CIA, 19 millones de dólares.

Washington confiaba en primer término en la contrarrevolución interna, para alcanzar sus objetivos iniciales de dividir el movimiento sandinista, avivar los ánimos antibernamentales y provocar en el país el caos social. La prensa derechista fue encargada de tergiversar las acciones y decisiones de las autoridades nicaragüenses, recurriendo a una desenfrenada demagogia social que podría quizás tener repercusión entre la parte menos consciente de la población. Los enemigos de la revolución actúan supuestamente desde posiciones de «defensa de los intereses de la propiedad privada», pero no reparan en recurrir al terror y el sabotaje, provocando también a veces enfrentamientos de los creyentes cristianos con los representantes del poder popular². Los Estados Unidos asignaron medios para comenzar emisiones de radio destinadas a impulsar las acciones separatistas de las minorías nacionales, en un intento de explotar el problema indígena³.

Por indicación personal de Reagan, los Estados Unidos aprobaron medios especiales para el mantenimiento de las organizaciones contrarrevolucionarias y la preparación de los grupos diversionistas integrados por los ex guardias somocistas.

Paralelamente, la CIA ha ido realizando un plan especial de operaciones secretas. Los órganos de seguridad de Ni-

caragua descubrieron en enero de 1982 un complot que perseguía derrocar al Gobierno sandinista. Hasta hoy día los terroristas todavía tratan de volar los puentes, centrales eléctricas, líneas de alta tensión y otras importantes obras económicas.

Sin embargo, las esperanzas de la Administración washingtoniana, depositadas en la contrarrevolución local en Nicaragua, han resultado hasta ahora muy poco consistentes. La reacción interna no tiene allí fuerzas suficientes y no luce capaz de derrocar el poder popular sin recibir un enorme apoyo desde fuera. La llamada «variante chilena» no encontró un caldo de cultivo apropiado en el país. Claro está, los enemigos internos de la revolución sandinista aún empuñan las armas, pero no pueden ser una base firme para realizar completamente los planes de los Estados Unidos.

•

Ante Washington se planteó entonces un dilema: conformarse con las transformaciones en Nicaragua o tomar medidas «aún más severas», es decir, las medidas militares. La Casa Blanca eligió la segunda vía. Comenzaron las febriles búsquedas de los ejecutores, de los que debían «sacar las castañas del fuego».

Sin embargo, incluso aquí, en una zona tradicional del dominio imperialista, los Estados Unidos no pueden ahora confiar plenamente en sus aliados. Ronald Reagan, que llegó a la Casa Blanca con el declarado propósito de «recuperar el terreno perdido en su traspasio latinoamericano», ha logrado apartar de sí incluso a muchos de los «fieles amigos» de antaño. Los desaciertos de su política latinoamericana han sido tantos y tales, en los más diversos aspectos, que hoy en los propios Estados Unidos es casi unánime la opinión de que las relaciones interamericanas están en su punto más bajo de todo el presente siglo. El histórico andamiaje del panamericanismo se ha agrietado peligrosamente para Washington en los últimos meses y según ciertos indicios los daños pueden ser irreparables.

Desde luego que en la raíz de esta crisis interamericana están las mismas contradicciones de épocas anteriores. La Casa Blanca se enfrentaba desde hace tiempo con gran-

des dificultades en sus intentos de lograr un pleno apoyo a su política por parte de ciertos Estados del continente.

Es un hecho que México y Venezuela, que son países cuya influencia en América Central no puede ser fácilmente desdenada, se encuentran actualmente muy disgustados con las prácticas económicas de los monopolios norteamericanos. El deterioro de los mercados petroleros, manipulados como se sabe por los Estados Unidos, ha agravado las tensiones sociales en estos dos países exportadores de petróleo y ha desatado en ellos nuevas olas de antiyanquismo. Una intervención militar yanqui en la zona centroamericana tomaría visos, ciertamente, de presión altamente intimidatoria sobre los gobiernos mexicano y venezolano.

Además, los otros aliados mayores de Estados Unidos en el hemisferio, Canadá y Brasil, seguramente en tal coyuntura defenderían activamente el principio de no intervención que ambos han venido recomendando por mucho tiempo a Washington respecto a Cuba y al Caribe en general. Con mayor razón todavía, ésta tendría que ser la actitud de Argentina por razones históricas que se reactualizaron dramáticamente en el Atlántico Sur.

En general, todo esto, tras el trauma de la crisis en las islas Malvinas, ha obligado a muchos políticos latinoamericanos a preguntarse qué es lo que está buscando la Administración washingtoniana con su política en América Latina. En Venezuela, por ejemplo, todos los partidos políticos sin excepción han condenado la adopción por el Senado estadounidense de la provocadora enmienda Symms⁴, calificándola de grave amenaza para la soberanía de todos los Estados latinoamericanos. El propio Presidente venezolano, el socialcristiano Luis Herrera Campins, anunció la decisión de Venezuela de entrar a formar parte del Movimiento de Países No Alineados. Una declaración similar fue hecha poco más tarde por el Presidente de Colombia, el conservador Belisario Betancur.

Algo sumamente peligroso se debe estar tramando en la región, dicen los observadores, para que gobiernos como los de Venezuela y Colombia, países que siempre han estado alineados al lado de los Estados Unidos, de pronto piensen ambos en tomar una actitud de no alineación. Esto no se podría explicar simplemente como una reacción ante

lo ocurrido en las Malvinas, sino más bien como una medida de precaución para no verse involucrados en la aventura militar que prepara Washington. Por cierto, los Estados Unidos tratan por todos los medios de incorporar a Costa Rica a sus planes antinicaragüenses, persiguiendo crear un «cordón sanitario» en torno a la revolución sandinista, así como utilizar el territorio de este país como una base de apoyo contra Nicaragua. Sin embargo, estos planes, que son apoyados por determinados círculos gubernamentales, chocan con una decidida resistencia por parte de diferentes fuerzas políticas de Costa Rica y amplias capas de la opinión pública.

En efecto, para el Departamento de Estado se ha reducido ostensiblemente el campo de alianzas potenciales que requiere una operación del género contemplado. Mucho más difícil le sería obtener la comprensión de sus aliados europeos. Sin embargo, aún podría consolarse con el respaldo incondicional en la OEA de los Pinochet, Stroessner, Duvalier y otros tiranos. En lo que se refiere a tantos militares latinoamericanos que pasan por sus cursos de contra-insurgencia, a la hora de utilizar sus servicios en contra de Nicaragua el Pentágono deberá contentarse sólo con unos pocos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. A pesar de todo ello, el Presidente Reagan se propone seguir adelante con sus planes.

•

En América Central se trata de la aplicación a escala regional de la concepción política global elaborada por el imperialismo de los Estados Unidos. Su esencia es la siguiente: confrontación en vez de concertación. La actual Administración norteamericana no busca una salida pacífica de los conflictos que surgen en diferentes rincones de nuestro planeta, no trata de buscar soluciones mutuamente aceptables para las partes en la mesa de negociaciones. Al contrario, sabotea, hace frustrar y rechaza, insistentemente y tercamente, las iniciativas de paz, los esfuerzos y las propuestas de otros Estados; recurriendo a los métodos de presión política, chantaje y amenazas, confía únicamente en la fuerza bruta.

El Gobierno de Nicaragua ha procurado ya durante mu-

cho tiempo un arreglo pacífico de la peligrosa situación existente en América Central. En más de una ocasión los sandinistas expresaron su disposición a firmar con los Estados Unidos un acuerdo bilateral de no agresión, que sentaría las bases del entendimiento. Muchas veces llamaron a Washington a renunciar a las amenazas y las acciones agresivas, subrayando que sólo un diálogo sincero permitirá crear condiciones para una paz sólida, para la estabilidad y el progreso en la región. Pero todos estos esfuerzos resultaron vanos. La Administración de Reagan presentaba unas condiciones previas, para comenzar las negociaciones, que no puede aceptar ningún país soberano⁵.

Analizando los hechos, se llega necesariamente a la conclusión de que semejante política se debe no sólo a la extrema agresividad del imperialismo norteamericano. En los últimos años, los Estados Unidos han visto debilitarse su poder de negociación. Para negociar con efectividad lo básico que se requiere es la seguridad en sí mismo, que permita sacar provecho de los elementos objetivos de los cuales se disponga. Y lo que ha caracterizado a los dirigentes norteamericanos, después de la derrota en la vergonzosa guerra en Vietnam y del escándalo llamado de Watergate, es una evidente falta de confianza en sí mismos. El prestigio de los Estados Unidos cayó bruscamente; la principal potencia imperialista ya no cuenta con el mismo apoyo de antes por parte de sus socios menores. De aquí la aspiración a imponerse a los otros Estados por el dictado, la violencia y el terror, incluida la injerencia militar.

Al parecer, ya se han cubierto los preparativos políticos de la agresión contra Nicaragua con la implantación en Honduras de un nuevo *hombre fuerte* para toda la región, aspirante a llenar el vacío dejado por Somoza. Ahora todo gira alrededor de la figura de un jefe militar de oscuros antecedentes policíacos, Gustavo Alvarez Martínez, quien al asumir por encargo del Pentágono el mando de las fuerzas armadas hondureñas lo primero que hizo fue iniciar una movilización general que ha dado por resultado la puesta en estado de alerta máximo de unos 25.000 efectivos hondureños. El generalote no hace ningún secreto de sus

propósitos: librar una guerra contra Nicaragua con el apoyo de los Estados Unidos.

El coronel Leonidas Torres Arias, quien hasta poco antes encabezó los servicios hondureños de inteligencia militar, dijo en una rueda de prensa celebrada en México, que Alvarez con sus ideas represivas está conduciendo a Honduras por un camino de sangrientas luchas y de confrontaciones internacionales que traerán muertes, dolor y destrucción a la nación, y que deseaba alertar que Honduras «no tiene ni la capacidad económica ni militar para imponerle a otro Estado una decisión militar»⁶.

El pertrechamiento y los preparativos de Honduras para la agresión fueron asumidos por Washington. A fin de poder hacer todo esto, con la aprobación presupuestaria de los legisladores estadounidenses para la aventura planeada, los Estados Unidos inspiraron en dicho país una farsa electoral destinada a dar apariencias de legalidad al antipopular régimen militar. Se puso un presidente civil, Roberto Suazo Córdova, para que sirviera de mampara al general Alvarez. Ya los camaradas del Partido Comunista de Honduras habían dicho «...es incuestionable que el doctor Suazo Córdova ha contraído serios compromisos con las Fuerzas Armadas y con los dirigentes del imperialismo norteamericano. Por sus compromisos con los militares, es previsible que Suazo Córdova hará un Gobierno de rodillas...»⁷

El Congreso de los Estados Unidos aprobó las asignaciones para el «nuevo régimen democrático», y comenzaron a fluir a Honduras los dólares norteamericanos, la técnica militar y los equipos. En agosto de 1982, en la base Palmerola aterrizaron diariamente tres o cuatro aviones de transporte con armas de los Estados Unidos. Empezó a construirse urgentemente un punto de apoyo especial para las unidades de desembarco aéreo. Se están modernizando tres aeródromos para que puedan aterrizar los aparatos pesados. En la isla Tigre se amplía la base para grandes buques de guerra. En las inmediaciones de la frontera con Nicaragua fueron creados 17 campamentos militares, donde los ex guardias somocistas se preparan para la intervención bajo la dirección de instructores norteamericanos cuya mayoría tiene «experiencia vietnamita». Aquí se

ha formado el grueso del ejército de intervención, que cuenta con 5-6 mil efectivos. Bajo la presión de Washington, se unieron cuatro organizaciones contrarrevolucionarias nicaragüenses que actúan en el extranjero.

Con otras palabras, los planes intervencionistas del Gobierno de Reagan han entrado de lleno en su fase militar.

Sería demasiado largo enumerar aquí la serie de datos que en la prensa de los países centroamericanos dejan entender la inminencia de un conflicto armado en toda la región. Muy bien ha resumido la situación un editorial de *Barricada*, el órgano del Frente Sandinista, cuando asienta: «Lo cierto es que Honduras ha sido convertido en el principal portavoz del guerrillerismo norteamericano en la región, en la punta de lanza necesaria para provocar un enfrentamiento con Nicaragua, que justifique posteriormente una agresión norteamericana de mayor envergadura»⁸.

•

Al preparar la agresión, Washington, a juzgar por todo, se propone también realizar sus otros planes hegemónicos de largo alcance: resolver sus agravados problemas con los movimientos de liberación nacional en El Salvador y Guatemala. Y, de ser posible, propinarle a Cuba en ese mismo teatro de guerra centroamericano «la lección» que no ha podido darles a los internacionalistas cubanos.

Los acontecimientos de los últimos tiempos en El Salvador convencieron a los Estados Unidos de que los destacamentos punitivos de la junta militar son insuficientes para luchar contra los patriotas, y de que lo que no se pudo lograr con Duarte menos se podrá obtener con D'Abuisson⁹. De allí que ahora la Administración Reagan vea como salida para su problema salvadoreño, una solución igual a la contemplada para su problema nicaragüense: la regionalización de la guerra. En cuanto a Guatemala, aunque allí todavía la situación no se les presenta tan desesperada, por otras experiencias bien saben que un movimiento guerrillero que ha entrado en una fase de ascenso ya no puede ser interrumpido a base de fórmulas puramente locales.

Las fuerzas más sensatas entre los militares y políticos

de los Estados Unidos saben que la agresión preparada por Washington en la América Central, no importa que empiece con características de guerra local, puede acarrearles las más inesperadas consecuencias. Esto explica, ciertamente, la profunda división que se nota en los medios dirigentes de Estados Unidos en lo referente a la manera de encarar las situaciones en la América Latina, y muy en especial por lo que atañe a los estallidos revolucionarios en Centroamérica y la cuenca caribeña.

No podemos perder de vista otro importante aspecto referente a la situación interna en Honduras, a la que Washington asigna el papel de «fuerza de choque» contra Nicaragua. Como bien afirma el camarada Schafik Jorge Handal, Secretario General del CC del Partido Comunista de El Salvador, «...es falso que en el ejército hondureño todos estén de acuerdo con esta tendencia represiva e intervencionista. Hay otras opiniones, verdaderamente democráticas que no quieren comprometer al ejército en un enfrentamiento con su pueblo. Así comenzaron las cosas en El Salvador...»¹⁰

Ahora es difícil saber si Reagan se decidirá a mezclarse de manera directa en el conflicto que ha planificado en Centroamérica o si se limitará a lanzar a unos Estados contra otros. Es evidente que la amenaza de una guerra entre esos países hermanos, amenaza completamente ajena a los intereses de sus pueblos, crece día a día.

En estas condiciones, los nicaragüenses se ven obligados a fortalecer más las defensas de su país y estar listos para proteger las conquistas revolucionarias, para defender su libertad e independencia. El Gobierno sandinista, apoyándose en la solidaridad de la opinión progresista mundial, sigue luchando insistentemente por evitar un conflicto armado, y para ello recurre a todos los medios políticos y diplomáticos. El amplio apoyo internacional a esta lucha, el desenmascaramiento de la política intervencionista de la Administración washingtoniana, pueden hacer que el Gobierno de los Estados Unidos retome la vía de la negociación como único método válido para resolver las diferencias y los litigios, para evitar una confrontación militar en América Central y el Caribe.

¹ *Cuadernos del Tercer Mundo*, México, No 35, 1979–1980, p. 52.

² El 16 de agosto de 1982, por ejemplo, un grupo de contrarrevolucionarios ocupó la escuela católica en la ciudad de Masaya y abrió fuego contra una manifestación pacífica de los habitantes de esa ciudad. Los provocadores estaban armados con fusiles norteamericanos e israelíes. —*N. de la Red.*

³ En los Estados Unidos se emprendió una campaña de calumnias acusando a las autoridades sandinistas de aplicar una política de genocidio contra la población indígena. —*N. de la Red.*

⁴ Propuesta por el senador Steven D. Symms, republicano, con apoyo de la Administración Reagan, y aprobada en agosto de 1982, autoriza el empleo de todos los medios, «incluyendo el uso de las armas», para impedir lo que se califica como «extensión de la influencia cubana en el hemisferio occidental». Sus opositores en el Senado la han descrito como similar a la resolución que en 1964 le permitió al entonces Presidente Lyndon B. Johnson una abierta intervención bélica de los Estados Unidos en Vietnam. Véase *International Herald Tribune*, 13 de agosto de 1982.

⁵ El Departamento de Estado declaró que los EE.UU. firmarían con Nicaragua un tratado de no agresión sólo si este país se niega a apoyar los movimientos de liberación nacional en la región, renuncia a las medidas para fortalecer la capacidad defensiva del país, reduce bruscamente «bajo control internacional» sus fuerzas armadas, rechaza la ayuda de Cuba y otros Estados «indeseables» para los EE.UU., se sale del movimiento de no alineación, etc. —*N. de la Red.*

⁶ *International Herald Tribune*, 2 de septiembre de 1982. Véase, además, *ibíd.*, 16–17 de octubre de 1982.

⁷ *Información*, Tegucigalpa, No 6, enero de 1982.

⁸ *Barricada Internacional*, Managua, 23 de agosto de 1982.

⁹ José Napoleón Duarte, democristiano, encabezó la junta cívico-militar de El Salvador hasta marzo de 1982, y por encargo de Washington efectuaba amplias operaciones punitivas contra los patriotas. Roberto D'Abuisson, mayor en retiro, dirigente del partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como resultado de la farsa electoral organizada por los EE.UU. en El Salvador en marzo de 1982 llegó a ser Presidente de la Asamblea Constituyente. Declaró que inundará de sangre todo el país, pero que acabará con los rebeldes. —*N. de la Red.*

¹⁰ *Proceso Revolucionario*, San Salvador, No 2, agosto de 1982, p. 13.

De la diplomacia de las cañoneras a la agresión directa

Randolfo BANEAS

miembro del CC del Partido Comunista de Honduras

Luis Orlando CORRALES

miembro del CC

del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica

El imperialismo norteamericano desata la guerra en América Central y el Caribe. El Gobierno del Presidente Reagan, conforme al radical curso belicista y aventurero que le ha impreso a toda la política norteamericana, trata de detener el movimiento nacional-liberador en el área recurriendo, incluso, a la intervención militar directa, como ha sucedido en el caso de Granada. Con este fin, utilizando el pretexto de «maniobras» que durarán seis meses, ha destacado en el mar Caribe y en el Pacífico, frente a las costas nicaragüenses, una poderosa flota y en el territorio hondureño, miles de soldados. La operación «Pino Grande-II» moviliza alrededor de 28 mil soldados, 3 portaviones dotados con misiles, 16 naves de guerra (entre destructores y buques escolta), más de 200 aviones y helicópteros de combate, un número no determinado de aviones de transporte y abastecimiento y una cantidad enorme de implementos bélicos modernos. Un momento culminante en esta descarada manifestación de fuerza son los desembarcos de la marina en las proximidades de las costas del norte de Nicaragua con la participación de alrededor de 5.000 soldados de infantería de marina norteamericana. Los detalles de esta operación han sido precisados durante la intervención en Granada. La operación «Pino Grande-II», a su vez, ha sido sincronizada con otras grandes maniobras.

Estamos, una vez más, frente a una expresión clara e insolente de la nefasta «diplomacia de las cañoneras». «Este es mi jardincito» —ha declarado cínicamente el actual dueño de la Casa Blanca, refiriéndose a América Central y el Caribe—. Pero crece en él la maleza como Nicaragua

y El Salvador... Para luchar contra ella se necesitan napalm y bombas¹.

La justificación propagandística de toda la política intervencionista y agresiva de los Estados Unidos, de la cual las operaciones en curso y la intervención en Granada representan una manifestación evidente, consiste en atribuir el movimiento revolucionario que se desarrolla en el área, a la injerencia de La Habana y Moscú. Esta justificación es tan simplista, para decir lo menos, que aun en altos círculos políticos de los propios Estados Unidos hay quienes no comulgan con estas ruedas de molino.

Los problemas de América Central no son resultado del supuesto expansionismo de Cuba o la Unión Soviética. Tampoco provienen de la mítica agresividad de Nicaragua respecto a sus vecinos. Los engendran los factores internos de los países del área, su dependencia económico-social y política con respecto al imperialismo norteamericano y la política de «gran garrote», de acuerdo con la cual los Estados Unidos se atribuyen el derecho de decidir quiénes deben gobernar en otros países y qué vías de desarrollo pueden seguir éstos.

Washington ha elevado el terrorismo internacional al rango de política estatal, según quedó demostrado con la bárbara intervención militar contra el Estado soberano de Granada. Reagan ha dejado las amenazas a los movimientos nacional-liberadores y revolucionarios para pasar a una verdadera guerra contra ellos. Washington declara que sus acciones obedecen a la preocupación por los «derechos humanos y la democracia», pero no duda en ahogar en sangre el derecho de un pueblo a una existencia libre e independiente. El Gobierno de EE.UU. ha demostrado con sus acciones total desprecio hacia las normas universales del derecho internacional, enlodando los elevados principios de la ONU. Los hechos evidencian que la Casa Blanca, en aras de sus objetivos de rapiña, no respeta el derecho de los pueblos a un desarrollo autónomo y lanza un reto abierto e insolente a su voluntad, y a toda la opinión pública mundial.

En el resto del mundo, numerosos gobiernos, distintos partidos y personalidades sensatas de la vida política y cultural condenan el rumbo intervencionista de los EE.UU.

en el área y han manifestado su rechazo de una tesis que pretende explicar la situación creada en América Latina y el Caribe por el conflicto «Este-Oeste». La Internacional Socialista, por ejemplo, en su XVI Congreso celebrado en Portugal no se ha hecho eco en su declaración de semejante criterio sino que, por el contrario, ha subrayado que «la política de la Administración (Reagan. -N. de la Red.) ha agravado seriamente una situación ya de por sí difícil y peligrosa»².

La política guerrerista del imperialismo norteamericano ha arrastrado a la mayoría de los gobiernos centroamericanos a su objetivo primordial de estrangular la revolución sandinista en Nicaragua y los movimientos de insurgencia en algunos países de la zona. Su principal punto de apoyo en América Central es la camarilla gobernante hondureña, cuyo ascenso al poder, en enero de 1982, tenía para los Estados Unidos dos propósitos fundamentales: en primer lugar, utilizar el ejército hondureño en la función de gendarme contra los pueblos de los países vecinos, con el fin de llenar el «vacío» dejado en el área por la eliminación de la Guardia Nacional somocista. En segundo lugar, restaurar un poco el prestigio perdido por su apoyo a la dictadura de la familia Somoza, con un gobierno que, tan dócil como ésta, mostrara, sin embargo, una careta democrática. Esto explica el apareamiento Suazo Córdova - Alvarez Martínez, que nadie pudo imaginarse antes de la toma de posesión del Partido Liberal³.

El «hombre fuerte» de Honduras, el general Gustavo Alvarez Martínez, y la camarilla gobernante están cometiendo horrendos crímenes contra el pueblo, pisoteando la dignidad y la soberanía nacionales con el fin de convertir el territorio hondureño en base de operaciones de la ofensiva imperialista contra los pueblos de América Central. Allí concurren los especialistas más versados en prácticas de represión, asesinatos y genocidio -agentes de la CIA, «veteranos» de Vietnam, «asesores» israelitas, chilenos y de algunos otros países- para planificar y llevar a cabo incursiones de exguardias somocistas y mercenarios en suelo nicaragüense. En estos momentos, utilizan todo el apoyo logístico y la cobertura operativa que les brindan el ejército de Honduras y las tropas norteamericanas que parti-

cipan en las maniobras mencionadas. Al mismo tiempo, el gobierno norteamericano se sirve de Honduras para «auxiliar» al genocida ejército salvadoreño en su lucha contra el pueblo, encabezado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El gobierno salvadoreño que con el concurso de Washington desató la sangrienta guerra de exterminio contra su propio pueblo, muestra una creciente incapacidad para hacer frente a los embates del movimiento revolucionario que comanda el FMLN, a pesar de la creciente ayuda militar de EE.UU. Por eso, la Casa Blanca ahora deposita sus esperanzas principales en los regímenes «más seguros», los de Honduras y Guatemala, donde en agosto de 1983 fue montado un golpe de Estado.

No cabe duda alguna de que el Presidente guatemalteco Efraín Ríos Mont fue derribado por su ministro de Defensa Oscar Humberto Mejía Víctores, obedeciendo indicaciones directas de Washington. Recordemos que Mejía Víctores sostuvo reuniones en Honduras con altos oficiales norteamericanos, en las que sirvió de enlace el general Álvarez Martínez, apenas dos días antes de la asonada cuartelaria. Inmediatamente después del golpe, Mejía Víctores dio su total adhesión a la política de Reagan e instruyó al canciller Fernando Andrade con el fin de maniobrar para anular los esfuerzos de negociación pacífica para el arreglo político de la situación en Centroamérica que promueve el Grupo de Contadora (integrado por México, Panamá, Colombia y Venezuela). Además, los primeros pasos del nuevo Presidente guatemalteco estuvieron dirigidos a revivir el Consejo de Defensa Centroamericano y ofrecer el territorio guatemalteco para instalar bases militares y centros de adiestramiento del tipo que funciona en Honduras.

Para ejecutar la política que exige Washington, los gobiernos títeres de Honduras y Guatemala han redoblado la represión. En Honduras, los asesinatos y desapariciones políticas, en el período de gobierno liberal, suman varios centenares. En Guatemala también continúa el terror.

El Gobierno socialdemócrata costarricense de Luis Alberto Monge ha observado, en repetidas ocasiones, una conducta de complicidad con esos planes agresivos de la

Casa Blanca. En la zona fronteriza con Nicaragua operan, con ayuda de altos personeros del Gobierno, bandas contrarrevolucionarias antisandinistas. Sin embargo, el Gobierno de Monge, presionado por amplias corrientes de la opinión pública costarricense y sectores de su propio partido que, entre otras cosas, toman en consideración la línea de la Internacional Socialista, se ha visto obligado a adoptar, en determinados momentos, actitudes no coincidentes con las de los otros regímenes centroamericanos.

Ahora bien, como dijimos, estas peligrosas aventuras militaristas de Reagan cuentan con resistencia incluso en importantes medios políticos de los Estados Unidos, que temen que el país sea conducido a un nuevo Vietnam. Sectores de la prensa norteamericana denuncian y desaprueban los entretelones de la agresión y en el Congreso muchos parlamentarios alzan su voz condenatoria. El repudio de la opinión pública norteamericana crece cada día y se expresa en múltiples acciones y protestas. La gran marcha en Washington, en agosto de 1983, reunió a casi medio millón de personas. Muchos gobiernos aliados de los Estados Unidos en América Latina y Europa, que en otros problemas se adhieren a sus posiciones, en relación a Centroamérica y el Caribe guardan después de la intervención norteamericana en Granada una prudente distancia e, incluso, algunos asumen una posición discrepante.

En estas condiciones, la Administración de Washington trata torpemente de disimular sus acciones evidentemente militaristas hablando de paz y libertad. Apoyando de palabra las propuestas del Grupo de Contadora sobre la solución pacífica de los problemas de la zona, Reagan recurre a unas provocaciones abiertas dirigiendo fuerzas armadas hacia las fronteras de Nicaragua.

La Casa Blanca ha boicoteado las iniciativas constructivas tanto de Cuba como de México y Francia. Washington no hace caso a las proposiciones de Managua orientadas a un arreglo político de la situación, silenciándolas o bien presentando como respuesta un sinnúmero de condiciones previas, que no puede aceptar ningún país soberano.

De la misma manera actúan los gobiernos centroamericanos dominados por los Estados Unidos. Por ejemplo, el de Honduras, por medio de su canciller Paz Barnica, le

dio gran publicidad a la llamada política de «internacionalización de la paz». Esta consistía, en lo fundamental, en condicionar un arreglo pacífico con Nicaragua a negociaciones multilaterales. El 19 de julio de 1983, Nicaragua ha declarado su disposición a sostener tales negociaciones. El Gobierno Sandinista propuso también concertar un pacto de no agresión entre Honduras y Nicaragua, suspender totalmente los suministros de armas a las partes en conflicto en El Salvador con el fin de que su pueblo pueda solucionar sus problemas sin la injerencia del exterior, poner fin a la militarización de la zona y a la utilización de territorios ajenos para la agresión contra cualquier Estado, respetar su derecho a la autodeterminación y proscribir las instalaciones de bases militares extranjeras. No cabe duda de que todo esto podría contribuir al establecimiento de la paz. Sin embargo, el Gobierno de Honduras ha buscado toda clase de pretextos para no ir a las negociaciones propuestas por él mismo. Simultáneamente EE.UU. pasó a una nueva escalada de la agresión, declarando que el «Gobierno de izquierda de Nicaragua» constituye el principal estorbo de la paz en Centroamérica.

La Casa Blanca asigna muchos millones de dólares a la actividad hostil contra Nicaragua, que incluye adiestramiento militar de contrarrevolucionarios y terroristas, suministro de armas a éstos, sabotaje económico y financiero, campañas de calumnias. La CIA, encargada de las operaciones antinicaragüenses, no tiene ya escrúpulos en hacerlo todo descaradamente. Como testifica la propia prensa norteamericana, en el aeropuerto de Ilopango, cerca de San Salvador, aterrizan aviones de transporte de las fuerzas aéreas de EE.UU. Pilotos salvadoreños y mercenarios norteamericanos, utilizando aviones C-47, violan no menos de diez veces a la semana el espacio aéreo de Nicaragua lanzando en paracaídas equipo militar destinado a las pocas bandas infiltradas.

En nueve meses de 1983, las acciones agresivas de EE.UU. han causado la muerte a centenares de ciudadanos nicaragüenses y un daño económico al país que se calcula en 1,2 mil millones de córdobas⁴.

La respuesta del pueblo nicaragüense frente a la creciente amenaza a su seguridad ha sido tomar medidas

complementarias dedicadas a la defensa. Se dan pasos para fortalecer la vigilancia de los objetivos económicos más importantes, así como completar batallones de reservistas y milicias populares territoriales. El pueblo nicaragüense consolida su cohesión en torno a su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este difícil y decisivo período, las mejores virtudes, el espíritu de sacrificio y abnegación patriótica aparecen por doquier.

Como se sabe, la CIA planteó ante los contrarrevolucionarios la necesidad de mantenerse aunque sea varias horas en una parte, por pequeña que sea, del territorio nicaragüense para anunciar la creación de su propio «gobierno», lo cual sería una señal para el comienzo de una agresión imperialista masiva. Pero todos los intentos que emprenden los contrarrevolucionarios con el fin de afianzarse en el territorio nicaragüense están sufriendo un fracaso. La capacidad de combate del Ejército Popular Sandinista, las milicias populares y los Comités de Defensa Sandinista se ha acrecentado intensamente. Las metas de transformaciones socio-económicas se cumplen pese a las agresiones y los ingentes esfuerzos dedicados a la defensa y se consolida el proceso y las instituciones revolucionarias.

El movimiento armado del heroico pueblo salvadoreño demuestra a cada instante su pujanza y su anhelo de victoria. Mantiene amplias zonas del territorio bajo su control y asesta duros golpes a las operaciones de exterminio lanzadas por el ejército adiestrado, asesorado y hasta dirigido, en muchos combates, por oficiales norteamericanos. Los patriotas conservan la iniciativa militar con nuevas tomas de poblaciones, tramos de carreteras de enorme importancia y la destrucción de objetivos militares vitales para el régimen.

Las organizaciones revolucionarias guatemaltecas también despliegan firmemente la lucha armada. A pesar de los enormes operativos de «limpieza», el régimen no ha podido desarticularla y, mucho menos, disminuir su espíritu combativo. A las filas de la resistencia se incorporan nuevos combatientes.

En medio de la más grave crisis económico-social de su historia, crecen las luchas populares en Honduras y Costa

Rica por la defensa del nivel de vida, el empleo, la tierra, las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos, la soberanía nacional y la paz en la región. Tales luchas van adquiriendo nuevos niveles de expresión y nuevas vías, en conformidad con el grado de desarrollo de la crisis y los peligros que se ciernen de una guerra regional desencadenada por el imperialismo.

La política guerrerista de los Estados Unidos ha convertido a América Central y el Caribe en uno de los puntos neurálgicos del mundo, con una carga explosiva de incalculables consecuencias. La tirantez en el área, que es una consecuencia del rumbo agresivo que sigue Washington suscita la preocupación de la opinión pública mundial.

Los comunistas y todos cuantos quieren la paz en el planeta debemos intensificar la resistencia a los criminales designios del imperialismo norteamericano y redoblar la solidaridad con la justa lucha de los pueblos de Centroamérica y el Caribe.

¹ *Afrique—Asie*, París, 1983, No 298, p. 46.

² *Trabajo*, 1983, No 17, p. 48.

³ Véase para más detalles el artículo de R. Padilla Rusch *Honduras: las fuerzas revolucionarias en pie de lucha*, en la presente recopilación. —N. de la Red.

⁴ Moneda de Nicaragua. 10 córdobas equivalen a 1 dólar norteamericano. —N. de la Red.

Honduras: las fuerzas revolucionarias en pie de lucha

Rigoberto PADILLA RUSCH
Secretario General del CC
del Partido Comunista de Honduras

Honduras es un país de paradojas. Posee abundantes recursos naturales y, sin embargo, es uno de los países más pobres del continente. Se precia de tener un gobierno democráticamente electo y, no obstante, padece una dictadura militar.

¿Cómo se explican estas contradicciones que pueden confundir a un observador poco informado?

Del reformismo a la crisis

El breve ensayo reformista (1972–1975)¹ constituyó el empeño más reciente de un sector de la clase gobernante por introducir cambios en la estructura productiva tradicional. Sus ejecutores, los llamados militares reformistas, frecuentemente afirmaron que lo fundamental de su programa era la reforma agraria. Los cambios fueron pequeños, en tanto proliferaron como «hongos de invierno» el narcotráfico, la corrupción administrativa y la demagogia social.

El proceso reformista pereció sin pena ni gloria, por el rechazo de la oligarquía tradicional y el sabotaje del aparato estatal manipulado por los partidos políticos de las clases dominantes. Los gobiernos militares que le sucedieron son historia conocida: instrumentaron la política de anulación progresiva de las conquistas logradas y ensamblaron al gobierno de Honduras en el militarismo reaccionario del área.

El triunfo del doctor Roberto Suazo Córdova en las elecciones frente al candidato identificado con el continuismo

en crisis, generó en amplias capas de nuestro pueblo esperanzas de solución a los graves problemas económicos y sociales: balanza comercial deficitaria, una deuda externa que se acerca a 1,75 mil millones de dólares, desempleo que afecta a no menos del 25 % de la población económicamente activa, una acentuada depreciación de la moneda nacional, que ha perdido un 60 % de su valor real en relación al lempira de 1972.

La ascensión de Suazo Córdova a la Presidencia de la República permitió la imposición de un plan de desarrollo cuyas directrices fueron trazadas por los asesores del denominado «grupo Galaxia» (círculo de empresarios anticomunistas, de gran poder económico y político, con preeminencia de ciudadanos de origen sirio-libanés). Esta política se amolda a la nueva estrategia imperialista impulsada en nuestro país mediante la participación del embajador yanqui John Dimitri Negroponte, experimentado agente del intervencionismo.

Se desarrolla una línea económica y política que tiene su marco en el Plan Reagan para la cuenca del Caribe² y en el esfuerzo global para mejorar la situación en el área en favor del imperialismo.

Con las «recetas» de Reagan se implanta en Honduras el neo-liberalismo económico, que pugna por destacar la participación de la «iniciativa privada» en un mercado libre de controles pero, evidentemente, sujeto al predominio del capital monopolista. Se trata de privatizar todo el sector controlado por el Estado y que durante mucho tiempo se atendió como área estratégica: la energía eléctrica, las instituciones financieras de fomento de la producción, etc. Esta apropiación incluye la eliminación de la participación estatal en rubros importantes como el banano, la explotación de los recursos forestales y otros.

Los argumentos y medidas en favor de este plan corresponden, a su vez, a las presiones del Fondo Monetario Internacional. Es un plan que descarga el peso de la crisis en el pueblo y provoca un mayor desempleo y un empeoramiento de las condiciones de vida, en favor del capital privado local y transnacional, que reciben mayores facilidades.

Se impone una reforma tributaria antipopular que reduce

los impuestos al capital y los aumenta a la masa consumidora, se eliminan trabas a la fijación de precios y se facilita la exportación, se incentiva la inversión de capital privado y se estimula la actividad de los grandes empresarios con el aflujo de una fuerte ayuda económica yanqui.

Sin embargo, con más de un año de ejecución, los resultados del plan para Honduras son desastrosos. Ni la economía logra el repunte deseado ni se mejora la situación interna: el cierre de empresas, la quiebra de otras tantas y los despidos han aumentado. El conflicto social se agrava y tensa. El gobierno de Suazo Córdova se arrulla en los brazos del Fondo Monetario Internacional y recibe, bajo su dictado, nuevos préstamos para enfrentar la crisis no resuelta. Nuestro país sigue comprometiendo su futuro y entregando su soberanía bajo el actual gobierno. Suazo Córdova puso al desnudo esta situación en un dramático discurso a la nación pronunciado el 5 de marzo de 1982. No vaciló, entonces, en hacer falsas promesas y demandar colaboración, sacrificio y paciencia. Pero una cosa son los discursos y otra la situación real.

Aquella esperanza y apoyo otorgados al triunfo liberal en 1981 se expresa ahora en descontento y simpatía hacia el resurgimiento unitario del accionar revolucionario y crecientes manifestaciones populares. Se incrementan las ocupaciones de tierras por los campesinos organizados, a despecho de la demagógica reforma agraria gubernamental; aumentan las huelgas y tomas de instalaciones y calles por parte de las organizaciones magisteriales y de estudiantes; los trabajadores responden combativamente a los despidos y las «quiebras» patronales y prende en las masas la demanda contra el alto costo de la vida y la represión. La política gubernamental es objetada públicamente por sectores de la Iglesia, de la Democracia Cristiana, de la Alianza Liberal del Pueblo (corriente interna del gobernante Partido Liberal) y muchas organizaciones de masas. Es evidente que esta política es objeto de un repudio popular cada vez mayor.

Después de una tradición civilista y gozar de un clima de relativa tranquilidad, nuestro pueblo ve con preocupación y no presta apoyo al uso del territorio hondureño y la implicación del ejército, otrora adalid del reformismo, en

los planes agresivos e intervencionistas contra Nicaragua y la lucha liberadora en El Salvador. ¡Nuestro pueblo no es indiferente ante los centenares de desaparecidos, ante la captura, tortura y asesinato de activistas por la democracia y los derechos laborales, ante una situación de violencia represiva que sitúa a Honduras en el redil de los países donde el crimen se ensaña contra los pueblos!

Estos hechos, sin embargo, no están fuera de los planes de los círculos más reaccionarios. El primer logro en la estrategia imperialista fue el triunfo electoral del doctor Suazo Córdova, que no sólo provenía del sector más reaccionario de los liberales, sino que constituye una figura dócil al dictado imperialista. Simultáneamente, se apuntaló el gobierno con quien ha sido el mando real: se nombró como jefe de las Fuerzas Armadas al entonces coronel Gustavo Álvarez Martínez, un personaje emergido de los círculos fascistas y criminales del ejército.

Surgió, así, un gobierno dual: Suazo Córdova da la imagen civilista al gobierno militar y personifica la democracia formal, no decisoria; Álvarez Martínez, inmediatamente ascendido a general, es el hombre del Pentágono, quien ejecuta los planes contrainsurgentes internos y el intervencionismo contra los países vecinos. En tanto el primero hace labor de «relaciones públicas» declamando sobre el respeto a los derechos humanos, el segundo esgrime la bandera del anticomunismo y el «derecho» del ejército hondureño para acudir en «ayuda» al movimiento contrainsurgente de El Salvador y a las bandas somocistas. Este «Napoleón de repisa», sensible megalómano y anticomunista obseso, según la denuncia del hasta hace poco jefe de la inteligencia militar de Honduras, coronel Leónidas Torres Arias, no vaciló en contradecir al canciller Edgardo Paz Barnica y declaró públicamente que el ejército hondureño estaba dispuesto a ayudar, como lo ha hecho, al ejército salvadoreño y a las bandas somocistas. Mientras Suazo Córdova y Paz Barnica tocan la fanfarria de la «neutralidad» y la «no intervención», el jefe de las Fuerzas Armadas, públicamente, actúa de distinta manera.

Lejos de resolver los problemas, el gobierno liberal-militar los ha aumentado y ha creado otros de gravedad trascendental: la entrega del suelo hondureño como base para

la intervención contra Nicaragua y El Salvador, que será el estigma mayor de este período. Los yanquis instalan sus bases en Honduras. Se abre una lucha más en la Patria de Morazán³: por la soberanía y contra la presencia de los soldados yanquis en nuestra tierra.

Honduras, base de la contrarrevolución y la intervención

Washington elaboró para Honduras el proyecto de una «democracia restringida» como una respuesta de profilaxia política interna y una condición para hacer de Honduras una base contrarrevolucionaria. Esa «democracia restringida», que en lenguaje llano es el modelo de dictadura militar, corresponde a la necesidad de someter bajo control contrainsurgente a las fuerzas sociales que pueden distraer al ejército hondureño de lo que pasó a ser su papel prioritario: situarse como gendarme de la contrarrevolución en Centroamérica y constituirse en una fuerza de ocupación y soporte principal de la presencia militar yanqui en nuestro territorio. Honduras, por su situación política y geográfica, se ubica en los planes militares para la cuenca del Caribe que dirige el Pentágono.

El armamentismo es engendrado por esta política. Es impuesto por los planes de expansión de la dominación yanqui. En 1982, procedentes del Comando Sur en Panamá y de Fort Bragg, en Carolina del Norte, EE.UU., se destacaron a Honduras unidades especiales de entrenamiento del ejército yanqui.

En 1983, se impuso la instalación del gigantesco radar en Cerro de Hule, a 30 kilómetros de Tegucigalpa, el cual está atendido por unos 50 técnicos militares yanquis, que cuentan con la custodia, sin derecho de acceso, del ejército hondureño.

Con cifras más ilustrativas, en los últimos años el ejército hondureño aumentó sus filas en un 50 % y tiene actualmente 21.400 soldados. Se creó un nuevo batallón de infantería y otro de artillería. Se aumentó la capacidad de la fuerza aérea con la construcción de otra base y la adecua-

ción, para fines militares, de cinco pistas de aterrizaje, la obtención de 5 nuevos aviones de combate, 10 de transporte, 22 de entrenamiento y apoyo táctico y 21 helicópteros de combate. A la fuerza naval se le incorporaron 6 nuevas unidades y se construyeron 2 nuevas bases. La ayuda imperialista a las FF.AA. hondureñas crece diariamente.

Ante estas cifras, el militarismo y armamentismo en Honduras es más que evidente. ¿Qué necesidad tiene Honduras de aumentar su aparato estatal militar? ¿A quién afecta la militarización del país? Ante todo, al pueblo. El armamentismo en Honduras ha sido impuesto por la política Reagan. Esa se carga contra el pueblo que, frente al aumento del gasto militar, sufre desempleo, mayor miseria y abandono. Nos dicen y repiten que Honduras está expuesta a la amenaza de países vecinos. Pero Nicaragua no amenaza a ningún país del área. El pueblo salvadoreño no amenaza nuestra seguridad. El guerrerismo y la agresión reaganiana imponen el lenguaje de las patrañas que repiten los líderes criollos.

Con estas acciones se compromete nuestro futuro y se arriesga la generalización de un conflicto que envolvería a toda el área. Ante esto, no tiene ninguna perspectiva de victoria militar el papel de agresor que desempeña el ejército hondureño contra el pueblo de Nicaragua, en primer lugar.

El ejército impulsa la agresión

Se ha comprobado la presencia de más de 5.000 exguardias somocistas y mercenarios, un inusitado movimiento de tropas de distintos batallones del ejército hondureño hacia las fronteras salvadoreña y nicaragüense y su participación en las acciones militares bajo la dirección de instructores yanquis. La maniobra militar «Pino Grande», realizada en febrero de 1983 por fuerzas combinadas de Estados Unidos y Honduras, permitió el traslado de tropa y equipo hacia la frontera de Nicaragua.

A través de los medios de comunicación, los círculos militaristas impulsan una campaña encaminada a hacer creer que Honduras es víctima de incursiones del Ejército Popular

Sandinista. Para justificar la agresión, tratan de convencer a nuestro pueblo de que Honduras está siendo agredida.

La intensificación de la represión interna, especialmente dirigida contra fuerzas de oposición, ha causado la muerte de destacados dirigentes revolucionarios y demócratas como Herminio Deras, Dagoberto Padilla, César Augusto Cadalso Avila y muchos más, además del sinnúmero de patriotas que están desaparecidos. Esta es la política de aplacar el frente interno para concentrar el esfuerzo militar hacia el objetivo de la agresión en país ajeno.

La bandera de «internacionalización de la paz» que levanta el canciller hondureño corresponde al lenguaje de quienes creen alcanzar la paz mediante la agresión. Este es un elemento del belicismo de Reagan, que se manifiesta no sólo en palabras, sino también en hechos. La entrega de nuestro territorio como base de entrenamiento y agresión contra pueblos vecinos, la instalación del radar con alcance de 400 kilómetros a la redonda y el aumento del personal de la Embajada de EE.UU. en un 40 %, elevando su rango, tales son los hechos.

El 7 de junio de 1983 Henri Catto, portavoz del Pentágono, anunció el destacamento de 120 nuevos «asesores» militares yanquis para el entrenamiento de fuerzas contra-insurgentes salvadoreñas en territorio de Honduras. En un principio se declaró que estos «asesores» se ocuparían en el entrenamiento de 2.400 soldados salvadoreños y un batallón hondureño, durante seis meses. Sin embargo, ahora se le da un «carácter regional» a este centro de entrenamiento y se burla nuestra soberanía con el criterio de que «no es un acuerdo internacional formal» sino un «mandato» concertado entre el comandante del grupo «asesor» yanqui y un representante de los militares hondureños.

Se consuma de esta manera un nuevo acto de intromisión y rapiña imperialista. No bastaron las débiles reclamaciones de autoridades hondureñas para impedir que este convenio inconstitucional se convirtiera en ley. El nuevo centro para adiestrar a un contingente de tropas que enfrenta a los patriotas salvadoreños, simultáneamente instruye, en similares artes, a un batallón para reprimir a nuestro pueblo. Sin embargo, es aún más grave que se le dé el carácter de centro de entrenamiento regional a esta base

y que con ello se deje abierta la puerta a la soldadesca guatemalteca, a ex-guardias y mercenarios somocistas y a cuanto criminal se les antoje entrenar en suelo hondureño a los interventores del Pentágono.

Con los nuevos asesores, suman centenas los personeros del intervencionismo yanqui en Honduras. Boinas Verdes, agentes de la CIA y diplomáticos a granel son el resultado de los acuerdos adoptados entre el Pentágono y «un representante de los militares hondureños».

Unidad popular para garantizar la soberanía

Se comprende hacia qué objetivos está orientada semejante conducta de los gobernantes hondureños. Contra la voluntad de las masas expresada en las urnas, se afianza el militarismo, crece el clima de inseguridad interna a la vez que se intensifica la represión contra las organizaciones populares; se esfuman las conquistas democráticas y se desarrolla, en suma, un proceso de fascistización de nuestra vida política.

Frente a esto, se levanta el movimiento popular y revolucionario, poco a poco se va superando la dispersión y cada vez más se desenmascara la demagogia liberal. Nuestro pueblo toma conciencia del engaño de que es víctima. Y se fortalece la confianza y enriquece la experiencia en un proceso de lucha en el que tiende a cohesionarse la vanguardia revolucionaria. La participación de las masas en la defensa de sus conquistas, en la lucha por el respeto a la vida y la satisfacción de sus justas demandas junto a nuevas formas de la lucha revolucionaria, entre ellas la lucha armada, desembocan en un reagrupamiento de distintos sectores sociales. Todos ellos coinciden en luchar por mejores condiciones de vida y trabajo, por el desmantelamiento de las bandas paramilitares y por el cese del terrorismo de Estado y del régimen de excepción. La inmensa mayoría del pueblo se pronuncia unánimemente por la no intervención en asuntos internos de los países vecinos a fin de evitar el surgimiento de un conflicto bélico de consecuencias incalculables en la región. Dice no a las bases militares en Puerto Castilla, Palmerola, La Mesa, Puerto

Lempira, Amapala, Cerro de Hule y cualquier otro sitio de nuestro territorio. Se opone a que se haga de Honduras una base de intervención y agresión del imperialismo. Y, por supuesto, una de las principales demandas de los sectores progresistas es la expulsión de los asesores e instructores extranjeros, y de todos los ex-guardias somocistas que se organizan para conspirar contra la independencia de Nicaragua.

En las actuales condiciones, son alentadores los signos del entendimiento en la unidad de las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias, que impulsan un proceso único y trabajan para consolidar en la lucha a su Dirección Nacional Unitaria⁴. La situación planteada lleva al Partido Comunista de Honduras y otras organizaciones de izquierda a la conclusión de que en el actual momento y en la perspectiva de resolución de la crisis política existente en el país, se cierra el camino del diálogo cívico. Un proceso revolucionario como el nuestro, con sus nuevas variantes, impone una flexible y creadora táctica, una justa política de alianzas y entendimientos con fuerzas sociales y partidos políticos coincidentes en la lucha por derrotar el injerencismo yanqui, restablecer las garantías democráticas y auspiciar la paz. Nuestro partido tiende a corresponder al actual momento. Nos empeñamos en resolver la necesidad de prepararlo orgánica y políticamente para que pueda llevar a la práctica un plan de acción que le permita desempeñar su misión histórica.

Los comunistas tenemos la firme convicción de que en la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en evitar la fascistización de nuestro país, están la posibilidad de viabilizar nuestro proceso revolucionario, la garantía de la victoria popular y la seguridad de que los hondureños forjaremos nuestro propio destino, sin intervenciones humillantes y sin el chantaje imperialista que hoy amenaza la paz en el área.

En medio de la lucha de los patriotas centroamericanos y con la firme solidaridad del movimiento revolucionario y antiimperialista internacional ¡el pueblo de Honduras vencerá!

¹ El 4 de diciembre de 1972, el gobierno constitucional fue derrocado por un grupo de militares. A partir de entonces se impulsó una política reformista especialmente dirigida a cambiar la estructura de tenencia de la tierra y favorecer un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y algunos cambios en el sistema financiero interno. —N. de la Red.

² Sobre el «plan para el Caribe», véanse en la presente recopilación los artículos de T. Munroe *Cuando la oligarquía está en el poder...* y de Ch. Jagan *El foco de tensión del Caribe*. —N. de la Red.

³ Francisco Morazán (1792–1842): hombre de Estado y militar centroamericano. De 1830 a 1839 presidió la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica y llevó a cabo una serie de reformas progresistas. Fue fusilado por la reacción. —N. de la Red.

⁴ La Dirección Nacional Unitaria del Movimiento Revolucionario de Honduras se constituyó en 1982 y está integrada por representantes de varios partidos y organizaciones de izquierda, incluido el PCH. —N. de la Red.

Empuje combativo, iniciativa política

Jaime BARRIOS

miembro de la Comisión Política del CC
del Partido Comunista de El Salvador

La lucha armada es hoy, en El Salvador, la forma principal en que se expresa la confrontación socio-política. Ya corre el cuarto año en que el pueblo salvadoreño, encabezado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Democrático Revolucionario (FDR)¹, libra una lucha liberadora para derrocar al régimen reaccionario que es apoyado por el imperialismo norteamericano. En las filas del FMLN y el FDR ocupa un digno lugar el Partido Comunista de El Salvador (PCS), que ha logrado ganar alto prestigio entre las amplias masas de la población, el reconocimiento de sus compañeros de lucha y aliados. El PCS se distingue como una organización que observa consecuentemente el principio de la unidad de las fuerzas revolucionarias y democráticas, sin el cual es inconcebible el triunfo de nuestra justa causa.

El auge de la lucha popular en El Salvador ha coincidido con el momento en que el Washington oficial arreció el curso aventurero en su política exterior, fundamentada en el armamentismo y el intervencionismo, en la sublimación delirante de supuestos derechos imperiales de Estados Unidos y en el franco menosprecio de los intereses de los Estados soberanos. La Administración Reagan pretende que la derrota de la revolución salvadoreña sirva para sentar un precedente legitimador que le permita establecer, como norma internacional, la injerencia directa de Estados Unidos en los asuntos de otros países, para aplastar la aspiración de sus pueblos a la libertad y la justicia social.

Desde el momento en que nuestro movimiento revolucionario entró en su fase de auge, Washington prepara una

intervención en El Salvador de mayores proporciones *que la* practicada hasta ahora. Los estrategas de la Casa Blanca consideran que la misma les ayudaría a resolver el conflicto salvadoreño en el más corto tiempo posible, evitando así la repetición del error en que incurrieron en Vietnam: la guerra prolongada desfavorable. Al mismo tiempo, los círculos gobernantes de Estados Unidos necesitan justificar la intervención ante su propio pueblo y ante la opinión pública mundial, ya que ésta incide, indudablemente, en la posición de sus aliados eurooccidentales. Con este fin, pretenden presentar el proceso revolucionario en El Salvador como la expresión de los «antojos expansionistas» de la URSS, Cuba y Nicaragua, como parte del conflicto «Este-Oeste» a escala mundial. Su verdadera intervención político-militar en El Salvador, la Administración Reagan la presenta falazmente como una condición indispensable para consolidar en el poder a un «Gobierno moderado», que, presuntamente, sea capaz de poner fin al derramamiento de sangre.

Sin embargo, la heroica resistencia del pueblo salvadoreño y la solidaridad internacional frustran los planes de los imperialistas. Las organizaciones revolucionarias de El Salvador, que marchan en íntima conjugación unitaria y que se apoyan en la inmensa mayoría de la población, avanzan firmemente hacia la victoria.

Cuando comenzó la guerra popular revolucionaria, nuestras experiencias en la lucha armada y en el campo político-diplomático no eran suficientes. En las filas del FMLN y el FDR carecíamos de una concepción precisa de la necesidad de conjugar orgánicamente acciones en los dos frentes. En la actualidad, han crecido considerablemente nuestras capacidades de rechazar los ataques del enemigo y asestarle golpes demoledores. En las cruentas batallas, nuestro ejército rebelde ha dominado muchos conocimientos del arte militar. El hecho de que la brega activa debe desplegarse no sólo en el campo de batalla, sino también en el campo político y diplomático, es ahora una profunda convicción de todas las organizaciones salvadoreñas empeñadas en la lucha contra el régimen criminal. Ahora, *la razón de nuestra fuerza y la fuerza de nuestra razón se han abierto campo dentro y fuera del país.*

Con la ofensiva iniciada el 10 de enero de 1981, el FMLN demostró su capacidad para actuar simultáneamente y con eficacia en todo el territorio nacional. Sin embargo, debido a nuestras debilidades en armas y pertrechos no pudimos sostener por mucho tiempo la campaña. Fundamentándose en análisis críticos y autocríticos de la situación, el FMLN proclamó la consigna «¡Resistir, desarrollarnos y avanzar!», la cual sintetizaba el próximo curso de la lucha: consolidación de la retaguardia, máximo desarrollo de nuestras fuerzas, el aseguramiento de su movilidad y la resistencia activa, evitando caer en el marco de la guerra de posiciones.

Durante siete meses (a partir de febrero de 1981), el ejército revolucionario cumplió el propósito planteado. Se estableció un *equilibrio estratégico*, es decir, una situación en la que el enemigo no podía ya vencernos ni nosotros teníamos la fuerza suficiente para ganar la guerra. Sin embargo, desde agosto de 1981 hasta octubre de 1982, el FMLN realizó seis campañas. Ya en diciembre de 1981 se desarrolló una amplia ofensiva que, prácticamente, se mantuvo ininterrumpida hasta abril de 1982. El régimen se vio obligado a pasar a la defensiva, pese a que inútilmente intentó reiteradas veces rechazarnos, penetrar en profundidad en los territorios controlados por el FMLN y demoler su poderío.

La batalla del cerro El Moscardón (5 de junio de 1982) marcó un viraje de la guerra en favor nuestro. En este mes, los destacamentos del FMLN desarticularon un batallón de tropas élites del Gobierno; en el combate murió el jefe de la Sexta Brigada de Infantería, se capturó al viceministro de Defensa, coronel Francisco Adolfo Castillo, uno de los cuatro miembros del Alto Mando del ejército. Este fue un serio golpe a la deteriorada unidad del enemigo que abonó el terreno de sus contradicciones. La derrota se manifestó seriamente en la moral combativa de todo el ejército gubernamental, pues había perdido la batalla no obstante la minuciosa preparación y concentración de grandes contingentes de tropas y medios de fuego. En El Moscardón, el régimen concentró más de 4.000 efectivos y el mando fue encomendado a los oficiales más calificados. Los enemigos realizaron fuertes bombardeos de nuestras posiciones con la aviación y la artillería, combinados con

helicópteros artillados y tropas aerotransportadas. Además, las tropas gubernamentales fueron apoyadas por fuerzas armadas de Honduras que avanzaban desde las zonas fronterizas hacia la profundidad del territorio salvadoreño, pretendiendo, con una operación de pinzas, aniquilar los destacamentos de los rebeldes.

El 9 de octubre de 1982, el FMLN dio inicio a una nueva campaña. Las operaciones adquirieron una envergadura tan amplia que el ministro de Defensa, general José Guillermo García, decidió abandonar el terreno de combate «para no caer —son sus palabras textuales— en la trampa tendida por los guerrilleros». Para justificarse, el general declaró que los éxitos de los rebeldes no tenían gran importancia.

Pero los hechos hablan por sí mismos. Es el propio ejército títere el que se ha transformado en nuestro abastecedor de armas y municiones. Sólo desde junio hasta octubre de 1982 recuperamos del enemigo 650 armas de infantería, más de 20 cañones, morteros y ametralladoras pesadas y cerca de 80.000 cartuchos. Las bajas del enemigo, entre muertos y heridos, ascendieron a más de 1.700. Se hicieron 235 prisioneros². Las pérdidas del FMLN ascendieron a 63. Podría preguntarse: ¿Y los centenares e incluso miles de guerrilleros muertos acerca de los cuales se habla en los boletines gubernamentales? En realidad se trata de ciudadanos civiles (hombres, mujeres, ancianos y niños), asesinados como fueron asesinados en su tiempo los habitantes de la aldea vietnamita de Song My, los refugiados de los campamentos palestinos de Sabra y Shatila. La soldadesca, ante la imposibilidad de aniquilar a los rebeldes, hinca sus colmillos en la población indefensa.

•

Los éxitos del FMLN superaron todo lo esperado. El enemigo sufre crecientes pérdidas y abandona muchas zonas donde antes tenía sus bases. En sus unidades son habituales las deserciones, las insubordinaciones individuales e incluso colectivas (se trata hasta de compañías enteras) contra los jefes. Por otra parte, son cada vez más los soldados del ejército gubernamental que se rinden al oír los primeros disparos. Estos son los resultados de nuestra política

orientada a aplicar un tratamiento humanitario a los prisioneros. El FMLN cumple unilateralmente los convenios de Ginebra, lo que contrasta, a ojos vista, con la actitud del enemigo, quien mantiene el principio «guerrillero visto, guerrillero muerto».

El régimen necesita una victoria, aunque sea sólo local, sobre los destacamentos del FMLN, para impedir el desplome moral de las tropas gubernamentales, neutralizar la acción corrosiva de las contradicciones internas que desintegran el ejército y todo el sistema del poder oligárquico, asegurar la estabilidad del propio Alto Mando, amenazada gravemente por la conspiración en su contra. Este trata de aprovechar cualquier posibilidad para demostrar sus «éxitos militares».

Al mismo tiempo, el Alto Mando enemigo comprende que la aplicación de la misma política militar, hasta aquí trazada, significaría ahondar bruscamente el deterioro del estado moral y físico de sus tropas, la agudización de los conflictos entre las distintas fracciones de la oficialidad y, por tanto, desembocar en una situación fronteriza al desmoronamiento del ejército gubernamental.

Tratando de evitar nuevas derrotas, el régimen reexaminó su estrategia y táctica. Ahora centra su atención en la defensa de los principales objetivos político-militares y la protección de los recursos económicos que él controla. Se trata de las grandes ciudades, dependencias gubernamentales, centros de la conducción política y militar, comunicaciones telegráficas y telefónicas, cosechas de café y algodón, instalaciones agropecuarias, plantas hidroeléctricas y sistema de transporte. Todo esto significa que las autoridades tratan, ante todo, de reforzar la defensa de las franjas Central y Sur del país, las cuales, como dijo el general García, son su parte más importante desde el punto de vista demográfico, económico, político y militar.

Hoy puede afirmarse con toda razón: ha fracasado el plan de la Administración Reagan que se planteaba comenzar la «pacificación» de El Salvador después de las elecciones de marzo de 1982. Washington confiaba en que el Partido Demócrata Cristiano (considerado por él como fuerza centrista) ganaría la mayoría absoluta de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no fue así. Los

ultraderechistas, mediante maniobras políticas, se aseguraron dicha mayoría. Fue electo Presidente de la Asamblea el fascista Roberto D'Abuisson, jefe de los «escuadrones de la muerte» y autor intelectual del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fuera Arzobispo de San Salvador y defensor de los intereses populares.

Hasta octubre de 1982, Washington, que actúa a través de Dean Hinton, embajador norteamericano en El Salvador, y otros emisarios, llevaba a cabo un tenso juego entre bastidores para «depurar» la fachada del régimen sanguinario. Como resultado, se creó una nueva alianza integrada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Acción Democrática (PAD). Dentro de esta alianza se encuentra también el ministro de Defensa y la camarilla militar que éste dirige. El objetivo era consolidar el «centro democrático» que permitiera desplazar la odiosa figura de D'Abuisson como Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

¿En qué radica el meollo de las contradicciones entre la Administración Reagan y los fascistas salvadoreños? La cuestión consiste en que Washington no logró convencer al partido de D'Abuisson, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y a los sectores fascistas del PCN de que era necesario impulsar algunas reformas. La Administración Reagan necesita fingir algunas reformas, presentándose como partidaria de las transformaciones en nuestro país. La Casa Blanca quiere convencer a la opinión pública norteamericana y a la oposición en el Congreso de que, después de las elecciones de marzo, el poder en El Salvador pasó a un Gobierno de «corte democrático». Desde luego, los imperialistas norteamericanos necesitan sólo algunos cambios epidérmicos. En primer lugar, quieren crear una serie de instituciones estatales, estructuradas burocráticamente, que puedan dar una impresión favorable en el extranjero. Pero, al mismo tiempo, temen que las autoridades, una vez echado a andar el plan reformista, no puedan controlar el desarrollo de los acontecimientos, teniéndose en cuenta la agudización extrema de la lucha de clases en El Salvador. Así pues, el sentido de las discrepancias está claro: a las fuerzas imperialistas de los EE.UU., les convienen maniobras reformistas que maquillen al régimen, pero los fascis-

tas de nuestro país no quieren ni siquiera que se hable de cambios.

Determinados círculos de la oligarquía salvadoreña no aceptan de buena gana que las importantes decisiones políticas se tomen en Washington y se impongan con el método de diktat. Por ejemplo, les tiene molestos el que el Departamento de Estado yanqui presionara para que Alvaro Magaña, aparentemente menos comprometido que otros pretendientes de la derecha, se designara Presidente Provisional de la República. Los agricultores, comerciantes e industriales de la zona oriental del país exigieron a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente «no dejarse presionar ni sorprender por fuerzas extranjeras o internas»; acordaron abstenerse de realizar toda clase de labores productivas en su zona siempre y cuando no se respetaran las decisiones de la Constituyente. La elección de Magaña, en mayo de 1982, condujo al desmoronamiento de la coalición derechista encabezada por D'Abuisson, ya que el PCN, que la integraba, dio su apoyo a la candidatura indicada por Washington.

Acerca de las contradicciones existentes en el campo del enemigo nos hablan de la manera más elocuente las reagrupaciones políticas constantes y las nuevas divisiones. Se ahonda el fraccionalismo del PDC, en el que existen dos alas: la tradicional, encabezada por José Napoleón Duarte, ex Presidente del país; y la centrista, que tiende a transformarse en una organización independiente (está dirigida por F. Chávez Mena, ministro de Relaciones Exteriores). El PCN, que fue partido oficial de El Salvador durante casi 18 años (1962–1979), se ha desintegrado en dos agrupaciones: el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAIS) y el Movimiento Estable Republicano Centrista (ME-RECEN). Como resultado de semejantes metamorfosis, después de las elecciones de marzo aparecieron en el país otros siete partidos burgueses.

En este abigarrado muestrario político entran también algunas fuerzas que apoyan los limitados proyectos reformistas propuestos por Washington. Otras manifiestan interés, de manera abierta o en términos escurridizos, hacia las posiciones de la Internacional Socialista. En su tiempo, algunos representantes del PCN expresaban sus simpatías

a los socialdemócratas. El PAD levanta algunas banderas que podrían considerarse coincidentes también con las posiciones socialdemócratas. En la palestra política reapareció el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), que se llama ahora Movimiento de Unidad Nacional de Izquierda Nacionalista (MUNID). Su dirigencia afirma que en él están presentes todas las tendencias de izquierda, «desde la socialdemocracia hasta el eurocomunismo». El movimiento se proclamó una organización que se pronuncia por la solución pacífica de la crisis salvadoreña, con la participación del FMLN y el FDR.

•

Los tenaces intentos de los círculos dirigentes y sus protectores norteamericanos de no tomar en consideración el alineamiento real de fuerzas en el país y los desesperados esfuerzos por salir del atolladero mediante la intensificación de la guerra, ahondan el deterioro de la economía salvadoreña, que se encuentra en una grave depresión.

Según la apreciación del Fondo Monetario Internacional (informe difundido internamente el 7 de abril de 1982), «el Gobierno está prácticamente en bancarrota». En el informe se indicaba que las reservas líquidas de El Salvador habían caído en 1981 hasta 2,5 millones de dólares. El producto interno bruto durante ese año (igual que en el año anterior) se redujo en un 9,5 %. La fuga de capitales secó al sector privado: durante los últimos cuatro años, abandonaron el país más de 800 millones de dólares. Se vieron en un estado crítico las empresas del Estado, con un déficit global de 600 millones de dólares en 1981³. La actividad económica se mantiene a un nivel mínimo sólo gracias a los empréstitos norteamericanos.

Según datos oficiales, el poder adquisitivo de la población en 1980–1982 ha disminuido en el 50 %⁴. Durante ese período se cerraron 235 empresas, que dejaron cesantes a cerca de 25.000 trabajadores. La Unidad de Investigaciones Muestrales del Ministerio de Planificación de El Salvador comunicó que hacia mediados de 1980, la tasa de desocupación había alcanzado el nivel del 23 % de la población apta para el trabajo; el subempleo, el 39 %. El análisis de la Sociedad de Comerciantes e Industriales de

El Salvador muestra que hacia mediados de 1982 no tenía salario permanente cerca del 40 % de la población económicamente activa. Si nos atenemos a estos datos, resulta que existe una masa de desempleados y subempleados que asciende a más de un millón de personas en un país de cerca de cinco millones de habitantes.

La economía de El Salvador está deteriorada. El peso de las crecientes dificultades, de la lucha cotidiana por sobrevivir, recae no sólo sobre los trabajadores, que son las primeras víctimas de la crisis, sino también sobre las capas medias y los empresarios que no pertenecen a la oligarquía. La masa fundamental de ellos se solidariza con la política del Frente Democrático Revolucionario. Parte considerable de estas capas, ante todo los pequeños empleados, se incorpora activamente en la lucha contra el régimen, participando en las huelgas de protesta y ayudando a los rebeldes. Pero ante el temor de quedarse sin medios de existencia e incluso de perder la vida (las acciones sangrientas de los órganos represivos y de las bandas fascistas no dejan la menor duda de que sea posible semejante resultado), muchos de sus representantes no ingresan formalmente en el FDR y actúan con gran cuidado. Pero las fuerzas revolucionarias continúan su insistente labor política entre estos grupos de la población, comprendiendo tanto sus precauciones como sus deseos de liberar al país de los horrores de la guerra y la ruina.

•

Guiándose por las sinceras aspiraciones de poner fin al derramamiento de sangre, a los sufrimientos del pueblo salvadoreño, a prevenir la peligrosa extensión del conflicto bélico a toda el área centroamericana, el FMLN y el FDR presentaron en octubre de 1982 la proposición de iniciar con el régimen un diálogo político.

¿Qué muestra este hecho? ¿Será posible que los rebeldes deseen sentarse a la mesa de negociaciones junto con los fascistas? No, propiamente se trata de otra cosa. El FMLN-FDR se ha dirigido no a ellos, sino a las principales instituciones del actual poder del Estado, ha llamado a quienes aún no están paralizados por la demencial solu-

ción militarista, capaces de comprender que la guerra contra su propio pueblo carece de perspectivas victoriosas. Este paso se debe no a la debilidad, sino que a la fuerza, a la amplitud de nuestros puntos de vista. Y este paso decidimos darlo, no de súbito, sino que ateniéndonos a la lógica de nuestros principios, compartiendo la opinión de los Estados amantes de la paz, expresada desde la alta tribuna de la ONU, desde la que ha sonado, reiteradas veces, el llamamiento a cesar la carnicería en América Central. Los revolucionarios salvadoreños hemos tratado durante muchos años de materializar la voluntad popular valiéndonos de medios políticos, pero fueron, precisamente, la oligarquía y los imperialistas quienes obstaculizaron todas las vías, obligándonos a empuñar las armas. Pero también en esta situación estamos dispuestos a utilizar todas las posibilidades para hacer realidad las aspiraciones del pueblo salvadoreño.

Las proposiciones de las organizaciones revolucionarias fueron formuladas del modo siguiente. El FDR y el FMLN, por una parte, y por la otra, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente y las Fuerzas Armadas de El Salvador, deben iniciar prontamente un diálogo directo sin condiciones previas, orientado a encontrar caminos que conduzcan al establecimiento de la paz en nuestro país y que contribuyan a la distensión en la región centroamericana. Para organizar y posibilitar el diálogo debe crearse un Grupo de Buenos Oficios, que ponga en comunicación a los delegados de las partes y asegure el inicio y desarrollo del mismo. Ambas partes deberán realizar un examen de las formas de participación en el diálogo de otras fuerzas políticas e instituciones sociales, incluidos los partidos, organizaciones laborales, asociaciones de empresarios, sectores eclesiásticos, universidades, colegios profesionales y otros sectores gremiales interesados en contribuir al cese del derramamiento de sangre. Como muestra de buena voluntad y seriedad mutuas, y para arribar a resultados positivos, el diálogo deberá realizarse con la presencia de testigos solventes que podrán ser ciudadanos salvadoreños o extranjeros.

Solicitamos que el documento con estas proposiciones fuera entregado por Monseñor Arturo Rivera y Damas, Ad-

ministrador Apostólico de San Salvador, quien lo hizo el 21 de octubre de 1982. Cinco días después, el FMLN y el FDR hicieron público su documento. Este tiempo transcurrido fue suficiente para que la tercera «parte interesada» —la Administración Reagan— pudiera conocer nuestro plan. Por lo visto, el Presidente Provisional de El Salvador puso inmediatamente este plan en conocimiento de sus protectores de Washington, pues en esos mismos días ellos mismos empezaron a hablar del diálogo, pero no para poner fin a la guerra por medios pacíficos. Esta maniobra propagandística perseguía un solo objetivo totalmente distinto: disputar la prioridad a las fuerzas revolucionarias salvadoreñas en la búsqueda de una solución política del conflicto. Los imperialistas tendieron una cortina de humo, tratando de presentarse ellos mismos como partidarios de esa solución y de neutralizar el efecto de la iniciativa del FMLN-FDR.

Cuando dimos a conocer nuestro documento, la Administración Reagan no pudo rechazar de inmediato las proposiciones constructivas. Por eso se eludió, utilizando para ello una declaración ambigua. Esta misma pauta la siguieron Alvaro Magaña y el general García. Sólo D'Abuison rechazó tajantemente el diálogo. Algunos personeros de los círculos dirigentes de El Salvador declararon lo siguiente: que los rebeldes depongan las armas y, una vez hecho esto, se incorporen al proceso «democrático». En otras palabras, ellos exigen la capitulación del FMLN y del FDR en su conjunto y de cada organización que los integra.

Pese a todo lo anterior, al comenzar el año 1983, algunos personeros de los gobiernos norteamericano y salvadoreño mostraron interés por la negociación. ¿Qué hay detrás de esta actitud? El «interés» apareció en un momento crítico para el régimen oligárquico desde el punto de vista militar y político. Las proposiciones del FMLN y del FDR de comenzar el diálogo y las demostraciones de la firme decisión de negociar, nos han ampliado el círculo de partidarios en el campo internacional. Y por lo contrario, el régimen salvadoreño se ha aislado más. El interés que nuestros enemigos tienen en la negociación estriba en que piensan llevar agua a su molino, pues les permitiría abrirse espacio internacional. Es, en esencia, una maniobra polí-

tica en cuyo fondo está la pretensión de dividir al frente revolucionario y, finalmente, derrotarlo militarmente.

El hecho de que en enero de 1983 el Sr. Reagan haya certificado, una vez más, en beneficio del Gobierno salvadoreño en el sentido de que en El Salvador ha mejorado el respeto a los derechos humanos y reafirmado, asimismo, su decisión de continuar la ayuda militar al régimen genocida, confirma que la Administración en su conjunto no está interesada honestamente en lograr la paz en nuestro país por medio de la negociación, sino que pretende profundizar la guerra.

•

Después de analizar la situación creada a raíz de la iniciativa de diálogo del FMLN y el FDR, el Partido Comunista de El Salvador llegó a esta conclusión. La guerra popular revolucionaria sigue siendo determinante en el escenario político, social, económico y militar del país. Nadie puede ignorar la fortaleza y la representatividad del FMLN-FDR, que son, precisamente, las que originan y condicionan las contradicciones en el seno de nuestros enemigos. Si disminuyeran nuestra fortaleza y representatividad, el enemigo se consolidaría.

Todas las propuestas de las organizaciones revolucionarias para solucionar políticamente el conflicto, son una demostración paladina de que en nuestro proceso liberador no existe ninguna desviación guerrillera. Combinamos ampliamente la lucha armada con la lucha no armada⁵.

Como es sabido, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero la vida nos demuestra que, una vez desatada, esta tiene su propia política y que cada una de las partes beligerantes aplica la suya propia emprendiendo las correspondientes acciones. Nuestros enemigos tratan, neciamente, de hacer pedazos nuestra unidad revolucionaria. Recurriendo a las elecciones amañadas y a las falsas aperturas democráticas, inventando nuevas «reformas», los imperialistas norteamericanos y la reacción interna tratan inútilmente de aislarnos de las masas. Elaboran libros «blancos»⁶, o de otros colores, tratando de demostrar lo imposible o lo falso.

Nuestra política está orientada a utilizar la mínima posi-

bilidad para lograr la paz mediante las negociaciones. Sin embargo, el enemigo nos obliga a librar la guerra. Y en este enfrentamiento histórico, las fuerzas revolucionarias demuestran cada vez más que están en condiciones de defender con firmeza sus posiciones. Este curso proporciona resultados palpables. Los trabajadores se cohesionan más estrechamente en torno a su vanguardia combativa. La Iglesia Católica de El Salvador y las masas creyentes comparten nuestros anhelos de paz. Se amplían las fuerzas que se pronuncian por la paz, la justicia, la democracia y la defensa de la patria contra la injerencia imperialista.

No obstante la sed de sangre de los verdugos con uniforme militar y de las bandas fascistas, el pueblo salvadoreño continúa fiel a su voluntad de vencer, no debilita la lucha por el triunfo de su justa causa. Tanto la iniciativa militar como la iniciativa política están del lado de la revolución.

¹ El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, surgido el 10 de octubre de 1980, es expresión de la unidad, en el terreno político-militar, de cinco organizaciones rebeldes de izquierda: Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional y Fuerzas Armadas de Liberación (organismo militar del Partido Comunista de El Salvador). La agrupación política del Frente Democrático Revolucionario, formado el 18 de abril de 1980, es mucho más amplia por su composición. La integran más de cien organizaciones políticas, sindicales, sociales y otras organizaciones de masas, que se pronuncian contra la odiada dictadura de la oligarquía. —N. de la Red.

² En el informe del ministro de Defensa, presentado en julio de 1982 a la Asamblea Nacional Constituyente, se admitía que en los 12 meses anteriores, el FMLN había causado a las tropas gubernamentales, entre muertos, heridos y desaparecidos (con la palabra «desaparecidos» se sobreentienden los prisioneros y desertores), 3.800 bajas. Durante los primeros 80 días de la campaña a partir del 10 de octubre de 1982, el FMLN causó 1.170 bajas al Ejército, ocupó más de 600 fusiles e hizo cerca de 300 prisioneros.

³ Véase *Le Monde diplomatique en español*, julio de 1982, p. 11.

⁴ Véase *Venceremos*, No 8, septiembre-octubre de 1982.

⁵ La iniciativa de diálogo presentada por el FMLN-FDR en octu-

bre de 1982, no es el primer paso dado para encontrar una solución política al conflicto. En 1980, el FMLN expresó su disponibilidad de diálogo al Gobierno del Presidente Carter y redactó una propuesta de cinco puntos, la cual, sin embargo, fue retirada. De aquí en adelante las fuerzas revolucionarias de El Salvador han dado reiteradas demostraciones de querer resolver políticamente el problema. Así, en febrero de 1981 se aceptó el proyecto de mediación de la Internacional Socialista. FMLN-FDR se dirigieron reiteradas veces a personalidades de los Estados Unidos y de América Latina con el mismo propósito: propusieron realizar un diálogo privado y directo con la Junta Militar Democrática que gobernó el país hasta marzo de 1982; aceptaron la oferta del Presidente Royo, de Panamá, hecha en 1981 ante las Naciones Unidas. Por último, la propuesta de paz del FMLN-FDR fue presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de octubre de 1981, por el Coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.

⁶ Se tiene en cuenta el «libro blanco», pergueñado por Washington y difundido en febrero de 1981 para demostrar la «injerencia» de Cuba y la URSS en los asuntos de El Salvador y, correspondientemente, para argumentar la lucha contra el «terrorismo internacional». —N. de la Red.

El foco de tensión del Caribe

Cheddi JAGAN

Secretario General del Partido Progresista Popular de Guyana

El Caribe es una zona tradicional de rivalidades interimperialistas. Con su «doctrina Monroe» y su política «de gran garrote», Washington viene considerándolo desde hace tiempo como su natural y legítima zona de influencia y se refiere a ella como a «su lago», «su patio trasero» y «su tercera frontera». Ultimamente, al intensificarse la lucha de liberación nacional de los pueblos, en el léxico de la Administración estadounidense aparecieron, con referencia al Caribe, las expresiones «talón de Aquiles», cuarto «foco de tensión» mundial, «zona de crisis».

Las pretensiones norteamericanas por lo que respecta a esta subregión fueron destacadas por el presidente Reagan en su mensaje del 24 de febrero de 1982 a la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que decía: «La zona del Caribe es una arteria de vital importancia estratégica y comercial para Estados Unidos. Alrededor de la mitad del comercio de EE.UU., las dos terceras partes del petróleo y más de la mitad de los minerales estratégicos que importamos pasan por el Canal de Panamá y el Golfo de México... El bienestar y la seguridad de nuestros vecinos de esta región están ligados a nuestros intereses vitales»¹.

La preocupación de los círculos imperialistas estadounidenses por la situación en el Caribe aumentó después de la Revolución Cubana y el surgimiento de lo que Washington denomina «vacío político», y aún más tras los cambios progresistas que se produjeron a continuación, ante todo la revolución de Granada; la declaración de 1979 de los jefes de Gobierno de Granada, Dominica y Santa Lucía en favor de una nueva unidad del Caribe, de contenido anti-

imperialista; el derrocamiento de la sangrienta dictadura de Somoza en Nicaragua; la revolución en Surinam, el 25 de febrero de 1980.

Estos cambios positivos tuvieron lugar en una situación de profundas crisis del capitalismo mundial y, por otra parte, de fortalecimiento del sistema socialista mundial y de intensificación de la lucha de liberación nacional y de clases, así como en un clima favorable de distensión internacional. Unidos a otros hechos análogos de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta en Asia y África, originaron una sustancial modificación de la correlación mundial de fuerzas, que quebrantó aún más las posiciones del imperialismo y la reacción.

De aquí el viraje producido en la política de EE.UU. y su renuncia a las líneas maestras establecidas a mediados de la década del 70, en las que se hacía hincapié en el «pluralismo ideológico» y los «derechos humanos». La política de «sólido hermano mayor», de «cara sonriente» y ayuda trilateral², de implantación del reformismo y aplicación de métodos más sutiles de control, fue sustituida por la «diplomacia de las cañoneras».

Reagan acusó de «blanda» a la Administración Carter, reprochándole, según decía, haber sacrificado los intereses de EE.UU. Washington comenzó a aplicar una «línea dura» y apostó a la política de confrontación e intervención. Enarbolando la bandera de la «seguridad» y el fortalecimiento de sus posiciones estratégicas, desplegó una ofensiva global en los terrenos militar, político, económico, ideológico y cultural. Los principales objetivos eran: invertir, o por lo menos contener, el proceso revolucionario; recolonizar la subregión según el modelo portorriqueño³; crear un clima más propicio para los monopolios de EE.UU.

Para dar un respaldo ideológico a esta política, la Administración Reagan desplegó una campaña propagandística anticubana y antisoviética. Se propalan falsas afirmaciones que tienen por base una serie de patrañas en el espíritu de la «guerra fría». Se atiza la histeria en torno al «expansionismo soviético» y el apoyo de Cuba al «terrorismo», que supondría, según se sostiene, una amenaza para los intereses vitales y la seguridad de Estados Unidos. Como reconoce la prensa burguesa, para justificar «el más

dispendioso rearme en tiempos de paz de toda la historia de Norteamérica», la Casa Blanca ha vuelto a recurrir a la «teoría del dominó», utilizada en su tiempo para la escalada de la intervención en Vietnam.

En su informe «Una nueva política interamericana para los años 80», el ultrarreaccionario Comité de Santa Fe⁴, formado por «halcones» del entorno de Reagan, atribuyó los cambios operados en el Caribe a «manipulaciones de Moscú» y declaró sin rodeos que Estados Unidos debían poner remedio a la situación⁵. Los autores de dicho informe insistían en que Washington «debe tomar la iniciativa estratégica y diplomática, revitalizando el Tratado de Río⁶ y la Organización de Estados Americanos...»⁷

«Poner remedio» a la situación en los años 60 significaba «impedir a nuevas Cubas en el Hemisferio Occidental». Ahora ya no se trata sólo de impedir «nuevas Granadas y nuevas Nicaraguas». El arsenal de la política de Estados Unidos en el Caribe incluye la presión brutal, las amenazas militares y la agresión económica contra Cuba, Nicaragua, Granada, Surinam y otros Estados progresistas.

La Casa Blanca y el Pentágono se consideran con derecho, «en caso de necesidad», a enviar al Caribe fuerzas mixtas para misiones especiales, integradas por tropas aerotransportadas, unidades navales de choque, infantería de marina y otros contingentes. Menudean en el Caribe las maniobras militares y se ha intensificado la actividad de los servicios de espionaje de Estados Unidos.

En Surinam se han realizado desde el día de la revolución por lo menos seis intentos de golpe contrarrevolucionario para eliminar a la dirección militar progresista y restablecer en el poder a la reaccionaria Administración.

Cuba está amenazada de intervención. La «enmienda Simms» aprobada por el Senado norteamericano (de contenido análogo a la «resolución» que en su tiempo permitió emprender la agresión militar directa contra Vietnam) faculta al presidente para utilizar, sin sanción previa del Congreso, todos los recursos, incluidas las fuerzas armadas, con el fin de oponerse a la supuesta «amenaza cubana».

•

La política de intimidación militar y provocaciones aplicada

por EE.UU. en el Caribe está íntimamente ligada a la estrategia de Washington del «desarrollo económico», orientada a defender los intereses de todo el capitalismo mundial, pero fundamentalmente a perpetuar el dominio del capital monopolista norteamericano en nuestra región.

La Administración Carter, alegando los problemas sociales de los países en vías de desarrollo y la necesidad de que EE.UU. «estuviese al lado de los cambios», se mostró proclive a las soluciones reformistas. De lo que se trataba era de adaptar la política de la Casa Blanca a los grandes cambios del mundo contemporáneo, pero manteniendo los tradicionales objetivos imperialistas. La Administración Reagan desplazó el acento de las reformas y «la satisfacción de las necesidades sociales» a la «pacificación a través del desarrollo», con el propósito de crear un clima propicio para las inversiones privadas. Con este trasfondo propuso a la OEA, el 24 de febrero de 1982, un «Miniplan Marshall» para el Caribe, que fue precedido de una vasta campaña publicitaria y recibió posteriormente el nombre de «iniciativa para el Caribe»⁸.

La nueva criatura de Washington es una mezcla de «reaganomía», modelo portorriqueño y «Alianza para el Progreso» y no puede ser tomada en serio como programa de saneamiento económico de la subregión. La «reaganomía», como es bien sabido, significa nuevos miles de millones de dólares para preparar la guerra, considerables reducciones fiscales para los ingresos de los monopolios y supresión del control de Estado sobre sus actividades, reducción de las asignaciones para fines sociales y ofensiva contra derechos vitales de los trabajadores. El modelo portorriqueño de desarrollo se ha desacreditado desde hace muchos años. La «Alianza para el Progreso» (ambicioso plan de reformas de J. Kennedy para toda la zona latinoamericana) ha constituido un fracaso. A diferencia de esta última, la «iniciativa para el Caribe» tiene una intencionalidad más limitada, netamente anticomunista. En el fondo no es sino un pretexto para incrementar la ayuda militar y económica al reaccionario régimen dictatorial de El Salvador.

¿De qué «desarrollo económico» cabe hablar cuando para él se destina tan sólo el 15 % de la ayuda prevista por la «iniciativa para el Caribe»? El resto se invertirá funda-

mentalmente en gastos militares y en apoyar a los regímenes reaccionarios. La ayuda propuesta es una gota en el mar. Toda ella no representa más que el 9 % de lo que invierten los países del Caribe en la amortización de su deuda exterior, contraída sobre todo con Estados Unidos.

La «iniciativa para el Caribe» es un «vino viejo en odres nuevos». Su concepción económica, limitada a la consideración de los altos costes de la energía y las dificultades de la estabilización de las balanzas de pagos y que presenta las inversiones extranjeras como un sinónimo de justicia social, es una concepción muy miope, pues hace caso omiso de una estructura configurada durante muchas décadas en condiciones de capitalismo dependiente: industrialización monodireccional con tecnología de alto coeficiente de inversión, agricultura de monocultivo orientada a la exportación, que está controlada por monopolios agroindustriales, y un sistema semifeudal de propiedad de la tierra que origina la ruina de los campesinos, el éxodo rural, el hacinamiento en los barrios pobres y el desempleo.

•

Al igual que el resto del mundo capitalista, los países del Mercado Común del Caribe (CARICOM)⁹ se han visto en los últimos años gravemente afectados por la crisis. La mayoría de los Estados de la subregión padecen déficits crónicos en sus presupuestos y balanzas de pagos y tienen dificultades para obtener créditos del extranjero. Tan sólo la importación de alimentos supone para nuestros países un gasto anual de 800 millones de dólares.

Como otros grandes productores de petróleo, Trinidad y Tobago tropieza actualmente con dificultades. El déficit comercial de Jamaica es varias veces superior al nivel de 1980. Pese a la amplia ayuda concedida por la Administración Reagan, el Gobierno de este país no ha podido «liberarse» de la crisis. Barbados, presentada hace poco como un modelo de viabilidad económica y estabilidad política, se encuentra en una difícil situación. Sus principales fuentes de ingresos de divisas —el azúcar y el turismo— se están consumiendo. Santa Lucía es un ejemplo de los complejos problemas con que se enfrentan los pequeños Estados anglófonos de la parte oriental de la subregión. A los sala-

rios extremadamente bajo y el desempleo masivo viene a sumarse un sistema arcaico de posesión de la tierra.

Las cosas no van mejor en Guyana. El Gobierno ha tenido que reconocer su insolvencia y los desastrosos resultados de su economía en estado de depresión. El producto interior bruto decrece, a la vez que aumenta la tasa de inflación. Escasean casi todos los artículos de primera necesidad, que sólo pueden ser adquiridos en el «mercado paralelo», a precios de auténtico mercado negro.

Todos los países del Caribe que siguen prisioneros del capitalismo son víctimas de la espiral inflacionista. La congelación de los salarios por los círculos gobernantes no ha contenido el alza de los precios. Las condiciones de vida de los trabajadores siguen empeorando. Guyana es un ejemplo típico. La presión ejercida sobre la clase obrera, si examinamos la situación en el contexto de la congelación de los salarios, resulta insoportable. Muchos niños van a la escuela habiendo tomado tan sólo una taza de té, y los obreros sólo comen una vez al día. Los gastos más elementales de una familia de cuatro personas son dos veces mayores que el sueldo mínimo de un funcionario público. En el breve período de enero de 1981 a julio de 1982, el salario real de los obreros se redujo, aproximadamente, en un 24 %. Ha aumentado considerablemente el número de familias que viven por debajo del «nivel de pobreza».

La situación en esta zona del mundo se agrava por la contracción del empleo en la agricultura y el éxodo de la población del campo hacia las ciudades. Dado el reducido aumento de los puestos de trabajo en la industria (incluidas la construcción, electricidad, gas y agua), fuente de ocupación masiva, una parte significativa de la gente desplazada sólo encuentra colocación en los servicios y las obras públicas.

Tras analizar la situación en que se encuentran los países de la Comunidad del Caribe, un grupo de expertos formado por el CARICOM para estudiar las «dolencias» económicas y los problemas de los años 80, señaló: «Cuando algunos países cuya tasa de desempleo llega al 30 % (inaceptable para cualquier standard) están atravesando graves dificultades, la perspectiva de una tasa del 40 % sería verdaderamente catastrófica. Además, es preciso te-

ner en cuenta el subempleo, ampliamente extendido... y la desocupación de temporada»¹⁰.

Por consiguiente, la vía de «desarrollo» propuesta por Washington crea en las condiciones del capitalismo dependiente un círculo vicioso de atraso, miseria e inestabilidad y no conduce más que a un mayor avasallamiento de nuestros pueblos. Al igual que los paliativos anteriores, la «iniciativa para el Caribe» fracasará también.

El objetivo político que persigue Estados Unidos es mantener a la mayoría de los países del Caribe y de América Latina en la condición de apéndices neocoloniales y. Estados clientes. Contribuyen a ello los líderes pequeñoburgueses de concepciones cristianas y socialdemócratas que se encuentran en el poder en muchos Estados del Caribe. Al tropezar con la cruda realidad económica y presionados por el imperialismo, suelen seguir un rumbo pragmático en el marco del capitalismo dependiente.

Poco después del triunfo de la revolución en Granada, del derrocamiento por el pueblo insurreccionado del régimen de P. John en Dominica y del triunfo del Partido Laborista en Santa Lucía, los imperialistas y los colaboracionistas propusieron la formación de las «fuerzas de defensa del Caribe».

En octubre de 1982, Barbados, San Vicente, las Granadinas, Antigua, Barbuda, Dominica y Santa Lucía crearon un bloque militar proimperialista, el llamado «sistema regional de seguridad y defensa»¹¹, cuyo elemento inicial habrá de ser la guardia costera conjunta. Estados Unidos intenta ampliar este bloque, incorporando en él a otros países del Caribe, tales como Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana, con el fin de cercar a Cuba y Granada y utilizar a Guyana contra el Surinam democrático revolucionario, del mismo modo que Brasil y Venezuela ejercieron en su tiempo sobre nuestro país una presión en igual sentido.

Recordemos que las maquinaciones del imperialismo norteamericano desempeñaron un papel decisivo en la desestabilización de los gobiernos laboristas progresistas de Dominica y Santa Lucía, firmantes de la Declaración de Granada de 1979 así como del Gobierno socialdemócrata de Jamaica presidido por M. Manley.

Washington trata de convertir a Jamaica en un «modelo portorriqueño» para los Estados del Caribe, sometiéndola por entero a los monopolios norteamericanos. Este país ha abandonado la política de apoyo en las fuerzas propias y de no alineamiento propugnada por el Gobierno de Manley. Ahora, a través del nuevo primer ministro de Jamaica, Estados Unidos está «normalizando» sus relaciones con el dictatorial régimen haitiano de Duvalier. En febrero de 1981, poco después de su llegada al poder, E. Seaga envió a Puerto Príncipe a un representante suyo. El dictador de Haití lo recibió con entusiasmo y exhortó a crear una «cadena de unidad», cuyos eslabones centrales serían Haití y Jamaica. A su vez, el ministro jamaicano de Relaciones Exteriores se refirió a la «urgente necesidad» de constituir un frente común contra «la expansión comunista internacional».

Además de sus intentos de crear un bloque proimperialista en el Caribe, el imperialismo recurre a otras maniobras para contener el proceso revolucionario. Durante su campaña electoral, Reagan avanzó ya la idea de constituir una Comunidad Norteamericana, idea sobre la que insistió en febrero de 1982 al hablar ante la OEA, donde expresó el deseo de «llegar a un acuerdo con nuestros dos vecinos del continente norteamericano»¹². Tratábase de una alianza energética de Canadá, Estados Unidos y México, así como de la formación de un «Mercado Común» regional, con la posible incorporación a él de América Central y el Caribe.

El interés de Washington por esa integración obedece al debilitamiento de sus posiciones políticas y económicas en el mundo. Tras esos planes está el afán de Estados Unidos de controlar la política exterior de Canadá y México y someterlos aún más a su influencia. Dados los tradicionales vínculos de Canadá con los países del Caribe y los de México con América Central, el Capitolio confía en que los Estados Unidos podrán asegurar la estabilidad política (tal como ellos la entienden) de la región y dominar en ella.

*

Pero los intentos realizados por el imperialismo y la reacción local para detener el desarrollo del movimiento liberador en nuestra zona tropiezan con una resistencia cre-

ciente. La agudizada lucha de clases restringe seriamente las posibilidades de Estados Unidos de imponer por la fuerza su voluntad a otros pueblos. Sectores políticos y sociales muy diversos se incorporan al movimiento antiimperialista. Los gobiernos de numerosos países se oponen a los planes hegemónicos de la Casa Blanca.

En el mundo aumenta la inquietud (acentuada después de la intervención en Granada. —N. de la Red.) ante la agresiva política de EE.UU. en América Central y el Caribe, que puede conducir a una confrontación armada, con consecuencias de gran alcance. A la política intervencionista de Washington se oponen los Estados de la comunidad socialista, las fuerzas del movimiento obrero internacional y de los movimientos de liberación nacional, los demócratas del mundo entero. En la subregión está desempeñando ahora un papel positivo la Internacional Socialista, que apoya a la revolución de Nicaragua e insta a buscar un arreglo negociado en El Salvador.

Canadá, México, Venezuela y otros países del Hemisferio se oponen a los planes de Washington de resolver por vía militar los serios problemas del Caribe y se pronunciaron en su tiempo contra la exclusión de Cuba, Granada y Nicaragua de la «iniciativa para el Caribe» de Reagan. Recordaremos también que, en octubre de 1981, los ministros de Relaciones Exteriores de los países caribeños declararon que este plan debería tender a reforzar la integración en esta zona y estar abierto para todos los países, sin ninguna clase de consideraciones políticas o militares. México, seriamente preocupado por la inestabilidad de nuestra región, también ha avanzado una serie de iniciativas audaces para sanear la situación.

Ahora, la Casa Blanca difícilmente puede contar con que la mayoría de los países de la comunidad del Caribe apoye su política aventurera, dada la repugnancia provocada en ellos, entre otras cosas, por los estrechos vínculos de Washington con el régimen dictatorial de Guatemala, como lo evidencia elocuentemente el firme apoyo de los países del CARICOM a Belice, amenazada por la camarilla castrense guatemalteca.

El conflicto de las Falkland (Malvinas), durante el cual Estados Unidos se puso al lado de Gran Bretaña, su fiel

aliado en la OTAN, originó una crisis en las relaciones interamericanas y mostró la verdadera esencia del Tratado de Río, instrumento del imperialismo norteamericano. La correlación de fuerzas cambió visiblemente en detrimento de Washington. Numerosos países latinoamericanos, antes estrechamente ligados a Estados Unidos, pasaron a ocupar posiciones nacionalistas y neutralistas y adoptaron una actitud sumamente crítica con relación al «gran vecino del norte».

La elección de Nicaragua para el Consejo de Seguridad de la ONU constituyó una derrota diplomática de Estados Unidos, una «bofetada» para el imperialismo. Este hecho demuestra que el chantaje político y económico no rinde ganancias.

Cuba, Nicaragua y Surinam son faros de esperanza que infunden aliento a los pueblos oprimidos y explotados del Caribe. En nuestra subregión crece y se desarrolla el movimiento por la liberación nacional y social, al que se incorporan representantes de la clase obrera, el campesinado, la intelectualidad radical y otras capas y fuerzas sociales (incluido el clero) que ya han demostrado que son capaces de luchar.

Desde los tiempos de la «política antiguerrillera» de EE.UU. de los años sesenta, el Caribe ha recorrido un largo camino. Mucho es lo que ha cambiado. En aquel entonces, a la par con el marxismo-leninismo, había un amplio abanico de corrientes ideológicas: la «nueva izquierda», el maoísmo, el neotrotskismo, el nacionalismo cultural negro. Ahora, en casi todos los países de esta zona se han constituido partidos o grupos marxistas-leninistas y democrático-revolucionarios que, pese a ser todavía débiles en el plano organizativo, ya desempeñan un papel de vanguardia y expresan las aspiraciones de los trabajadores.

La reunión consultiva de representantes de 11 partidos y organizaciones comunistas, obreros y democrático-revolucionarios del Caribe, celebrada en agosto de 1982, en Georgetown, exigió la descolonización definitiva en la subregión, expresó su solidaridad con la lucha de los pueblos que defienden su libertad y su independencia, condenó la «iniciativa para el Caribe» de Reagan, destinada a seguir sojuzgando a nuestros países, y destacó la voluntad inque-

brantable de los participantes en la reunión de luchar resueltamente por la paz mundial y el desarme y para conseguir que el Caribe y América Central se conviertan en una zona de paz.

¹ *Cuba's Answer: Reagan before the OAS Council*. La Habana, 1982, p. 52.

² Se refiere a la política de la Comisión Trilateral, que es una organización no gubernamental formada en 1973 por representantes de los círculos gobernantes de los tres centros imperialistas: EE.UU., Europa Occidental y Japón. —N. de la Red.

³ Modelo de desarrollo impuesto por la fuerza a Puerto Rico por Washington y basado en la total dependencia política y económica respecto de Estados Unidos. —N. de la Red.

⁴ Véase en la presente recopilación R. Arismendi. *La política de poder global de Reagan*. —N. de la Red.

⁵ Véase *A New Inter-American Policy for the Eighties*. Prepared by the Committee of Santa Fe. Council for Inter-American Security. Washington, 1980.

⁶ Se refiere al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947. —N. de la Red.

⁷ Véase *A New Inter-American Policy...*

⁸ Para más detalles sobre esta cuestión véase en la presente recopilación T. Munroe *Cuando la oligarquía está en el poder...* —N. de la Red.

⁹ Grupo político-económico integrado por la mayoría de los países anglófonos del Caribe. —N. de la Red.

¹⁰ *The Caribbean Community in the 1980's*. Report by a Group of Caribbean Experts. Caribbean Secretariat, Coles Printery Barbados, 1981, p. 41.

¹¹ EE.UU. intentó torpemente utilizar esta organización como tapadera para su intervención en Granada. —N. de la Red.

¹² Véase *Cuba's Answer...*, p. 52.

**LOS COMUNISTAS
EN LA LUCHA POR
LA DEMOCRACIA**

Resultado de la lucha popular

Felipe RODRIGUEZ

miembro del CC del Partido Comunista de Bolivia

Los comunistas bolivianos siempre hemos tenido una firme fe en la fuerza del pueblo trabajador y del movimiento revolucionario en nuestro país. Poco después del sangriento putsch de julio de 1980 que impuso la dictadura del Gral. García Meza, la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Bolivia constataba: «Cierto que el país se encuentra copado por los tanques, por la aviación, por la infantería, por la caballería, por la artillería... Cierto que se asesinó y asesina a decenas de bolivianos; que se apresa, tortura, confina y reprime a miles de hombres y mujeres... Pero eso no significa que se haya consolidado el Gobierno de ocupación. Las instituciones estatales se mueven por su propia inercia; pero la sociedad boliviana se debate en una sorda crisis que estallará en cualquier momento»¹.

Efectivamente, esa explosión social que fermentaba en medio de la ineptitud y la corrupción del régimen usurpador —que sólo atinaba a desquiciar la economía nacional y hambrear al pueblo trabajador con las recetas catastróficas del Fondo Monetario Internacional— no tardó en conmocionar al país entero. Prácticamente todos los sectores laborales se aprestaron a enfrentar a la dictadura. Cobró renovado impulso la actividad clandestina de los partidos políticos revolucionarios, democráticos, antifascistas.

Bajo el impacto de la creciente resistencia popular, la dictadura que pretendía afirmarse en el poder «por lo menos veinte años», empezaba a tambalearse a escasos meses del golpe. Los negociados escandalosos, la protección cómplice a las mafias del narcotráfico por parte de los jefes del régimen, provocaron a corto plazo profundas

disensiones en el seno de las propias Fuerzas Armadas. De otra parte, el Gobierno no había logrado superar la cuarentena diplomática que lo mantenía en el aislamiento internacional, agregando factores negativos adicionales a su inestabilidad política interna. En estas condiciones, los mandos castrenses relevaron a García Meza de la Presidencia de la República (agosto de 1981) apenas un año después de haberla asumido violentamente, en un intento de mejorar la imagen del régimen y neutralizar la presión social con el recambio sucesivo del dictador visible y con la promesa de una apertura política y sindical a mediano plazo. Pero estas maniobras no pudieron contener el ímpetu combativo de las masas, de la clase obrera organizada y, particularmente, del proletariado minero que es el sector de mayor conciencia clasista y espíritu de lucha.

Huelgas, manifestaciones, paros cívicos multitudinarios², etc. se sucedieron diariamente a lo largo de varios meses. Las reivindicaciones económicas y políticas, el rechazo a los paquetes de medidas fondomonetaristas y otras demandas de tipo social, se convirtieron pronto en un cuestionamiento global de la dictadura y en la exigencia perentoria de democratización del país. La intensa actividad sindical confluyó en un torrente único con la lucha política antiguubernamental, hasta desembocar en una ofensiva generalizada de las masas que determinó la crisis del poder militar, el desmantelamiento de la dictadura y el repliegue de las FF.AA. a sus tareas profesionales específicas, dando paso a la decisión soberana del pueblo, que en tres elecciones consecutivas había votado mayoritariamente por la UDP como su alternativa de Gobierno³.

•

De ese modo, el 10 de octubre de 1982 pudieron finalmente asumir sus funciones constitucionales los candidatos electos de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Dr. Hernán Siles Zuazo y Lic. Jaime Paz Zamora, como Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente.

Este desenlace de los acontecimientos no supone, por tanto, una idílica «entrega del mando a los civiles», como pretenden ciertos círculos interesados en promover la idea

de la «autoconversión democrática» de los dictadores del Cono Sur americano, al margen de la lucha de los pueblos. En la prensa de los EE.UU., por ejemplo, se puede encontrar afirmaciones en el sentido de que los cambios operados en nuestro país se deben a la política de la Casa Blanca. Conviene puntualizar al respecto: los Estados Unidos, aunque no consideraban a los generales como socios seguros y hasta les privaban a veces de cierta ayuda, apoyaron siempre a la reacción boliviana y no repararon en los medios para tratar de impedir que la coalición de partidos de izquierda en la que participaban los comunistas alcanzara el poder.

La reacción no cedió voluntariamente sus posiciones. Se trata de una incuestionable victoria ganada por el pueblo en tenaces y prolongadas batallas, a costa de incalculables sacrificios y víctimas y, al mismo tiempo, es el resultado de la política principista de la UDP. La Unidad Democrática y Popular se constituyó a comienzos de 1978, sobre la base del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), partido del nuevo Jefe de Estado; del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de cuyos dirigentes es Jaime Paz Zamora; del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y de otras organizaciones políticas menores.

La UDP no fue un agrupamiento circunstancial destinado a enfrentar situaciones de coyuntura o compromisos electorales transitorios, sino que fue diseñada como un instrumento político unitario de alcances estratégicos, como una opción real de poder democrático para la presente etapa histórica. Según su propia Declaración Política de 1980, la UDP «es un frente de carácter popular, nacional, antiimperialista y revolucionario, forjado en el curso de la dura lucha antifascista librada por el pueblo y desarrollado en la batalla por conquistar la democracia de masas y sus instituciones, impedir la restauración dictatorial bajo nuevas modalidades y establecer un régimen constitucional que garantice el pleno ejercicio de la soberanía popular y que permita a Bolivia alcanzar su liberación nacional, su desarrollo económico independiente y una auténtica justicia social... La UDP no se limitará a buscar la recomposición de la democracia formal, sino el logro de una efectiva democracia de liberación nacional, en la que las grandes

mayorías sean las que dirijan y decidan los destinos del país»⁴.

El carácter y la composición del nuevo Gobierno es la proyección, en el espacio de poder conquistado, del frente político que lo sostiene.

En nuestra conducta política en la resistencia o en el Gobierno los comunistas nos atuvimos y nos atendremos con firmeza y coherencia a los principios generales y a las pautas programáticas elaboradas en común con nuestros aliados. El compañero Jorge Kolle Cueto, Primer Secretario del CC de nuestro partido, subrayó en una entrevista concedida a corresponsales extranjeros que, con el Gobierno de la UDP, Bolivia inició una nueva etapa de su desarrollo. Ahora es imprescindible proseguir el proceso de transformaciones democráticas interrumpido por regímenes castrenses. Los comunistas podemos y debemos hacer nuestra aportación de peso a la solución de los problemas que encara el país, porque participamos activamente en la elaboración del programa electoral de la coalición de las fuerzas de izquierda y porque hoy nos pronunciamos consecuentemente por su realización.

¿Cuál es la esencia de este programa?

Los lineamientos centrales del programa udepista postulan el desarrollo de una economía planificada y orientada hacia la liberación nacional, la defensa de los recursos naturales y su explotación en beneficio del país; el fortalecimiento del papel del Estado en el campo económico y el desenvolvimiento de formas cooperativas, auto y cogestorias⁵. En el plano social se propone la consolidación y estímulo al movimiento obrero y campesino; reivindica los derechos de las mayorías etnoculturales del país⁶, de la juventud y de la infancia, la efectiva igualdad de la mujer; plantea una educación de contenido nacional, científico, popular y antiimperialista.

En política internacional, el programa sostiene el no alineamiento, el principio de autodeterminación, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos de otros Estados; promueve relaciones de amistad con todos los países, en particular con aquellos que luchan contra el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo, por sus derechos nacionales; se pronuncia por el establecimiento de un nuevo orden

económico internacional; enfatiza la necesidad de lograr la reivindicación marítima de Bolivia.

•

El Gobierno popular inició su gestión en medio de una dramática situación económica y financiera, que es la herencia del fracasado modelo de «desarrollo con seguridad» que implementó la dictadura fascista del Gral. Bánzer en la década del 70 y sus sucesores. La producción ha caído drásticamente en los últimos años, las empresas públicas están al borde de la quiebra, hay una enorme deuda externa acumulada que no puede pagarse, las reservas en moneda extranjera están agotadas, la espiral inflacionaria alcanzó índices exorbitantes, entre abril y septiembre de 1982 el signo monetario perdió más de 10 veces su valor de cambio real frente al dólar, faltan artículos de primera necesidad y los precios llegan a niveles irracionales, etc., etc.

En este cuadro angustioso de dificultades, adquieren prioridad en los esfuerzos de la Administración atender los requerimientos inmediatos de la población en orden a resolver el aprovisionamiento normal de alimentos, compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la medida de las limitadas posibilidades existentes, asegurar el empleo, estabilizar el tipo de cambio, financiar importaciones de bienes e insumos para la industria, etc. dentro de un plan de emergencia que, en primer lugar, evite que la crisis se siga descargando sobre la clase obrera y otros sectores empobrecidos del pueblo. A este propósito, el Presidente Siles Zuazo declaró que «el salario mínimo vital y la cogestión obrera serán una realidad» y que se disponía a «proseguir el trabajo que todos tenemos que asumir en defensa de la economía popular y proyectarnos enseguida hacia un programa económico y social sin dependencia; sin más dependencia que los intereses del pueblo boliviano»⁷.

Al propio tiempo, adquiere particular importancia la campaña de moralización iniciada con el fin de sanear la administración pública y todas las instituciones y empresas del Estado, limpiándolas de funcionarios venales, paramilitares y narcotraficantes.

La UDP y su Gobierno gozan de un respaldo de masas que le da posibilidades de movilizar fuerzas muy grandes y apoyarse en la conciencia y capacidad de sacrificio de sus bases obreras y populares para enfrentar con ventaja las dificultades de la coyuntura. Junto a esto, cuenta también la gran simpatía internacional y la solidaridad activa de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa Occidental, de la comunidad socialista, de las fuerzas políticas de amplio diapasón⁸, de los países integrantes del Movimiento de los No Alineados y, en general, de la opinión progresista mundial. Esa solidaridad es indispensable para que Bolivia pueda sortear su situación presente con la ayuda material, créditos y financiamiento que requiere con urgencia.

Obviamente, las simpatías no son unánimes. Las dictaduras del entorno latinoamericano ven con aprensión la transición democrática en Bolivia porque temen el «contagio» que podría acelerar la lucha de sus propios pueblos. Los Estados Unidos no demoraron en expresar su oposición a la presencia de los comunistas en el gabinete y actúan por sus habituales medios de presión económica y diplomática para tratar de imponer su salida del Gobierno. La actitud era presumible y se pueden esperar formas de injerencia aún más prepotentes y agresivas. Pero el pueblo boliviano rechaza enérgicamente las pretensiones intervencionistas del imperialismo y le niega a la Administración norteamericana todo derecho a decidir quiénes pueden y no pueden formar parte del Gobierno de un país soberano, que no es colonia ni dependencia de los Estados Unidos.

Los comunistas expresan en la UDP y en el Gobierno popular los intereses de la clase obrera a la que están indisolublemente ligados y en cuyo seno tienen una implantación decisiva, ocupando posiciones dirigentes fundamentales en la Central Obrera Boliviana (COB), en las Federaciones sindicales de trabajadores mineros, fabriles, etc. Junto a su clase, el PCB aportó su caudal de fuerza y orientación política que si fueron decisivas en la resistencia al fascismo y en las acciones que hicieron posible el triunfo democrático, lo son aún más para el afianzamiento del Gobierno popular y el ulterior desarrollo del proceso.

Por eso, precisamente, la reacción apunta ahora sus fuegos contra los comunistas. Mas, como enseña la experiencia histórica, ese es el primer paso para intentar aislar al movimiento democrático y progresista. Lo que buscan, en definitiva, es descomponer a la UDP e impedirle cumplir sus objetivos liberadores.

•

En el plano político interno, subsiste por cierto el riesgo potencial de la subversión reaccionaria. La oligarquía, el imperialismo y los sectores desplazados del poder buscarán, sin duda, la oportunidad de revertir la nueva situación, tratando de utilizar a sectores militares en sus propios planes golpistas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas han hecho una trágica experiencia, con los generales que, diciendo gobernar en nombre de la institución, la llevaron al desprestigio y a la descomposición, convirtiéndose incluso en verdugos de sus propios camaradas de armas. Y como lo advirtiera el PCB, hay «una reserva moral, de dignidad, de patriotismo en la institución armada, para evitar que ésta continúe enfrentándose a su pueblo, bajo el peligro de comprometer definitivamente su imagen»⁹. Esto se manifestó en la corriente de jefes y oficiales institucionalistas que repudiaron a García Meza y sus seguidores, abominando de sus actos delictivos y de su política antidemocrática, sufriendo por ello las represalias de la dictadura. Aludiendo a la situación de aquellos años, el Gral. Lucio Añez, expresó: «Tuvimos que soportar bajas en las filas de las FF.AA., vivir en la clandestinidad en nuestro propio país, ser perseguidos por nuestros propios compatriotas»¹⁰.

En uso de sus atribuciones constitucionales, el Presidente Hernán Siles Zuazo procedió a cambiar los mandos en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y éstas, a su vez, han constituido un Tribunal Supremo de Honor que, como ha subrayado el Gral. Alfredo Villarroel Barja, nuevo Comandante en jefe de las FF.AA. de Bolivia, «tendrá la responsabilidad institucional de juzgar y sancionar a los militares que en el ejercicio de sus funciones hubieran cometido actos reñidos con la ética castrense, mancillando el prestigio y la honorabilidad de la Institución Armada»¹¹.

Quedan remanentes fascistas que no han sido desmontados por completo de las posiciones que escalaron en el pasado y que, probablemente, aguardan la oportunidad de conspirar contra el Gobierno del pueblo. A ellos se suma la delincuencia internacional del narcotráfico, los resabios fugitivos del viejo nazismo alemán y los terroristas neofascistas de otros países europeos, que encontraron en Bolivia un santuario bajo la protección de los dictadores a quienes prestaron servicios entrenando a sus bandas paramilitares represivas. Desarticular ese aparato subterráneo es por eso una necesidad inmediata, antes de que pueda recomponer sus golpeadas filas y ponerlas al servicio de la subversión antidemocrática interna e internacional. En todo caso, la estabilidad política dependerá fundamentalmente de que se desarrolle una correlación de fuerzas, un nivel de unidad y movilización popular capaz de desalentar y, en su caso, enfrentar cualquier aventura golpista.

Los comunistas estamos bien conscientes de lo complicadas que son las condiciones en que actúa la coalición gobernante. La derecha civil, que no logró estructurar una alternativa viable de poder capaz de oponerse a la UDP y escamotearle otra vez su acceso al gobierno, actúa ahora desde sus posiciones en el Parlamento obstruyendo, retardando o boicoteando la acción del Ejecutivo. Debido a las incongruencias de la Ley Electoral, los partidos de la derecha en su conjunto tienen más diputados y senadores que la UDP, habiendo reunido, sin embargo, mucho menos votos en el cómputo global de las elecciones.¹² Y ahora usan esa mayoría relativa para su juego de oposición taimada y obstruccionista. El frente parlamentario se presenta así como una línea de fricción permanente en la perspectiva inmediata del enfrentamiento político.

En el cuadro de la situación general del país se destaca para el Partido Comunista de Bolivia la tarea de consolidar la UDP y el Gobierno popular, para que el nuevo poder, con el apoyo del movimiento obrero organizado y de las masas, avance en el cumplimiento integral de sus objetivos democráticos, nacional-liberadores y de progreso social. Esto es para los comunistas un deber de consecuencia revolucionaria.

El paso de la dictadura al Gobierno popular en Bolivia responde, naturalmente, a múltiples factores internos. Pero no es un fenómeno de excepción. Expresa tendencias, procesos en desarrollo que, con todas sus peculiaridades, discurren también en otros países de la región que confrontan parecidas situaciones y en los que pueblos hermanos luchan con igual decisión por sacudirse la opresión fascista y las dictaduras proimperialistas. Bien puede decirse, por eso, que los acontecimientos en Bolivia son apenas un anticipo de lo que viene, sin duda, madurando en otros sitios de nuestra América.

¹ *Por un poder democrático, popular, soberano: desenmascarar, resistir y derrotar al fascismo. Rescatar y proyectar la democracia de masas.* Documento de la Comisión Política del CC del PCB, La Paz, septiembre de 1980.

² Acciones de protesta que abarcan a la mayoría de la población (y, a menudo, de magnitud nacional), independientemente de la profesión y pertenencia social. —N. de la Red.

³ La reacción logró frustrar la realización de la voluntad del pueblo. En 1978 se produjo el golpe de Estado de J. Pereda Asbún y en 1979, la derecha que tenía mayoría en el Parlamento impidió la ratificación de los candidatos elegidos de la UDP. En 1980, los resultados de las elecciones fueron anulados por el sangriento putsch de L. García Meza. —N. de la Red.

⁴ *Declaración Política de la UDP.* Bases del Programa de Gobierno, La Paz, 1980.

⁵ Se trata de la participación conjunta de representantes del Estado y de los trabajadores en la administración de las empresas. —N. de la Red.

⁶ Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, las nacionalidades autóctonas, quechua, aymara y, en menor proporción, guaraní constituían en 1980 cerca del 60 % del total de la población. —N. de la Red.

⁷ *Presencia*, La Paz, 1º de noviembre de 1982.

⁸ Los cambios en Bolivia han sido apoyados enérgicamente por la asamblea de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, en la que participaron más de 50 partidos de 20 Estados. —N. de la Red.

⁹ *Por un poder democrático...*

¹⁰ *Presencia*, La Paz, 23 de octubre de 1982.

¹¹ *Ibíd.*, 31 de octubre de 1982.

¹² La UDP tiene en el Congreso 57 escaños del total de 157, pero la apoyan también otras agrupaciones de izquierda y democráticas que no forman parte de la coalición. —N. de la Red.

En bancarrota la política del imperialismo en Chile

Luis CORVALAN

Secretario General del Partido Comunista de Chile

La lucha contra la dictadura de Pinochet ha entrado a una etapa que se caracteriza por la creciente participación y combatividad de las masas. Los más diversos sectores políticos y sociales del país, comprendidos no pocos partidarios del régimen, se dan cuenta ya de que éste es transitorio. Se demuestra una vez más que una tiranía al servicio del imperialismo y de las oligarquías no puede someter por largo tiempo al pueblo.

El régimen fascista de Pinochet se ha guiado por la doctrina de la seguridad nacional, de origen nazi y hecha suya por el Pentágono. Según esta doctrina, en la cual se ha educado a la oficialidad de las Fuerzas Armadas chilenas y de otros países, el enemigo de Chile es, en resumidas cuentas, su propio pueblo. Con esta inspiración foránea se impuso desde el primer momento¹ el terror fascista, se ha asesinado y torturado a miles y miles de personas, se abrieron campos de concentración a lo largo de todo el territorio, se envió u obligó al exilio a centenares de miles de chilenos, y se ha arrasado con las conquistas de los trabajadores, implantándose una dictadura al servicio del imperialismo y la oligarquía. Tal dictadura ha puesto en práctica una política económica que es también de inspiración extranjera. Corresponde a la escuela neoconservadora monetarista de Chicago.

Así, el nacionalismo y el patriotismo de que hace gala Pinochet es sólo de los dientes para afuera. No ha habido Gobierno más antinacional y antipatriótico que el suyo en toda la historia de Chile.

Bajo la presidencia de Salvador Allende se habían lle-

vado a cabo profundos cambios económicos y sociales. Chile se abría camino al socialismo. Ello provocó la ira y el pánico del imperialismo, no sólo porque un país escapaba a su dominio, sino también y sobre todo porque el proceso revolucionario chileno tenía una creciente resonancia en los demás países latinoamericanos e incluso fuera del continente.

Los promotores del golpe militar se propusieron dos objetivos principales: por una parte, restablecer las posiciones del poder político y económico que los monopolios yanquis y la oligarquía chilena habían perdido y, por otra, instaurar un régimen político, económico y social que garantizara per sécula el funcionamiento del sistema capitalista en beneficio de las transnacionales y de los clanes financieros internos. En un país cuyo pueblo había emprendido un camino de profundas transformaciones antiimperialistas y antioligárquicas con la perspectiva del socialismo, este régimen no podía ser sino de tipo fascista.

Mediante la posesión plena del poder político, el régimen de Pinochet ha procedido a la reprivatización de empresas que habían sido nacionalizadas, a la contra-reforma agraria, a la entrega de recursos naturales al capital extranjero, al traspaso a manos privadas de industrias y servicios que desde su nacimiento fueron de propiedad del Estado y, obviamente, a la concentración y centralización del capital, insertando al máximo la economía del país en el dispositivo de las transnacionales. Todo ello formaba y es parte de sus más oscuros objetivos de clase. Pero no ha logrado ni podía lograr lo principal que sus mandantes perseguían, que era el establecimiento de un sistema que les garantizara un desarrollo seguro de la economía capitalista, la paz social —aunque fuese impuesta por las armas— y la desaparición del Partido Comunista, del Partido Socialista, del marxismo, de todos los partidos políticos y de toda expresión democrática. Por el contrario, lo que hace agua es el sistema. Está en bancarrota toda la política del imperialismo, padre de la tiranía fascista, aliado y sostén de la reacción interna. El pueblo chileno lucha por echar abajo esa política y poner en práctica otra diametralmente opuesta, antiimperialista y antioligárquica, que lleve a la completa erradicación del fascismo,

a la creación de un régimen popular y democrático y a retomar el camino de las transformaciones sociales.

La política del imperialismo está en crisis en todo el continente. Primero la revolución cubana y, más tarde, la revolución nicaragüense y granadina y la lucha armada en El Salvador y Guatemala, muestran que Centroamérica y el Caribe es la zona donde la dominación imperialista ha tenido su eslabón más débil y donde la lucha de los pueblos por sacudirse de la opresión de los monopolios ha alcanzado los puntos más altos. También es claramente perceptible el hecho de que, desde el Río Grande hasta la Patagonia, se agitan los pueblos latinoamericanos, se desarrollan las conciencias y las luchas antiimperialistas. La ola reaccionaria que a principios de la década del 70 se abrió paso, sobre todo en el Cono Sur de América, ha perdido fuerza. Aunque todavía siguen en pie regímenes tan oprobiosos como el de Pinochet o el de Stroessner, nuevos vientos han comenzado a soplar. La constitución del Gobierno de la Unidad Democrática y Popular en Bolivia, el ímpetu y el vigor de masas que ha adquirido el movimiento democrático en Argentina, los resultados de las elecciones habidas en el Brasil y en Uruguay², el desarrollo de las luchas obreras y campesinas en Perú y Ecuador, el mayor espacio de libertad que se abre en Colombia y la creciente combatividad y envergadura de las acciones antifascistas en Chile, son algunos de los hechos relevantes que muestran un nuevo y promisorio panorama en el continente.

Esto no significa que lo que venga sea fácil. De ninguna manera. El imperialismo norteamericano, particularmente bajo la Administración de Reagan, defiende sus posiciones en América Latina a tal extremo que aparece dispuesto a cometer el crimen y la aventura de agredir a Cuba, de intervenir o respaldar un ataque contra Nicaragua y de continuar apoyando política, económica y militarmente a las más bestiales tiranías. Ello forma parte de su política global, que lleva a la carrera armamentista, pone sus armas y su dinero al servicio de las peores causas y coloca al mundo al borde del peligro de una hecatombe nuclear.

1

Como otros países del continente, después de la gran depresión de finales de los años 20 y comienzos de los 30, Chile se esforzó por salir del subdesarrollo y de su condición de monoprodutor, por diversificar su economía, por sustituir importaciones con producción propia. De este modo el país se transformó, al cabo de algunas décadas, en una nación de desarrollo capitalista medio. El cobre siguió siendo el principal producto de exportación. Pero cada vez más fue creándose y ampliándose el sector industrial dirigido a satisfacer las demandas del consumo interno en numerosos productos manufacturados. Al mismo tiempo se echaron las bases de la industria pesada y química. Este desarrollo tuvo lugar en medio de un constante forcejeo entre las fuerzas progresistas y las fuerzas reaccionarias. No estaba exento de deformaciones y no fue óptimo en todos sus resultados; pero era la base técnico-material con que contaba el país para avanzar por el camino de su independencia real y del bienestar del pueblo. Este proceso de ascendente fortalecimiento económico es lo que el fascismo ha cortado a sangre y fuego.

Los inspiradores y ejecutores de la política económica de la dictadura empezaron por sentar la teoría de que buena parte de la industria chilena, formada al amparo de una serie de franquicias estatales, era ineficiente y debía ser obligada a modernizarse y alcanzar los más altos niveles tecnológicos. Para ello había que someterla a la competencia con la producción extranjera, y, por lo tanto, había que terminar con el proteccionismo, echando abajo en primer término las barreras aduaneras. Ya en noviembre de 1973, el diario *El Mercurio*³ proclamaba que las empresas no eficientes, «que no puedan producir artículos de calidad y baratos, tendrán que cambiar de rubro o desaparecer». En virtud de tal orientación comenzó la disminución vertical de la producción de numerosas fábricas, el cierre de muchas de ellas y las quiebras, que fueron subiendo año tras año, desde 20 en 1974 a más de 800 en 1982.

Hubo empresarios que, como sentenció *El Mercurio*, se vieron obligados a cambiar de rubro o a desaparecer. Lo que no ha sucedido, y que echa por tierra la teoría preci-

tada, es que la política puesta en práctica haya dado por resultado una modernización del sector industrial. Al contrario, ha quedado más obsoleto. No ha habido renovación del parque industrial, pues los recursos para la inversión, que debieron destinarse a fomentarlo, se dirigieron a la especulación y al derroche. La verdad es que no se buscaba la modernización, sino el desmantelamiento de gran parte de la industria chilena para sustituir la producción nacional por la extranjera. Esto fue advertido por el Partido Comunista. Pero ayer no estaba claro para todos. Hoy, en cambio, lo comprenden muchos de los que apoyaron y defendieron esa política.

Según los economistas del régimen, debía darse preferencia a la producción que en virtud de las condiciones naturales del país pudiese salir con ventajas al mercado internacional. En tal situación estarían, además del cobre y otros minerales, los productos de la madera, las frutas, la pesca y aquellos que teóricamente entregaría la industria que hubiese sido capaz superar su ineficiencia. El régimen se jugó entero en esta dirección, utilizando las «ventajas comparativas» naturales y aplicando, además, una política de salarios de hambre. Tuvo éxitos circunstanciales en razón de haber madurado inversiones efectuadas por los gobiernos democráticos, de la coyuntura favorable del mercado internacional y del manejo ad hoc en ese período de la paridad cambiaria y de otros mecanismos financieros. Pero los hechos han demostrado que resultó ser de corto alcance la política que basa el desarrollo de la economía en el fomento de la producción exportable primaria o de bajo nivel de elaboración, en el uso a destajo del crédito externo y en la apertura ilimitada del mercado interno a la producción foránea.

Si en el pasado Chile hubiese depositado todos los huevos en una canasta, esto es, si hubiese cifrado todas sus esperanzas sólo en las exportaciones de productos primarios que tienen «ventajas comparativas», no habría podido contar, como sucedió ayer, con ramas industriales capaces de satisfacer progresivamente las demandas del consumo interno, desde la industria textil hasta la elaboración de acero, pasando por las que fabrican máquinas y bienes de consumo durable.

La política económica de factura norteamericana aplicada en Chile hace caso omiso de las leyes fundamentales que rigen la economía. Es particularmente aberrante que, en la época de las transnacionales, pretenda hacer depender todo de las bondades del mercado, como en los tiempos de Adam Smith y David Ricardo. Aplica el liberalismo económico en su expresión más reaccionaria, la neoclásica monetarista, que sostiene la tesis de que los precios se determinan en términos absolutos por el volumen del circulante y que la inflación, la crisis, la cesantía y otros trastornos de la economía se deben al mal manejo por parte del Estado de las variables monetarias, o sea que el dinero es el instrumento fundamental capaz de producir variaciones coyunturales y, al mismo tiempo, factor estabilizador del mecanismo de reproducción capitalista.

Una vez más la realidad ha refutado las teorías pseudocientíficas. En verdad, los elementos monetarios juegan un papel positivo sólo si se manejan como parte de una política global que apunte principalmente a la raíz de los problemas y que, por lo tanto, remueva las causas que entraban el desarrollo de las fuerzas productivas. Es, por ejemplo, vital sacar a la economía chilena del dominio de las multinacionales y de la oligarquía financiera. Frente a ellas, los pequeños y medianos capitalistas e incluso grandes capitalistas son constantemente conducidos a la ruina, muchos empresarios se ven obligados a transformarse en apéndices de los monopolios, participando en armaduras y productoras de piezas, distribuidoras o prestadoras de servicios.

La dictadura de Pinochet ha aplicado una política económica que no practican quienes la recetan, los imperialistas norteamericanos. Estos mantienen cuanta protección aduanera y subsidio o medio de defensa y fomento de su economía consideran conveniente, sin perjuicio de recomendar o exigir a los demás que hagan lo que ellos no hacen. Como señalaba *l'Humanité*, a propósito de la Conferencia del GATT⁴ en Ginebra, en esas materias el lema de los norteamericanos resulta ser: «Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago»⁵.

La puesta en práctica de la política económica de Chicago ha estado acompañada de la concepción del «Estado

subsidiario», como supuesta garantía del «bien común» y del libre juego de las fuerzas del mercado. Todo ello se ha presentado en contraposición al socialismo y a la intervención que el Estado ha tenido en Chile y en otros países en favor del desarrollo industrial independiente.

La estricta verdad es que el Estado, bajo el fascismo, ha jugado el rol principal en la modificación regresiva de la estructura económica. Tras este objetivo no sólo ha puesto en marcha los resortes económicos sino también todo el peso del aparato represivo. La política económica de Chicago se ha impuesto por la fuerza de las bayonetas, ahogando, al mismo tiempo, toda libertad de expresión y crítica y monopolizando los medios de comunicación de masas. La llamada «subsidiariedad» del Estado ha funcionado exclusivamente para socorrer a los pulpos del capital financiero de dentro o fuera de Chile, y para perjudicar a los pequeños y medianos industriales y empresarios chilenos y, en definitiva, a los trabajadores, que son los que cargan con el mayor peso de esta política.

Los bancos y grandes empresas industriales vinculadas a los clanes financieros, han sido salvados del colapso mediante recursos del Estado, que salen del bolsillo de todos los chilenos. En cambio, al resto de los industriales y empresarios los lleva a la quiebra o los «ejecuta», liquidando sus bienes. Tal política termina por volverlos contra el régimen. Industriales, agricultores, comerciantes y transportistas denuncian el favoritismo de que gozan los clanes oligárquicos y exigen que el Estado les ayude, así como lo hace con los tiburones de las finanzas.

Chile ha entrado a sacar cuentas. El régimen fascista ha significado ruina, muerte, hambre, represión, deterioro del potencial económico. La tasa de crecimiento histórico del país era desde hace cuarenta años del 3,5⁰/₀. El crecimiento en la década del fascismo es igual a cero. Los cuantiosos recursos que se acercan ya a los 30 mil millones de dólares, obtenidos mediante el endeudamiento externo, la superexplotación de la clase obrera y el remate de las empresas estatales y de riquezas nacionales, y hasta de parques y reservas territoriales, sólo han servido para la especulación y el enriquecimiento de unos pocos, para el despilfarro y la vida dispendiosa de una minoría, para ilu-

sionar por algún tiempo a una parte de las capas medias y llevarlas a vivir de prestado y a sumergirse en el opio del consumismo.

De una dimensión incalculable son los daños causados en la esfera del acervo técnico y cultural del país y en el plano psíquico-moral de una parte considerable de la población. El violento destierro o el exilio obligado de cientos de miles de chilenos que no encuentran en su Patria posibilidades de expresarse ni de trabajar, es un drama que, directa o indirectamente, afecta a casi todas las familias chilenas y constituye para el país un factor que frena su progreso. La mano de obra calificada tenía uno de los más altos niveles del continente latinoamericano. Ese grado de calificación pasa de generación a generación, y se pierde, se corta o sufre una reducción brutal cuando el volumen de la actividad productiva baja por toda una década, como ha sucedido con Pinochet. Si a ello se agrega el desmantelamiento de fábricas y empresas, la alta desocupación y la interdicción y reducción de la vida cultural, universitaria y educacional, la pérdida del país es gigantesca y sólo puede ser recuperada a largo plazo, con una política totalmente opuesta.

2

El fascismo es un sistema que encubre sus fines y se atribuye inspiraciones y objetivos que no tiene. En Chile surgió, en un momento dado, no sólo bajo pretexto de defender la democracia, sino también de restablecer el orden y de preservar la propiedad privada. El Gobierno de la Unidad Popular había protagonizado la más grande hazaña patriótica, la de rescatar el cobre para Chile. Estas y otras medidas que afectaron la propiedad imperialista y oligárquica, fueron tomadas en aras del interés del pueblo y del país. La propaganda ultrarreaccionaria, favorecida por algunas acciones ultraizquierdistas, logró llevar el miedo a los pequeños y medianos capitalistas de la industria, la agricultura, el comercio y el transporte, que se pasaron al campo de los enemigos de los cambios sociales. Lo cierto es que el Gobierno de Salvador Allende promovía la exis-

tencia y el desarrollo de aquellos empresarios, para los cuales había crédito y mercado asegurado en mayor medida que antes. Hoy está claro que el fascismo ha llevado a cabo la más gigantesca expropiación de los pequeños y medianos propietarios en beneficio del gran capital.

El fascismo empieza siempre por atacar a los comunistas y a la clase obrera, para luego ir ampliando el radio de sus enemigos hasta combatir toda expresión democrática y todo sector social cuyos intereses no sean compatibles con los del capital financiero. Este rasgo se corrobora totalmente en el caso chileno. Del ataque al Gobierno de la Unidad Popular pasó al ataque al Gobierno de la Democracia Cristiana⁶, y luego a todo lo progresista del sistema democrático y republicano construido desde el siglo pasado. Del propósito de deshacer la obra de transformación económico-social del Gobierno del Presidente Allende, pasó a trazarse como objetivo romper la tendencia histórica del desarrollo económico independiente que venían sosteniendo las fuerzas populares y gran parte de la burguesía nacional desde hace más de cincuenta años.

Se ha llegado a la estación de término y derrumbe de la demagogia fascista, al momento en que el desarrollo y aplicación de su política deja al descubierto su verdadera faz, y lo coloca, ya no sólo en contra de la clase obrera y de los sectores más avanzados de la sociedad, sino en contra de la mayoría inmensa de la nación.

Hoy día, en el período de las transnacionales del imperialismo, el régimen fascista de Pinochet, que está al servicio de ellas y de los clanes financieros internos, tenía que chocar al fin y al cabo contra el país en general, y por ello no puede prevalecer en definitiva, por más que se apoye en las bayonetas y ahogue la libertad. Más aún, esto último termina también por volverse indefectiblemente en contra suyo.

El fascismo se proclama contrario a la lucha de clases. En los hechos, desencadena la guerra de clases más feroz en contra del pueblo. Pero, como el que siembra vientos cosecha tempestades, ahora la dictadura está bajo el hostigamiento constante del pueblo, crecientemente horquillada por el amplio abanico de la oposición, de la que tuvo desde el comienzo, de la que ha surgido en un largo pro-

ceso de luchas y también de la que se ha creado con su propia política.

El país vive la más profunda crisis económica, social y política que haya conocido desde hace medio siglo. Paros y huelgas rompen la legalidad fascista. Frecuentes manifestaciones y marchas contra el hambre y por los derechos democráticos, tomas de terrenos y otras acciones, conducen a violentos enfrentamientos con las fuerzas represivas de la dictadura. La consigna del no pago de las cuentas de agua potable y luz eléctrica, de los dividendos de las viviendas y de las matrículas en liceos y universidades, ha tenido una acogida de masas. Las municipalidades del régimen están bajo el acoso permanente de centenares y miles de pobladores que van a reclamar contra la cesantía, a exigir atención sanitaria o apoyo para resolver tal o cual problema. Mediante múltiples formas, los estudiantes protestan y se rebelan contra la militarización de las universidades. En todas partes se trata de romper las normas de hierro que ha impuesto el fascismo. En apoyo del movimiento de masas, se producen voladuras de torres de alta tensión, interferencias de radio y canales de televisión y otras acciones desestabilizadoras del poder de la tiranía. Actitudes de rebeldía frente al régimen adoptan incluso los sectores capitalistas más afectados por la crisis, los cuales impiden, por ejemplo, mediante su propia movilización, que sus propiedades salgan a remate por la no cancelación de las deudas contraídas con los bancos.

Durante cierto tiempo, Pinochet estuvo sosteniendo que los problemas que sufría el país eran producto de la crisis que afecta a los principales países capitalistas. Lo concreto es que en la situación que hoy existe en Chile entra en juego un conjunto de factores. En la profunda crisis chilena se funden las repercusiones de la recesión del capitalismo mundial, el freno al desarrollo de las fuerzas productivas impuesto por la dominación del capital financiero interno y externo y el curso cíclico propio de una economía capitalista. La política del fascismo es el factor principal de la magnitud alcanzada por esta crisis. La propia incidencia que la recesión del mundo capitalista tiene en la crisis chilena es, en gran medida, de responsabilidad del régimen por haber debilitado el aparato productivo

interno y haber conducido al país al más alto grado de dependencia respecto al imperialismo. Aquí está el quid del descalabro del modelo económico del fascismo.

El panorama que ofrece Chile no puede ser más desolador desde el punto de vista económico y social. Han desaparecido fábricas enteras. La industria trabaja muy por debajo de su capacidad instalada, con la particularidad de que esta capacidad es inferior a la que existía hace diez años. La agricultura, en sus renglones tradicionales, está en ruinas. La producción de trigo, por ejemplo, que había superado el millón de toneladas anuales, se ha reducido a la mitad. El número de empresas que han quebrado pasa de dos mil. La deuda externa subió, bajo el fascismo, de tres mil y tantos a 18 mil millones de dólares, más de 12 mil de los cuales corresponden al sector privado. Una cantidad superior deben los empresarios al sistema bancario nacional. La tasa de interés real impuesta por los bancos ha sobrepasado el 50 % anual. Dicha tasa, más la reducción del mercado interno, especialmente por efecto de los bajos salarios y de la cesantía, y la invasión de mercaderías extranjeras, conducen de más en más a la desaparición de la industria nacional.

El fascismo —dice un Manifiesto de nuestro Partido⁷— arrasó con los derechos ciudadanos de los trabajadores y, en especial, con sus derechos sindicales. Disminuyó sus remuneraciones reales. Creó un sistema de trabajo esclavista denominado Plan del Empleo Mínimo. Derogó el Estatuto de los Trabajadores del Cobre. Limitó el derecho a huelga y lo prohibió totalmente en el mineral de cobre de Chuquicamata y en muchas otras grandes empresas. Liquidó el derecho a obtener viviendas a través de las Cajas de Previsión. Tiró a la chuña al mejor postor los fondos previsionales. Fijó un salario mínimo miserable, del cual a los jóvenes sólo se les paga el 75 %. Anuló en la práctica el fuero maternal y el fuero sindical. Suprimió el derecho a jubilación por tiempo trabajado y aumentó en cinco años los requisitos de edad de retiro para hombres y mujeres. La clase obrera ha sido objeto del odio más encendido de la camarilla militar fascista gobernante.

La política del fascismo ha conducido a una brutal pauperización de grandes sectores populares. La parte de los

trabajadores en el ingreso —que durante el Gobierno Popular estaba por sobre el 60 %— es hoy alrededor del 40 %. El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido violentamente reducido. La desocupación sobrepasa el 30 % de la población laboral. Más de un millón de trabajadores está cesante, es decir, por esta razón cerca de 4 millones de chilenos se debaten en la miseria y el hambre. Ha desaparecido la gratuidad de la enseñanza, que ha dejado de ser preocupación preferente del Estado y pasó a ser cuestión de ganancia mercantil. La enseñanza media, técnica y universitaria está reservada sólo a una élite. Bajó verticalmente el nivel de atención de la salud pública.

3

El régimen fascista no ha tenido nunca la cancha libre. Desde los primeros momentos, el Partido Comunista levantó la bandera de la lucha y la unidad contra el fascismo. La clase obrera y otros sectores populares han opuesto una constante y creciente resistencia a la tiranía. Lo nuevo consiste en que, en los últimos tiempos, esta resistencia cuenta con una mayor participación de masas, es más combativa y avanza por el camino de la rebelión popular. Lo nuevo consiste, también, en que la lucha contra la política del régimen se extiende a las capas medias y a vastos grupos de la burguesía.

La mayor parte de los empresarios chilenos estaba en oposición al Gobierno de la Unidad Popular y apoyó de una u otra manera el golpe. Más aún, creyeron en las bondades del modelo económico que se comenzó a implantar desde el comienzo basado en las orientaciones de la llamada «Escuela de Chicago» y en especial del grupo encabezado por Milton Friedman. Hoy están en contra del régimen o en una posición de acerba crítica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Asociación de Productores de Trigo, la Confederación de Productores Agrícolas, y otras entidades que agrupan a industriales y agricultores que producen para el mercado interno, exigen perentoriamente protección aduanera. Entre los mismos ha surgido un poderoso movimiento que reclama una mo-

ratoria de las deudas por diez años con un plazo de tres para empezar a pagarlas. Los transportistas y comerciantes se han sumado a estas demandas.

Un gran sector de la burguesía ha entrado a desconfiar de la dictadura tanto por los resultados de su política como por el hecho de que todas las medidas que toma Pinochet para paliar la crisis no hacen sino agravarla. Esto último se debe a que esas medidas representan la continuidad de la política que precisamente se necesita cambiar y están inspiradas, por tanto, en el propósito central de seguir favoreciendo ante todo al capital imperialista. Así lo demuestran los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y la intervención de varios bancos —entre ellos los más grandes del sector privado—, con lo cual el Estado pasa a hacerse cargo del pago de la abultada deuda externa que contrajeron, principalmente con las más importantes instituciones financieras norteamericanas.

Se ha llegado a una situación en la que todos los sectores, desde la clase obrera hasta gran parte de la burguesía, luchan por sobrevivir, algunos defendiendo el empleo y otros la subsistencia de sus empresas.

El régimen ha dado lo contrario de lo que prometió. En vez de «democracia y orden», ha traído opresión y caos. En vez de «desarrollo económico equilibrado» ha desquiciado la economía y ha retrotraído su nivel de producción al que tenía hace más de diez años. En vez de «pleno empleo», ha mantenido durante el transcurso de estos años una elevada tasa de desocupación, que hoy llega a los niveles más altos entre países de semejante grado de desarrollo.

Los resultados concretos del régimen fascista indican que éste es por esencia antiobrero, antipopular, antinacional, antipatriótico. Por sobre los intereses del país ha colocado siempre el interés de los clanes financieros y de las transnacionales del imperialismo. Pinochet, que ha tenido la osadía de compararse con el fundador del Estado, Bernardo O'Higgins, no es sino un peón del imperialismo. El tirano, que se ha proclamado el «general de los pobres», ha ampliado extraordinariamente la zona de la extrema pobreza en favor del reducido grupo de la extrema riqueza. La seguridad y la independencia nacionales se

han debilitado como consecuencia del deterioro económico del país, del divorcio entre las Fuerzas Armadas y el pueblo y del aislamiento internacional de Chile.

La situación que se ha creado repercute en el seno de las Fuerzas Armadas, donde crece el número de los partidarios de abandonar el miserable papel que han jugado en contra del pueblo.

Se divisa la luz a la salida del túnel. Todavía hay que librar no pocas batallas. Pero la suerte del régimen ya está echada. Conscientes del atolladero en que se encuentran, una parte de sus sostenedores tratan de descubrir algún camino que les permita salvar aquello que es lo principal para su clase y evitar una solución a la plebeya.

En la oposición, que va desde la clase obrera a parte considerable de la burguesía, desde la izquierda a la llamada «derecha democrática», surgen diversas variantes. Algunos no van más allá de desear un simple cambio de política con el mismo Pinochet o, a juego perdido, con el reemplazo de éste. En el centro, donde el mayor peso corresponde a la Democracia Cristiana, prevalece el propósito de girar gradualmente hacia la constitución de un régimen de democracia burguesa, con reconocimiento legal del Partido Comunista, pero excluyéndolo del derecho a participar en el Gobierno que suceda a la dictadura.

El Partido Comunista patrocina un Gobierno que cuente con la participación o con el apoyo de todas las fuerzas antifascistas. Este sería el más democrático y representativo de todos los que se pueda concebir, y el único que estaría en condiciones de enfrentar con éxito las dificultades y las grandes tareas que planteará la lucha por erradicar el fascismo y por reconstruir al país. El surgimiento de tal Gobierno dependerá, fundamentalmente, de la fuerza del movimiento obrero y de la gravitación que alcance el conjunto de los partidos de izquierda, cuyo sólido entendimiento es cada día más necesario.

Hoy —ha dicho el Partido Comunista de Chile— «el dilema no es fascismo o socialismo, ni simplemente fascismo o democracia burguesa. Lo que corresponde es un nuevo régimen democrático popular y nacional, que favorezca y promueva los cambios que emanan de las necesidades objetivas del progreso social»⁸.

Las transformaciones que llevó a cabo el Gobierno del Presidente Allende y, antes, los cambios que en algunos aspectos promovió la Democracia Cristiana, respondían a la necesidad perentoria de modificar las viejas estructuras. Eran, pues, exigencias apremiantes del desarrollo social. Esa necesidad y esas exigencias no saldrán precisamente atenuadas, sino serán mayores el día de mañana, porque el fascismo ha significado una regresión muy grande, los requerimientos de la sociedad han aumentado y el país deberá ponerse al día en muchos aspectos en los avances que se han logrado en el mundo en la última década.

El fascismo ha modificado la estructura económica y social, y ha develado, del modo más descarnado, el carácter de clase de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de los medios de comunicación de masas, derribando de paso no pocos mitos que nublaban la visión de una parte no pequeña de la población. Con ello, se crean bases objetivas para que las transformaciones sociales que sobrevengan alcancen mayor profundidad bajo el impulso de la lucha del pueblo.

No se puede soñar con soluciones verdaderas mediante una visión mezquina y de corto vuelo, sin atreverse a remover las causas de los males que sufre el pueblo, sin enfrentar a sus enemigos principales, y sin la participación de la clase obrera, del Partido Comunista y de la izquierda chilena.

Algunos opositores del campo burgués miden el terreno que se pisa. Parten de la base cierta de que Pinochet dejará al país en ruinas y de ella sacan la conclusión de que otros deben ser los que se quemen primero en el fuego de las inmensas dificultades. No nos parece ésta una posición correcta, por decir lo menos. No se puede dejar al país al garete, expuesto a caer en un período caótico. No se puede anteponer el cálculo egoísta al supremo deber patriótico de empezar, cuanto antes, a reconstruir la nación para acortar el tiempo de sufrimiento del pueblo. Los comunistas creemos que, por el contrario, es necesario y posible evitar todo interregno y asumir, precisamente desde el primer día, la responsabilidad de encarar los obstáculos y comenzar a satisfacer las necesidades del pueblo y a resolver los problemas. Justamente para ello se hace indispensable

el acuerdo entre todos los opositores, desde la izquierda a la derecha. Este acuerdo no es fácil, pero no es imposible lograrlo. Los comunistas estamos dispuestos a poner toda nuestra voluntad y empeño en tal sentido.

La posición del Partido Comunista es la más democrática y consecuente. No excluye a nadie de ninguna acción unitaria contra el fascismo, ni en la lucha por echarlo abajo, ni en la tarea de erradicarlo mañana y construir un nuevo régimen democrático. Por el contrario, considera necesario que todas las fuerzas antifascistas coordinen hoy su acción contra la tiranía y puedan concertar mañana un acuerdo para gobernar de conjunto. Podría ocurrir que, en virtud de la situación política concreta de mañana y de la orientación que en ella gravite, algún o algunos partidos, comprendido el Comunista, no participen en el Gobierno que suceda a la tiranía, lo apoyen sin embargo desde afuera en todo lo que tenga de positivo o se ubiquen en la oposición al mismo. Pero cualquier decisión de esta naturaleza, si bien estará determinada por las circunstancias, corresponde a la toma de decisión soberana de cada partido.

Subrayamos nuestra decisión de hacer todo por apresurar el derrumbe de la tiranía y, luego de producido éste, llevar las cosas tan lejos como sea posible, teniendo en cuenta las situaciones concretas que se vayan creando, sobre la base de la acción común de todas las fuerzas populares y la necesidad de que la clase obrera aglutine a su alrededor a la mayoría de la población.

¹ El golpe militar fascista contra el Gobierno constitucional de la Unidad Popular (coalición de izquierda, integrada también por el Partido Comunista) se produjo el 11 de septiembre de 1973. —N. de la Red.

² El 15 de noviembre de 1982 se celebraron en Brasil las elecciones al Congreso Nacional y a los órganos locales de poder, así como a los gobiernos de Estados. Los resultados de las elecciones demostraron la acrecida fuerza de la oposición democrática que obtuvo la mayoría de los escaños en la Cámara Baja del Congreso y la elección de sus candidatos a gobernadores de 10 Estados, incluyendo los de mayor desarrollo económico. En las elecciones a las directivas de los partidos burgueses tradicionales de Uruguay, celebradas el 28 de noviembre de 1982, el 82 % de los

electores votó en favor de los adversarios de la dictadura. —N. de la Red.

³ *El Mercurio*: portavoz de los círculos más reaccionarios de la burguesía chilena, propiedad del clan financiero de los Edwards relacionado directamente con el imperialismo norteamericano. —N. de la Red.

⁴ GATT: Acuerdo General sobre el Comercio y las Tarifas, organización internacional integrada por la mayoría de los países capitalistas. —N. de la Red.

⁵ *L'Humanité*, 27 de noviembre de 1982, p. 1.

⁶ El Gobierno de la Unidad Popular, formado después de la victoria electoral de Salvador Allende, candidato de la izquierda a Presidente, en 1970, fue precedido por el Gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei (1964–1970). —N. de la Red.

⁷ Véase *Manifiesto del Partido Comunista de Chile*. Santiago, septiembre de 1981 (*Boletín del Exterior*, No 50, 1982, p. 12).

⁸ *Nuestro proyecto democrático* (*Boletín del Exterior*, No 37, 1979, pp. 6–7).

El proceso de cambio es irreversible

Giocondo DIAS

Secretario del Colectivo Nacional
de Dirigentes Comunistas de Brasil

En la vida política de Brasil, el país más grande de América Latina, el ejército ha jugado en lo que va de siglo un papel muy notable, por lo general de corte protector, reaccionario. No es de extrañar, por tanto, que a comienzos de la década de los 60, cuando bajo los gobiernos burgueses de Janio Quadros y João Goulart se reforzó en el país el movimiento antiimperialista obrero, campesino y de masas y se operaron notables cambios democráticos, que amenazaban a la oligarquía nacional con la formación de un Frente Popular, fuese precisamente la cúspide militar la que se encargara de estrangular la democracia y tomar bajo su protección los intereses de los latifundistas y de la gran burguesía. En la primavera de 1964, con el apoyo de los monopolios de EE.UU., en Brasil se llevó a cabo un golpe de Estado asumiendo el poder un grupo de militares que abolió de facto la Constitución y «suspendió» las garantías democráticas y las libertades políticas de los ciudadanos. Desde entonces, pronto hará 20 años, el pueblo brasileño lucha con creciente éxito por el restablecimiento de las libertades civiles atropelladas y contra la línea del régimen orientada al mantenimiento de una democracia recortada y «gobernable»¹.

Hasta 1979 rigió en el país el sistema impuesto por los militares que sólo admitía la existencia de dos partidos —la gobernante Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el opositorista Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Desde el poder, la ARENA, que mantenía estrechas relaciones con los militares, hizo amplio uso de las leyes de emergencia, y su gobierno, gracias a una redistribución a

su favor de algunas funciones del poder legislativo y judicial, tenía facultades casi ilimitadas.

A finales de los años 70, cuando se esfumó el «milagro económico brasileño», fruto artificial de la política de puertas abiertas al capital extranjero, incentivación de la empresa privada y estímulo a las tendencias estatal-monopolistas en la economía, la mayoría de los brasileños llegaron a la conclusión de que el régimen militar con su modelo económico era un régimen caduco. En el plano económico, el cacareado «milagro» era consecuencia de la sobreexplotación de la clase obrera y en el plano político, resultado de los métodos fascistas de gobierno. En el país crecía rápidamente la oposición legal que se agrupaba principalmente en torno al MDB; incluso en el partido del bloque gobernante ARENA se manifestaron fuerzas que preconizaban la liberalización política. Estos procesos, a nivel intere intra-partidario, eran consecuencia del movimiento popular de masas contra las formas autoritarias de gobierno y la preponderancia absoluta de los monopolios. El movimiento abarcó no sólo a las capas trabajadoras de la ciudad y el campo, sino también a determinados sectores de la burguesía nacional, el clero e incluso de la oficialidad, ese pilar de la dictadura. A pesar de la represión y del fraude electoral, el malestar del pueblo se manifestó claramente en las elecciones de 1974, 1976 y, sobre todo, en las de 1978, traduciéndose en un creciente número de votos a la oposición.

Los vientos frescos de la renovación social, que han tenido notable incidencia en el clima político de Brasil durante las últimas décadas, nacen de los cambios sustanciales acaecidos en la estructura económica general del país: de una nación eminentemente agraria, se ha convertido en un país industrial-agrario con un nivel medio de desarrollo de las fuerzas productivas. El fomento de la producción industrial convirtió a la burguesía y la clase obrera en las dos fuerzas sociales principales, con todas las consecuencias que se derivan de ello. De 1967 a 1981, durante el período de administración militar, los efectivos del proletariado brasileño aumentaron de 8 a 23 millones de personas; esta úl-

tima cifra incluye a 6 millones de obreros industriales (en su mayoría con menos de 30 años), un 37 % de los cuales están ocupados en empresas con más de 500 trabajadores². Se ha elevado considerablemente el nivel ideológico, profesional y cultural de la clase obrera, que constituye hoy el grueso de la población económicamente activa y se ha promovido a la primera línea de la lucha por la renovación. Como resultado del paso del capitalismo brasileño a la fase monopolista y de la formación de la oligarquía financiera, ha cambiado también el carácter de la burguesía nacional.

Hoy la mayoría de la población brasileña vive en las ciudades. Su estructura en mutación se caracteriza por la proletarización de la fuerza de trabajo asalariada tanto en los centros industriales (donde este proceso abarca a las capas medias) como en el campo, donde predomina el proletariado agrícola. De ahí la creciente participación en la vida política de millones de brasileños desposeídos. Su voluntad de cambiar el estado actual de cosas, que da origen a la sobreexplotación, el desempleo y la pauperización de las capas laboriosas, así como a la crisis del sistema de educación y sanidad, deviene un factor determinante a tener en cuenta cuando nos preguntamos a dónde va Brasil tras este final sin pena ni gloria del régimen.

El Gobierno del general Figueiredo, que asumió el poder en marzo de 1979 en un ambiente de descontento generalizado, empezó a implementar el nuevo curso político proclamado ya por su antecesor, general Geisel (1974–1978), y al que se ha dado en la prensa el nombre de «liberalización controlada». El proyecto ideado por los exponentes más perspicaces de la cúspide gobernante era sencilla: mediante reformas paulatinas y medidas «por arriba», sin afectar a los cimientos del régimen existente, «abrir la válvula» de la caldera para dar escape al descontento popular, paliar las agravadas contradicciones económicas y políticas y mejorar las posiciones de su partido, ampliando su base social. Con este fin se levantaron las limitaciones que habían sido impuestas a las libertades burguesas fundamentales, se derogó parte de la legislación represiva, se proclamó una amnistía para los presos políticos, se hicieron

ciertas concesiones a los sindicatos y fueron restablecidas (desde 1983) las elecciones directas a gobernadores.

La llamada «reforma partidaria», proclamada a finales de 1979, señaló un paso importante hacia la democratización de la vida política, un paso, conviene decirlo, forzoso, que el gobierno se vio obligado a dar por las circunstancias. El objetivo de esa reforma consistía, por una parte, en restablecer el sistema multipartidista y, por otra, en debilitar al opositor MDB, contribuyendo a que se desgajaran de él varios pequeños grupos partidistas. Como resultado el partido gobernante ARENA pasó a denominarse Partido Democrático Social (PDS)³, y el espacio del MDB fue ocupado por varios nuevos partidos de menor dimensión: Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Popular (PP) y Partido de los Trabajadores (PT). El Partido Popular se unificó en vísperas de las elecciones con el PMDB para hacer frente con mayor éxito al gobernante PDS. Por lo que se refiere al Partido Comunista Brasileño, todavía no ha sido legalizado.

•

La reacción confiaba en que la oposición saldría debilitada de los comicios. Pero los cálculos de la agonizante dictadura no se verificaron en la práctica. Los resultados de la consulta electoral del 15 de noviembre de 1982, por mucho optimismo que afectaran las autoridades, señalaron una mayor agravación de la crisis del régimen y un jalón más en el camino hacia la liberación definitiva de las formas autoritarias de gobierno.

Para ver que los generales, en vez de cosechar la esperada victoria, sufrieron una derrota basta echar una mirada a los resultados de las elecciones. De los 58,5 millones de personas registradas en el censo electoral, un 90 % acudió a las urnas. De por sí, este elevado índice de participación demostraba que el «gigante tropical», Brasil, se había despertado de su relativo letargo político. Los brasileños habían de renovar una tercera parte del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, gobernadores y miembros de las asambleas legislativas de Estado, consejeros municipales y jueces. En conjunto, se trataba de elegir a más de 43.000 cargos públicos entre un

total de un cuarto de millón de candidatos. Aunque la legislación electoral desfavorecía a la oposición (en particular, por la prohibición de formar bloques), ésta obtuvo alrededor del 60 % de los votos, la mayoría de los cuales fueron emitidos a favor del mayor partido opositor, el PMDB. En cifras absolutas, este partido por sí solo reunió casi un millón y medio de votos más que el gobernante PDS (18.901.000 contra 17.524.000). En consecuencia, la representación del PDS en la Cámara de Diputados descendió del 53,8 % al 48,8, aumentando en proporción el número de escaños de la oposición, la cual llevó al máximo órgano legislativo del país a 245 diputados (de un total de 479), incluidos 201 en representación del PMDB. No menos resonante fue el éxito de la oposición a nivel de los órganos locales de administración: el PMDB tiene ahora 1.800 alcaldes (sobre un total de 4.000 municipios), mientras que hasta las elecciones de noviembre tenía apenas unos centenares.

Seguramente, uno de los resultados políticos más importantes de la campaña electoral de 1982 haya sido la conquista por la oposición de 10 puestos de gobernador de los 22 que habían de ser elegidos (el gobernador del Distrito Federal es designado por el Gobierno). Cabe subrayar que a los Estados gobernados por la oposición —los de mayor desarrollo son los de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais— les corresponde aproximadamente un 80 % del producto nacional bruto, más de un 70 % de las exportaciones e importaciones nacionales y más de la mitad de la población del país. Otro dato significativo son los resultados de la votación en las 100 ciudades más grandes de Brasil (con una población superior a los 128.000 habitantes); el PMDB obtuvo la victoria en 75; el PDS, sólo en 17; el PDT, en 4; el PTB, en 2, y el PT, en una ciudad. Estas cifras demuestran de manera elocuente que las fuerzas más dinámicas y de mayor madurez política de la nación se pronunciaron por el cambio, mientras que el régimen de la dictadura, representado fundamentalmente por los grandes latifundistas, mantiene sus posiciones en las regiones rurales y en los Estados con un nivel de desarrollo más bajo, controlados por el PDS.

•

El acercamiento de la oposición a las palancas del poder

tuvo grandes consecuencias sociales y psicológicas para la sociedad brasileña: en cierta medida, contribuyó a que las masas populares tomaran fe en sus fuerzas, al quedar demostrado en la práctica que era posible derrotar al Gobierno. La ampliación de las libertades democráticas ha incidido muy particularmente en la actividad de los medios de comunicación de masas: los periódicos, la radio y la TV expresan con mayor audacia que antes las aspiraciones de las capas desposeídas de la población, critican y censuran la corruptela, las maquinaciones y el fraude que han prosperado bajo la dictadura, denuncian las deficiencias administrativas. Muchas de las revelaciones que saltaron al dominio público durante la campaña electoral han venido a agravar las contradicciones en el seno del Gobierno.

Los cambios en el clima psicológico han contribuido a un debilitamiento de las posiciones de los dos principales pilares sobre los cuales se apoyaba la dictadura militar: el Ejército y el Servicio Nacional de Información (SNI). Los reveses electorales del partido gobernante, que mantiene estrechas relaciones con la alta oficialidad, han reforzado los ánimos que ya existían antes en determinados círculos castrenses, generando una tendencia de retorno a los cuarteles y devolución de los cargos políticos a los civiles. Los militares estaban casi seguros de que la mayoría respaldaría a su emparentado PDS. Ahora, tras la derrota política, se ven obligados a hacer menos alarde de su papel en la vida nacional. Por supuesto, no quisieran perder el poder real, pero la situación los obliga a maniobrar. Todo indica que la cúpide militar promoverá para las próximas elecciones presidenciales algún candidato civil de confianza, que les permita preservar los métodos autoritarios de gobierno bajo el rótulo de la democracia burguesa tradicional. El PDS y los militares tienen ciertas probabilidades para encumbrar a «su» presidente: de acuerdo con la Constitución vigente, el jefe del Estado no es elegido por sufragio directo, sino por un colegio electoral. Algunos cálculos realizados ya después de las elecciones de noviembre de 1982 conceden a Gobierno una pequeña mayoría en ese colegio (360 de 680), lo cual le permitiría pasar a su candidato y conservar en sus manos este importante puesto ejecutivo.

La democratización de la sociedad brasileña ha puesto

de relieve la injerencia de los servicios de seguridad en la vida social. El todopoderoso SNI, que compagina las funciones de inteligencia con las de policía política, ha sido hasta hace poco un verdadero Estado dentro del Estado. Implementaba la política represiva de la oligarquía y disponía de numerosos agentes infiltrados en todas las esferas de la sociedad, incluidos los organismos del Estado y el ejército. Las cosas llegaron al extremo de que fue descubierto un sistema de escucha en el despacho del actual presidente del país, general Figueiredo, que había desempeñado hace unos años la jefatura del SNI. La cúpide castrense se muestra descontenta ante semejante proceder de su «copartípe» en el poder real, por considerar que las acciones del SNI subvierten la jerarquía.

Debido a la agravación de las contradicciones entre el Servicio Nacional de Información y las Fuerzas Armadas, en los círculos gubernamentales se ha creado una situación muy delicada. Las luchas intestinas que antes se lograba ocultar, trascienden ahora al dominio público. Los resultados de las elecciones, que ya de por sí habían provocado la escisión del Gobierno, han asestado un golpe particularmente duro al dudoso prestigio del SNI y han puesto al orden del día la demanda de la opinión pública que exige una reorganización de ese servicio y la limitación de sus funciones. Con no menos energía manifiestan los brasileños su repulsa a la tristemente célebre ley de Seguridad Nacional, que restringió la libertad de prensa y sirvió de instrumento a la dictadura para manipular la opinión pública. Reflejando las divergencias existentes en el seno del Gobierno, el ministro de Justicia, Ibrahim Abi-Ackel, calificó esta ley de «draconiana» y declaró que estaba «llamada a encubrir los abusos»⁴.

Con todo, pese a los indudables éxitos obtenidos por las fuerzas antidictatoriales y de izquierda de Brasil, los comunistas no sobreestiman lo logrado. Naturalmente, estos desarrollos positivos incidirán en las condiciones políticas y las medidas que adopte la cúpide gobernante teniendo en cuenta la voluntad popular expresada en las urnas. *El cambio principal consiste en que el régimen, aunque todavía conserva en sus manos el poder, ya no podrá en adelante imponer al pueblo sus soluciones a los más importan-*

tes problemas políticos del país, sino que tendrá que negociar con la oposición. Los resultados de estas negociaciones van a depender en gran medida de la lucha de las masas, de la movilización de las fuerzas democráticas y del nivel de cohesión y unidad entre ellas. Si la oposición no avanza por este camino, corre el peligro de caer en la conciliación y llevar el diálogo con el Gobierno a un desenlace que, de hecho, redundará en detrimento del pueblo y de la democracia.

¿De qué bazas dispone actualmente la oposición legal en nuestro país? La principal fuerza política es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el más numeroso de la oposición. Como ya hemos dicho más arriba, el PMDB cuenta con un impresionante número de escaños en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en el Senado, en las asambleas legislativas de Estado y en miles de municipios. Sus representantes obtuvieron casi la mitad de las alcaldías y los puestos de gobernador de los Estados, inclusive en los más desarrollados económicamente. Algunas de las consignas promovidas por este partido responden a los intereses condiciones de vida para los trabajadores, se pronuncia convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, elecciones directas a la Presidencia de la República, mejores condiciones de vida para los trabajadores, se pronuncia en apoyo de la reforma agraria (aunque su posición en este problema no ha sido definida con suficiente precisión), en defensa de la paz, etc.

Como su tarea de mayoría alcance, el PMDB plantea la reorganización política de Brasil mediante la libre actividad de todas las corrientes y partidos. Cabe señalar que representa no sólo la agrupación política más importante, sino también la más heterogénea, y que se halla al frente de una oposición integrada por las más diversas fuerzas políticas, desde los comunistas hasta antiguos personeros, hoy descontentos, del régimen gobernante.

Por lo que se refiere al Partido Democrático Trabalhista (PDT), sus éxitos se deben en gran medida a las cualidades y el prestigio personal de su fundador, Leonel Brizola. Antiguo socialista, Brizola resultó ser una de las primeras víc-

timas del golpe militar de 1964, fue perseguido, desterrado y pasó largos años en el exilio. En los comicios de noviembre resultó elegido gobernador de Río de Janeiro, uno de los Estados más importantes del país, dejando atrás a los candidatos de los dos partidos principales y más numerosos, el PDS y el PMDB. Su relativamente pequeño partido consiguió 23 escaños en el máximo órgano legislativo del país. Teniendo en cuenta la peculiar composición étnica de la población brasileña y el descontento general con el actual modelo económico, Brizola se declaró partidario del «socialismo moreno». No obstante, en la ceremonia de la toma de posesión como gobernador, se ha visto que este líder cuenta con el respaldo de las agrupaciones derechistas de la socialdemocracia internacional. Mantiene estrechas relaciones con los socialdemócratas alemanes, los socialistas portugueses y los liberales norteamericanos. Indudablemente, Brizola es una figura con futuro político, un futuro en el que cabe contemplar su eventual nominación como candidato a la presidencia del país.

El Partido Trabalhista Brasileño (PTB) representa hoy un pequeño partido que obtuvo 13 actas de diputados en el parlamento federal. Preside el partido una de las pocas mujeres políticas de Brasil, Ivete Vargas, y su líder más popular es el ex presidente de la República Janio Quadros. El PTB y su dirección reflejan fundamentalmente los intereses de la socialdemocracia de derecha (teniendo en cuenta la cambiante realidad y especificidad brasileña, que se distingue de la europea). Es la más proclive de todas las fuerzas de la oposición a concertar compromisos con el régimen⁵.

A diferencia del PTB, el Partido de los Trabajadores mantiene una orientación socialdemócrata de izquierda. Fue fundado en el marco del movimiento huelguístico de masas de 1979–1980 por su actual líder, Luiz Inácio da Silva-Lula, quien hasta hace poco dirigió el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo de Campo (Estado de São Paulo). El PT está integrado por obreros cualificados, representantes de sectores radicales de la Iglesia Católica, trotskistas y otros. El paso de Lula a la «gran política» debilitó sus vínculos con las masas sindicales. Sobre este hombre capaz, de extracción obrera, ejercen considerable influencia los intelectua-

les que le rodean. Los comunistas estimamos que la corriente política representada por el PT puede cobrar en Brasil mayor desarrollo: 8 candidatos de este partido fueron elegidos diputados federales y su líder, que aspiraba al puesto de gobernador de São Paulo, logró reunir más de un millón de votos.

Los «pequeños» partidos de la oposición legal PDT, PTB y PT mantienen una orientación de conjunto a la ideología socialdemócrata, buscan contactos recíprocos y no descartan la unificación. Y es que, en virtud de la ley electoral impuesta por el régimen, para ganar un puesto de gobernador en las próximas elecciones de 1986 se requerirá que la lista del partido en que figure el candidato haya reunido no menos del 3% del total de votos a nivel nacional o el 5% en nueve Estados. Como mostraron los últimos comicios, por ahora ninguno de los partidos arriba mencionados está en condiciones de alcanzar este techo.

Por otra parte, sería erróneo considerar que la oposición se reduce en Brasil a los mencionados partidos políticos. Existen también grupos de izquierda que todavía no han obtenido el estatuto de partido en el plano orgánico. Pero más importantes aún son las organizaciones y movimientos extrapartidarios de masas que, en mayor o menor grado, se pronuncian contra el autoritarismo.

Me refiero, en primer lugar, a los sindicatos, esa escuela de madurez política de la clase obrera, que actuaron como promotores de las potentes huelgas desarrolladas en todos los ramos de la industria y que sacudieron a Brasil a finales de los años 70. Millones de trabajadores toman parte en las huelgas⁶. En el presente contexto de crisis general del régimen, la lucha huelguística pone el dedo en su llaga más dolorosa, la economía.

Otra fuerza a tener en cuenta, que ejerce seria influencia en la vida política del país y juega un importante papel en la lucha por las libertades democráticas, la defensa de los derechos humanos y otras demandas urgentes de los trabajadores es la Iglesia Católica. Cabe señalar, no obstante, que en su seno hay diferencias: existe una corriente minoritaria de signo derechista, conservador, hay otra de tipo «conciliador» y también un ala progresista, de izquierda. A nivel de parroquias, se realiza una importante

labor, para ayudar a los desposeídos y a los trabajadores a vencer problemas cotidianos. Nosotros, cuando es posible, colaboramos en estas actividades.

Existen también asociaciones de vecinos que funcionan en los barrios de las ciudades (en ellas juegan un papel preponderante representantes de las capas medias) y organizaciones similares en las favelas⁷. Las cosas tienden ahora a la unificación a nivel nacional de estas organizaciones que nacieron por iniciativa de los trabajadores en un contexto de tensión social. Todo hace pensar que la movilización de las masas seguirá en ascenso debido a la agudización de la crisis económica, que está tomando en Brasil un cariz de extrema gravedad.

Al tratar de la lucha por la democratización de la sociedad brasileña, no se puede pasar por alto el papel de diversos movimientos de masas de nuestro tiempo, que han cobrado fuerza en los últimos años, como son los movimientos por la paz, por la protección del ambiente y por la igualdad de la mujer, que se incorporan cada vez con mayor resolución a la vida social, ejerciendo creciente influencia en las decisiones políticas. Muchos brasileños empiezan a comprender que los éxitos del proceso revolucionario van a depender, en definitiva, de cómo se desarrolle la batalla por la paz.

En el proceso de liberalización política influyen también otras instituciones democráticas, incluidas algunas que están relacionadas con el *establishment* brasileño tradicional. Mencionemos entre ellas a la Asociación Brasileña de la Prensa, el Colegio de Abogados de Brasil y sus secciones de Río de Janeiro, São Paulo y otros Estados, el Club de Ingenieros, la Asociación Brasileña para la Defensa de la Ciencia, organizaciones estudiantiles y muchas otras.

*

En el contexto nacional que se está configurando adquiere enorme importancia la legalización del Partido Comunista Brasileño, el cual constituye un elemento inseparable de la oposición democrática. Desde hace ya más de 60 años los comunistas intervienen como un importante factor de la realidad brasileña. Aunque los años de existencia legal del

partido a partir de su fundación podrían contarse con los dedos de la mano, el PCB ha echado profundas raíces en la vida política, social y cultural del país. «No hay campaña ideológica ni represalias políticas que puedan arrancar a los comunistas de la vida brasileña. Por eso la cuestión de los comunistas es una cuestión medular de la alternativa democrática para Brasil: no se puede concebir un régimen auténticamente democrático en este país sin el reconocimiento legislativo del derecho de los comunistas a su organización político-partidaria, sin garantías jurídicas y sociales que avalen su derecho a tener un partido político en pie de igualdad y responsabilidad igual con los demás partidos»⁸, señala uno de los últimos documentos del PCB dedicados al análisis de los problemas económicos, políticos y sociales del país. Estamos persuadidos de que los brasileños no podrán sentirse ciudadanos con plenos derechos mientras no se reconozcan en su plenitud los derechos civiles a los comunistas.

Nuestra lucha por la legalización del partido no tiene carácter coyuntural y presenta una serie de peculiaridades. Los comunistas no se contentarán con la simple inclusión del PCB en las listas electorales por disposición judicial. Queremos que la resolución de las autoridades responda a las exigencias de un sector considerable, como mínimo, de la opinión pública. No queremos que la legalización sea el mero resultado de negociaciones sostenidas con el Presidente de la República y otros representantes del poder. Y mantenemos esta actitud para que la reaparición legal del partido de los comunistas —importante fuerza política del país— en la palestra nacional señale una victoria en la lucha común por la democracia, que para nosotros es un objetivo estratégico. Al propugnar la legalización del PCB, los comunistas no nos hacemos muchas ilusiones acerca de la «buena voluntad» del régimen gobernante. Nosotros procuramos —en la medida de lo posible— convertir la batalla por la legalidad del partido en una batalla de todo el pueblo por la abolición de la ley de Seguridad Nacional, por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente elegida libremente por el pueblo, por una Constitución democrática que refleje los intereses de las masas populares y de toda la nación. En una palabra, el problema de la le-

galidad de la organización partidaria de los comunistas es inseparable de la cuestión general de la democracia.

La campaña nacional por la inscripción del PCB en el registro de partidos se inició en mayo de 1983 en la capital del país, Brasilia, y ha reportado ya resultados tangibles. En el breve lapso de dos meses y medio se manifestaron en apoyo de nuestra legalización los líderes de casi todos los partidos de oposición e incluso algunas figuras del propio PDS, el partido gobernante, sin hablar ya de numerosos diputados federales y senadores que apoyaron también la petición. Hemos contado asimismo con el activo respaldo de los gobernadores de varios Estados. Hecho significativo, entre los que se manifestaron en favor de nuestra legalización figuran incluso representantes de capas sociales muy distantes del socialismo en lo ideológico, como, por ejemplo, algunos jerarcas de la Iglesia Católica.

Lo principal, sin embargo, es que millones de trabajadores, cuyos intereses ha defendido siempre y defenderá en adelante el PCB, quieren verlo convertido en una fuerza política legal. Expresando la voluntad del pueblo brasileño, nuestro partido preconiza la implementación de una amplia democracia, como condición necesaria para combatir con éxito al imperialismo y la reacción interna, condición que —a la par con otros importantes aspectos de nuestra actividad— posibilitará la transición revolucionaria por la vía no armada (aunque, naturalmente, «la elección de los medios para liberar el país y transformar la sociedad brasileña no depende exclusivamente del proletariado y de sus aliados, lo cual nos impone la necesidad de dominar todas las formas de lucha»⁹).

•

Junto con otras fuerzas democráticas de Brasil, el PCB propone la puesta en pie de un vasto programa que apunte al desarrollo de la democracia y la mejora de las condiciones de vida. La necesidad de este programa es tanto más apremiante ante la agudización de la crisis económica que requiere soluciones urgentes. El programa debería recoger las demandas políticas, económicas y sociales que ya han sido formuladas en el curso de la lucha nacional por la democratización de la sociedad brasileña. Su elaboración de-

berá llevarse a cabo con la vasta participación de representantes de todas las capas y movimientos del pueblo brasileño, teniendo en cuenta los problemas en que se ha verificado ya el consenso nacional.

Entre estos problemas aparecen como fundamentales los siguientes: *En el terreno administrativo y político*: elecciones directas a todos los niveles y restablecimiento de las prerrogativas de los poderes legislativo y judicial; reconocimiento de la libertad de organización de todas las corrientes de pensamiento y de acción, incluidos los comunistas; anulación de todas las leyes y normas antidemocráticas y cese de la política de persecuciones contra los demócratas, supresión de las instituciones represivas. *En el terreno de las relaciones laborales*: democratización de la legislación laboral y garantías de organización sindical autónoma e independiente, sin tutela del Estado y realizándose en su plenitud el derecho de huelga; aplicación de una política de contratación de la mano de obra que favorezca a los trabajadores y garantice la conservación del empleo en condiciones de justa distribución de los ingresos y los salarios. *En el terreno de las finanzas*: medidas antiinflacionarias, renegociación total de la deuda exterior y aplicación de una política financiera y económica que tienda a liquidar los privilegios de los monopolios, los bancos, las transnacionales y los latifundios a fin de potenciar el mercado interior. *En la agricultura*: aplicación de las cláusulas positivas de la legislación vigente sobre la tierra y realización de una reforma agraria que dé tierra a los que desean trabajarla, a expensas de los latifundios con terrenos yermos o tierras explotadas por métodos extensivos. *En la administración local*: restablecimiento de la autonomía de los municipios en combinación con una reforma fiscal que garantice a los Estados y los municipios el cumplimiento de sus obligaciones; supresión inmediata de la intervención de las autoridades federales en los asuntos de los municipios considerados como «zonas de seguridad nacional»¹⁰. *En el campo de las relaciones internacionales*: política de no alineación y defensa de los intereses nacionales, por la paz y un nuevo orden económico internacional, respeto del derecho de las naciones a la autodeterminación y fomento de los vínculos multilaterales con todos los países del mundo.

La realización del programa que proponemos contribuirá al avance de nuestra sociedad en una dirección favorable para el socialismo, a la erradicación de las tradiciones autoritarias, elitistas y exclusivistas que son características del régimen actual, y a la incorporación de millones de trabajadores al proceso revolucionario. La lucha por el Estado democrático es prenda de la hegemonía de la clase obrera y de su estrecha alianza con otras clases y capas explotadas. El principal obstáculo que se interpone actualmente en este camino lo constituyen conjuntamente el imperialismo (en primer lugar, el norteamericano), los monopolios y los latifundios, que están orgánicamente vinculados a la dictadura agonizante. «Para derrotar esta alianza reaccionaria —considera nuestro partido— es necesario que el pueblo brasileño conquiste el poder político y realice transformaciones radicales de carácter antiimperialista, antimonopolista y antilatifundista en el sistema económico, social y político, transformaciones capaces de suprimir los obstáculos históricos que obstruyen la transición del país al socialismo, el progreso social y la democracia real»¹¹. El Brasil de los trabajadores está dando importantes pasos al encuentro del futuro. ¡Es un proceso irreversible!

¹ Para más detalle véase el artículo de G. Dias *Situación madura para la democratización*, en *Revista Internacional*, Nº 11 de 1981. —N. de la Red.

² Para los datos correspondientes a 1967 véase *PCB: Vinte anos de política 1958–1979* (documentos), São Paulo, 1980; para los de 1981, véase *Teses para um Debate Nacional de Comunistas pela Legalidade do Partido Comunista Brasileiro*, en *Voz da Unidade* (Suplemento especial), 8 de mayo de 1981, p. 13.

³ No debe confundirse con los partidos de orientación socialdemócrata integrados en la Internacional Socialista. Es un partido de la oligarquía terrateniente brasileña y del gran capital. —N. de la Red.

⁴ *Voz da Unidade*, 23 a 29 de junio de 1983.

⁵ El 12 de junio de 1983, el PTB firmó un acuerdo con el PDS, con el fin de obtener una serie de concesiones por parte del Gobierno y, entre otras, una cartera ministerial. A cambio, el Gobierno se aseguró una mayoría estable en la Cámara de Diputados. Las demás fuerzas de oposición censuraron esta transacción. —N. de la Red.

⁶ Véase para más detalle el artículo de A. V. do Nascimento *El*

auge de los sindicatos brasileños, en *Revista Internacional*, No 8 de 1983. —N. de la Red.

⁷ Chabolas, barrios de miseria de las grandes ciudades brasileñas. —N. de la Red.

⁸ *Voz da Unidade* (especial), 30 de marzo de 1983.

⁹ *Ibíd.*

¹⁰ Los municipios y regiones del país en que se intensifica la lucha contra las formas represivas de gobierno pueden ser declarados «zonas de seguridad nacional», lo cual permite al Gobierno central adoptar allí medidas de «emergencia». —N. de la Red.

¹¹ *Voz da Unidade* (especial), 30 de marzo de 1983.

Frente nacional contra la dictadura

Rogelio GONZALEZ

miembro del CC del Partido Comunista de Paraguay

En Asunción, la capital de Paraguay, se ve a cada paso enormes carteles que prometen paz, trabajo y bienestar con Stroessner. Sin embargo, en los treinta años de estancia del dictador al timón del Estado, el pueblo paraguayo no tiene paz, trabajo ni bienestar. El general Alfredo Stroessner, que no disimula su adoración a Hitler y Mussolini, es el último sobreviviente de la ignominiosa familia de dictadores latinoamericanos impuestos por el imperialismo. Trujillo en Santo Domingo, los Somoza en Nicaragua, Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Batista en Cuba y los Duvalier en Haití personifican toda una época de vandalismo, ignorancia, terror y represalias en la historia de Latinoamérica. El tirano del Paraguay, que convirtió el país en un enorme campo de concentración, se mantiene en el poder gracias a la ayuda de las grandes transnacionales y los sectores reaccionarios de los Estados Unidos.

Uno de cada tres paraguayos se vieron obligados a emigrar huyendo de la miseria, las persecuciones y venganzas del régimen, que profesa el anticomunismo. Los atropellos del ejército contra los campesinos, los asaltos de la policía a los lugares de trabajo y viviendas de obreros, estudiantes y representantes de otras capas sociales de la población son el duro pan de cada día en la vida política del Paraguay. A los enemigos de la dictadura los encarcelan y mantienen en sombríos calabozos sin juicio ni formación de causa. Tal y como lo hicieron los nazis, la tiranía aplica la política de eliminación total y expulsión del país de todos los disconformes con su régimen. El apa-

rato represivo del general Stroessner es adiestrado por antiguos hitlerianos. El dictador concedió refugio a Eduard Roschmann, «el carnicero de Riga»; Auguste Joseph Ricord, funcionario de la Gestapo en Francia; Josef Mengele, «el ángel de la muerte» del campo de concentración de Auschwitz. Durante largo tiempo se ocultaron en Paraguay Adolf Eichmann y muchos otros verdugos nazis culpables de la muerte de millones de patriotas de diferentes países.

Paraguay fue convertido en una enorme hacienda del tirano, sus testaferros y compañías extranjeras, que acaparan el 77 % de las mejores tierras. El dictador abrió de par en par las puertas del país ante el capital foráneo, las transnacionales y negociantes sospechosos, que saquean sin contemplaciones el país y explotan a su pueblo. Quince de las diecisiete mayores empresas industriales pertenecen a extranjeros. En los últimos quince años, los recursos naturales pasaron casi por entero bajo control de seis transnacionales. Un millón doscientos mil paraguayos viven en una miseria espantosa. El Partido Comunista Paraguayo considera que, para mejorar las condiciones de vida de las familias obreras, es necesario elevar los salarios en el 50 % como mínimo.

Cada día se profundiza la crisis económica, financiera, social y política del régimen fascista. El contrabando obstaculiza el desarrollo de la economía nacional. Según datos del Banco Central, en 1982 la producción industrial disminuyó en un 4,5 % y la agropecuaria, en un 5 %. En la década del 60 y 70 existían en Paraguay 9 plantas industriales de frutas y legumbres. La falta de apoyo del gobierno, la pérdida de mercados, el alto costo de los envases importados y el contrabando en gran escala de productos similares determinaron el cierre de 8 de esas empresas. Otro ejemplo de la crisis es el cierre de los frigoríficos más grandes del país; decenas de empresas medianas y pequeñas cerraron también sus puertas y las que quedan trabajan en el 30 y 40 % de su capacidad productiva. La fábrica textil Pilar, la mayor empresa privada del país, no resistió la competencia del contrabando y del mercado internacional, y cerró sus puertas, quedándose en la calle las dos mil personas que en ella trabajan. En respuesta

se produjo una protesta espontánea. Los obreros que quedaron sin medios de subsistencia ocuparon la empresa y exigieron que las autoridades la nacionalizaran o aseguraran la venta de su producción.

El desempleo se convirtió para los trabajadores en un verdadero flagelo¹. Particularmente difícil es la situación de los jóvenes: de los 30 mil muchachos y muchachas que engrosan cada año el mercado de mano de obra, sólo encuentran empleo siete mil. El destino de los demás es la marginación. Más de 40.000 obreros de la construcción están parados por el desempleo y falta de pago de sus salarios. Quinientos trabajadores de la industria del cemento de la ciudad de Villeta pararon también por las mismas causas. Los trabajadores que fueron a laborar en la obra del Puerto Vallemí, al Norte, a orillas del Río Paraguay, tuvieron que volver todos porque tampoco cobraban sus jornales. Más de un centenar de obreros de la construcción fueron despedidos de la empresa de Mauro González Viera sin haberseles abonado sus salarios. Otro centenar de empleados del Grupo Consultor Alto Paraguay, que participó en los trabajos técnicos para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú, también fueron despedidos sin pagárseles sus haberes que por ley les corresponden.

Por otro lado, miles de jubilados deben recurrir a los tribunales a fin de tratar de hacer valer sus derechos de percibir sus haberes que demoran ya años por causa de la paralización de sus expedientes por el Instituto de Previsión Social, encargado de recaudar los descuentos del 9,5 % de los salarios de los trabajadores, pero que da otro destino a los fondos para pensiones y jubilaciones².

Según el Comité de Iglesias, la deuda externa del Paraguay, al finalizar 1982, ascendía a 2.171 millones de dólares, aunque el Banco Central del Paraguay informó de 1.203 millones en el mismo período. En estas cifras no se incluye la deuda del Paraguay para la construcción de la hidroeléctrica binacional con el Brasil de 9.000 millones de dólares³. Es una deuda fabulosa para un país atrasado y dependiente, donde las fuerzas productivas están maniatadas por el latifundio y la explotación del imperialismo. El déficit del comercio exterior creció de 28 millones de dólares en 1975 a 342 millones de dólares en 1982⁴.

Como ya hemos dicho, el contrabando aumenta día a día. En el país apareció todo un sistema de bancos transnacionales que, aprovechando la connivencia de las autoridades, utilizan los fondos para financiar el comercio ilegal y el tráfico de drogas. Por las manos de los cabecillas del negocio ilícito pasan mercancías por centenares de millones de dólares.

A los países vecinos Brasil, Argentina y Bolivia fluyen bebidas alcohólicas y enormes partidas de cigarrillos norteamericanos, equipos electrónicos, automóviles, inclusive gasolina. Paraguay se convirtió en el centro latinoamericano de tráfico ilegal de narcóticos a otros países, principalmente a los EE.UU. Prosperan la prostitución y la trata de blancas y las casas de juego con lo que se enriquecen la cúspide del ejército y los más allegados al dictador. Es difícil creerlo, pero en la ciudad de San Juan Nepomuceno existe todavía un mercado de esclavos. En él se venden y se compran niños secuestrados a los indígenas.

Es de señalar que la dictadura comete el más feroz genocidio contra la población aborígen del Paraguay, la extermina sistemáticamente, la expulsa de sus tierras. Se considera que hace decenas de años había en el país 250 mil indios; ahora sólo quedan 35 mil.

•

A partir de los años 70, en especial estos últimos tiempos, la vida política interior de Paraguay se caracteriza por la profundización de las contradicciones de clase, la polarización de las fuerzas políticas, el auge de la lucha liberadora y antidictatorial. Nuestro pueblo no quiere ni tolera más el dominio de Stroessner, que entregó el país a merced de los grandes monopolios y utiliza los créditos de los bancos extranjeros para efectuar las crueles represiones con el fin de mantener en pie su régimen policíaco-militar y fascista.

La base social de la dictadura se contrajo bruscamente. En realidad, sólo se apoya en las fuerzas armadas y el aparato represivo. Sectores del Partido Colorado gobernante, la Iglesia, los círculos industriales y agrarios se pronuncian, en secreto o abiertamente, a favor de las reformas, por la erradicación del mal que causa al país la

camarilla del tirano fascista. Hay que señalar que la crisis económica ha empeorado considerablemente las relaciones del régimen hasta con la burguesía grande y mediana, inclusive con la dirección de la influyente Federación de la producción, la industria y el comercio (FEPRINCO). La desvalorización de la moneda nacional se tradujo en una reducción de las operaciones de exportación, lo cual golpeó de modo sensible a los dueños de empresas, ganaderos y pequeños productores de exportables. Como están endeudados no tienen más remedio que vender barato sus productos. La receta del FMI del «crecimiento hacia afuera» ha sido un rotundo fracaso por el abultado déficit comercial.

En estos últimos tiempos menudean los choques entre campesinos sin tierra y destacamentos armados del régimen. En algunos casos, los escuadrones punitivos de Stroessner organizan asesinatos masivos de campesinos para desalojarles de sus tierras y entregarlas a latifundistas. La política de la dictadura contribuyó a la concienciación clasista de los trabajadores rurales, lo cual halló una elevada expresión en el boicot a los mítines y reuniones convocados a comienzos de 1983 para «aplaudir» la candidatura de Stroessner al continuismo presidencial. Por lo general, en esas concentraciones propagandísticas en apoyo al dictador se distribuyen gratis bebidas alcohólicas, comidas y regalos. En la ciudad de Paraguarí, por ejemplo, con vistas a un mitin de ese tipo se preparó «agasajos» para 60 mil participantes. Sin embargo, la policía sólo pudo reunir a 10 mil personas.

En el campo se va acumulando, lenta pero invariablemente, un potencial revolucionario. Un importante papel les corresponde en ello a las ligas agrícolas, que ayudan a los campesinos a comprender que sólo aunando las fuerzas podrán lograr una mejora de su situación. El Partido Comunista no pierde nunca de vista los problemas del campo. Los comunistas paraguayos se pronuncian por una reforma agraria profunda y democrática de verdad, por que se dé tierra a los que la trabajan, se faciliten técnica, semillas, créditos y colocación de sus productos. El PCP considera que la reforma agraria es un problema clave, en torno al cual pueden cohesionarse todas las fuerzas

democráticas. Dentro de la juventud arrecia el descontento contra el régimen. Ultimamente, los estudiantes tenían ante sí una encrucijada: maniatarse a los dictámenes del oscurantismo y la regresión, o luchar en defensa de sus intereses y los del país. La Universidad Católica prendió la mecha planificando la supresión de la carrera de sociología porque según el catedrático y director del Centro de Estudios Antropológicos de dicha Universidad, Adriano Irala Burgos, suprimiendo la carrera de sociología ésta no se convertirá «en nido de tilingos de izquierda o de derecha», y «que la carrera de sociología fue una concepción irresponsable». Es decir, lo que se teme es que los estudiantes paraguayos tomen conciencia de las leyes que rigen el proceso de nacimiento, desarrollo y decadencia de las formaciones económico-sociales⁵.

El estudiantado paraguayo es conocido por sus tradiciones combativas. Se pronuncia contra el saqueo de las riquezas nacionales por compañías extranjeras, contra la corrupción, las represiones masivas, por la supresión de las leyes fascistas N° 294 y N° 209 y el estado de sitio, por la libertad de todos los presos políticos, amnistía amplia y por la reforma universitaria democrática.

En la lucha general contra la tiranía en las primeras filas va el proletariado paraguayo. En los últimos años se activó notablemente el movimiento sindical. Nueve sindicatos de la Confederación Paraguaya de Trabajadores, controlada momentáneamente por las autoridades policiales crearon un nuevo nucleamiento que bautizaron con el nombre de Movimiento Sindical Independiente de los Nueve. Ahora lo integran veinte organizaciones sindicales grandes y bastante activas. Editan el periódico *Trabajo*, que goza de gran prestigio entre los obreros y se manifiesta abiertamente por transformaciones democráticas en el país.

A las protestas de todas las capas de la población, la dictadura responde con el terror. Se cumplieron tres años del secuestro en Buenos Aires del camarada Antonio Maidana, Primer Secretario del CC de nuestro partido. Hasta ahora se ignora lo que fue de él, aunque hay información de que está en la prisión militar de Esperanza, en el Chaco Paraguayo. La dictadura masacró a los campesinos alzados a la lucha en Ka'aguasú. Desencadenó asimismo represas-

lias contra los estudiantes. Allanó sus casas, detuvo a muchos jóvenes de ambos sexos. Hasta ahora mantiene a algunos en la prisión y los sigue torturando: la dictadura de Stroessner ha respondido siempre de ese modo a las protestas de las masas populares.

Pero en este nuevo desenfreno de los cavernícolas gubernamentales, el zarpazo empezó con el atraco tipo hitlerista contra el Banco Paraguayo de Datos, una institución dedicada al estudio y análisis de la situación económica, social, gremial y política del Paraguay. Como animales fueron arreados sus empleados, sus modernas máquinas y archivo destruidos completamente por la jauría hambrienta del stromismo.

El régimen trata de amordazar y someter incondicionalmente a todos, incluso al diario de la burguesía nacional *ABC Color* y *Radio Ñandutí*. Persigue y castiga a los periodistas independientes, a quienes no venden su pluma a la dictadura, como lo hacen los del diario del régimen, *Patria*, que atizó para la represión.

En 1982 fueron expulsados nuevamente del aeropuerto de Asunción varios exiliados que pretendían volver a vivir en su país. Añádase a esto la expulsión del Paraguay del escritor Augusto Roa Bastos, del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alfonso Resck, el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, y muchos otros.

Desde que Stroessner asaltó el poder, es decir, desde 1954, en el país está en vigor el estado de sitio permanente y cada día de esos treinta años está señalado por el terror, las persecuciones, asesinatos políticos, desaparición de patriotas. En mayo de 1983 fueron detenidos treinta líderes sindicales, estudiantiles y religiosos, presentándoseles la acusación standar de «marxismo», lo cual implica automáticamente la aplicación de la ley anticomunista N° 209 acerca de la «Defensa de la paz pública y libertad de las personas». Los detenidos fueron torturados en crueles martirios en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital, la Gestapo paraguaya, bajo la dirección del asesino torturador, jefe de esa repartición, el repudiado Pastor Coronel. Ellos fueron sometidos previamente a distintos tipos de vejámenes y sacrificios.

Al efectuar represalias contra todas las capas de la po-

blación, contra aquellos que exteriorizan su descontento con el régimen y tratan de defender sus propios derechos, Stroessner se aprovecha de la falta de la amplia unidad y de actuación concertada de las fuerzas opositoras. Sin embargo, se ha dado ya el primer paso, un paso tímido pero importante, hacia la unidad. El Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Revolucionario Febrerista, el MOPOCO-Movimiento Popular Colorado (grupo separado del Partido Colorado oficial) y el Partido Demócrata Cristiano concertaron una plataforma común dentro del Nucleamiento «Acuerdo Nacional». Ese documento consta de 14 puntos que exigen el levantamiento del estado de sitio, la revocación de las leyes reaccionarias a base de las cuales se persigue a los patriotas, la liberación de los presos políticos, una amplia amnistía política, la disolución del aparato represivo policial, el respeto y la observancia de los derechos humanos, el establecimiento de un sistema de gobierno republicano de verdad.

.

Los comunistas paraguayos aún no integran ese Nucleamiento, pero nuestro partido lo considera un importante factor del proceso conducente hacia la unidad amplia sin exclusiones, para lograr las transformaciones progresistas de la sociedad. Estimamos que es necesario ensanchar la base social de la nueva alianza a cuenta de organizaciones obreras, campesinas, de intelectuales, jóvenes, artistas, círculos religiosos, de otros partidos políticos, incluyendo el PCP, en una palabra, todos los que se pronuncian contra la dictadura, por una democracia y una soberanía auténticas. El PCP presenta asimismo demandas más hondas: reforma agraria radical, de la que hemos hablado ya, aumentos de salarios, nacionalización de los bancos, la transformación de todo el sistema estatal sobre bases democráticas, etc.

La actitud del PCP en esta cuestión queda claramente expresada en el Manifiesto de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo: «Las fuerzas democráticas y patrióticas de nuestro país enfrentan la tarea más urgente: la destrucción de la dictadura fascista. Para ello es necesaria la formación de una fuerza capaz de

derrotar al continuismo dictatorial e imponer la libertad. Nuestro partido ha expresado en 1978, que un verdadero frente amplio contra la dictadura sólo puede ser organizado a través del desarrollo de las luchas unidas y organizadas de la clase obrera, de los campesinos, estudiantes, maestros, empleados, intelectuales y artistas, comerciantes e industriales nacionales sobre la base de acuerdos concretos entre todas las fuerzas opuestas a la camarilla nazi de Stroessner.

Esta movilización de masas, de luchas parciales, debe desembocar en el combate decisivo para derrocar a la dictadura fascista... La dictadura sigue obstinada de cerrar todas las posibilidades de acción legal a la oposición. En estas condiciones es necesario prepararse activamente para derrocar a la dictadura combinando todas las formas de lucha, con miras al levantamiento general del pueblo.»⁶

Nuestro partido aplica consecuentemente la línea de la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales y democráticas. En un mensaje al pueblo paraguayo hemos señalado la importancia de centrar la atención en las cuestiones en que se ha logrado ya un acuerdo y no en aquellas que separan aún a los partidos políticos y las organizaciones sociales. A pesar de las durísimas condiciones de clandestinidad, el PCP intensifica su trabajo en las fábricas, obras de construcción, en los barrios residenciales, entre los campesinos y estudiantes, etc., y está dispuesto a ocupar su lugar dentro de la unidad democrática y popular. Los trabajadores y el pueblo en general se van convenciendo más de que el Paraguay sólo puede conquistar la libertad y la democracia y marchar hacia los cambios profundos, en una lucha abnegada, mediante la formación de un poderoso frente nacional antidictatorial.

¹ De las 900 mil personas aptas para el trabajo, 200 mil carecen de empleo. —N. de la Red.

² *Adelante*, 28 de abril de 1983.

³ *Noticias del Paraguay. Boletín mecanografiado del PCP*, 10 de junio de 1983.

⁴ *Adelante*, 31 de mayo de 1983.

⁵ *Ibíd.*

⁶ Véase *Manifiesto. Comisión Política del Comité Central del PCP*, agosto de 1981, pp. 11–12.

Los lineamientos fundamentales

Narciso ISA CONDE

Secretario General del Partido Comunista Dominicano

La experiencia de lucha del proletariado y las masas populares en las condiciones actuales, en el contexto de la profunda crisis económica que sacude el país, convence a las fuerzas de izquierda de que la unidad es una necesidad vital. El Partido Comunista Dominicano (PCD), como parte importante del proceso revolucionario, incide en él con su política de unidad, que encuentra apoyo en los sectores sociales progresistas. A la vez, el Partido se esfuerza por ajustar estrechos contactos con todas las organizaciones políticas que defienden las principales conquistas democráticas de la última década y propugnan su ampliación.

En la presente situación, el fortalecimiento de la estructura partidaria se convierte en una tarea apremiante. Se trata de consolidar una organización revolucionaria formada mediante rigurosa selección y con capacidad de movilización de las masas, lo cual exige simultáneamente discusión fructífera y centralismo en el cumplimiento de las principales tareas.

En nuestra actividad adquieren particular significación las cuestiones relacionadas con el carácter que debe asumir la vanguardia del proletariado, la utilización plena de la democracia interna, el trabajo coordinado de los organismos fundamentales del PCD, la política de unidad y el planteamiento de una actitud revolucionaria en las cuestiones del poder. De la solución correcta de estas cuestiones depende el desarrollo ulterior de las luchas sociales y el avance por la vía revolucionaria.

El Partido Comunista Dominicano realiza importantes es-

fuerzos por esclarecer dichos problemas a la luz de los principios del marxismo-leninismo y teniendo muy en cuenta las condiciones del país. La historia del movimiento comunista internacional nos indica que el olvido de estos principios conduce a errores y desviaciones hasta desembocar, en definitiva, en la desvinculación de las masas y el reforzamiento de la influencia burguesa.

Las tareas de la construcción partidaria

Al determinar el orden de prioridades en la actividad partidaria, el PCD se guía por una concepción del partido de vanguardia de la clase obrera y de todo el pueblo explotado, relacionada con las características concretas de la sociedad del capitalismo dependiente que ha cristalizado en nuestro país. En semejante sociedad la lucha anticapitalista no es asunto exclusivo del proletariado. También otros sectores de la población están objetivamente interesados en la transformación del régimen actual. Por eso concebimos el partido de vanguardia como una organización que tenga como centro el trabajo en la clase obrera, pero integrando en sus filas diversos sectores sociales enfrentados al sistema y necesitados de cambios revolucionarios.

El Partido, en nuestra opinión, tiene que ser simultáneamente una organización de cuadros y un partido de masas. El arte para concretizar esta idea consiste en integrar ambas cualidades en un proceso único. Partido de masas por su vinculación con los sectores explotados, por la amplitud de su periferia, por la integración de grandes contingentes de afiliados o simpatizantes, por su capacidad para movilizar y dirigir al pueblo, y por el respeto que logre su política. Partido de cuadros por la disciplina consciente de sus militantes, por su trabajo organizado, por su elevada cualificación política y por su capacidad para vincularse a los sectores sociales más avanzados e insertarse en el corazón de las masas.

El partido de cuadros conscientes es condición para llegar a convertirse en vanguardia de las masas, en fuerza dirigente de las masas. Dicho en otras palabras, la van-

guardia política se caracteriza por el rol relevante de los cuadros del partido consagrados por entero a la construcción y proyección de la organización revolucionaria en diversas vertientes del trabajo partidario interno y externo. La construcción y el desarrollo de la vanguardia requiere un funcionamiento democrático que garantice la participación de todos los militantes en la labor partidaria y el ejercicio de la crítica a todos los niveles, aunque garantizando la unidad de acción y la dirección centralizada que eviten la dispersión y el fraccionamiento.

En este sentido, la experiencia del PCD ha sido muy positiva. El proceso de desarrollo de la democracia interna se inició algún tiempo después de la Revolución de Abril de 1965¹. Los cambios que se habían operado hacían necesaria una nueva táctica basada fundamentalmente en formas de lucha política, aunque simultáneamente en el Partido tenía apoyo la posición de reanudar, con nuevas formas, la lucha insurreccional. Si la dirección del PCD hubiese decretado simplemente el cambio de la línea, la organización se hubiera dispersado a través del fraccionamiento progresivo. La necesidad de discutir ampliamente los nuevos elementos de la situación se hizo evidente. Los principios de la democracia interna instaurados entonces se han convertido en norma de trabajo del PCD. En base a ellos se discuten todos los temas de actualidad. Así encontramos una gran riqueza de ideas y multiplicidad de propuestas que luego realizamos a través de los eventos fijados estatutariamente.

Los debates no simplemente los abrimos en ocasión de los eventos del Partido para examinar un tema determinado, sino que siempre existen posibilidades de discutir las posiciones políticas en el interior de la organización y públicamente. Estas posibilidades las ofrece, en particular, nuestro periódico *Hablan los comunistas*. Es órgano del Partido y, como tal vehículo de expresión de todos sus organismos, de todos sus militantes, cada uno de los cuales tiene el derecho de exponer sus puntos de vista, aunque se trate de señalamientos críticos a la línea política.

El debate fluido concluye generalmente en una síntesis, que trasciende la vida interna, contribuyendo a hacer del Partido una organización de cuadros, que mantiene una

fuerte ligazón con las masas. En las presentes condiciones de legalidad del PCD, tenemos que la elaboración de su línea es no sólo obra de los dirigentes, sino resultado de un proceso en el que intervienen todas sus organizaciones de base, todos los miembros del Partido y que culmina en un enriquecimiento de sus posiciones políticas.

La cuestión de conformar una organización de cuadros que sea al mismo tiempo una organización de masas guarda relación con el problema del poder. La lucha por el poder es la tarea estratégica de toda organización revolucionaria. Naturalmente, sin influencia en el pueblo, sin capacidad para movilizarlo, es decir, sin la conversión del Partido en una auténtica fuerza de masas es imposible ser opción de poder. Y por supuesto, la definición de una clara voluntad de poder es incompatible con todo criterio que reduce la construcción del partido a un fin en sí e impide ver en él el vehículo idóneo para conducir el pueblo a la revolución social.

El PCD cometería un grave error si, en las presentes condiciones de legalidad, optase por integrarse al sistema y ser parte del juego democrático-burgués. Tal vez su caudal electoral podría incrementarse transitoriamente, pero perdería la iniciativa en la orientación de los sectores más avanzados de las masas populares.

Se trata, por tanto, de un problema delicado y complejo, que exige de nosotros mucho cuidado en las soluciones que ofrecemos a las situaciones concretas. La experiencia de los comunistas indica que el predominio de los criterios de organización de masas teniendo como referencia los movimientos electoralistas conduce progresivamente al abandono de los principios del partido de cuadros. De igual manera, la utilización rígida y unilateral de estos principios obstaculiza el desarrollo de la influencia política. Sabemos que la solución correcta hay que buscarla en el intervalo definido entre estos dos extremos. Pero encontrarla no es nada fácil. Y debemos reconocer que por el momento ni el grado de clarificación que hemos alcanzado en lo que respecta a este problema ni, mucho menos, los resultados prácticos en orden a su solución son satisfactorios, ya que todavía están muy lejos de rellenar las exigencias del momento que vivimos.

La consigna lanzada en nuestro II Congreso (1979) sintetiza el objetivo que los comunistas dominicanos buscamos en estos momentos. Por un PARTIDO GRANDE, FUERTE Y COMBATIVO. Decimos grande, por el número de sus afiliados y por la capacidad de movilización de masas que logró. Fuerte, por la característica de su estructura organizativa, como estructura selectiva, de cuadros y militantes. Y combativo, fundamentalmente, por su fidelidad a los principios de clase, su intransigencia en la defensa de las aspiraciones populares, por su disposición a actuar en todas las condiciones y, en consecuencia, por su capacidad para adaptarse al viraje hacia nuevas formas de lucha.

La profundidad de la crisis estructural del capitalismo dependiente en la República Dominicana y el agotamiento cada vez más evidente de la política reformista aplicada por los sectores gobernantes ponen al orden del día la necesidad de una estrategia adecuada que convierta al PCD en una opción de poder o en parte de una opción de poder junto a otras fuerzas genuinamente revolucionarias. La premisa para responder a esta necesidad descansa en el hecho de que el Partido haya conformado una estructura de base a nivel nacional con vasto apoyo en los sectores más explotados. En este sentido es significativo el que los esfuerzos que hemos realizado para incorporar a las filas comunistas las masas empobrecidas (obremos agrícolas, pequeños campesinos, grupos marginados, etc.) hayan dado sus frutos. Con todo, los resultados son todavía insuficientes. Por eso abordamos con toda seriedad la ulterior consolidación organizativa del Partido, analizando con espíritu autocrítico nuestras deficiencias.

Un requisito importante para desarrollar la base de la organización comunista ha sido la creación de una personalidad política propia en todo el territorio nacional. En la actualidad constituimos un punto de referencia nítidamente diferenciado de las opciones burguesas. Esto es el resultado de un gran esfuerzo de los cuadros fundamentales para aprovechar al máximo las condiciones de lucha legal y las posibilidades de expresión a través de los medios masivos de comunicación (no sólo propios, sino también comerciales). Así logramos una proyección a nivel nacional, que significa en algunos casos simpatías y en otros la

neutralidad positiva de determinados sectores que mantenían antes una actitud hostil hacia los comunistas. En la actualidad, el PCD es una fuerza conocida en los más remotos rincones del país.

Ahora bien, hay una gran desproporción entre las crecientes simpatías políticas, como proyección hacia fuera de la imagen del Partido, y el ritmo de desarrollo de la estructura organizativa. Esto tiene mucho que ver con los problemas de la técnica organizativa, con la concepción política y con el nivel ideológico de los cuadros. Por eso planteamos la discusión de las cuestiones de organización no simplemente en función de los métodos y la concepción de trabajo, sino también en el plano político-ideológico. En este aspecto existen importantes avances en lo que se refiere al conocimiento de nuestra realidad y a la aplicación de una política creadora en el plano nacional. Los estudios concretos sobre las relaciones de producción en el campo, por ejemplo, han permitido vincular la política general de nuestro Partido con la lucha social del campesino. Ello ha dado impulso al movimiento reivindicativo de lucha por la tierra, en algunos casos bajo nuestra dirección política inmediata. Al mismo tiempo, nuestro esfuerzo tiende constantemente a crear una conciencia revolucionaria en los sectores más avanzados del campesinado.

Por otra parte, también han existido insuficiencias notables. Una de ellas es el conocimiento muy limitado de las relaciones sociales en el sector industrial y las características específicas del proletariado dominicano. Nuestro trabajo se atiene a criterios demasiado generales, dando por resultado una débil inserción en el medio obrero.

Debemos reconocer también que el esfuerzo fundamental de elaboración de la política del PCD se ha centrado en los problemas generales de carácter nacional, y hemos dedicado escasa atención a los de orden local. En otras palabras, la línea del Partido en su aplicación concreta por provincia, por área, por centro de trabajo no ha sido elaborada con el detalle que las circunstancias actuales requieren. Esto ha traído consigo el que en muchos lugares carezcamos de dirigentes con suficiente prestigio entre la población. Vemos pues que las deficiencias en la de-

terminación de la línea política se traducen —de una manera o de otra— en insuficiencias de la labor de consolidación orgánica del Partido y dan lugar a esa desproporción, a la que ya nos hemos referido, entre la captación de simpatías políticas y el crecimiento de la fuerza organizada de los comunistas.

Rumbo a la unidad

Es durante el período de preparación para las elecciones de mayo de 1982² cuando comienzan a presentarse síntomas alentadores de avance hacia la unidad de las izquierdas. Y hoy podemos decir, sin temor a equívocos, que la dispersión de las fuerzas revolucionarias toca a su fin.

La línea unitaria del PCD fue aprobada en la Conferencia nacional Freddy Valdez³, celebrada en 1982 y en la que fueron contempladas distintas vertientes en este problema. Esta línea presupone, en *primer lugar*, la unidad con las organizaciones que mantienen posiciones programáticas definidamente socialistas, con las que sustentan posiciones marxistas revolucionarias y aceptan que la revolución dominicana tiene un carácter esencialmente antiimperialista y anticapitalista. El esfuerzo desplegado para aglutinar esas organizaciones sirvió para crear la coalición Unidad Socialista⁴, en el marco de la cual acudió el PCD a las pasadas elecciones. Simultáneamente se constituyó la coalición de Izquierda Unida⁵, integrada por varias organizaciones de diferente dimensión⁶.

La política de alianzas trazada en la Conferencia Freddy Valdez ha permitido al Partido contemplar la posibilidad de cohesionar en un solo bloque todas las corrientes revolucionarias de izquierda. Y es que, en el caso dominicano, los participantes potenciales en esa unidad son, en lo fundamental, de tendencia marxista-leninista. Ciertamente es que algunos sostienen criterios particulares acerca del carácter de la revolución dominicana y sus etapas, criterios que no concuerdan plenamente con los puntos de referencia de un programa socialista. Sin embargo, estamos esforzándonos al máximo para concretar la unidad de todas las fuerzas revolucionarias.

En *segundo lugar*, creemos que las organizaciones de izquierda que actúan en nuestro país desde posiciones revolucionarias antiimperialistas, tienen el deber de buscar, además, la unidad de acción con otras fuerzas políticas, sobre todo en el terreno de las reivindicaciones económicas de los trabajadores, las campañas sociales de masas por reformas, la lucha por la ampliación de las libertades y la solidaridad internacional. Nosotros no descartamos las coincidencias en los hechos ni la cooperación con sectores de otras organizaciones políticas en función de la coyuntura del momento.

La amplitud con que planteamos el tema de las alianzas en la Conferencia Freddy Valdez permite comprender que esta cuestión trasciende lo nacional. Al considerar la situación latinoamericana no se puede menos de ver que muchos partidos burgueses en el poder que tienen una política interna moderada, y en algunos casos incluso reaccionaria, proyectan a menudo una política exterior con algunos elementos progresistas. Esto crea las condiciones para posibles coincidencias en cuestiones concretas relacionadas con la solidaridad internacional.

El ejemplo dado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como partido afiliado a la socialdemocracia, es bastante elocuente. En su primer período de gobierno (1978–1982), la política exterior puesta en práctica fue totalmente sumisa a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Por el contrario, José Francisco Peña Gómez, Secretario General del PRD, intervino en eventos internacionales (y en su calidad de dirigente de la Comisión Latinoamericana de la Internacional Socialista) desde posiciones que presentaban aspectos positivos, sobre todo en lo relacionado al movimiento revolucionario centroamericano y a la lucha antidictatorial. Nuestro Partido saluda esta afinidad de puntos de vista e incluso desarrolla acciones solidarias coordinadas.

La *tercera* vertiente de la actividad unitaria del PCD está conectada al presente proceso de integración de las organizaciones de izquierda que ponen énfasis en la formación de una conciencia socialista revolucionaria en las masas. Esta vertiente adquiere mucha importancia, porque además del fortalecimiento de las corrientes socialistas, actual-

mente se está operando un proceso de aproximación *real*, de convergencia de las organizaciones de izquierda, tal como lo habíamos previsto en la Conferencia Freddy Valdez.

En noviembre de 1982 se produjo la fusión del Movimiento de Unidad Socialista (MUS) con el PCD. Está abierta la discusión con miras a la integración con el Movimiento Por el Socialismo (MPS). La resolución del CC del PCD en la que aprobamos la fusión con el MUS, contemplaba el inicio de conversaciones inmediatas con el MPS para la unificación, pero, naturalmente tomando en consideración las particularidades de estas dos organizaciones con peso numérico y características diferentes. En la resolución se recalcaba que, de acuerdo con el planteamiento de la fusión que hace el CC, el Partido está dispuesto a unificarse también con aquellas organizaciones que, aun participando en el otro bloque de izquierda, la Izquierda Unida, se hayan aproximado a nosotros en lo que respecta a los problemas fundamentales.

Aquí conviene destacar una vez más la gran importancia que tiene la democracia interna, como rasgo característico de nuestro Partido. La existencia de una amplia democracia, el hecho de que todo militante tenga la posibilidad de participar activamente en la vida del partido, haciendo propuestas y expresando puntos de vista críticos, hacen del PCD una referencia positiva para los representantes de otras fuerzas de izquierda y contribuyen a su integración. Por supuesto, la coincidencia de puntos de vista entre los participantes del proceso unitario no siempre es total. Por eso es tan importante el hecho de que tienen la garantía de la libre discusión en las filas del PCD y en el semanario *Hablan los comunistas*.

Hoy la distancia entre los dos bloques de izquierda no es tan grande como para impedir conversaciones de alianza e incluso de integración. Las características que conforman la Izquierda Unida son muy heterogéneas, pero dentro de ese bloque participan organizaciones que mantienen planteamientos muy próximos a los del programa de la Unidad Socialista en lo que se refiere a los rasgos peculiares de la sociedad dominicana, el carácter de la revolución y sus objetivos finales. Además, algunos elemen-

tos de la plataforma común de la Izquierda Unida tienen un fuerte contenido anticapitalista y antiimperialista. Objetivamente, esto contribuye a la aproximación de los dos bloques, y nuestra tarea central en la presente etapa es plasmar el acercamiento mediante acuerdos políticos, atendiendo a los lineamientos de la Conferencia Freddy Valdez.

Lo característico de la situación nacional

El actual Gobierno del PRD, encabezado por Salvador Jorge Blanco, ascendió al poder en condiciones muy diferentes de las que había encarado su antecesor Antonio Guzmán, perteneciente a ese mismo partido⁷. En primer lugar, es mucho mayor la identidad partido-Gobierno. Los resultados de las pasadas elecciones le han permitido al PRD establecer su control ya no sólo sobre el poder ejecutivo, sino además sobre la Cámara de Diputados y el Senado, y a través del Senado, sobre el poder judicial. Es decir que el partido gobernante controla ahora los tres poderes de la democracia representativa dominicana.

Conviene señalar que, en esta ocasión, el PRD ha logrado la victoria con un definido compromiso programático, mientras que en las elecciones anteriores sus dirigentes no habían considerado necesario dar amplia difusión a sus planes. Bastaba explotar el sentimiento de la población, cansada de los 12 años de Gobierno de Joaquín Balaguer⁸. Pero en 1982, para atraer a las masas, tuvieron que presentar un programa concreto e incluso convertirlo en parte de la propaganda radiada y televisada⁹.

Destaquemos otro aspecto, a saber: que el grupo gobernante es ahora el de Salvador Jorge Blanco, que ha pasado a ocupar el lugar de las otras dos fracciones del PRD¹⁰, desacreditadas como partícipes de la corrupción bajo la presidencia de Guzmán. Y ahora está presente una desconfianza potencial hacia el nuevo Gobierno del PRD, aquejado por la penosa herencia de su primera gestión gubernamental. Por otra parte, el pueblo espera todavía que las promesas se conviertan en realidades.

Pero el elemento de novedad más importante es el marco económico en que asciende al poder Blanco. La agudización de la crisis económica y social se produjo hace relativamente poco. La política de Guzmán condujo a un agravamiento, según todos los indicadores, de esta crisis, motivada tanto por la depresión general en la economía capitalista mundial como por la falta de soluciones a los problemas internos del país. Pruebas concretas de ello son el brusco deterioro de la situación en el comercio exterior, la notable caída en el ritmo de crecimiento de la producción, el déficit del presupuesto público, el aumento considerable del costo de la vida y la irrefrenada expansión del desempleo, lo cual, naturalmente, provoca una intensificación de la lucha de los trabajadores de la ciudad y del campo. Y es precisamente en esta situación, al borde de la recesión, que el nuevo Presidente de la República presentó su programa anticrisis, que bien poco puede cambiar en el estado de cosas.

Hoy es ya notable el contraste entre el programa y la práctica de gobierno. La política económica de Blanco está fundamentalmente dirigida a satisfacer las precondiciones¹¹ del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la negociación de un préstamo *stand-by*¹². Todas las medidas aplicadas por el Gobierno tienden a preservar los niveles de las ganancias de las grandes compañías, a reducir el papel de sector público y a acelerar la privatización de la economía, pero sobre todo a conceder mayor libertad de acción a las transnacionales. Con este fin se ha modificado la ley que regula las inversiones extranjeras, facilitando a los imperialistas la repatriación de dividendos en mayores proporciones y en mejores condiciones. Al mismo tiempo se propone un plan de austeridad que, de palabra, exige el sacrificio de todos los dominicanos, pero de hecho supone una nueva ofensiva contra el nivel de vida de la clase obrera, de los sectores de población con bajos o medianos (según la escala nacional) ingresos. Se ha impuesto la congelación de sueldos y salarios en el sector público y se pretende hacer lo mismo en las empresas privadas. Aumentan las tarifas de los principales servicios y se adoptan medidas que, de hecho, estimulan la inflación.

Es evidente que una cosa fueron las promesas hechas

en el curso de la campaña electoral y otra, los hechos, sobre todo en materia económica. De esas promesas se desprendía, por ejemplo, que el Gobierno de Blanco conjugaría el régimen de libertades políticas con lineamientos económicos parecidos a los que puso en práctica el Gobierno de Balaguer¹³. En realidad, las cosas caminan hacia una amalgama de ciertas libertades burguesas y una estrategia a tono con los planes del FMI y los intereses del capital financiero internacional.

A nuestro entender, el país ha entrado en una nueva fase, una fase de hegemonía absoluta de los grupos más poderosos de la burguesía nativa y los monopolios imperialistas. Se ha iniciado un proceso de privatización de la economía dominicana, que hasta ahora se veía frenado por un importante sector estatal¹⁴.

Sería, pues, ilusorio pensar que el Gobierno va a cumplir con sus promesas electorales e implantar una «democracia económica» como complemento de la democracia política. Ocurre todo lo contrario: la profunda crisis económica y social afecta seriamente al fundamento de las libertades vigentes. Desde las más altas instancias del Estado resuenan amenazas represivas. Se ha iniciado un período en el que, de más en más, el modelo político entra en contradicción con la política económica del Gobierno y la recesión económica cada vez más acusada.

En este contexto, resulta muy importante definir exactamente la política de oposición y los puntos de referencia de nuestra actividad práctica. La situación reclama una combinación inteligente de la lucha por la satisfacción de las reivindicaciones económicas inmediatas y las reformas apremiantes con la estrategia de las transformaciones revolucionarias. Partimos del criterio de que la crisis actual no es simplemente el resultado de la política económica del Gobierno y de la burguesía en general. En ella se manifiesta la agudización de la crisis estructural general del capitalismo dependiente. En consecuencia, toda nuestra actividad opositora, y también la de la gran mayoría de las fuerzas de izquierda, está supeditada al objetivo fundamental: la revolución social —anticapitalista y antiimperialista—, la implantación de un poder nítidamente popular en el país.

Los esfuerzos del PCD tendentes a impulsar la lucha por la satisfacción de las reivindicaciones concretas de las masas, a impedir el paso de las autoridades a los métodos represivos de poder, así como nuestro planteamiento acerca de las reformas sociales y económicas, presentan un aspecto que entendemos es importante en la actual situación. Es lo que llamamos «emplazar al Gobierno con sus propias palabras», subrayando así el contraste existente entre promesas hechas, posibilidades para cumplirlas y la actividad práctica con la que nos encontramos. En nuestra propaganda utilizamos las promesas del PRD, exigiendo el cumplimiento de todo lo que pueda haber de positivo en su programa. Esto nos ofrece un importante instrumento para influir sobre el propio electorado del PRD y promover un movimiento de presión de abajo hacia arriba. Naturalmente, esta propaganda va acompañada de la crítica a fondo de ese programa, que no rebasa los límites del capitalismo dependiente.

La orientación del proceso revolucionario dominicano

La actividad opositora del PCD tiene en cuenta plenamente las características actuales del proceso político que se está desarrollando en la República Dominicana. Y a la vez no se contradice con la importancia que concedemos a nuestra plataforma socialista.

Muchas veces hemos oído decir que las consignas democráticas antiimperialistas son condiciones *sine qua non* para alcanzar las metas socialistas de la revolución. Esto es cierto en el plano histórico, si se toma el proceso revolucionario en su globalidad. Pero en cada caso concreto hay que tener en cuenta lo específico del momento. En la República Dominicana era obligado desplegar totalmente las banderas democráticas en el período previo a la Revolución de Abril, cuando se desarrollaba la lucha contra el régimen oligárquico proimperialista. Las consignas democráticas, movilizadores de las masas, fueron también prioritarias durante el Gobierno de Balaguer, que se afianzó en el poder gracias a la intervención militar norteamericana. Pero en la situación actual, a medida que se van

conquistando libertades, cuando el pueblo ha conseguido ya muchas garantías políticas y sindicales, esas consignas pierden, relativamente, fuerza movilizadora. En estas circunstancias, se convierte en una tarea más difícil la movilización de las masas y adquiere mayor importancia la confrontación social directa, la formación de una conciencia de clase. Hoy día en nuestro país los factores principales que redundan en contra del sistema son la crisis económica y la lucha de clases¹⁵.

La política económica determinada por el acuerdo con el FMI, con todos sus aspectos restrictivos, tiende a producir tensiones sociales que, a su vez, generan tendencias represivas dentro del aparato del Estado. En este contexto, se crean las premisas para vincular estrechamente el movimiento antiimperialista, la lucha contra el capitalismo y la oposición a la política represiva. Por eso subrayamos que la situación actual hay que analizarla en toda su complejidad. Con esta óptica elaboramos en la Conferencia Freddy Valdez la línea de principio del PCD, que toma en cuenta los diversos virajes que pueda presentar la vida política del país.

La tarea más importante, prioritaria en el momento actual consiste en crear un polo de izquierda que sirva de base para alcanzar otros niveles de unidad. Al mismo tiempo, los comunistas debemos definir claramente nuestra posición propia, plantear una alternativa al régimen actual. Y esto significa, como subrayamos nosotros, que las ideas socialistas deben jugar su papel tanto en la formación de la vanguardia política como en la captación del sector más avanzado del pueblo. Además, consideramos que en las actuales circunstancias es imprescindible lograr una combinación afinada de los planteamientos socialistas, como referencia estratégica, con la lucha por las reformas y las reivindicaciones concretas del pueblo.

Concedemos importancia especial al programa socialista porque sirve como plataforma de la política unitaria. Desde estas posiciones pretendemos influir sobre los representantes de las corrientes de izquierda que defienden criterios que, en la práctica, pueden conducir al reformismo. Esto se refiere sobre todo a la concepción de la revolución por etapas, que alcanzó difusión en un sector de la izquier-

da, pero no precisamente en el Partido Comunista. Señalemos también que la influencia de las tesis maoístas se tradujo en la caracterización del proceso revolucionario dominicano como nacional-democrático. Y todavía hay quienes sustentan esta apreciación, por lo que debemos polemizar a fondo sobre ese aspecto.

Si la sociedad dominicana la hemos definido como capitalista dependiente, para el PCD no puede ponerse en duda que el carácter de nuestra revolución sea socialista. La acción antiimperialista en nuestro país tiene indudablemente un contenido anticapitalista. Sin embargo, esto no significa el abandono de las tareas democrático-nacionales. Estas tienen su motivación en la persistencia de relaciones precapitalistas y las manifestaciones de despotismo político, y no se contradicen en absoluto con la orientación principal de la revolución. Tampoco creemos que para movilizar a las masas deban utilizarse únicamente consignas socialistas. Pero conviene recordar que, para este momento actual, cuando se registra un proceso unitario en las izquierdas, el debate sobre el contenido fundamental de la revolución juega un papel esencial.

Si el programa de las fuerzas de izquierda parte de la crítica del capitalismo dependiente, resulta imprescindible plantear una alternativa. Lo cierto es, sin embargo, que una parte de la izquierda evadía la cuestión de la alternativa, incluso al discutir entre marxistas. Pero cuando se participa en alianza con fuerzas que sustentan el socialismo, no hay razón válida para eludir ese tema. Durante años, las fuerzas de izquierda dominicanas solían auto-limitarse en el planteamiento de sus propios fines, ya que abrigaban la ilusión de alianzas con sectores de la burguesía que, al parecer, debían de asumir actitudes nacionales. En realidad, si bien esta conformación social puede parir determinadas individualidades o pequeños grupos de burgueses con características propiamente nacionales, lo predominante de ese capitalismo reside precisamente en que ha dado lugar a una burguesía esencialmente dependiente, integrada con todo el capital imperialista.

La difusión de las ideas socialistas se debe en gran parte a los cambios operados en la situación internacional. La

presencia de Cuba como avanzada del socialismo en el continente americano tiene un impacto tremendo en la conciencia de la población dominicana, traduciéndose en simpatías que se asocian precisamente con la definición socialista de esa revolución y se extienden mucho más allá de las fuerzas organizadas en la izquierda. La pujanza del socialismo a nivel mundial, el carácter evidentemente irreversible de este proceso ejercen de por sí una gran fuerza de convicción. Con todo, debemos hacer grandes esfuerzos para explicar al pueblo las causas de las dificultades que surgen en el curso de la construcción socialista. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, el socialismo tiene una tremenda fuerza de atracción, sobre todo para un país atrasado, subdesarrollado como el nuestro, un país en que los principales problemas vitales siguen sin resolverse.

El solo hecho de que el socialismo haya eliminado el desempleo y la miseria, de que haya asegurado el acceso de las masas a la educación, a la salud y a la cultura (como ocurrió en Cuba, situada a unas decenas de millas de nuestra isla), incide notablemente en el comportamiento político de miles de trabajadores dominicanos. Porque, al mismo tiempo, ven la profunda crisis que afecta a todo el sistema capitalista y ven cómo decae el prestigio internacional de los Estados Unidos.

Washington afirmó durante años que Cuba era una excepción, un fenómeno casual y, luego de aplastar la Revolución de Abril en nuestro país mediante la intervención militar, pretendió reforzar su propaganda con ese «argumento». Pero, a dos decenios del triunfo de los rebeldes cubanos, consiguen la victoria los sandinistas, y Nicaragua avanza por la vía de profundización progresiva de las transformaciones sociales. Todo esto, junto a la lucha liberadora en El Salvador, se convierte en un poderoso estímulo para la radicalización del proceso político en la República Dominicana.

¹ En abril de 1965 un movimiento armado desplazó al triunvirato reaccionario que gobernaba la República Dominicana. Los dirigentes de la insurrección, en la que tomaron parte activa los comunistas, formaron un Gobierno encabezado por el coronel

F. Caamaño, quien proclamó su fidelidad a la Constitución democrática de 1963. Sin embargo, la intervención norteamericana impidió que llegara a consolidarse la victoria constitucionalista. —*N. de la Red.*

² Se refiere a las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, en las que el Partido Revolucionario Dominicano logró la victoria valiéndose de poderosos recursos propagandísticos, de la demagogia y la sociología del «mal menor» (un notable número de electores votó a favor del PRD por temor a un eventual retorno al poder del reaccionario Partido Reformista y de su líder, J. Balaguer). —*N. de la Red.*

³ La conferencia del PCD recibió este nombre en homenaje a Freddy Valdez, líder obrero dominicano y uno de los fundadores del PCD, que murió en la cárcel en 1950 a manos de los esbirros del dictador Trujillo. —*N. de la Red.*

⁴ Además del PCD, integran esta coalición el Movimiento Por el Socialismo y el Movimiento de Unidad Socialista. —*N. de la Red.*

⁵ En la Izquierda Unida están representados El Partido de los Trabajadores Dominicanos, la Unión Patriótica Antiimperialista, el Bloque Socialista y otras organizaciones. —*N. de la Red.*

⁶ En el panorama de la izquierda en la República Dominicana predominaron largo tiempo la dispersión y la rivalidad. Como resultado, se formaron múltiples organizaciones políticas, en su mayoría de escasa dimensión. El Partido Comunista ha sido y sigue siendo la fuerza de izquierda más numerosa e influyente. —*N. de la Red.*

⁷ A. Guzmán ascendió a la presidencia tras la victoria del PRD en las elecciones de 1978. —*N. de la Red.*

⁸ J. Balaguer, que implantó en el país un régimen reaccionario, fue Presidente de la República Dominicana de 1966 a 1978. —*N. de la Red.*

⁹ En las elecciones de mayo de 1982, el PRD se comprometió a tomar medidas concretas para combatir los altos niveles de desempleo que se registraron bajo el Gobierno de A. Guzmán. Se habló de un incremento del volumen de obras públicas en la ciudad y del fomento de los asentamientos campesinos. —*N. de la Red.*

¹⁰ Se trata de la fracción encabezada por A. Guzmán hasta su suicidio en 1982 y de la que dirige J. Majluta, vicepresidente bajo el mandato de Guzmán. —*N. de la Red.*

¹¹ A grandes rasgos, las condiciones establecidas por el FMI para conceder al país un préstamo por valor de 459,6 millones de dólares son las siguientes: participación de la banca privada en el mercado negro de divisas (llamado eufemísticamente mercado «paralelo»); prohibición, con divisas legales, de una serie

de renglones de importación; incremento del tipo de interés de los bancos; traspaso de una parte de las divisas que generan las exportaciones tradicionales (azúcar, café, cacao y tabaco) a los empresarios ocupados en operaciones de exportación; concesión de nuevas exoneraciones a la burguesía industrial; reducción de los gastos corrientes del Estado y debilitamiento gradual de su papel en la economía nacional; cese de las prohibiciones vigentes a la importación de bienes suntuarios; congelación de los salarios de los trabajadores. —*N. de la Red.*

¹² Los créditos de reserva *stand-by* constituyen una de las formas de operaciones del FMI. Se conceden a los países que afrontan graves desajustes de la balanza de pagos. A través de este sistema, dichos países pueden sobrepasar el tope de financiación en dólares, en comparación con los créditos corrientes del Fondo. Los préstamos *stand-by* deben ser negociados con antelación. En las negociaciones el Gobierno solicitante debe demostrar la existencia de dificultades para regular la balanza de pagos y su disposición de entregar un contravalor en moneda nacional. Por su parte, el FMI fija las exigencias de política económica que deberán cumplirse para garantizar el retorno de los recursos invertidos. —*N. de la Red.*

¹³ La política económica de J. Balaguer, en su esencia reaccionaria, incluía ciertas medidas orientadas a atenuar la tensión social e impulsar a marchas forzadas el desarrollo capitalista. Con este fin se efectuaron importantes inversiones del Estado en obras de infraestructura, se distribuyó entre los campesinos parte de las tierras del Estado, etc. —*N. de la Red.*

¹⁴ A la muerte de R. L. Trujillo y la caída del régimen dictatorial, los bienes de la familia y socios del tirano fueron traspasados al Estado. Como resultado, se creó un fuerte sector estatal, con 17 empresas industriales (con un capital invertido de aproximadamente 50 millones de pesos dominicanos), así como parte de las acciones de otras 10 empresas industriales. Además, el Estado es propietario de 12 ingenios azucareros, que contribuyen con un 60 % de la producción nacional de azúcar. Del sector estatal forman parte también varias compañías de seguros, empresas comerciales y otras entidades, así como grandes extensiones de tierras. —*N. de la Red.*

¹⁵ Véase *Manifiesto del Partido Comunista Dominicano (PCD)*. Santo Domingo, agosto de 1982.

Cuando la oligarquía está en el poder...

Trevor MUNROE

Secretario General del Partido Obrero de Jamaica

Desde que la revolución cubana, al orientarse hacia el socialismo, logró éxitos evidentes en la solución de los eternos problemas que agobian a los trabajadores de Latinoamérica, ante los pueblos de la región se planteó de manera directa la cuestión de la opción socialista. Washington ha hecho todo lo posible por mantener sumisos los países latinoamericanos, pero no ha logrado lo principal: socavar la revolución cubana, detener las oleadas de ira popular que una tras otra corrían por el continente y más de una vez se transformaron en insurrecciones contra el dominio del imperialismo y de la reacción local.

También en las antiguas colonias británicas del Caribe crecía en amplitud el movimiento de los trabajadores por sus derechos, por un futuro mejor. Este movimiento experimentó a veces la amargura de la derrota, pero también supo alcanzar no pocas conquistas importantes. Hoy, junto con la América Central, el Caribe está en la línea avanzada de la confrontación entre el imperialismo estadounidense y las fuerzas revolucionarias del continente.

Las particularidades de la situación actual se deben, en primer lugar, a la excepcional gravedad de la crisis del sistema del capitalismo monopolista y a la correlación de fuerzas en el mundo, desfavorable para los Estados Unidos, que limita, en grado mayor que antes, la posibilidad de practicar la política del «palo y la zanahoria»; en segundo lugar, a la profundización del contenido social de los movimientos populares liberadores, que ahora no sólo están dirigidos contra la opresión imperialista extranjera, sino que se proponen transformaciones sociales radicales a nivel interno.

Es de notar que en Nicaragua, una vez barrida la dic-

tadura reaccionaria respaldada por los EE.UU., el proceso liberador desbordó el marco de la estatalidad democrático-burguesa; se pasó a la democracia revolucionaria que crea las condiciones necesarias para defender la soberanía nacional y alcanzar la independencia económica y el progreso social.

•

Distinta es la situación que se ha configurado en Jamaica, donde en octubre de 1980 recuperó el poder la oligarquía, representada hoy por la camarilla proimperialista de E. Seaga, que renunció a la política exterior independiente seguida por el Gobierno progresista de M. Manley y sometió el país al dictado de Washington. Obedeciendo a la Casa Blanca, Seaga rompió las relaciones diplomáticas con Cuba. Quedaron destruidas las bases de los sectores público y cooperativo de la economía. Las ramas económicas más importantes pasaron nuevamente a manos de la oligarquía y el capital financiero internacional. Fue suprimido el control estatal de los precios y alquileres establecido por el anterior Gobierno. Dejaron de existir los órganos que aseguraban la participación del pueblo en los asuntos del Estado. Se destituyó a los funcionarios y oficiales progresistas que ocupaban puestos clave en el aparato estatal, el ejército, la policía y los medios de comunicación de masas. Se recortaron considerablemente los derechos de los trabajadores y se impusieron restricciones a la actividad sindical.

La vuelta del país a la orientación proimperialista y la aplicación de una política antipopular van acompañadas de actos de represión contra los comunistas, contra toda la izquierda y contra la población de aquellas regiones en las que tienen mayor influencia. Las intervenciones del Partido Obrero de Jamaica (POJ) en la prensa y a través de otros medios de comunicación masiva están sometidas a una severa censura. Se fomenta una campaña anticomunista en el espíritu de la guerra fría.

Este brusco cambio de la situación planteó nuevas tareas. Poco después de que la derecha accediera al poder, el Comité Central del POJ propuso convocar el II Congreso, considerándolo necesario no sólo para nuestro partido, sino también para todo el movimiento liberador de Jamaica.

A pesar de las difíciles condiciones, se realizó un gran trabajo de preparación¹. El Congreso se celebró en el plazo fijado, del 17 al 20 de diciembre de 1981².

Hoy, a la luz de la situación creada en el país, vemos que el Congreso acertó plenamente al explicar la derrota del Gobierno Manley por tres causas fundamentales. Primero, la vasta campaña de desestabilización de la economía y de la vida social, dirigida por EE.UU. y coordinada con las acciones de la oligarquía doméstica. Segundo, la influencia ejercida por la burguesía nacional en el movimiento liberador, que debilitaba la réplica opuesta a la creciente actividad reaccionaria. Y tercero, la vanguardia política de la clase obrera —el POJ— y los demócratas izquierdistas del Partido Nacional Popular, a pesar del crecimiento y desarrollo logrados, todavía no poseían fuerza suficiente como para evitar vacilaciones en la dirección del movimiento antiimperialista.

A veces se pregunta: ¿no fue demasiado lejos este movimiento, y el POJ en particular, en su «izquierdización»? ¿No se planteó tareas demasiado radicales, que no se correspondían con la situación real? ¿No hizo con eso el juego al imperialismo y la oligarquía? Semejantes dudas las rechazamos de plano. Los objetivos democráticos y antiimperialistas que nos fijamos bajo el mandato de Manley, respondían a los intereses vitales del pueblo jamaicano y en el país existían fuerzas capaces de realizarlos. El cambio fatal se produjo debido al factor subjetivo. En el Informe del CC se señalaba: «En vísperas del 30 de octubre de 1980³, los imperialistas y la reacción no estaban seguros de poder triunfar... La batalla de 1980 fue uno de los momentos en la historia de nuestro pueblo cuando el desenlace habría podido ser otro si la dirección (del movimiento nacional-liberador. —N. de la Red.) hubiese obrado con firmeza y defendido su causa hasta el final»⁴.

No tiene ningún fundamento la tesis de que la intensa actividad del POJ estimuló el anticomunismo y, por ende, contribuyó a la derrota. La unidad de los comunistas con otros participantes de la lucha liberadora era y sigue siendo la primera condición de la victoria sobre la reacción, con la particularidad de que la independencia del partido proletario no impide sino que contribuye al logro de la

unidad. El cambio de la correlación de fuerzas políticas en el seno del movimiento nacional-liberador en favor de los trabajadores: ésta es la garantía de nuestros éxitos en las batallas presentes y futuras.

«La clase obrera —se subraya en los documentos del Congreso— ha de jugar un papel más importante e independiente en el movimiento nacional-liberador. Y para librar al pueblo de los horrores del régimen actual, para avanzar y volver a tener éxitos en la lucha por una vida mejor, el partido debe ser más fuerte⁵. Precisamente por eso una tarea inaplazable del POJ es el engrosamiento de sus filas, la consolidación de sus vínculos con las masas, ante todo con el proletariado. Al cumplir esa tarea, los comunistas jamaicanos tratan de propiciar con esfuerzos coherentes la elevación del grado de combatividad de los trabajadores, de lograr la cohesión de toda la izquierda.

•

En el plano internacional, nuestro partido destaca en primer lugar «el grave peligro que representan la extraordinaria agresividad del imperialismo con sus vanos intentos de liquidar las conquistas alcanzadas por las fuerzas progresistas del mundo, y la aspiración a alterar el equilibrio militar con el socialismo, equilibrio que impide a los imperialistas el desencadenamiento de la guerra mundial»⁶.

Comprendiendo la enorme importancia de la lucha por la paz y apreciando de modo autocrítico la labor realizada en este terreno, el CC del POJ considera que ésta es insuficiente. Desplegar en el país el movimiento antibélico de masas es una de las tareas más importantes que se nos plantea en el presente. Estamos seguros de que la máxima movilización y la acción mancomunada de los hombres adictos a la paz de todo el planeta frenarán a los que instigan a la guerra.

Es natural que el partido dedique una especial atención a la situación existente en el Caribe y Centroamérica. Partiendo de un análisis realista de las posiciones del imperialismo, en primer término del imperialismo estadounidense, el Congreso constató: «Su dominio prolongado en la región, la fuerte influencia de las multinacionales sobre la economía de nuestros países, la red de bases militares

en la cuenca del Caribe, actualmente en proceso de modernización, la influencia psicológica ejercida durante muchos años en la población autóctona y, no en última instancia, el alejamiento geográfico respecto del grueso de la comunidad socialista: todo eso más la influencia de los partidos tradicionales de la región, cuya actividad obedece a los intereses imperialistas no menos y, en ocasiones, incluso más que a los nacionales, favorecen a los imperialistas y crean serias dificultades para las fuerzas progresistas en nuestra zona»⁷.

Pero la apreciación realista de las posibilidades del enemigo no induce al POJ a sacar conclusiones pesimistas. Por el contrario, reafirmando las bases históricas y materiales de nuestro optimismo, demostramos la incapacidad del sistema imperialista, de la sociedad capitalista, para resolver los problemas más importantes de la vida social contemporánea. Las masas trabajadoras se inspiran cada vez más en el ejemplo de los países socialistas. Para el Caribe y América Latina, la revolución cubana es en todo momento una estrella que nos guía, un lucero que nunca palidece a pesar de las intrigas imperialistas. En los países anglófonos del Caribe, la decisión de los pueblos de cambiar su destino se manifiesta en la constante protesta contra el desempleo crónico, los bajos salarios, las míseras condiciones de vivienda y el pauperismo, contra la humillación racista de la mayoría negra, la flagrante discriminación de la mujer y otros atropellos.

El descontento de las amplias masas revestía durante largo tiempo (no sólo en el período colonial, sino también después de lograda la soberanía estatal) formas más o menos aceptables para los detentadores del poder. Se plasmaba en el trasvase de afiliados y simpatizantes de un partido controlado por la burguesía a otro, de un sindicato oportunista a otro; en huelgas dirigidas por líderes relacionados con los círculos gobernantes, así como en la emigración (principalmente a EE.UU. e Inglaterra) y la expansión de la droga entre cierta parte de juventud. A pesar de la creciente indignación de los trabajadores, su protesta se limitaba por regla general a reivindicaciones de carácter democrático-burgués, que cabían en el molde del capitalismo dependiente.

Ahora la situación es diferente. A partir de la década del 70, el descontento empezó a cundir entre nuevas y nuevas capas sociales rebasando los marcos de la legalidad burguesa y de las concepciones políticas tradicionales y engendrando crisis nacionales. En varios países maduraron situaciones revolucionarias. En 1970, en Trinidad; en 1973-1974 y en 1979, en Granada, y a mediados de la década, en Jamaica, donde surgió entonces por primera vez la posibilidad de derribar el poder de la oligarquía.

De esa ola de protesta masiva han emergido en casi todos los países anglófonos del Caribe (a excepción de Montserrat y St. Kitts) grupos, «prepartidos» y partidos progresistas, que pasan a jugar un papel estratégico en el desarrollo del movimiento nacional-liberador. Esas organizaciones, integradas generalmente por los mejores representantes de la intelectualidad y por una parte de los proletarios y desempleados, se afirman cada vez más en las posiciones antiimperialistas, adoptan la orientación marxista-leninista y procuran organizar su trabajo en base a la disciplina consciente y desarrollar su actividad entre las masas populares.

Muchas de estas organizaciones tienen experiencia de participación en las elecciones burguesas. En las de 1978, en St. Vincent, el Movimiento Popular Unido obtuvo el 15% de los votos. En Jamaica, donde en 1981 tuvieron lugar elecciones a los órganos de administración local el POJ reunió en dos circunscripciones el 13% y el 16% de los votos respectivamente. No siempre y no en todas partes se lograban resultados significativos. Pero el número de votos recogidos no es el único criterio para apreciar el papel de las jóvenes organizaciones revolucionarias que, como demuestra la práctica, por el mero hecho de existir ya perturban la hegemonía política de la burguesía y ofrecen una alternativa para el desahogo del descontento popular.

En los países anglófonos del Caribe se está realizando hoy la posibilidad de unir el socialismo científico a la lucha de un sector considerable de los trabajadores que participan en los movimientos de liberación nacional. Así lo demuestra palmariamente el hecho de que las jóvenes organizaciones revolucionarias de varios países de la región

sigan actuando y desarrollándose a pesar de las brutales persecuciones y la rabiosa propaganda anticomunista.

Nuestro partido considera como una brillante manifestación de esta identidad de criterios entre las organizaciones revolucionarias de los países anglófonos del Caribe el que todas ellas hayan enviado delegaciones o mensajes de saludo y solidaridad al II Congreso del POJ. Y la creciente unidad sobre una base antiimperialista es claro síntoma de la profundización del proceso nacional-liberador.

•

En la presente etapa, el sistema de dominación capitalista en el Caribe atraviesa una grave crisis engendrada no por la mítica actividad subversiva de Cuba o la Unión Soviética, sino por la irrefrenable aspiración de los pueblos a un futuro mejor. Es precisamente esta aspiración la que trata de sofocar el imperialismo estadounidense.

Así y sólo así hay que entender el verdadero sentido de la «iniciativa para el Caribe» con la que Reagan intervino en la sede de la OEA en febrero de 1982. Esa «iniciativa» no es, ni mucho menos, un programa de ayuda al desarrollo de los pueblos del Caribe, como trata de presentarla la Administración de los EE.UU., sino un nuevo plan de fortalecimiento de la oligarquía y de defensa de los intereses imperialistas. No es casual que el «programa de ayuda» no se extienda a los Estados que siguen una política independiente y en los que ha triunfado la democracia revolucionaria, mientras que los países cuyos gobernantes procuran liquidar los movimientos liberadores, que amenazan las posiciones del imperialismo, reciben la parte del león de la «mesa servida por Reagan» para el Caribe.

Semejante actitud es un intento apenas velado de «dividir para reinar». No sólo está en contradicción con los intereses de las masas, sino que desatiende por completo la opinión expresada por todos los gobiernos de nuestra región, incluso tan derechistas como los de Barbados y de Dominica. Esta opinión, formulada al discutirse la «iniciativa para el Caribe» en las conferencias de octubre de 1981, se reduce a lo siguiente: «todos los territorios de la región podrán participar en el programa», el cual «debe

respetar el derecho de cada nación a determinar, sin ninguna injerencia o presión exterior, la vía de su desarrollo económico y social».

¿Cuál es el contenido concreto de la «iniciativa»? El plan de Reagan tiene tres componentes fundamentales: militar, político y económico. La «ayuda» militar de EE.UU. a los países del Caribe aumentó en 1982 en más de 250 % frente a la prestada en 1981⁸. El incremento de la «ayuda» militarista y las maniobras de las fuerzas armadas de los EE.UU. y la OTAN en la cuenca del Caribe son una manifestación de la política de «gran garrote» aplicada por la actual Administración de Washington.

El componente político de la «iniciativa» presupone la entrega de cuantiosas sumas a los líderes derechistas, proimperialistas⁹. Por ejemplo, sólo a una organización norteamericana —Agencia para el Desarrollo del Trabajo Libre— le han sido asignados por la Administración Reagan 2 millones de dólares a fin de que apoye las tendencias oportunistas en el movimiento sindical caribeño.

Washington procura que los partidos de derecha reciban las mejores «bazas» y esto se consigue no sólo prestando apoyo financiero, sino también ayudando a organizar el fraude en las elecciones, como ocurrió durante la farsa electoral en El Salvador. El objetivo consiste en reducir a la nada las posibilidades electorales de las fuerzas de izquierda y, cuando hayan «fracasado» en los comicios, declarar que sus organizaciones «carecen de representatividad».

En cuanto al componente económico del plan Reagan, la «zanahoria» es bastante pequeña: 350 millones de dólares para el ejercicio de 1982, de los cuales 120 millones correspondían a El Salvador, 50 millones a Jamaica y otros tantos a Costa Rica. Habida cuenta de las necesidades reales de los países de nuestra región, esto es menos que una gota en el océano. Según la ONU, necesitarían en el actual decenio 20 mil millones de dólares sólo para cubrir las necesidades económicas más importantes.

El plan Reagan estipula el establecimiento del régimen de «libre comercio» para los Estados que se adhieran a su «iniciativa para el Caribe». Esto significa que las multinacionales estadounidenses abrirán allí nuevas filiales que

sacarán pingües beneficios aprovechándose de la mano de obra barata, de la supresión de las restricciones a la actividad del capital foráneo y del debilitamiento de los sindicatos a causa de la política seguida por gobiernos como la Administración Seaga. Mientras tanto, todas las capas de la población (a excepción, naturalmente, de la oligarquía y la burguesía burocrática) ya están sufriendo el empeoramiento de las condiciones de vida originado por la extensa penetración del capital imperialista en la economía nacional, es decir, precisamente por lo que Reagan plantea como la condición más importante para recibir la «ayuda» económica norteamericana.

La «iniciativa para el Caribe» es, en esencia, una inyección que galvaniza a las clases caducas y sus instituciones políticas. Y nosotros tenemos muy claro que ese tipo de inyecciones surten efecto cuando la izquierda está dividida y es incapaz de realizar una labor perseverante en todos los frentes. Por eso la lógica de la vida exige de los revolucionarios que presten especial atención a los problemas de la unidad popular y desarrollen al máximo su actividad en todos los sectores de lucha.

•

Es evidente, además, otra cosa: que siguen profundizándose las contradicciones objetivas entre nuestros pueblos, por una parte, el imperialismo estadounidense y los regímenes que dependen de él, por otra. De ahí la inminencia de nuevas batallas, aún más encarnizadas, en el Caribe. Los comunistas jamaicanos, pertrechados con las conclusiones del II Congreso del POJ y con el programa de acción aprobado en él, estamos preparados para los combates en ciernes. Tenemos en cuenta la experiencia del movimiento revolucionario mundial, movilizamos a las masas y desarrollamos la cooperación con todas las fuerzas democráticas y antiimperialistas.

¹ La preparación del Congreso se inició después de consultas realizadas en el POJ a todos los niveles. En la medida en que lo permitían las difíciles condiciones de trabajo con las que tropezaban las organizaciones locales, se observaron las normas leninistas de democracia interna. Los proyectos de documentos

básicos se discutieron en todos los núcleos de partido, participó en el debate el 85 % de los militantes. El llamamiento dirigido a los trabajadores pidiéndoles que prestasen ayuda material para la celebración del Congreso fue ampliamente respondido y contribuyó a afianzar los vínculos del partido con su reserva inmediata. Más de cuatro mil personas hicieron aportaciones al fondo del Congreso superiores a los 25.000 dólares jamaicanos. El partido recibió también ayuda material de otro tipo. El principal protagonista de esta campaña fue el proletariado: el 40 % de los que participaban en ella eran obreros.

² En el Congreso participaron 234 delegados con voz y voto. La edad de los delegados (el 76 % tenían menos de 30 años) evidencia que el POJ es un partido joven. La composición social del Congreso reflejó el importante papel desempeñado por los representantes progresistas de las capas medias y la intelectualidad en la afirmación del marxismo-leninismo y en el desarrollo del movimiento proletario organizado en Jamaica. A los representantes de estos sectores les correspondió el 55 % de los mandatos. El 25 % de los delegados eran obreros, fuerza creciente del partido; el 15 %, desempleados y el 5 %, universitarios. La apreciable participación femenina (28 %) muestra la gran atención que el POJ presta a la elevación de la actividad política de la mujer. El 29 % de los delegados al Congreso procedían de ciudades periféricas y zonas rurales, pues el partido, rebasando los límites de los centros urbanos más importantes, se ha convertido en una fuerza nacional. El papel de vanguardia del POJ se manifestó en que más del 33 % de los delegados eran dirigentes de sindicatos, asociaciones de empleados, organizaciones juveniles, estudiantiles, femeninas y otras organizaciones de masas. Casi la mitad de los delegados había asistido al I Congreso y uno de cada diez había militado ya en la Liga de Emancipación de los Obreros (antecesora del POJ) desde su fundación en 1974. Estos datos confirman la tradición de continuidad en el desarrollo del movimiento comunista de Jamaica.

³ Fecha de las últimas elecciones parlamentarias. —N. de la Red.

⁴ *Workers Party of Jamaica. Report of the Central Committee to the Second Congress by Trevor Munroe, General Secretary.* 17 de diciembre de 1981, p. 33.

⁵ *Ibíd.*, p. 59.

⁶ *Ibíd.*, p. 4.

⁷ *Ibíd.*, p. 13.

⁸ La «ayuda» militar aumentó de 50 millones de dólares en 1981 a 182 millones en 1982. Su destinatario principal es El Salvador (25 millones en 1981 y hasta 81 millones en 1982). (Véase *Fact Sheet. Caribbean Basin Policy. US State Department, 1982.*)

⁹ Durante las últimas elecciones nacionales en Jamaica (1980), Trinidad y Tobago (1981) y St. Lucía (mayo de 1982), EE.UU. hizo asignaciones considerables para apoyar a los líderes reaccionarios. Semejante forma de injerencia en los asuntos internos de otros Estados recibió, en esencia, una aprobación oficial en el discurso de Reagan pronunciado el 8 de junio de 1982 en el Parlamento británico.

Dinámica del proceso revolucionario

Rubén Darío SOUZA BATISTA
Secretario General del CC
del Partido del Pueblo de Panamá

Los acontecimientos que han tenido lugar en Panamá después de la trágica desaparición del General Omar Torrijos en circunstancias no claras hasta ahora, han sometido a serias pruebas a lo que hemos identificado como el proceso revolucionario panameño. Podemos decir que, pese a las dificultades intrínsecas y extrínsecas de ese proceso, ha prevalecido hasta ahora la orientación torrijista consistente en proseguir la descolonización de nuestro país; en mantener una democracia pluralista con participación de todas las clases y la forma de poder popular; en seguir el camino del desarrollo económico nacional por medio de la forma multisectorial (Empresa Estatal, Cooperativas de trabajadores y Empresa privada); y en reiterar su actividad internacional independiente, no alineada.

Lo que resulta después de todas estas vicisitudes como el cambio abrupto en la cúspide de la Guardia Nacional en marzo de 1982 (retiro del Comandante F. Flores) y la renuncia del ex Presidente A. Royo el 30 de julio del mismo año es la mejor prueba de que el proceso de transformaciones panameño es un movimiento que ha rebasado motivaciones circunstanciales y anímicas y que constituye una modalidad específica, correspondiente a un país dado, en condiciones de desarrollo histórico determinado y en un marco internacional muy concreto. Es posible que quien haya perdido la noción de particularidad, obligatoria de todo proceso revolucionario, y sólo haya buscado la reiteración de generalidades, oponiéndola mecánicamente a lo típico y a la identidad particular, en vez de ver en esas expresiones un enriquecimiento creador de las

leyes generales, no comprenda cabalmente el desenvolvimiento de nuestra lucha social y más bien dé por fracasado lo que comenzó como un experimento de los militares pequeñoburgueses en octubre de 1968¹ y tomó posteriormente la forma de un movimiento popular, democrático de liberación nacional.

Lo característico del proceso panameño

La cuestión es que no puede entenderse el desarrollo de la lucha social en nuestro país si se le saca de su contexto histórico específico y sólo se le aprecia haciendo paralelos con otras situaciones distintas. Es el caso que en Panamá ha madurado una revolución que corresponde a un contenido que podemos generalizar como el de una revolución democrática. Pero en la especificidad nuestra, tanto por el nivel de desarrollo de nuestras fuerzas productivas como por el vínculo particular que tenemos con el sistema internacional de explotación imperialista, tanto en grado como en modalidad, esa revolución democrática, que por su tarea histórica es burguesa, por la circunstancia y la coyuntura en que se realiza, refleja la contradicción anti-imperialista. En la forma particular de nuestro país esa contradicción se expresa en la lucha anticolonial y por la nacionalización del Canal, y contra el capitalismo dependiente en su forma nacional, correspondiente a la organización de la explotación económica y a los diversos intereses que el imperialismo norteamericano realiza mediante la dominación sobre nuestra nación. El carácter de esta revolución exige por lo tanto esclarecer cuáles son las fuerzas sociales que deben y pueden realizarla.

El Partido del Pueblo de Panamá (PPP) abordó este problema desde 1956², esforzándose por desentrañar objetivamente las distintas posiciones determinadas por los diversos intereses de clases que concurrían al torrente revolucionario de esos años, con el propósito de participar en primera fila en la realización de la revolución. Partiendo de la tesis marxista-leninista del carácter policlasista de la revolución democrática, nosotros pudimos precisar la composición social del movimiento revolucionario pana-

meño en su nivel democrático, encontrando ese pluralismo, y establecimos la función real que cada grupo social jugaba en la práctica, según sus intereses, para realizar esas transformaciones de acuerdo con nuestras propias condiciones. Así se estableció que en la realidad nuestra, era una gran parte de la pequeña burguesía, aquella que evolucionó en dirección de la lucha democrática y contra el capitalismo dependiente (aunque en ese momento no fuera consecuentemente antiimperialista) la que tenía la iniciativa y la que principalmente movilizaba la lucha popular.

El carácter de vanguardia que la pequeña burguesía progresista adquirió en nuestra experiencia tiene que explicarse por las condiciones de su evolución política. Ha sido un largo camino parejo a las vicisitudes que enfrentó la formación de nuestra Nación desde su separación de España en 1821 hasta el período de la lucha contra el imperialismo norteamericano. En la época de nuestra República en ese proceso la posición de la pequeña burguesía no siempre fue consecuente con los intereses ascendentes de la Nación, alterando posturas conservadoras con posturas progresistas del momento.

Así, lo más trascendente de la pequeña burguesía ante la formación del Estado de la Nación Panameña en 1903, fue su posición conservadora de condenar el acto de independencia de Panamá de Colombia y de acusar a los Próceres, desde un punto de vista moral, de haberse coludido para hacer posible lo que calificaron de despojo contra el Estado Colombiano. Mas cuando quedó claro que concomitantemente al surgimiento del nuevo Estado Panameño, por el aprovechamiento que el imperialismo hizo de este conflicto, aparecieron dos formas inicuas de sujeción, simultáneamente, la posesión colonial de la franja en que se construiría el Canal y el protectorado sobre el Estado Nacional, la pequeña burguesía se encaminó hacia las posiciones nacionalistas bajo el signo del liberalismo como ideología de la burguesía nacional.

Posteriormente una gran parte de la burguesía panameña fue objeto de depravación por parte del imperialismo norteamericano, con la cual se crearon las bases económicas y políticas del capitalismo dependiente por lo

que el liberalismo degeneró de una ideología progresista a una ideología de opresión nacional y de la formación de una casta en el poder al servicio del imperialismo, y que el pueblo conoció por oligarquía, y odió tanto. La pequeña burguesía en general entra en crisis por esta razón con el liberalismo y sale a enfrentar políticamente a los nuevos mandones que a su vez se han convertido en lacayos de los monopolios yanquis.

Es bien sabida la apreciación que hizo C. Marx del carácter dual de la pequeña burguesía, por un lado conservadora por sus amarres con el pasado, pero, por otro lado, «...revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado»³. Se ha expresado de manera singular en la evolución política de la pequeña burguesía panameña que si bien no ha cumplido todo el ciclo de proletarización gran parte de ella ha llegado a las posiciones de la democracia revolucionaria y liberación nacional.

Como puede apreciarse, el rompimiento ideológico de la pequeña burguesía con el liberalismo creó una condición que, encuadrada en el creciente reaccionarismo de la oligarquía y una mayor y más aguda penetración imperialista inmediatamente después de la segunda guerra mundial, la predispuso a desgajarse del régimen que prevaleció hasta ese momento en nuestra república, lo cual sólo podía lograrse mediante una revolución democrática de carácter antiimperialista.

Nuestro partido, al comprender este contenido de nuestra revolución y reconocer el papel hegemónico objetivo que ostentaba la pequeña burguesía hasta ese momento, trazó la línea de apoyarse (que no significa apoyar su posición social de clase) en sus aportes progresistas a la lucha social para aislar al enemigo principal y para abrirle camino a la clase obrera hasta alcanzar el papel de vanguardia que le corresponde ya, así como a su Partido.

Esta concepción táctica y estratégica del PPP se basó en el enfoque leninista sobre las clases destinadas a empujar la revolución democrática en la época del imperialismo y

el papel dirigente que el partido de la clase obrera tenía que ocupar. La aplicación de ese enfoque en la particularidad nuestra consistió en transformar la posición democrática burguesa a secas e inconsecuentemente antiimperialista de la pequeña burguesía progresista en una posición antiimperialista de principio con lo cual se daría forma a otro tipo de revolución democrática, distinta a la clásica revolución burguesa, sería la revolución democrática antiimperialista, es decir lo que se ha configurado en Panamá como la revolución democrática de liberación nacional.

Nosotros aplicamos a nuestra realidad la ponderación que hizo Lenin de la Resolución del Tercer Congreso del POSDR, sobre el Gobierno Provisional revolucionario, la que considera a las ideas del marxismo sobre el carácter burgués de la revolución democrática «como prólogo o primera premisa para sacar conclusiones sobre las tareas de vanguardia de la clase de vanguardia que lucha tanto por la revolución democrática como por la revolución socialista»⁴. El camino que eligimos tanto con respecto a la pequeña burguesía progresista como con respecto al carácter antiimperialista de la revolución democrática panameña, nos permitió dentro de esa coyuntura asumir la «tarea de vanguardia» de la «clase de vanguardia» en el interés de realizar la revolución democrática y socialista.

El medio para realizar esta tarea fue el movimiento estudiantil en donde irrumpieron las ideas marxistas-leninistas con fuerza de masa y se produjo rápidamente una radicalización democrática antiimperialista. Este fue un factor que influyó en todas las clases y capas sociales que apoyaron la revolución democrática, pero principalmente a la pequeña burguesía, ampliando la base del sector progresista y haciéndola comprender que el enemigo de fondo era el imperialismo yanqui y que la burguesía dependiente era su fuerza de sustentación nacional. Este enfrentamiento con el capitalismo dependiente en la lucha antiimperialista, dentro de esas circunstancias, ha llevado implícita, obligatoriamente, una lucha determinada contra el sistema capitalista a pesar de que esta no es una revolución socialista ni la pequeña burguesía se ha liberado del reformismo ni ha totalizado su proletarización y por lo tanto

ha constituido una primera premisa de la revolución socialista. En otras palabras, nosotros enfocamos la revolución democrática de liberación nacional orientada a crear los fundamentos reales de la revolución socialista como perspectiva de la lucha actual. Ese paso lo dimos, luchando por tomar la dirección de la pequeña burguesía desde una posición antiimperialista y utilizando su lucha democrática para crear las condiciones favorables para que la clase obrera escalara su verdadero papel de vanguardia. Así cumplimos en nuestro caso con una exigencia que Lenin hizo a la revolución democrática rusa de «dirigir (en caso de que la gran revolución rusa se desenvuelva con éxito) no sólo al proletariado, organizado por el Partido Socialdemócrata, sino también a esa pequeña burguesía capaz de ir a nuestro lado»⁵.

Nuestro partido siempre ha considerado que la revolución democrática de liberación nacional en Panamá es un proceso largo, dadas las tareas complejas de liberación que ella debe cumplir. El imperialismo no sólo nos unció con el lazo colonial, sino también con el semicolonialismo y el neocolonialismo. En esa perspectiva siempre hemos apreciado que el papel hegemónico de la pequeña burguesía puede darse en los primeros escalones de la lucha democrática antiimperialista, pero en el curso de ella debe cambiar el mando a favor de la clase obrera por medio de la alianza obrero-campesina y culminar la revolución democrática de liberación nacional y pasar a la revolución socialista ininterrumpidamente.

Hemos considerado que en la particularidad panameña se da la posibilidad que Lenin observó como una peculiaridad de la revolución democrática rusa de 1905 que «por su contenido social, fue una revolución *democrático-burguesa*, mientras que, por sus medios de lucha, fue una revolución *proletaria*»⁶. En otras palabras, el camino que falta por recorrer para lograr nuestra total liberación y desarrollar la democracia que garantice todos los derechos de las clases populares, pese a que no es la revolución socialista aún, dada su complejidad y su profundidad social, tiene que realizarse bajo la dirección del proletariado. Esto es así porque la pequeña burguesía desde sus posiciones genuinas de clase no podrá desprenderse por sí

sola de su reformismo, por un lado, ni de su utopismo, por otro. Sólo la clase obrera desde una posición de vanguardia puede realizar esa transformación y atraer consecuentemente al sector progresista a la revolución socialista.

Nuestra experiencia en este sentido es que, en tanto nuestra revolución cursa por la fase anticolonial y antioligárquica (sólo apartar de la administración a esa casta de poder, pero no liquidarla económicamente), la pequeña burguesía aún puede dirigir y tomar al proletariado como aliado estratégico. Pero si esa revolución pasa a la fase antineocolonial y se aboca a la liquidación del capitalismo dependiente, la pequeña burguesía, en tanto mantenga su posición de clase, reducirá su alianza a nivel táctico con la clase obrera porque se inclinará al reformismo y hasta puede llegar a romper con ella. Por ello, es necesario que la clase obrera asuma la dirección y haga evolucionar a la pequeña burguesía en dirección de las posiciones del proletariado de tal manera que su alianza con ella siga siendo estratégica en la fase superior de la lucha democrática de liberación nacional y que desempeñe un importante papel en la apertura de la senda del socialismo.

La alianza con la clase obrera y su vanguardia

Es en estas condiciones específicas como se ha establecido un entendimiento de hecho entre la pequeña burguesía progresista y la clase obrera en su inmensa mayoría y su vanguardia. Esto, indudablemente, ha sido un paso adelante en el ascenso político de las fuerzas revolucionarias de Panamá. La apreciación justa del papel de esta categoría de la población en la fase inicial de la revolución democrática, permitiendo desarrollar una política consecuente a nuestro partido hacia ella, y su frustración con la ideología burguesa no han sido los únicos factores, aunque sí los más importantes de su evolución política. Podemos decir que esos factores que hemos explicado, la acondicionaron para recibir otras influencias en un sentido revolucionario.

El mismo desenvolvimiento de la lucha de clases en la

cual el papel protagónico de la clase obrera ha ido creciendo, ha servido para que la pequeña burguesía entienda que otras clases y capas sociales están interesadas en la revolución democrática y en la liberación nacional.

Los grandes acontecimientos internacionales de las últimas tres décadas han sido palancas para que en las filas de la pequeña burguesía se haya formado un sector progresista. Los avances del socialismo, la lucha ascendente del proletariado internacional y los resultados esperanzadores del cada vez más potente movimiento de defensores de la paz han despertado en ella un gran interés y poco a poco la han ido envolviendo. Uno de los acontecimientos que más la atrae son los triunfos de los movimientos de liberación nacional en África, Asia y América Latina. Especialmente la victoria antiimperialista de la revolución cubana y del pueblo de Vietnam le dieron un impulso moral y político para luchar en una posición de vanguardia.

Asimismo, la continua crisis general del capitalismo y el debilitamiento de sus instituciones han influido para que abandone su fatalismo y busque un camino nuevo. El impacto de la revolución técnico-científica, la aparición de las tendencias renovadoras en la Iglesia, la frustración del Panamericanismo y los grandes movimientos sociales en el seno de la sociedad norteamericana, como la lucha contra la discriminación racial, han ejercido una influencia enorme para que rompa con su tendencia conformista, le han hecho perder parte de su apego al orden establecido. Todo esto quiere decir que el modo de pensar y de actuar de la pequeña burguesía está bajo un proceso de cambio y es dentro de esas condiciones que nuestro partido hace énfasis en conducir, teniendo en cuenta esa transición, esa transformación para fortalecer la base política de la revolución social. Basándose en esta apreciación nuestro partido desarrolla su política de alianza hacia esa fuerza social.

No obstante, ese cambio de la pequeña burguesía no es en línea recta hacia las posiciones del socialismo, porque en la medida que expresa su posición de clase, tiende a tipificar con la idea democrática revolucionaria su propuesta social con pretensiones a erigirse en una tercera

ideología para suplantarlo, o posponerlo, evitando que la clase obrera asuma su legítimo papel de vanguardia en la revolución democrática por los medios proletarios.

La pequeña burguesía mientras mantenga interés propio de su clase, lleva adentro la desconfianza hacia la clase obrera y una oposición natural al socialismo científico. Esto se explica debido a que el interés de clase de ella no es antagónico con la propiedad privada y, por el contrario, la pequeña propiedad privada a la que ella une su existencia de clase, es premisa permanente de la propiedad privada.

En consecuencia, si el proceso democrático revolucionario de Panamá responde a una dirección pequeñoburguesa, que no ha roto con su naturaleza de clase y que, por el contrario, pretende ponerse al margen de la contradicción fundamental de la época que transcurre, capitalismo vs socialismo, ello significa que así la revolución no llegará hasta sus últimas consecuencias. En esas condiciones se necesitará transferir la dirección a una clase más revolucionaria que le dé un nuevo contenido, profundamente antiimperialista y democrático, a la unidad de todas las fuerzas del proceso. De esto se puede deducir que la pequeña burguesía como tal puede ser un aliado de la clase obrera en las instancias iniciales de la revolución democrática, pero que el ulterior desarrollo de ella exigirá una radicalización de la pequeña burguesía que por sí misma no podrá llegar, sino por la influencia decisiva de la clase obrera que debe haber alcanzado su papel de vanguardia real e integral y elevar el contenido de la unidad de todas las fuerzas clasistas revolucionarias.

En la experiencia de lo que va del proceso democrático revolucionario panameño, la pequeña burguesía que lo dirige acepta la alianza con la clase obrera y su vanguardia en la medida que éstas contribuyan a realizar los cambios democráticos burgueses que han madurado, a eliminar el capitalismo dependiente por la vía de la extinción y a acondicionar el capitalismo nacional (pero no destruirlo) en una economía mixta, a que se posponga la meta socialista, excluyendo los medios proletarios para alcanzarla, y espere el socialismo por la vía de la evolución.

Debe apreciarse que esta actitud es una intención lógica del interés de clase de la pequeña burguesía. Llega a imponerla o no, va a depender de la posición independiente y socialista de la clase obrera y sobre todo de su vanguardia política. Frente a este momento, la clase obrera debe ejercer su vanguardia, buscar todos los medios para lograr la dirección del movimiento revolucionario, cuidándose de no romper con las fuerzas progresistas de la pequeña burguesía, sino transformando esta alianza en una unidad de principios más firmes y tras un objetivo revolucionario más profundo. Esto supone una lucha ideológica muy compleja, muy inteligente y, sobre todo, de mucho tacto político. Supone descubrir a tiempo donde están las verdaderas posiciones del enemigo a vencer, por mucho que las enmascare, y donde las del aliado rezagado o equivocado.

El PPP considera que la pequeña burguesía, sin negar su aporte revolucionario, ha comenzado a quedarse a la zaga de la nueva realidad. Esta situación marca otro momento de la lucha ideológica en que para que los cambios iniciados se profundicen y se amplíen la clase obrera tiene que jugar un papel de más peso, como ha empezado a hacerlo ya, y se atraiga a sus posiciones de clase al sector progresista y más consecuente de la pequeña burguesía de tal manera que se pueda cumplir sin interrupción la fase culminante, aún no realizada, de la revolución democrática de liberación nacional, antesala, en nuestro caso, del socialismo.

Para que esta alianza continúe y se desarrolle tiene que darse un nuevo nivel ideológico, político y organizativo del entendimiento que ha prevalecido hasta ahora entre las distintas fuerzas de este proceso en una alianza más formal, más firme y más profunda en sus propósitos revolucionarios. Esta tarea, en el caso de nuestro país, sólo la puede dirigir el proletariado y su vanguardia política, cumpliendo con un requisito indispensable: fortaleciendo la unidad de la clase obrera panameña con los campesinos (en el caso de Panamá en primer lugar con los trabajadores del campo).

Las marchas y contramarchas del proceso democrático

El desenvolvimiento de este proceso ha llegado a un punto en el que es necesario pasar a otro plano de transformaciones más definidas. Hemos transitado hasta ahora por la fase caracterizada por la exclusión de la oligarquía de la administración pública y la eliminación de la base jurídica del colonialismo en el Canal de Panamá. Pero la oligarquía no ha sido eliminada como casta y sigue ocupando posiciones dominantes en algunas ramas de la economía. Tampoco el imperialismo ha sido expulsado totalmente de nuestro país, y por el Tratado Torrijos – Carter la liquidación del colonialismo no es de golpe, aunque se haya logrado ya lo fundamental, por lo que su desaparición final se dará al terminar el presente siglo. Pero, además, el imperialismo no sólo nos sujetó por medio del colonialismo.

Esta coyuntura anticolonialista ha sido agotada en lo fundamental y nuevas tareas se le plantean al proceso concerniente a la culminación de la liberación nacional y la reorganización institucional del país en el marco de una democracia progresista, participativa de tal manera que se fortalezca el poder popular, ya existente en grado incipiente, como la forma principal de poder.

Las transformaciones que se han dado por su propia dinámica exigen su desarrollo y además plantean nuevas exigencias revolucionarias. Lo más importante de esto es que inciden en el elevamiento político de las masas y en las condiciones nuestras, profundizan y multiplican la lucha de clases. Muy especialmente, estos cambios, como lo preveíamos, han elevado sensiblemente el papel de la clase obrera la cual ejerce hoy una mayor influencia en los acontecimientos sociales. La creciente participación de las masas en los acontecimientos sociales crea otra fuerza de presión en la dirección de que las transformaciones no se detengan y se profundicen.

La pequeña burguesía que está en la cúspide de este proceso, vista en su conjunto, no ha superado todas las limitaciones de clase y bajo la presión de las fuerzas de la reacción combinada con el imperialismo para que detenga y hasta descarte los cambios, así como de las masas

populares que exigen la continuación del proceso, se debilita su dirección política en un zigzag en las marchas y contramarchas del movimiento democrático de liberación nacional que ahora se observa.

Pero sería un error considerar que esta circunstancia marca el destino de la revolución democrática de Panamá. Lo que en realidad está sucediendo es un reajuste en la correlación de clase y en la dirección del proceso y la tendencia principal en este reagrupamiento favorece a las fuerzas que han apoyado la propuesta del General Torrijos en el marco de la revolución democrática de liberación nacional.

Es oportuno puntualizar que la pequeña burguesía comienza a rezagarse pese a su aporte revolucionario inicial lo que indica que en este rodeo que estamos dando con ella, hemos arribado a otro momento de la lucha ideológica para la profundización de los cambios con el fortalecimiento creciente de la clase obrera en estrecha alianza con los campesinos y el sector progresista más consecuente de la pequeña burguesía como factor, que, sin duda, determinará la radicalización de la fase culminante del proceso, aunque parte de la pequeña burguesía persiste en sus vacilaciones para realizar la revolución democrática de liberación nacional.

Vicisitudes de la política interior y exterior

En las circunstancias actuales del país, después de la desaparición del General Torrijos, se creó un problema de liderazgo y lógicamente la posibilidad de continuidad del proceso entraba en trance. Esto ha sido más obligadamente así porque la reacción interna combinada con el imperialismo se han movido para aprovecharse de las circunstancias.

Debemos reconocer que las fuerzas de apoyo del proceso democrático de liberación nacional se encontraron en esos momentos en condiciones muy difíciles para asegurar su continuidad, teniendo en cuenta esta crisis de jefatura, que influía en su estado de ánimo y la cohesión de su unidad, así como la ofensiva del enemigo dirigida a recuperar la dirección del país.

Es por ello que el primer problema a resolver era la dirección del movimiento y reagrupar las fuerzas que han apoyado los cambios habidos en este proceso. A ese objetivo han obedecido todos los acontecimientos políticos más importantes que se han producido en nuestro país, a partir de la muerte del General Torrijos. Uno de esos hechos fue el retiro del coronel F. Flores y la renuncia de A. Royo. Estos sucesos no pueden verse como causa para cambiar la política progresista de Panamá, ni tampoco como el resultado de una regresión. Por el contrario, ellos se dieron en la búsqueda de mantener la continuidad de la orientación torrijista, teniendo en cuenta las dificultades y complejidades que ha adquirido la lucha y haciendo un rodeo para afirmar la dirección del proceso.

Un propósito de esta alternativa ha sido el de dividir a la oposición integrada por los partidos enemigos del proceso, atrayéndose a una parte de ella a posiciones negociables y aislar a la derecha extremista. Es así como se ha propuesto una reforma constitucional por medio de un referéndum popular. El nivel político de las masas populares y la influencia creciente de la clase obrera y los campesinos dan suficiente confianza para que esas reformas no afecten las conquistas populares ya adquiridas ni las formas democráticas realizadas, como el poder popular, y por el contrario, ha surgido la posibilidad real de derrotar al llamado a la constituyente hecho por la reacción para cancelar los cambios sociales progresistas.

Podemos afirmar que los cambios habidos en Panamá no han sido modificados en su esencia como tampoco han sido negados. De la misma manera podemos decir de la política internacional del Estado panameño, que sigue siendo no alineada, de solidaridad con los pueblos en lucha y anticolonial. Cualquier afectación que pueda haber surgido en la política del proceso panameño, es aparente. Esto es así, porque han surgido obstáculos reales que se agudizan por la profundización de la lucha política de clases, la que a su vez se exacerba por el empeoramiento de los problemas económicos, por la medida de chantaje y de agresión económica del Gobierno de Reagan contra nuestro país. Principalmente, la hostilización norteamericana va dirigida a obstaculizar el cumplimiento de los Tratados

Torrijos – Carter, en cuanto al cumplimiento de la neutralidad, a respetar los beneficios económicos de Panamá y a asegurar los derechos económicos de los trabajadores. El fondo de todo esto es que el Gobierno norteamericano pretende retardar la descolonización del Canal.

El hecho de que el proceso de cambio panameño mantenga su continuidad pese a las complejidades surgidas, obedece a que por encima de las vacilaciones de la pequeña burguesía, ella sigue manteniendo posiciones hegemónicas en él, y las masas han hecho suyas, defendiendo permanentemente, las realizaciones sociales, políticas y económicas ya conquistadas. Tal es la realidad política de nuestro país. Lo que se busca es confirmar y desarrollar el proceso democrático de liberación nacional, ajustando sus bases a los nuevos problemas y tareas surgidas y reagrupando una dirección que llene el vacío de liderazgo en una forma más representativa y armónica con los intereses de los diversos círculos democráticos. Todos los cambios que se están realizando en la Guardia Nacional, en los órganos de poder, así como en el Partido Revolucionario Democrático, partido del poder, y el llamado a un entendimiento electoral con todas las fuerzas del proceso constituyen eslabones de una orientación única para asegurar la continuidad del proceso democrático de liberación nacional panameño.

Posición de los comunistas

Basado en el papel determinante que las masas deben jugar en este proceso revolucionario y teniendo en cuenta su carácter objetivo policlasista, nuestro partido apoya los objetivos democráticos de liberación que propuso el General Torrijos como medio de pasar a niveles superiores de la transformación social de nuestro país. Esta adhesión constituye para nosotros una coyuntura que prepara las condiciones para afrontar tareas revolucionarias más profundas. Consideramos que el instrumento para organizar ese tránsito con todas las fuerzas que tienen que participar es la alianza democrática de liberación nacional, la que debe tener una manifestación de inmediato en un compromiso político basado en el programa torrijista.

En el curso de lograr una unidad más firme entre las fuerzas democráticas del proceso, nuestro partido se propone consolidar la unidad obrera y campesina como única garantía de variar la correlación de fuerzas que favorezca el papel dirigente que en esta revolución democrática de liberación nacional debe tener la clase obrera de tal manera que cumpliendo sus tareas se pongan las premisas a la vez del tránsito ininterrumpido hacia el socialismo.

Nuestro propósito es que en esta etapa de la revolución panameña se cumpla totalmente la liberación nacional, se complete el progreso democrático, pasando a la forma de poder popular como la base principal del Gobierno y que se consolide la economía mixta, con preponderancia de la propiedad estatal y cooperativa, permitiendo aún la empresa privada, pero en una responsabilidad secundaria. De la misma manera debe cumplirse la integración de nuestra cultura nacional, sin discriminación, sin deformación imperialista, expresando los postulados de las clases revolucionarias, de la democracia, de la paz y la amistad con todos los pueblos. Debe ser una integración en donde los ingredientes socialistas ya se pongan de manifiesto en alguna medida. En cuanto a la política internacional del Estado panameño apoyamos su política no alineada, antiimperialista y hacemos todo lo posible por que se identifique profundamente con los intereses de la paz, de la solidaridad, del movimiento de liberación nacional y estreche su amistad con el campo socialista.

Esta línea revolucionaria de nuestro partido nos impone con urgencia su transformación en partido revolucionario de masas, marxista-leninista. Para ese efecto hemos legalizado a nuestro partido con una inscripción de 36.000 afiliados la cual nos permite actuar en todas las esferas de la actividad social y refuerza nuestra política de alianza con las otras fuerzas democráticas del proceso que sienten en nosotros nuevas potencialidades políticas y apreciables posibilidades para el éxito común, independientemente de las diferencias ideológicas que necesariamente vamos a seguir teniendo. Además del crecimiento de nuestro partido es indispensable su elevamiento ideológico y la ampliación y diversificación de sus formas organizativas. En esa dirección trabajamos, concentrando los mayores esfuerzos de

tal manera que con el apoyo de las masas y una política acertada de alianza nuestro partido pueda, como vanguardia política de la clase obrera panameña, resolver todos los problemas para garantizar la continuidad del proceso revolucionario actual y lograr la acumulación suficiente que permita la transición socialista.

¹ Se trata del golpe militar en 1968 a raíz del cual llegó al poder el Gobierno de O. Torrijos que realizó una serie de importantes transformaciones socio-económicas en el país. —N. de la Red.

² Ver el Documento Central al VI Pleno del CC del PPP celebrado en septiembre de 1956.

³ C. Marx y F. Engels. *Obras Escogidas en tres tomos*, Progreso, Moscú, 1973, t. I, p. 120.

⁴ V. I. Lenin. *Obras Escogidas en tres tomos*, Moscú, 1970, t. I, p. 499.

⁵ *Ibíd.*, p. 504.

⁶ *Ibíd.*, p. 811.

Por un Perú renovado

Asunción CABALLERO MENDEZ
miembro de la Comisión Política del CC
del Partido Comunista Peruano

En medio de la profunda crisis y el caos que han afectado a todas las esferas de la vida de nuestra sociedad, se crean premisas favorables para que las fuerzas revolucionarias, progresistas y antiimperialistas del Perú se hagan con la iniciativa y amplíen considerablemente la esfera de su influencia política y social. La coalición Izquierda Unida, formada en enero de 1980 por iniciativa del Partido Comunista Peruano¹, debe ser la protagonista de este proceso.

En un plazo histórico muy corto, Izquierda Unida ha demostrado su vitalidad y ahora es indispensable que tome un rol mucho más activo, más dinámico, más realizador y más combativo dentro de la política nacional. Estamos convencidos de que el bloque se convertirá en fuerza influyente siempre y cuando sepa cohesionar en torno suyo a todos los sectores de la población descontentos con el Gobierno. Sólo una coalición fuerte, bien organizada es capaz de abordar esta tarea.

¿Cómo ganar a las amplias masas para nuestra causa?
¿Cuáles deben ser las tareas inmediatas y de largo alcance de Izquierda Unida?

Se sabe que Izquierda Unida nació de las necesidades electorales, cuando el país pasaba a una forma civil de Gobierno. En aquel entonces era imprescindible unificar las fuerzas de izquierda a fin de presentar una batalla a los partidos burgueses de derecha, en el transcurso de las elecciones. En el período posterior, se siguió trabajando para mantener y perfeccionar su estructura orgánica. Izquierda Unida no ha perdido su función electoral con vistas a las elecciones generales a celebrarse en 1985. Pero

las perspectivas políticas que van variando aceleradamente en el país hacen ver con toda evidencia que cometen un grave error quienes, poniendo sus esperanzas en las elecciones, están a la expectativa con los brazos cruzados y no tratan de intervenir activamente en la marcha de los acontecimientos. Más aún, hemos comprendido que, en el contexto actual, es mucho más importante disipar las ilusiones acerca de la fuerza mágica de las elecciones y llevar a cabo una lucha diaria y eficaz para mejorar las condiciones de vida del pueblo y satisfacer sus necesidades inmediatas.

En opinión de los comunistas, una de las primeras medidas que debería de ponerse en práctica es la constitución de comités de defensa del consumidor. Casi todos los días acudimos a los comercios o al mercado para comprar artículos indispensables y alimentos, y nos encontramos con que éstos van aumentando de precio. A estos altos precios se agrega la especulación que realizan los comerciantes y los intermediarios que distribuyen estos productos. Estos pequeños comités llamados a defender al consumidor contra la carestía de los artículos de primera necesidad y oponer resistencia a los especuladores, encontrarán sin duda el apoyo más activo de los trabajadores del país.

Tampoco debemos olvidarnos de los organismos existentes, que ofrecen a Izquierda Unida un terreno amplio y promisorio de actividades. Me refiero en primer lugar a los Municipios que son realmente el poder popular más cercano al pueblo. Ya en la época de la Independencia, los Municipios y las Asambleas Populares convocadas bajo su égida jugaron un importantísimo papel para fortalecer el movimiento de resistencia a los colonizadores españoles. Actualmente, estos organismos son presa de una crisis porque no tienen los fondos necesarios para desarrollar su trabajo, sin hablar ya de atender las necesidades de la población. De este modo se plantea también un conflicto con el poder central. Todo esto crea condiciones para que los Municipios resuciten su gloriosa experiencia del pasado y se conviertan en centros de movilización de masas para defender a las poblaciones y sus propios derechos. Teniendo en cuenta el riguroso sistema burocrático de gobierno existente en nuestro país, no cabe esperar que sin

un activo respaldo de las masas populares, los Municipios, sea cual fuere su composición, sean capaces de defender sus intereses frente a los organismos superiores. En cambio, el apoyo en las masas puede reportar éxito. Testimonio de ello son las manifestaciones populares en Chimbote y Trujillo, en las que intervinieron inclusive elementos del partido político del Gobierno.

He mencionado tan sólo algunos de los terrenos que pueden ser perfectamente capitalizados por Izquierda Unida. El éxito dependerá de lo amplia que sea la alianza, de la incorporación a ésta de un número cada vez mayor de partidos de izquierda, de una movilización más completa de los sectores populares.

Como vemos, ante las fuerzas de izquierda peruanas se plantea un gran cúmulo de tareas, a la vez que se crea un contexto favorable para la lucha. ¿Por qué entonces nos vemos obligados a hablar más de lo que está pendiente de hacer que de lo que ya se está realizando? Cabe recordar al respecto aunque sean algunos de los problemas y dificultades de la unidad.

La formación de la coalición de partidos de izquierda en absoluto significa la superación de divergencias viejas, a veces muy serias, en cuestiones ideológicas, tácticas y otras. Pues, aparte del Partido Comunista que defiende consecuentemente la doctrina marxista-leninista y los principios del internacionalismo proletario, integran a Izquierda Unida también organizaciones que propugnan la «profundización del marxismo nacional» o incluso se proponen construir un «socialismo nacional». Todos los partidos de izquierda peruanos proclaman que luchan por el socialismo y hay por lo menos unos ocho partidos que se dicen Mariateguistas². Ciertos ideólogos aprovechan de manera escolástica la frase clásica de Mariátegui de que el socialismo peruano no será ni calco ni copia, para justificar su propia filosofía revisionista, rechazando el carácter universal de la teoría marxista-leninista que es la única doctrina correcta sobre la sociedad.

Tratamos de superar estas divergencias mediante un franco intercambio de opiniones. El Partido Comunista organiza en forma sistemática seminarios y debates teóricos a los que se invita a representantes de todos los partidos

de izquierda, fundamentalmente de Izquierda Unida. Entre los temas a discutir figuran cuestiones ideológicas y prácticas, por ejemplo, los aspectos positivos y negativos de la lucha armada, los problemas tácticos de cara a la participación en las próximas elecciones, la elaboración del programa de acciones de los Municipios, etc.

Las divergencias en el seno de las fuerzas de izquierda no son el único factor que obstaculiza la actividad de la coalición. A mi parecer es muy importante la formulación de un programa de izquierda, porque cada lucha, cada movilización de las masas tiene que hacerse de acuerdo con un objetivo, y este objetivo se establece precisamente mediante un programa. Hemos estado discutiendo tanto en el Partido como en las otras organizaciones en el sentido de que debemos empezar a trabajar en la formulación de un programa. Este es indispensable, entre otras cosas, para orientar a las amplias capas populares y hacerles conocer nuestros objetivos concretos. En este sentido, el programa es especialmente valioso para la población de las provincias, alejadas de los centros de vida política del país.

Ciertos integrantes de Izquierda Unida opinan que es necesario darle mayor formalidad a la coalición, hasta carnetizar a todos sus miembros. No podemos estar de acuerdo con este planteamiento, puesto que en la actualidad hay mucha gente independiente que se acerca a Izquierda Unida y no todos, ni mucho menos, quieren cargar con esos derechos y deberes que implica el ingreso oficial en una u otra organización.

En las condiciones actuales no se trata de hacer una revolución socialista, sino que luchamos por una revolución democrático-popular y antiimperialista, que va a englobar una serie de sectores de la pequeña burguesía e incluso de la burguesía media y militares progresistas. A este movimiento, por lo menos desde un principio, no le correspondería el término de revolucionario, porque ese término, si bien es cierto que se utiliza correctamente, pero no conviene desgastarlo en estas cosas. Me parece que es indispensable ante todo crear un amplio frente patriótico por la soberanía nacional. La lucha por la soberanía nacional bien entendida es una bandera, la cual pueden utilizar

realmente todos los sectores patrióticos peruanos, frente a un proceso de desnacionalización que se opera a ritmos acelerados en nuestro país.

José Carlos Mariátegui soñaba con un Perú renovado. Nosotros debemos reencontrar el Perú, decía él, encontrar vertientes que confluyan a un gran movimiento, en el cual intervengan todos, en la lucha por la soberanía nacional. Pienso que este planteamiento del fundador de nuestro Partido es comprensible para todos y capaz de incitar a las más amplias masas populares a una lucha resuelta. No hay necesidad de *hablar* de revolución, porque la revolución no es una palabra, sino hay que *realizarla*, y para ello no necesitamos ponernos un título de revolucionarios, eso lo haremos en la práctica.

¹ Acerca de la formación de Izquierda Unida véase el artículo *Instrumento eficaz de lucha*, de César Barreto, en *Revista Internacional*, N° 4 de 1980. —N. de la Red.

² Por el nombre de José Carlos Mariátegui (1895–1930), fundador (1928) del Partido Comunista Peruano y su primer Secretario General. —N. de la Red.

Jornadas tempestuosas en un país «tranquilo»

René MAUGE

Secretario General del Partido Comunista del Ecuador

El recrudecimiento de la tensión en América Latina suscita creciente preocupación en la opinión pública mundial. Son muchos los puntos «calientes» y por eso no resulta extraño que un país tan «tranquilo» como es el Ecuador permanezca como si estuviera en un segundo plano del panorama regional. No obstante, los acontecimientos de los últimos años muestran elocuentemente que el Ecuador afronta en la misma medida los agudísimos problemas que afectan al resto del continente.

A principios de 1981, en la zona de la frontera ecuatoriano-peruana de las Cordilleras se produjo una confrontación armada entre el Ecuador y Perú, en la que desembocó el antiguo litigio fronterizo, que duró decenios. Tras el incidente no fue difícil ver a su verdadero iniciador, el imperialismo de los EE.UU. La confrontación ecuatoriano-peruana no puede considerarse simplemente como una nueva muestra de la colección de guerras fronterizas, provocadas en América Latina por el Pentágono. Este conflicto perseguía objetivos muy ambiciosos: quebrar los aspectos democráticos de la política exterior del Presidente Roldós; romper el Pacto Andino¹; decidir definitivamente a favor de los monopolios norteamericanos el asunto de las 200 millas de Mar Territorial; penetrar en la región litigiosa de la Cordillera del Cóndor rica en yacimientos minerales y, finalmente, promover la carrera armamentista en beneficio del complejo militar-industrial.

El fuego que brotó en los Andes se logró extinguir a duras penas, pero el país no ha podido recuperar la vida tranquila. En circunstancias extrañas, que hasta hoy día

no han sido esclarecidas, *perdido* y cuya política no dejaba de irritar a la Casa Blanca y el apoyo a los revolucionarios centroamericanos, la amistad con Cuba, los contactos «demasiado estrechos» con países del socialismo, etc. El Presidente Osvaldo Hurtado Larrea necesitó sólo varios meses para «arreglar la situación». Fue suspendida la ayuda a los movimientos de liberación nacional, se deterioraron las relaciones con La Habana y se encarpitaron los convenios de colaboración con Estados socialistas. Se enconaron las divergencias, de por sí muy agudas, entre los partidos burgueses y sus protegidos en el Gobierno; en la cúspide gobernante reina la discordia. Todo eso va acompañado de la incesante disminución del nivel de vida de los trabajadores y del notable incremento de su descontento.

Es completamente lógico esperar que próximamente en el Ecuador puedan producirse modificaciones sustanciales. Precisamente por eso el X Congreso del Partido Comunista del Ecuador, celebrado a fines de 1981, prestó especial atención al desarrollo interno del país. ¿Qué es, en opinión de los comunistas, lo que lo caracteriza?

*

En febrero de 1972, en el Ecuador arribaron al poder los militares. Ellos declararon que se opondrían a que un pequeño grupo de familias o personas privilegiadas se embolsaran los resultados de los esfuerzos del país y las riquezas nacionales que debían servir a las amplias masas populares. Para la realización de estos objetivos se configuraban, al parecer, circunstancias favorables. En la república, que antes tenía fama, acaso, por sus cañaverales y plantaciones de plátano (¿y quién no tiene esa fama en la región?), fueron descubiertas verdaderas riquezas, que se convirtieron en poderosos catalizadores del desarrollo económico: petróleo, gas, uranio y otros minerales. Durante ese período se observó un considerable crecimiento de la industria, se desarrolló activamente la infraestructura, surgió un sector estatal bastante poderoso. En el país fue creada la empresa más grande —la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana—, convertida en base de este importante sector. Las corporaciones transnacionales no tarda-

ron en extender sus tentáculos hacia esas riquezas ecuatorianas, valiéndose de la coyuntura que se venía configurando. Lograron con bastante rapidez expandirse por todas las esferas de la vida económica y política. En el curso del desarrollo industrial surgieron también monopolios locales. Se trata, por lo general, de empresas mixtas con capital nacional y extranjero, en las que el grueso de acciones pertenece a las compañías extranjeras. El país no consiguió abandonar el triste, pero bien transitado, camino de capitalismo dependiente.

Al poco, no obstante, surgió una circunstancia inesperada: los investigadores descubrieron que las reservas petroleras del Ecuador no son inagotables, sino que tienen límites: en los años próximos podrán agotarse, y los «píngües» petrodólares dejarán de engrosar el tesoro. ¿Con qué entonces cubrir la enorme deuda extranjera, para la amortización de la cual cada año se invierte el 25 % del presupuesto? ¿Cómo gobernar la máquina económica si ésta se queda sin carburante y lubricante? La historia conoce muy bien a dónde conducen las consecuencias de todo tipo de «booms» y la euforia originada por este motivo. El Gobierno cifraba sus esperanzas en atraer una mayor inversión de capital extranjero para colocar bajo su control los nuevos recursos hidrocarburíferos descubiertos en el golfo de Guayaquil y paliar en algo la crisis económica. Las medidas económicas adoptadas por el régimen tales como la devaluación monetaria, la elevación de las tasas de interés bancario, el alza de los precios de los servicios y artículos de primera necesidad, sólo han contribuido a agravar dicha crisis, lo cual conduce a nuestro pueblo a la disyuntiva de perpetuar las actuales condiciones o emprender por el camino de la transformación revolucionaria.

•

En el período iniciado a partir del descubrimiento de petróleo, gas natural y otros minerales, en el Ecuador se han producido modificaciones considerables en la estructura económica y, como consecuencia, también se han operado alteraciones en la composición y funciones de las clases y capas de la sociedad ecuatoriana. Aunque la población

campesina ha disminuido en diez años del 68 al 52 %, supe-
ra todavía con creces al proletariado industrial. La liberación, por obra de la reforma agraria, de grandes masas de campesinos de las formas serviles de opresión, no les proporcionó tierra, ni los liberó de la miseria y del hambre. Los latifundistas mantienen en su poder grandes extensiones de tierra. Reciben la parte leonina de créditos asignados por el Banco Nacional de Fomento, mientras que la mayoría de los campesinos carecen de esos recursos y, al no tener la posibilidad de saldar la deuda —a causa de una mala cosecha o de una caída de precios de sus productos— se ven enfrentados a juicios coactivos. En el marco del capitalismo dependiente, no todos, ni mucho menos, los trabajadores «exentos» de tierra encuentran trabajo en las haciendas de los latifundistas o campesinos ricos. Como consecuencia, emigran a las ciudades, robusteciendo el contingente de población marginada, en gran medida desocupada total o parcialmente, que es una de las capas actualmente más numerosas de la sociedad ecuatoriana. Para señalarles un hecho, en Guayaquil hay dos tercios de marginados en una población de 1.200.000, que viven en las más absolutas condiciones de miseria.

Sin embargo, tampoco la vida de los que tienen trabajo en la ciudad es mucho más dulce. Y no sólo por el hecho de que el azúcar encareció en el 40 %. También crecen rápidamente los precios de otros artículos de primera necesidad. Incluso si dejamos a un lado las catastróficas consecuencias de la crisis inminente, la carencia de vivienda y de las condiciones elementales de vida, etc., ¿acaso se puede hablar de tranquilidad y seguridad en el día de mañana, si por las calles deambula un enorme ejército de desempleados y cada uno de ellos está dispuesto a reemplazar por una mísera retribución en la empresa o en el establecimiento comercial a los «afortunados» que tienen trabajo?

Dentro de las capas urbanas se destaca un numeroso artesanado, también golpeado por el desarrollo industrial. Del seno del artesanado ha surgido un reducido grupo de pequeños industriales, empero la mayoría está abocada a una perspectiva de miseria y ruina. El poder del gran capital ejerce también su acción expoliadora sobre los em-

pleados públicos y privados que registran un continuo acercamiento al proletariado, tanto en sus condiciones de vida y de trabajo como en sus reivindicaciones y métodos de organización y de lucha. Empeora, asimismo, la situación de los intelectuales, tanto ingenieros y técnicos como estudiantes, profesionales, artistas y científicos.

Se han producido alteraciones también en la clase muy heterogénea de la burguesía. En esta etapa se ha acrecentado el poder de la oligarquía con la consolidación del sector de la burguesía financiera y con el robustecimiento de las fracciones industrial, bancaria y comercial de la misma clase. Se destaca entre estos sectores la burguesía financiera que ha adquirido un poderío inusitado y que reclama para sí el rol dirigente. Estos sectores oligárquicos, de los cuales forman parte también los terratenientes, crecen a la sombra del capital monopolista extranjero, del cual dependen y al cual sirven incondicionalmente.

*

Un rol activo e importante en la vida política del país desempeñan tradicionalmente las Fuerzas Armadas. El ejército ecuatoriano es una especie de barómetro, que predice el «tiempo» que se está avecinando en el Estado. Así, el predominio de tendencias patrióticas entre la oficialidad a principios de los años 70, surgidas con una gran influencia de los pronunciamientos de los militares peruanos, partidarios del general Velasco Alvarado, precedió al período de transformaciones progresistas. Después de que los oficiales más radicalizados fueron separados del ejército a mediados de los años 70, comenzó el enfriamiento del clima político. La corriente democrática en las Fuerzas Armadas se vio truncada. Los organizadores e iniciadores del pronunciamiento de 1972 fueron neutralizados, separados del contingente, pasados a la reserva, enviados en calidad de agregados militares de embajadas y a sitios tan remotos, desde donde no podían ejercer ninguna influencia sobre la política. De este modo, ahora no existe ala democrática en las Fuerzas Armadas del Ecuador, y sólo se puede hablar de ciertos elementos progresistas.

El triunvirato castrense que desplazó en 1976 al general Rodríguez Lara, no sólo empezó a deshacer todo lo posi-

tivo que había hecho el Gobierno anterior, sino que procedió inmediatamente a la reforma de la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Su finalidad estriba en crear un Ejército de casta, una oficialidad elitista.

Valiéndose del enfrentamiento con Perú, la cúpula militar ecuatoriana empezó a insistir en la necesidad del rearme y a buscar a alguien que tomara al país bajo su tutela. Presionado por ella el Gobierno, en busca de protección, dirigió sus miras a Brasil y hacia allá se encaminó el Presidente Hurtado. He aquí una paradoja histórica: ¡el Ecuador solicita protección a un país con el cual ha perdido más territorio que con todos los países limítrofes juntos! El Presidente brasileño aseveró a Hurtado que en caso de confrontación no lo dejaría solo.

Semejantes promesas son algo muy abstracto, mientras que las concesiones económicas, arrancadas a cambio al Gobierno ecuatoriano, son algo muy concreto, y Brasil no tardó en aprovecharlas. Se hizo un acuerdo aduanero en el que se liberaron de impuestos 53 productos, y de los que nuestro país produce solamente 11; en principio se ha llegado al acuerdo de entregar el puerto de San Lorenzo, que es la mejor rada que nosotros tenemos en la costa del Pacífico por su gran profundidad. Observemos que la puesta en práctica de este acuerdo abrirá a Brasil el camino de penetración al amplio mercado de la zona andina. Y, finalmente, el Brasil que carece de hidrocarburos, recibirá petróleo por precios inferiores a los mundiales. Tampoco tendrá que preocuparse por su transporte, ya que la flota ecuatoriana se encargará de hacerlo con tarifas favorables. Es cierto que los defensores potenciales tienen que pagar por el crudo, y no sólo con promesas. Pues bien. Los barcos ecuatorianos regresan a los puertos nacionales cargados con armas brasileñas. A principios de 1982 fue suscrito un convenio para el suministro de armas brasileñas a Ecuador por un total de 300 millones de dólares. Un módico 20 % de esta suma irá a parar directamente a los bolsillos de las guerreras de los generales, que ya están indecentemente dilatados.

La cúspide castrense ha logrado aprovecharse bien en el decenio vencido. Como consecuencia, han surgido no pocos nuevos ricos entre la oficialidad superior y el gene-

ralato: grandes industriales y accionistas. Hoy día, los generales en el país son gente millonaria. El ejército ecuatoriano ya no solamente es el brazo armado de la burguesía, sino que está directamente integrado en la economía, penetra cada vez más en la misma, así como controla el aparato de Estado. Por consiguiente, la defensa de los pilares burgueses significa la autodefensa de los uniformados ecuatorianos, su causa vital.

•

Los cambios operados en las estructuras económica y social de la sociedad ecuatoriana, subrayó el X Congreso del PCE, condujeron a modificar la política interna. Ecuador, como es sabido, vive una democracia constitucional burguesa. En los últimos años se han fortalecido notablemente los órganos de poder estatal. Eso ha sido posible, entre otras causas, porque, nacionalizada en buena parte la industria petrolera, el Estado ecuatoriano contó con grandes recursos financieros. Sin embargo, el inflado aparato burocrático, que funciona en interés de la reacción, no contribuye, ni mucho menos, a la prosperidad de la nación sino que, por el contrario, realiza una política antipopular. El golpe más sensible que ha sido propinado a los intereses de los trabajadores fue la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, redactada conforme a recetas del Pentágono y de teóricos neofascistas de América Latina. Se incrementa el control de las actividades de los partidos políticos. Las nuevas leyes contienen disposiciones antidemocráticas, tendientes a establecer la hegemonía de organizaciones que representan al gran capital. En general, todo el sistema de derechos ha sido remodelado en beneficio de las capas más reaccionarias de la oligarquía y de las corporaciones transnacionales.

Como es lógico, los partidos políticos no permanecieron a la expectativa de los procesos operados en el país. Algunos partidos como, por ejemplo, el Radical Liberal y el Conservador o el Partido Nacionalista Revolucionario, que encubre su contenido oligárquico, acusan un marcado descenso; otros, principalmente de carácter reformista, por el contrario, confían en el éxito. Tratándose a empujones en su carrera por la escalera política, los partidos burgueses

ecuatorianos se desplazan tan a menudo unos a otros que resulta casi imposible ver cuál de ellos está hoy en la cima. La correlación de fuerzas cambia de una a otra campaña electoral, y no se puede hablar de un líder más o menos indiscutible. Las próximas elecciones de 1984 mueven a todos los grupos políticos a buscar apoyo entre las diversas capas de la población: los partidos puntualizan febrilmente sus tácticas y programas, buscan nuevos aliados y tratan de desprestigiar ya ahora a sus adversarios. La reacción en cadena de escisiones y de creación de un sinnúmero de nuevas organizaciones y corrientes políticas, iniciada ya en los años sesenta, prosigue hasta la fecha. Por muy diferentes que sean, su táctica coincide en una sola cosa: hacerse pasar por intérpretes de los intereses del pueblo y, de hecho, luchar por mantener en pie el dominio de clase de la burguesía.

Tampoco las fuerzas de izquierda del Ecuador atraviesan su mejor época. El Partido Socialista Revolucionario surgido en sus tiempos a consecuencia de la escisión del Partido Socialista se dividió en varias fracciones. En el país funcionan, además, el Movimiento de la II Independencia, el movimiento de la Izquierda Cristiana y otros, incluidos grupos trotskistas y maoístas.

•

La única organización que defiende consecuentemente los intereses de los trabajadores y que tiene una firme base en el pueblo ha sido y sigue siendo el Partido Comunista del Ecuador. El X Congreso del PCE, que fue uno de los acontecimientos más importantes en la vida política del pueblo, analizó la situación y planteó nuevas tareas al partido.

Según destacó el congreso la clase obrera que en los últimos años ha crecido numérica y organizativamente, ha realizado importantes jornadas de lucha por sus reivindicaciones específicas y ha levantado una plataforma unitaria que incluye demandas del pueblo y de toda la nación, como la nacionalización del petróleo, de la industria eléctrica, de las bancas extranjeras, del comercio exterior; la realización de la reforma agraria y la lucha por una polí-

tica de paz y amistad y relaciones de igualdad entre las naciones.

La unidad de acción de las tres centrales sindicales nacionales, como la formación del Frente Unitario de Trabajadores, constituye uno de los logros más importantes de los últimos años. La división sindical, como es conocido, es financiada por los patronos y el imperialismo y fomentada por todas las corrientes «ultraizquierdistas», entre ellos los maoístas y trotskistas. La lucha contra la división constituye una de las tareas centrales de los comunistas, así como contra las desviaciones economicistas, burocráticas y todo tipo de diversionismo ideológico.

En nuestra opinión tenemos que dedicar más atención a los artesanos que sienten con mayor claridad cada día que su destino está ligado con el de la clase obrera y con su partido. El X Congreso ha llamado también a impulsar la lucha de los barrios populares, promover la organización y la coordinación de los combates de trabajadores del transporte, la construcción, de los maestros, empleados, amas de casa y trabajadores a domicilio.

Los campesinos continúan su lucha por una reforma agraria democrática, que significa no sólo la posesión de la tierra, sino de todo cuanto implica un proceso agrario de múltiple contenido. El movimiento campesino acusa una cierta dispersión, agrupado en múltiples centrales, lo que debilita su acción. Fortalecer la unidad de acción constituye uno de los objetivos inmediatos con miras también a su unidad orgánica y al desarrollo y fortalecimiento de su alianza con la clase obrera y otros sectores populares.

Las posiciones de los comunistas son particularmente fuertes en la costa, donde abundan plantaciones de banana y cañaverales, donde desde antaño se aplica el trabajo asalariado. Hay aquí organización sindical y allí es donde el partido tiene su base de organización celular. Solamente en la provincia de Guayas tenemos 105 células campesinas del partido. En las zonas de la sierra, en todo el «callejón andino», cambia la situación: apenas ha empezado el proceso de destrucción de las relaciones semi-feudales, y el campesinado está compuesto en lo fundamental por indígenas oprimidos, pobres, analfabetos y políticamente muy atrasados. Las posiciones del PCE, y tam-

bién de otras organizaciones, son aquí más débiles. Sin embargo, el enemigo de clase ha encontrado formas para imponer su influencia y dificultar la agrupación y la lucha de los indios. En esas zonas proliferan sectas protestantes que no son otra cosa que avanzadas del imperialismo. Hasta hace poco ha estado realizando una insistente labor subversiva la tristemente célebre filial de la CIA, el Instituto Lingüístico de Verano, expulsado del país en virtud del último decreto del Presidente Roldós. El X Congreso deja a los comunistas la tarea de articular una política coherente en relación con las demandas de las masas indígenas y llevarla a cabo de acuerdo con los rasgos peculiares que implica.

En 1984, por primera vez en la historia del Ecuador, votarán todos los analfabetos. Y puesto que eso comprende la participación de una enorme masa de indígenas en las elecciones, cabe esperar que muy pronto empezará la lucha política por ganarse a esas masas, lucha que será muy dura, porque en dependencia de a quién seguirán esas masas podrá cambiar toda la situación política.

Otro de los grandes problemas políticos que por ahora no hemos logrado resolver lo constituye la población marginal. Las dos grandes ciudades —Guayaquil y Quito— están rodeadas de anchas franjas de casas hechas de madera prensada y caña. Precisamente allí es donde abundan las lacras más terribles de la sociedad capitalista: el desempleo, la delincuencia, los drogadictos... Ninguno de los partidos puede decir que cuenta con una base segura entre los habitantes de esas villas-miseria o que tiene bajo su control estas masas marginales. Para nosotros, la penetración en estas masas resulta incluso más difícil porque denotan un cierto anticomunismo. Muchos de sus representantes son lumpen proletarios típicos. Hablando francamente, el partido durante un largo período no trabajó en ese medio. Ahora trata de establecer ciertos contactos a través de la parte del proletariado que habita en los barrios de marginales.

Pensamos que el primer contacto, aunque por el momento tímido, ya ha tenido lugar. Ahora estamos conscientes de que la población de los barrios marginales no es una masa amorfa, como podría parecer a primera vista. Afronta

muchas dificultades que debe superar. Por ejemplo, un problema muy grave es el de la vivienda. La toma de terrenos, el «conseguir» materiales de construcción, la defensa de las chabolas contra los desalojos de la policía, todo ello son acciones en las que podríamos ayudarles. Hemos notado que cuando en el país se producen importantes acontecimientos políticos y la lucha de clases se hace muy enconada, los marginales también salen a la calle. Por lo general, sus luchas, que nadie organiza ni dirige, acaban por ser aplastadas. Pero saben pelear.

•

Un problema fundamental de todo movimiento revolucionario son las vías de la revolución. La experiencia propia de los comunistas del Ecuador convence que es impropio tanto absolutizar como infravalorar unas u otras formas y métodos de lucha. Dependen no sólo de la situación o del deseo de los revolucionarios, sino también de las acciones que despliegan las fuerzas de la reacción y del imperialismo. Por ejemplo, la participación de nuestro partido en la insurrección armada del 28 de mayo de 1944 fue justificada. En cambio, fue un error el que en 1960 fuese incluida en nuestro programa (como consecuencia de la presión ejercida por el grupo ultraizquierdista que más tarde se escindió del PCE) la formulación acerca de que la revolución ecuatoriana se desarrollará por la vía no pacífica. Siguiendo a esta formulación y haciendo concesiones a los adictos de las concepciones foquistas, el PCE boicoteó las elecciones de 1963, organizó choques armados con las tropas gubernamentales, realizó acciones de violencia. Semejantes acciones no tenían ninguna probabilidad de acabar con éxito. Por el contrario, vino una dictadura reaccionaria, la cual, en particular, justificaba sus crueldades con la táctica de violencia del Partido Comunista. El partido, al igual que otras organizaciones de masas, fue ilegalizado. Hasta la fecha el partido no ha podido reponerse definitivamente de las consecuencias de aquel golpe.

Ultimamente, debido a la influencia ejercida por los acontecimientos de Nicaragua y El Salvador, de nuevo se viven las tendencias de que sólo la lucha armada es la

única que puede resolver los problemas. También en el Ecuador ello ha encontrado su reflejo. Algunos partidos de izquierda sencillamente no ven ningún sentido en participar en la lucha electoral. Opinamos que tales actitudes no están justificadas.

El X Congreso del PCE ha definido esta etapa como una fase de acumulación de fuerzas, y ha planteado en calidad de su tarea principal la lucha por el fortalecimiento de la democracia, aunque fuera limitada. En las condiciones presentes, el derrocamiento de la democracia burguesa no contribuiría en absoluto al triunfo de la revolución, sino, por el contrario, se daría paso más bien a las posiciones golpistas y a una dictadura militar reaccionaria. Y en este sentido, la posición de los comunistas se orienta hacia la formación de un gran frente para tener una buena participación en la próxima campaña electoral.

•

La línea estratégica de nuestro partido está orientada hacia la cohesión de todas las fuerzas antiimperialistas, democráticas y patrióticas para lograr una Revolución Nacional Liberadora. En la batalla por la unidad debemos ampliar las filas del PCE, mantener y fortalecer los vínculos con todas las organizaciones de izquierda. El Partido Comunista del Ecuador —un partido relativamente pequeño— sigue siendo la fuerza ideológica más madura y consecuente que, en opinión generalizada de los círculos de izquierda, es la única fuerza capaz de proporcionarles unidad. Así, cuando el Partido Socialista del Ecuador planteó la cuestión de agrupar a la izquierda sin el PCE, nadie de sus participantes potenciales accedió, declarando que sin los comunistas dicha alianza es simplemente imposible de lograr. En efecto, la influencia del Partido Comunista supera con creces su tamaño; nosotros somos la fuerza decisiva en la Confederación de Trabajadores, en la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral, en la Federación Ecuatoriana de Indios. El Partido Comunista también tiene una importante influencia en el movimiento estudiantil universitario. Mas el mero hecho de reconocer el papel importante de los comunistas no quiere decir, en absoluto,

que otras organizaciones estén dispuestas a ceder al PCE el papel de vanguardia de la revolución.

Un gran daño a la izquierda ocasionan los grupos que no tienen nada de común con este movimiento, pero que han usurpado sus buenos nombres. Así, se ha infiltrado en el registro electoral² el maoísta «Partido Marxista-Leninista», que ha aprovechado las consignas de los comunistas y ha logrado el apoyo del Movimiento Popular Democrático, agrupación creada por iniciativa de la CIA y que opera al servicio de la Seguridad Nacional. Sobre esta cuestión mantenemos un criterio completamente inequívoco: no basta autodenominarse vanguardia, hay que conquistar eso realmente, en la práctica. Además, como la revolución ecuatoriana tendrá un carácter antiimperialista, democrático y, finalmente, agrario, en ella participarán las fuerzas más diversas: empezando por la clase obrera y terminando por ciertas capas de la burguesía. La línea de los comunistas se basa en la política de amplias alianzas que no excluye a nadie de este proceso.

Ya tenemos atesorada experiencia positiva. En las últimas elecciones parlamentarias fue creado el Frente Amplio de Izquierda. Debemos seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales con otros partidos progresistas. Nuestra acción no ha de limitarse a la colaboración con sólo las organizaciones de orientación marxista. Puede extenderse también a las corrientes reformistas para luchar en común por la democratización de la sociedad, por mejorar las condiciones de vida del pueblo, contra cualquier intento golpista. En la concertación de alianzas es necesario un mínimo entendimiento ideológico, puesto que, como la experiencia lo enseña, no pueden concertarse alianzas para avanzar con quienes practican el divisionismo, el anticomunismo y el antisovietismo.

•

El X Congreso ha planteado la tarea de convertir el PCE en un partido combativo de masas, basado sobre los principios organizativos e ideológicos del marxismo-leninismo, en un partido capaz de cumplir su misión histórica. Su destino estará ligado estrechamente con el de la clase obrera, el del pueblo y el de toda la nación ecuatoriana.

Nuestro partido conquistará el papel de vanguardia en la lucha diaria, elaborando la táctica en base al hondo y riguroso análisis científico de la compleja, contradictoria y constantemente cambiante situación nacional y mundial. Para eso debemos aprender a combinar con gran arte la intrepidez con la sensatez, la fidelidad a los principios con la máxima flexibilidad, la fidelidad sin reservas a los ideales comunistas con la maestría de saber acceder a compromisos imprescindibles.

La fuerza organizativa del partido, su elevada conciencia política, la cohesión de nuestras filas, los hondos vínculos con la clase obrera y las masas trabajadoras, permitirán al PCE encabezar la lucha del pueblo ecuatoriano hasta lograr el triunfo completo y definitivo.

¹ Agrupación económica subregional, creada en 1969, que agrupa a Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, al objeto de fortalecer el potencial económico de los países miembros y limitar la influencia del capital extranjero. —N. de la Red.

² La lista oficial de partidos con derecho de presentar candidatos en las elecciones. —N. de la Red.

Firmado para la edición el 21 de enero de 1984.

Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO